LA FLOR Y LA PROMESA

Comunidad campesina y transformación del
régimen ejidal en la primera década del siglo XXI

Ignacio Rubio Carriquiriborde

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector • Enrique Luis Graue Wiechers

Secretario General • Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario Administrativo • Leopoldo Silva Gutiérrez

Abogada General • Mónica González Contró

Director General de Publicaciones y Fomento Editorial • Javier Martínez Ramírez

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Directora • María Angélica Cuéllar Vázquez

Secretaria General • Arturo Chávez López

Secretario Administrativo • José Alejandro Santiago Jiménez

Jefa del Departamento de Publicaciones • María Eugenia Campos Cázares

Centro de Estudios
Sociológicos

LA FLOR Y LA PROMESA

Comunidad campesina y transformación del régimen
ejidal en la primera década del siglo XXI

Ignacio Rubio Carriquiriborde

Universidad Nacional Autónoma de México

Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Primera edición: 20 de enero de 2017

Reservados todos los derechos conforme a la ley.

D.R. © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

La flor y la promesa. Comunidad campesina y transformación del régimen ejidal en la primera década del siglo XXI

Oficina del Abogado General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
ISBN: 978-607-02-8937-8

“Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales”.

Impreso y hecho en México/*Made and printed in Mexico*

CONTENIDO

PRÓLOGO	11
INTRODUCCIÓN	17
Organización del documento	24

P R I M E R A P A R T E

EL EJIDO Y LA COMUNIDAD CAMPESINA EN EL CICLO DE LA REFORMA AGRARIA

PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL DE LA REFORMA AGRARIA	27
La comunidad en el nacimiento de la Reforma Agraria de México (1915-1934)	28
Tabla A. Propuestas agrarias de los ejércitos revolucionarios	30
Ejidalización: distribución radical y corporación en el México rural (1934-1970).	33
La crisis de la Reforma Agraria (1970-1992)	39
Una mirada liberal a la crisis	41
Los campesinos a debate	43
La comunidad campesina en el proceso de modernización rural en México	50
El nuevo ejido.	57
Fin de la distribución y modificación del régimen ejidal (1992)	57
El nuevo orden	61
El final de la unidad	64
La propiedad parcelaria	65
Las tierras de uso común	66

Los sujetos agrarios	66
Títulos y certificados	71
Territorio y zonas urbanas	71
Tabla B. Características legales de la propiedad ejidal	
contemporánea	73
Figura 1. Unidad y fragmentación del ejido	74
La nueva justicia agraria	74
Asegurando posesión mediante la certificación	77

S E G U N D A P A R T E

LA FLOR Y LA PROMESA. TRES EJIDOS DE LA HUASTECA ANTE LA REFORMA DEL EJIDO

LA FLOR	83
Figura 2. Modelo simple de los nexos entre tierra, organización	87
y derechos de propiedad	87
Figura 3. Modelo expandido de los nexos entre tierra, organización	
y derechos de propiedad ad	88
Breve panorama histórico-regional de la Huasteca	90
Figura 4.	91
Ixhuatlán de Madero en la región Huasteca	91
Estructura agraria en Ixhuatlán de Madero	95
Figura 5. Núcleos agrarios en Ixhuatlán de Madero	97
Tabla C. Beneficiarios por tipo de acceso	98
Propiedad y divisiones productivas	98
Tabla D. Uso de la tierra en Ixhuatlán de Madero (2003)	99
Figura 6. Producción de maíz y ganado en Ixhuatlán (2001-2006) .	101
Tabla E. Superficie sembrada, rendimiento y valor	
de la producción agrícola en Ixhuatlán de Madero	
(2010, 2006, 2002)	103
Tabla F. Costos de producción de maíz, caña de azúcar	
y naranja en Veracruz 2005-2006	104
La economía ranchera	105
Tres vecinos: Joya Chica, El Cuayo y San Martín.	110
Tabla G. Concentración de la tierra en ejidos Ixhuatlán	
de Madero (2004).	111
Formación de los ejidos.	114
Tabla I. Uso de la tierra en ejido <i>El cuayo</i> (1972)	117

Población y territorio	.118
Figura 7. Población en tres ejidos (1900-2010).	.119
Figura 8. Evolución demográfica rural en México (Siglo xx) 1940 – 1970.	.121
Tabla J. Cambios de población entre 1940 and 1970 (%)	.122
Figura 9. Asentamientos urbanos en tres núcleos agrarios de Ixhuatlán de Madero	.125
Tabla K. Indicadores socioeconómicos (2000).	.126
Organización	.127
Tabla L. Cargos en tres localidades	.132
Propiedad y formación de grupos	.133
Milpa	.136
Figura 10. Uso del suelo y vegetación en tres ejidos	.140
Tabla M. Agricultura 2005.	.141
Tabla N. Existencias pecuarias (2005)	.142
Potrero	.142
Complejidad institucional	.144
LA PROMESA	.147
Tres familias de El Cuayo	.148
Certificación en Joya Chica, El Cuayo y San Martín	.153
Tabla O. Resultados del Procede en tres ejidos: parámetros descriptivos	.158
Figura 11. Distribución de la tierra: parcelas certificadas por individuo según área total	.159
Figura 12. Propietarios de acuerdo con el número de parcelas y la extensión total de tierra certificada	.161
Figura 13. Distribución de parcelas según tamaño (por unidad y porcentual por rangos).	.162
Nuevos sujetos de Derecho	.163
Figura 14. Composición de posesionarios y ejidatarios según área certificada	.164
Exclusión normativa, participación y negociación	.168
Figura 15. Representación gráfica de los resultados de la distribución de acuerdo a tres modelos organizativos	.170
Modelos de acceso a la tierra	.170
Tabla P. Estrategias productivas: milpa y potrero.	.170

De un modelo fluido a uno fijo	.172
Acceso a la tierra	.174
Figura 16. Modelo de acceso a la tierra en el ejido	
<i>El Cuayo</i> antes de la reforma	.176
Figura 17. Modelo de acceso a la tierra en ejido	
<i>El Cuayo</i> después de la reforma	.177
Préstamo y alquiler	.178
Tabla Q. Formas de acceso a la tierra en el ejido <i>El Cuayo</i>	
(Relevo hogares 2006)	.179
Comunidades y ejidos	.180
CONCLUSIONES: CONFLICTO Y PERSISTENCIA	.183
Conflicto social	.186
Persistencia	.189
BIBLIOGRAFÍA	.193

A mi madre

PRÓLOGO

Los problemas agrarios han sido tratados desde muchas perspectivas, aunque esquemáticamente se puede decir que existen dos grandes tradiciones: una normativa, referida al desarrollo de la legislación y la administración agraria; otra estructuralista, que se ha preocupado por la relación entre tierra, capital y salario en la economía rural. En ambas, las relaciones *sobre o en la* tierra tienden a ser objeto de agregaciones y generalizaciones en pos de comprender y describir grandes procesos. Esta investigación implicó tanto reconstruir la visión institucional de la reforma agraria, como tratar de comprender los términos estructurales en los que se han planteado de forma dominante los problemas del campo en México. Sin embargo, con respecto a estas dos grandes perspectivas, el esfuerzo fue sintético más que analítico. De una u otra forma, el estudio de caso que se ofrece aquí confirmó tanto el diagnóstico normativo como el estructuralista: conflictos en el régimen y necesidad de ordenar y aclarar el estado de la administración; carácter semi-proletarizado de los campesinos; minifundismo, etcétera. Aun así, es preciso aclarar de entrada que la pregunta que orientó este estudio fue bastante modesta: ¿cómo cristalizó un cambio institucional de gran calado en los arreglos territoriales de las comunidades rurales? El principio de partida fue que si la comunidad es una instancia de organización con algún grado de autonomía frente a otros agentes rurales, de alguna forma debía manifestarse frente y en el proceso de certificación; por tal motivo, dicho proceso arrojaría luz sobre la naturaleza y condición de la comunidad.

Desde el punto de vista normativo, el tema es la evolución del aparato agrario, con sus oficinas, ministerios y cortes; cómo el Estado reorganiza una

administración caduca y atiende la inmensa cantidad de problemas acumulados. Desde aquí, el problema de la delimitación y reparto es propiamente catastral y la duda es en qué medida se puede crear un sistema efectivo de registro. Los resultados y beneficios se dan en gran medida por descontados.

Por otro lado, en la perspectiva estructural, la certificación se coloca en el contexto de la expansión (¿evolución? ¿superación?) del capitalismo en el campo; la forma que adoptan las relaciones de producción y la consecuente formación y orientación de clases en el campo. Desde esta perspectiva, el fin del reparto agrario aparecía como un momento de un largo proceso de cambio estructural signado por la subordinación del modo de producción campesino a los imperativos del capital en contextos de sub-desarrollo. Desde aquí, la certificación confirmaba este proceso, cuya expresión más acabada está en el minifundismo. Para decirlo en pocas palabras, el fraccionamiento y desgaste de la tierra –el medio de producción fundamental para la economía campesina– constituía a la vez condición e indicador de la extinción de los campesinos. Si bien el tema de la organización es relevante, la hermenéutica de la clase social predomina en este enfoque, por lo cual la relación entre productores (individuos o en todo caso hogares) y extensión de tierra ha sido el aspecto de la certificación más atendido.

Aunque mi punto de partida era cercano a la posición estructural, la certificación se me presentaba como un momento complejo de redefinición de los acuerdos y lazos en las comunidades, proceso en el cual la tierra misma (su localización, su división y exclusión) jugaba un papel relevante. Lo sorprendente era que, visto desde el nivel local dentro de los núcleos agrarios y entre núcleos vecinos, los resultados de la certificación eran muy dispares aun cuando los “sujetos”, su “cultura” y las condiciones de producción eran muy similares. Si bien esa heterogeneidad puede ser analíticamente neutralizada desde una perspectiva estructural, cuando al agregar información a nivel estadístico y regional, se nota la emergencia de grupos más o menos bien definidos en términos de la cantidad de tierra certificada; desde mi perspectiva era necesario explorar la lógica, los conflictos o las estrategias que se movilizaban para implementar la reforma, entendida en términos duales: como una renovada forma de intervención en la vida de las comunidades, y como posibilidad para la agencia colectiva.

Este interés me llevó a concentrarme en el proceso mismo de distribución al interior de los núcleos y en sus resultados, así como a tratar de relacionar las tres variables que en la discusión de la literatura sobre sistemas de propiedad suelen estar presentes: la tensión entre dos formas de uso de la tierra; los acuerdos que se construyeron para realizar la certificación y la calidad de la

tierra. Asimismo, en términos metodológicos, el eje de análisis fue eminentemente geográfico, quedando en un plano subsidiario la discusión sobre la organización económica y la organización socio-cultural. Esta perspectiva estuvo claramente condicionada por mis estudios doctorales en el Departamento de Geografía de King's College London, realizados con el auspicio del CONACYT y de la beca Overseas Research Award que me otorgó el Reino Unido. También resultó fundamental el diálogo fructífero que entablé con mi asesor Michael Redclift, cuya paciencia y disposición al entendimiento fueron fundamentales para llevar a buen término el proyecto.

A pesar de haber crecido en la ciudad, tuve la fortuna de tener contacto con el campo y sus habitantes desde muy temprano. A través de mi madre, Alicia Carriquiriborde, me llega desde pequeño un flujo continuo de información sobre lugares, organizaciones y conflictos que tienen al campo como su epicentro y a los campesinos como sus agentes centrales. La acompañé algunas veces a Xoxocotla, Morelos, cuando iba a mediados de los años ochenta a entrevistar a ejidatarios y comuneros que enfrentaban la recomposición de la industria cañera en los inicios de un profundo proceso de cambio en el uso del suelo y la lucha por el control de los recursos. Con ella visité también comunidades chocholtecas en la Mixteca oaxaqueña, y ejidos en la Tierra Caliente de Michoacán. También en mi memoria están las prácticas cuando era adolescente y estudiaba en Centro Activo Freire, en Maravatío y en el Valle del Mezquital, en la cuales realicé mis primeras entrevistas y cuestionarios sobre producción agrícola y comercialización.

Si bien esos contactos con el trabajo de campo fueron fundamentales en términos vitales, durante mis estudios de licenciatura y maestría en sociología, a mediados de la década de 1990 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tuve poco contacto con el tema agrario. Mi primera experiencia de investigación estuvo vinculada con la sociología de los desastres, desde donde el imbricado problema de la propiedad de la tierra y las comunidades campesinas, sin dejar de ser importante, emerge en el marco más amplio de relaciones que subyacen a la construcción del riesgo y la emergencia de estructuras de vulnerabilidad frente a amenazas cada vez más complejas. Inicialmente la ciudad, el agua, la deforestación, los peligros industriales y la política de desarrollo, constituyeron el ámbito objetual en el que me movía, bastante alejado de la tradición de los estudios rurales que, si bien cuentan con una importante tradición en la Facultad, no ocupaban ya el sitio central que alguna vez tuvieron. En aquella época, como asistente de investigación de La Red, recorrí una parte de

Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, haciendo entrevistas sobre daños producidos por inundaciones en muy diversas localidades rurales y urbanas. Mucho más tarde, visitamos la zona de los altos de Chiapas en un trabajo sobre las ciudades rurales que me mostró la complejidad de las interacciones entre las políticas territoriales y las estrategias de los muy diversos actores que habitan las zonas rurales.

Tuve la suerte de conocer desde muy joven a Julieta Valle, primero como maestra y luego como amiga. Esta relación marcó mi trayectoria intelectual y profesional, no sólo por las incontables veces que discutimos sobre la naturaleza de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, sobre sus proyectos políticos y sobre los obstáculos y ventajas de hacer investigación en campo, sino porque a través de ella establecí un diálogo con la antropología, con antropólogos y etnohistoriadores con quienes recorrí muchas veces los caminos de la Huasteca y de quienes aprendí lo difícil y complejo que es trabajar en comunidad. Fue gracias a Julieta que tuve la oportunidad de cobijar mi propia investigación en el proyecto más amplio de Etnografía del INAH, institución que me apoyó para la realización de una parte importante del trabajo en campo del que resultó este texto. Julieta Valle conoce profundamente la Huasteca y gracias a ella pude hacerme de una visión general de la región que me hubiera costado muchos años elaborar solo. La vida, con sus derroteros, a veces nos ha acercado y a veces alejado; sin embargo, ha sido para mí una enorme fortuna contar con su generosidad y cariño. Su enorme capacidad de trabajo, la profundidad y valor de sus análisis, constituyen un ejemplo de práctica profesional que me ha acompañado siempre a lo largo de mi propio tránsito por la academia.

Finalmente, me parece importante reconocer el apoyo para la publicación por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde ejerzo mi profesión como académico de tiempo completo. La Facultad ha sido siempre un espacio abierto en el que confluyen muy diversas temáticas y perspectivas. Sin embargo, desde mi experiencia como estudiante y luego como profesor, me parece que los problemas del campo se vieron eclipsados hacia final del siglo pasado o, en el mejor de los casos, quedaron subsumidos en las problemáticas de la etnicidad y la migración. Más recientemente, el creciente interés por los conflictos socio-ambientales parece consolidar una nueva trayectoria de investigación en la que el tema agrario gana una vez más preponderancia. Espero que este trabajo ayude a la renovación del interés por el campo entre los estudiantes jóvenes y al desarrollo de líneas de investigación que, retomando una profunda tradición de trabajo en nuestra Facultad, avancen

hacia la producción de nuevos argumentos sobre el lugar del campo y de sus habitantes en la sociedad mexicana contemporánea.

Sin lugar a dudas, los resultados de esta breve investigación no son generalizables. Sin embargo, considero que la estrategia analítica puede resultar interesante a algunos lectores y, en ese sentido, ayudar a definir estrategias para la producción de información y de argumentos que, en sí mismas, pueden ser objeto de discusión más allá de las particularidades locales. Al poner atención en las pequeñas variaciones, descubrí una fuente importante de problemas sobre la complejidad socio-ambiental. El tema de los arreglos de propiedad ha dejado, sin embargo, una huella profunda en mi práctica, y al momento de abordar otras investigaciones, permanece como un eje fundamental de investigación.

Visto en perspectiva, me parece que si este trabajo tiene algún valor más allá de la naturaleza del caso estudiado, está relacionado con la estrategia analítica y no con un diagnóstico totalizante de la reforma de 1994, o de la situación del campo, de los campesinos o de los pueblos indígenas en general. En parte por esto y debido a que los derroteros de mi trabajo de investigación volvieron sobre los problemas socio-ambientales vinculados al riesgo y me han llevado hacia otras latitudes, decidí sacar a la luz este documento con los datos originales sin realizar mayores actualizaciones, aun cuando sea esperable que el patrón de distribución de la tierra que emergió hacia finales de la primera década del siglo veintiuno esté sufriendo reacomodos. Volver a Ixhuatlán queda, por lo pronto, como un proyecto que espero llevar a cabo en un futuro no muy lejano.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2000 visité por primera vez Ixhuatlán de Madero, acompañando a un grupo de antropólogos y etnohistoriadores coordinado por Julieta Valle Esquivel, quien encabezaba el equipo de la región Huasteca como parte de un gran programa de investigación impulsado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH denominado en aquel entonces: *Etnografía de los pueblos indígenas de México en el nuevo milenio*. En aquel tiempo se vivía en el norte veracruzano, como en el resto del país, la efervescencia derivada del ascenso del panista Vicente Fox a la Presidencia de la nación y del triunfo de varios perredistas en gobiernos municipales del estado, lo que demostraba, según muchos, la consolidación de la transición política de México. Poco antes se había abierto también la carretera local que conecta la cabecera municipal de Ixhuatlán con la carretera estatal y se anunciaban proyectos de infraestructura para las comunidades. Era, además, un período de reordenación de algunas organizaciones de base campesina e indígena.

Después de las sangrientas luchas de los años setenta y ochenta, la Huasteca pasaba por un período de calma en el que los conflictos de toma de tierras que siguieron al levantamiento zapatista de 1994 no parecían haber escalado.¹ El Programa de Certificación de la Propiedad Social (PROCEDE) avanzaba y para ese entonces se decía que la mayor parte de los ejidos y comunidades habían recibido o estaban a punto de recibir cartografía, títulos y certificados parcelarios. El tema de la tierra no estaba en la agenda de trabajo del equipo

¹ Vale señalar, sin embargo, que pocos años después, en 2005, asistí al festejo del 10 aniversario de la localidad Heberto Castillo, un conjunto de aproximadamente 25 familias que habían ocupado las tierras de un rancho no muy lejos del centro del municipio.

al que yo me había sumado, como único sociólogo, para apoyar en el registro de entrevistas y de imágenes, pero gracias a la invitación que recibimos para asistir a la fiesta de Santa Rosa en una comunidad cercana a la cabecera, muy pronto me descubrí reflexionando sobre ese asunto.

Nuestro primer contacto con la comunidad de Ojital Cuayo (El Cuayo) fue a través de la organización de médicos indígenas que se había constituido legalmente en 1998 y que luchaba por el reconocimiento, respaldo y protección del trabajo de parteras, hueseros y espulgadores, entre otras especialidades de quienes atienden la salud de los habitantes de las localidades rurales de la Huasteca. Era la ocasión de la fiesta de Santa Rosa, en agosto del año 2000 y fuimos invitados a la casa de Doña Josefina,² líder ritual que ofició la ceremonia en uno de los dos lugares donde se reunieron vecinos de El Cuayo y de otras localidades cercanas y algunas más bien lejanas. La ceremonia se extendió desde el atardecer hasta el amanecer y congregó a muchas familias y personas, que sumaron su esfuerzo para pedir la clemencia de los vientos, en un momento del año en que el maíz ya ha germinado pero todavía es frágil. La celebración implicó el armado de más de cien ramos de flores que, después de una limpieza colectiva, se repartieron entre cada uno de los participantes para bailar ante el banquete (“la mesa”) que se le ofrendaba a la Santa, con la finalidad de que aplacara los vientos a mitad de la temporada de lluvias.

En Santa Rosa y otras fiestas, las flores, además de embellecer la ceremonia, simbolizan el espíritu, el ánimo y la pureza de las intenciones de los individuos y familias congregadas; representan también al maíz, que es su sustento, y a la tierra, que los sostiene a ambos.³ La fiesta es también la ocasión para establecer pactos o estrechar lazos entre miembros de la comunidad mediante “promesas” que, aunque se le hacen a la Santa, son verificadas por el conjunto del grupo ritual. En aquella ocasión dos familias hicieron su Promesa y la presentaron ante la Santa y la comunidad. La Promesa consiste en la consagración de una urna donde se coloca un par de mazorcas vestidas de hombre y mujer con todo su ajuar y a las que se le agregan velas y figuras de papel cortado que representan semillas, flores y buenos espíritus. Al terminar la fiesta, las urnas son llevadas a casa y colocadas en el altar familiar de los ofrendantes, quedando así confirmado su vínculo solidario. La fiesta de Santa Rosa representa un pacto colectivo que se sella mediante ritos de purificación (limpias), sones, baile,

² Todos los nombres personales han sido cambiados para proteger la identidad de los informantes.

³ Hernández y Heiras, 2010.

comida y bebida, elementos que sin dejar de tener un fuerte contenido festivo representan un enorme esfuerzo colectivo.

La fiesta de Santa Rosa, como otras muchas de la Huasteca, me deslumbró por el gran esfuerzo colectivo que implica, lo elaborado de su desarrollo y la convocatoria que tiene. Sin lugar a dudas, se trataba de una de esas ocasiones que permiten a los antropólogos afirmar de manera contundente la persistencia, profundidad y vitalidad de la matriz cultural mesoamericana en una región culturalmente compleja, en la cual los indígenas conviven con una población mestizo-ranchera que desde hace mucho tiempo mantiene un control más bien agresivo de los recursos, instituciones y espacios políticos. Más allá de la emoción estética, me conmovió el estrecho vínculo entre el orden simbólico que ahí se movilizaba en estrecha vinculación con la organización productiva de la comunidad. La realización de la fiesta suponía la operación de una maquinaria en la que grupos e individuos se organizaban sobre las líneas de relaciones productivas y de propiedad que, como lo averiguaría más adelante, no sólo son complejas sino también conflictivas. Que éste era el caso, lo demostró la larga, apasionada y a momentos lacrimosa súplica con la que Doña Josefina cerró la festividad justo antes del amanecer, cuando expuso los conflictos, los chismes, las envidias, las dolencias, que tensaban a su comunidad.

Mi interés por tratar de forma sistemática el proceso de certificación, emergió en el esfuerzo de entender la lógica y las relaciones de aquellos que participaban en la comunidad ritual de Doña Josefina. Entre el año 2000 y el 2008 regresé en diferentes ocasiones a visitar a quienes se convirtieron en mis amigos. Estuve en eventos festivos como carnaval, día de muertos, peregrinación a la mesa de Cacahuatengo o al Señor de la Salud en Meztlán; en todos ellos era evidente que las relaciones de compadrazgo, jerarquía e intercambio, se entreveraban con las de acceso y control de la tierra. El estar presente en las diversas actividades del calendario ritual también me mostró la relevancia de las relaciones entre los habitantes de El Cuayo y sus vecinos de Joya Chica y San Martín, relaciones que involucraban diversidad de intercambios, amistosos, matrimoniales, rituales, así como renta, préstamo y compraventa de parcelas. A medida que pasaba el tiempo, mis visitas se concentraron en la tarea de entender cómo se ajustaban las familias, grupos e individuos, en el proceso de enfrentar y resolver el problema que les presentaba la certificación: distribuir definitivamente la tierra e instaurar un régimen de propiedad privada dentro de los ejidos.

La certificación abría un paréntesis en la lucha y la organización centrada en la demanda de tierra, reorientando la atención hacia el interior de los propios

ejidos y comunidades, con la diversidad de sus integrantes, en algunos casos fraccionados y en otros divididos según dinámicas muy localizadas ¿Qué condiciones y tensiones supuso la certificación? ¿Cuáles fueron y cómo entender los resultados?

Una pregunta básica para quienes han teorizado sobre el cambio en las relaciones de propiedad ha sido: ¿cómo una determinada distribución de la tierra y de los derechos entra en vigor? Existe un argumento cuasi sociológico que vincula la evolución de los derechos privados (individuales) con una mayor presión sobre los recursos y el aumento de la complejidad social. Apelando al incremento demográfico y a la noción de competencia, se intenta explicar lógicamente la aparición de relaciones de propiedad, así como la transición desde formas colectivas o de libre acceso hacia la propiedad privada (Field, 1989). Este argumento reformula un principio de racionalización que opera de manera casi automática y que formó parte fundamental de las narrativas sociológicas clásicas sobre el cambio social. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que la oposición propiedad colectiva *versus* propiedad privada no puede resumir la miríada de normas, reglas, acuerdos o costumbres que rigen y facilitan ordenamientos de acceso a los recursos en todo el planeta aún hoy.

Los distintos arreglos y la persistencia de distribuciones de la tierra regresivas son claros indicadores de la complejidad implicada en la formación y reproducción de las relaciones de propiedad de la tierra y de la sociabilidad en ámbitos rurales. En un marco problemático tan grande, es preciso entonces hacer algunas aclaraciones sobre el posicionamiento y los alcances de este trabajo.

Con la finalidad de delimitar inicialmente la perspectiva general de la que aquí se parte, es adecuado distinguir, aunque sea de forma muy esquemática, tres tipos de aproximación a los temas agrarios: institucional, estructural y etnográfica. La primera, que se puede concebir como auto observación del Derecho, tiene a la Nación como su horizonte y se preocupa por el espíritu de la reforma agraria, la justicia agraria, los proyectos, los problemas y los éxitos del régimen de propiedad social.

Las otras dos perspectivas emergen en un ámbito diferente, el de las ciencias sociales. La estructural, teóricamente anclada en la economía política (ya sea marxista o burguesa), suele tener a la región como unidad de estudio y se centra en el problema de las relaciones de producción y la consecuente formación de clases y proyectos políticos en el campo. La etnográfica pone lo local en centro y es mucho más heterogénea en sus intereses y perspectivas teóricas, aunque suele plantearse problemas de persistencia y cambio en diversos aspectos de

la vida social en el campo, incluyendo la propiedad de la tierra. Este trabajo se ubica claramente en la tercera categoría, aunque recupera al menos dos temas que han sido ampliamente discutidos desde las perspectivas institucional y estructural.

Por una parte, se considera relevante entender el régimen de derechos y sujetos, para darse una idea de las posibilidades y limitaciones para la acción. El Derecho hace una oferta que, como lo demuestra la vigorosa apelación a los Tribunales Agrarios para dirimir conflictos políticamente relevantes, es generalmente aceptada. Si hay algo que es patente en la historia de la reforma agraria, es que sin dejar de reproducir la desigualdad, el Derecho es un recurso para la acción estratégica de los pueblos y comunidades campesinas. No considero entonces al sujeto de derechos o al ejido como ficciones o fantasmagorías jurídicas que se desvanecen frente a los imperativos de las relaciones de producción; por el contrario, me parece necesario discutir cómo la implementación de cambios en el régimen de propiedad moviliza un conjunto de recursos y estrategias de adaptación y resistencia y, en ese proceso, se cristaliza en arreglos socio-ambientales muy diversos.

El segundo elemento es más complejo y tiene que ver, justamente, con la referencia a *lo campesino*, categoría que opera una distinción doble: al vínculo con la tierra y al vínculo con la comunidad. Esta doble referencia abre con bastante amplitud las posibilidades de apelación a *lo campesino*, pero al mismo tiempo incrementa la ambigüedad y el riesgo de atribuciones espurias. Así pues, es preciso discutir los contenidos y usos que se le da al concepto si es que se desea que tenga alguna utilidad heurística. Esto no significa, sin embargo, que la comunicación sobre *lo campesino* deba estructurarse necesariamente alrededor sólo de la tierra, del parentesco, o de algún otro criterio espacial o lingüístico. En general, por supuesto, se ofrece una combinación estratégica de diversos elementos, destacándose aquellos que resultan relevantes para la formulación de argumentos específicos y, en algunos casos, relaciones causales. Si bien se habrá de revisar brevemente el debate sobre el campesinado, cabe adelantar que aquí *lo campesino* define un orden político, la comunidad, que es posible separar del ejido como variable organizativa. La diferencia entre comunidad y ejido resulta relevante para este trabajo.

En coincidencia con algunas corrientes del campesinismo, considero que la comunidad apela a la forma específica de organización de los campesinos. La comunidad campesina se compone por una red de unidades domésticas que facilita el acceso a la tierra y a otros recursos colectivos materiales y simbólicos.

La comunidad enarbola no sólo relaciones de solidaridad, sino principios de equidad, prácticas (formas de hacer) y proyectos comunes que pueden y de hecho se desarrollan bajo regímenes de propiedad diversos. La naturaleza de los lazos, la forma y medida en que la tierra es objeto mediación comunitaria constituyen variables de carácter empírico, así como los límites de la comunidad, sus formas de división y agregación. El estudio de caso que se presenta más adelante, postula que la presencia la comunidad campesina compuesta por los habitantes del El Cuayo y El Nopal resulta determinante para explicar la diferencia en los diversos patrones de distribución de parcelas entre ejidos que, *grosso modo*, comparten características ambientales, económicas y culturales.

Este trabajo desarrolla una estrategia de análisis sincrónico y pone atención en los aspectos organizativos (posición de los sujetos en el núcleo agrario y articulación de unidades domésticas), la calidad de la tierra y las estrategias productivas que se despliegan no sin tensiones y contradicciones en la zona de estudio. Combina además métodos cualitativos y cuantitativos de análisis. Con esos elementos y atendiendo a los mecanismos y los resultados de la distribución de las parcelas se distinguen tres estrategias en el proceso de implementación de la certificación: exclusión normativa (ahí donde la ley determinó los términos de la distribución); participación (ahí donde la pertenencia a redes de parentesco y trabajo, a la comunidad, fue fundamental) y negociación (ahí donde el proceso implicó confrontaciones entre grupos con diversos intereses y orientaciones productivas dentro del núcleo agrario). Estas estrategias, se presume, derivan y al mismo tiempo expresan la variable articulación entre comunidad, ejido y calidad de la tierra.

Se puede decir algo más sobre la perspectiva de esta investigación. En México, como en muchas otras latitudes, los estudios sobre el campo (los campesinos, las comunidades rurales e indígenas, la producción agrícola) han estado dominados por la economía y la antropología, disciplinas ambas de las que se nutre este estudio, pero en las que no puede ni debe inscribirse. No se trata de un trabajo de economía, debido a que no analiza a detalle la formación y transferencia de valor; tampoco de una investigación antropológica (en el sentido clásico del término) en cuanto no detalla las relaciones de parentesco, simbólicas o étnicas que delimitan, cohesionan e identifican a cierta comunidad o pueblo. Lo que el lector tiene en sus manos, es el resultado de una investigación sociológica sobre la forma en que operó un cambio institucional, sobre las mediaciones por las que atravesó en el proceso de su materialización y sobre sus resultados en términos de distribución de derechos y recursos.

Resulta difícil y probablemente fútil definir con claridad el horizonte epistémico de la sociología rural, subdisciplina cuyo auge puede situarse entre las décadas de 1960 y 1970, al amparo del interés por los estudios sobre el desarrollo y la modernización. De esa época datan los textos clásicos de Pozas (1964), Aguirre Beltrán (1967), Martínez Navarrete (1971) o Stavengahen (1972) en México; las publicaciones del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA; los también clásicos estudios de Shanin (1979; 1983), y de Leonard y Clifford (1960), trabajos todos que más que ofrecer una visión disciplinaria cerrada, establecían como tema central de la sociología rural los vínculos entre las comunidades campesinas y el Estado, y se preocuparon por la persistencia del aislamiento, la marginalidad y la subordinación económica y política como obstáculos fundamentales para su incorporación al más amplio proyecto social nacional. En términos metodológicos, la sociología rural se caracterizó desde un inicio por el uso de información histórica y demográfica, la atención a la organización socio-productiva y la preocupación por la planeación. Aquellos trabajos clásicos de la sociología rural definieron un tipo de aproximación que se distinguía de una antropología cuyas fuentes casi exclusivas derivaban del trabajo etnográfico, y también de una economía que se planteaba los problemas desde la perspectiva de los componentes del sector agropecuario y la composición de grandes clases (el campesinado *versus* la empresa agrícola) en las economías nacionales y regionales.

Siguiendo aquella tradición disciplinar, este trabajo recoge y articula datos e informes de tipo histórico, demográfico, económico, etnográfico y geográfico; además, se pone particular atención a la formulación del orden normativo que emergió con la Reforma del ejido, en particular en lo que se refiere a los “sujetos” de derechos. Finalmente, el análisis se concentra en la distribución de la tierra entre dichos sujetos, así como en comparar los resultados entre tres ejidos contiguos. En esta tesitura, este documento no busca ofrecer un análisis general de la transición agraria en México a partir de sumar información sobre los resultados totales del proceso de certificación que marcó el fin de la distribución de la tierra, sino más bien explorar las pequeñas, aunque cruciales, variaciones locales a partir de las cuales es posible indagar en el problema de la relación entre organización, conflicto, distribución y acceso a la tierra.

Organización del documento

El capítulo dos argumenta sobre la relación entre reforma, el ejido y las comunidades campesinas, tomando como base la idea de que estas últimas expresan un proceso histórico de adaptación, cambio y resistencia, que es fundamental tomar en cuenta para comprender los alcances de la reforma de 1992. El capítulo tres ofrece un breve análisis de los cambios en el régimen más relevantes en cuanto a su relación con la organización interna de los ejidos e introduce el programa de certificación que se analiza en el estudio empírico que nutre la segunda parte del trabajo.

La segunda parte, capítulo cuatro, desarrolla un estudio comparativo de tres ejidos vecinos del municipio de Ixhuatlán de Madero en Veracruz. Presenta en un inicio el marco regional y ofrece una descripción de los núcleos agrarios objeto de estudio y de su evolución desde su formación hasta finales del siglo veinte. En el quinto apartado, se analiza y compara el proceso de certificación, para después discutir aspectos relacionados con su carácter organizativo y productivo, la relación entre comunidad y ejido en cada caso y sus consecuencias en términos de los resultados del programa.

Finalmente, el último capítulo ofrece, a manera de conclusión, una discusión sobre la conflictividad en la zona de estudio y su probable vínculo con la certificación. Primero se ofrece un somero análisis de la estructura agraria y de las opciones alternativas a la economía ranchera que prevalece en la región. El objeto de este apartado es discutir el marco socioeconómico al cual se deben articular los resultados del estudio comparativo para ponerlos en un contexto en el que tenga sentido evaluar los problemas relacionados con los regímenes de propiedad de la tierra. Por último, se resumen los resultados empíricos y se retoman críticamente las preguntas y líneas generales de discusión que atraviesan este trabajo.

P R I M E R A P A R T E

**EL EJIDO Y LA COMUNIDAD CAMPESINA EN EL CICLO
DE LA REFORMA AGRARIA**

PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL DE LA REFORMA AGRARIA

Los problemas del campo mexicano, incluida la reforma agraria, son objeto de una vasta literatura. Entreverada con el orden político y el crecimiento económico del país durante varias décadas, la reforma agraria ha sido revisada desde diversos ángulos por científicos sociales y juristas (Hewitt de Alcántara, 1988; Martínez, 1981; Manzanilla Schaffer, 2004; Warman, 2001). Debido a que se trata de una de las reformas agrarias más importantes del siglo pasado, historiadores y economistas de diversas latitudes le han pasado revista (Hobsband, 1974; Heath, 1990; Barraclough, 2001: 28-31; Guiter, 2001: 165-167; Binswagner *et al.*, 1995: 2748-2749). También hay grandes obras que ofrecen una descripción detallada de las normas, las instituciones, las ideologías, los grupos y las personas que forjaron las instituciones medianeras de la distribución de la tierra (Mendieta y Núñez, 1969; Silva, 1969; Escárcega, 1989). Más recientemente, el trabajo de Gerardo Otero (2004), investigador con una larga trayectoria en los estudios agrarios, constituye una fuente primordial, actualizada y teóricamente densa sobre los problemas del desarrollo agrario y la reproducción del campesinado que difícilmente se puede suplantar en un ensayo contextual.

Ante la complejidad que se despliega en los trabajos de éstos y muchos otros investigadores, la tarea de síntesis o de revisión exhaustiva enfrenta el riesgo de dar por resultado una narrativa reduccionista llena de lugares comunes (Barraclough, 2001: 27). De cualquier forma, no es posible entender el sentido de la reforma sin una referencia al proceso histórico del que forma parte, por lo que se optará aquí por desarrollar una periodización muy amplia de la reforma

agraria centrada en su doble aspecto institucional y territorial, aspecto clave en el estudio empírico que se presenta en la segunda parte.

A pesar de sus numerosas deficiencias, la reforma agraria mexicana transformó la estructura de propiedad en un grado no visto en ningún otro país occidental. Más de tres millones de personas se beneficiaron de un pedazo de tierra y se distribuyeron arriba de cien millones de hectáreas (INEGI, 2000). La relación entre el número de beneficiarios y las hectáreas que les concedieron varió mucho en tiempo y espacio, dependiendo de la disponibilidad de tierra, la ubicación de los que reclamaban, las modificaciones en la ley y los ideales de desarrollo de los distintos gobiernos. La reforma agraria provocó cambios demográficos relevantes y propició una distintiva integración territorial. Grupos de familias campesinas formaron “nuevos centros de población” con el fin de reclamar la tierra, y en algunos casos, la distribución se utilizó como una política de colonización.⁴ En cuanto a las expropiaciones para la distribución, los viejos propietarios tenían derecho de mantener de cincuenta a cien o incluso ciento cincuenta hectáreas de sus propiedades y por lo general se aseguraron de retener las tierras más productivas, donde el agua fluía y existía infraestructura. Debido a esto, en algunos casos, los beneficiarios no recibieron un terreno sino varias unidades a veces separadas por grandes distancias unas de otras.

Durante todo el período de reparto agrario se encuentran grandes variaciones en la velocidad, la calidad y la cantidad de tierras distribuidas, y también en la consolidación y el apoyo de diferentes ideas de lo que era o debía ser el ejido, y de su papel en el más amplio contexto del desarrollo económico y social del país. Para algunos, la reforma agraria como política de desarrollo ya estaba extinta desde 1946 (Markiewicz, 1993); para otros fue un monumental proceso de incorporación política de los campesinos al Estado moderno (Warman, 2001: 53).

La comunidad en el nacimiento de la Reforma Agraria de México (1915-1934)

Hacia 1915, los tres ejércitos que lucharon en la Revolución Mexicana (el Constitucionalista de Venustiano Carranza, la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército del Sur de Emiliano Zapata) habían presentado sus propuestas agrarias (ver Tabla A). Cada programa declaraba ideas diferentes acerca de

⁴ Como fue el caso del proyecto de Macuspana en Tabasco a mediados de los años setenta, o el establecimiento de centros de población en la frontera sur en Chiapas durante los años ochenta.

la propiedad de la tierra y su regulación. Los programas exponían diferentes modelos de articulación entre la sociedad y su base fundamental de recursos: la tierra. Al contrario de lo que planteó Warman sobre el hecho de que resulta “difícil rastrear la influencia de corrientes externas de pensamiento o de autores extranjeros en la concepción inicial de la reforma mexicana” (2001: 53), una revisión somera de los principios de cada propuesta permite señalar que los programas agrarios de Carranza y Villa echaban raíces en la concepción liberal de la propiedad y defendían la *necesaria* distribución de los recursos entre los ciudadanos. El proyecto zapatista, por el contrario, ofrecía una idea compleja de la propiedad basada en el control local de los recursos; distinguía entre formas de propiedad individual, colectiva y nacional (común) y además involucraba un modelo de desarrollo rural firmemente respaldado con recursos públicos materiales e institucionales.⁵ De la tensión entre estas dos perspectivas nació la Reforma Agraria mexicana.

Debido a la resonancia del movimiento zapatista, la reforma agraria supuso un giro radical en la regulación de la propiedad rural. La *Ley Lerdo* (1856) había permitido la formación de una estructura agraria caracterizada por la aguda concentración de la tierra, formas extremas de explotación de la población en el campo y una frontal (y muchas veces brutal) guerra contra pueblos y comunidades indígenas, las cuales durante el período colonial habían adquirido importantes niveles de autonomía y mantenían derechos colectivos de sus tierras. Las demandas y estrategias de lucha exhibidas por los campesinos durante los disturbios y las revueltas de la segunda mitad del siglo diecinueve (Reyna, 1993) fueron prueba de la resistencia de formas comunitarias de organización que con el tiempo hicieron eco en el programa agrario zapatista.

⁵ Después de la *Ley Agraria*, en abril de 1916, los zapatistas elaboraron otro reglamento: el *Programa Político y Social de Reforma* (1916), orientado a clarificar y hacer posible una propuesta de conjunto, es decir, política y productiva. El *Programa* integraba cuestiones sobre el trabajo urbano-industrial, educación, expropiación y aumento de la intervención del Estado. En su sección sobre las reformas políticas (cláusulas 32 a 38), el programa clamaba por la plena independencia para los municipios, dándoles amplias libertades de acción para que pudieran asistir eficientemente a los intereses comunales y con el fin de preservarlos de los ataques y la sujeción a la ley y gobierno federal y estatal (*Programa de Reformas Políticas Sociales, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria*. 1916, artículo 32). También se solicitaba la reorganización del Estado parlamentario y una total autonomía del Poder Judicial. Más tarde, en septiembre del mismo año, se publicó una *Ley sobre Libertades Municipales* (Zapata, 1916), y en cuanto a los atributos de los gobiernos locales afirmó: control sobre el presupuesto público, expropiación y cesión de las tierras, servicios públicos y contratos con empresas y otras autoridades, control directo de algunos impuestos y otros asuntos económicos colectivos, entre otras normas bastante libertarias.

Zapata y su ejército demostraron que la batalla anticomunalista no había sido definitivamente ganada por los liberales decimonónicos.

TABLA A PROPUESTAS AGRARIAS DE LOS EJÉRCITOS REVOLUCIONARIOS			
	Ley del 6 de enero (Carranza, 1915)	Ley Agraria de la División del Norte (Villa, 1915)	Ley Agraria de la Convención Zapatista (Zapata, 1915).
Modelo de propiedad	Privado: parcelas individuales.	Privado: parcelas individuales. Reconocimiento de los derechos colectivos sólo en los bosques, pozos y pastos.	<ul style="list-style-type: none"> • Privado: parcelas individuales-fami- liares. • Colectivo: pueblos, comunidades y ranchos. • Todos los bosques declarados de propiedad nacional deben explo- tarse por comunidades locales. • Tierra distribuida por el gobierno excluida del mercado
Estructura política	Centralista. Comisión Nacional Agraria.	Regionalista. Cada Estado diseña e implemen- ta su propia reforma agraria.	Local. Municipios autónomos y democráticos implementan la distribución de tierra, después confirmada por Comisiones Agrarias.
Asuntos específicos relacionados con la organización y el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Se especifica con claridad que el ob- jetivo de la Ley no es restablecer la propiedad comu- nal, sino mejorar las condiciones de los individuos. • Se crean procedi- mientos burocráti- cos para estimar la necesidad y conve- niencia del reparto en cada caso par- ticular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plantea la expropiación de la tierra en pueblos indígenas y su redistribución en parcelas individuales. • Impone el derecho de com- pensación anterior a la expro- piación. • Admite la formación temporal de grandes explotaciones agrícolas. • Declara la obligación de tra- bajo como requisito para man- tener la posesión de la tierra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de Tribunales Agrarios. • Formación de Comisiones Técnicas para ordenar la distribución de acuerdo a sus características físicas. • Creación de escuelas agrícolas y forestales, y estaciones experimen- tales regionales. • Permite la formación de coopera- tivas para el trabajo de la tierra y la comercialización. Sociedades Anónimas formadas por personas que no trabajan directamente la tierra, quedan prohibidas. • Obligatoriedad del trabajo para la posesión de la tierra.

Hacia el fin oficial de la Revolución en 1917, la movilización rural era de tal magnitud que la necesidad de reagrupar a los campesinos armados en sus pueblos o incluso en las haciendas restantes orilló a los nuevos gobernantes (los

viejos y nuevos terratenientes y los caudillos de la revolución Carranza, Obregón o Calles), a distribuir las tierras colectivamente y a validar las adjudicaciones que se habían realizado durante el conflicto armado en la zona central. Aunque las primeras dos décadas después de la Revolución fueron un período de desmovilización de los grupos revolucionarios y de restablecimiento de vínculos políticos entre los antiguos hacendados, la incipiente burguesía urbana y la nueva clase político-militar, la reforma agraria se convirtió en una fuerza tan contundente, que incluso el presidente Calles, quien estaba abiertamente en contra de una distribución extensiva de la tierra, utilizó la bandera agrarista en su lucha contra los cristeros (Esteve, 1980: 44). En los primeros años postrevolucionarios, el imperativo político constreñía todos los demás aspectos que involucraba el reparto agrario, incluso el económico (Molina, 1936).

Un aspecto fundamental de las dos primeras décadas de la reforma agraria fue el limitado marco jurídico proporcionado por la Ley del 6 de enero de Carranza, que tras el asesinato de Emiliano Zapata fue el instrumento jurídico para la primera distribución de tierras. Debido a que aquella ley contemplaba sólo la “restitución” de tierras a las comunidades que contaran con títulos, cédulas u otros documentos que demostraran su calidad de pueblo o congregación, excluía al mismo tiempo a la mayoría de la población rural que no formaba parte de una comunidad reconocible desde el punto de vista territorial definido por las Comisiones Agrarias. En este periodo, entonces, hubo un reconocimiento formal de las comunidades, pero continuó el ataque a las formas comunitarias de organización que desafiaban la centralización del poder que se produjo después de la revolución.

En el primer reglamento de la reforma agraria se apeló a órdenes territoriales pre-revolucionarios (e incluso anteriores a la independencia), organizados en pueblos y congregaciones. Los pueblos y aldeas, sin embargo, habían estado bajo ataque durante gran parte del siglo diecinueve y en muchas regiones se habían transformado en algo distinto a la organización representada por las Repúblicas de Indios de la época colonial.⁶ Variaciones históricas y regionales

⁶ Durante gran parte del período colonial existió una separación estricta entre los españoles y los pueblos indígenas, con prescripciones legales diferentes para uno de ellos. La política de congregación de población indígena (siglo XVII en adelante) con el fin de protegerlos de la explotación despiadada de los conquistadores, imponer la fe católica y, más importante aún, garantizar la disponibilidad de los ingresos laborales y fiscales para España, produjo Repúblicas de Indios (ver Gerard, 1972, para un enfoque global de la organización administrativa del territorio bajo el dominio español).

en los patrones de desarrollo y de ordenamiento territorial hacían que en determinadas zonas los campesinos vivieran en *pueblos hacienda*, o que mantuvieran patrones de asentamiento muy dispersos.

En algunos casos, los pueblos habían logrado acomodarse a la ley liberal mediante la privatización de sus tierras, en virtud de acuerdos especiales tales como co-propiedad (condueñazgo), mientras mantenían una estructura de organización comunal. Este fue un procedimiento conocido en la Huasteca, donde la diferencia entre “pueblos de indios” y “pueblos de hacienda” llegó a jugar un papel importante en la distribución de la tierra y posteriormente influyó en la relación entre las comunidades, y entre éstas y los diferentes actores que mediaban la distribución de la tierra (Valle, 2003: 249-251; Schryer, 1990: 136, 233-234).

La distinción entre diversos tipos de haciendas, que hoy puede parecer superficial e ingenua, funcionó en la ejecución de la reforma agraria. El mecanismo para operar esa distinción estuvo en el procedimiento. Se reconoció como sujetos de dotación o restitución a los pueblos o congregaciones que habían sufrido despojos, pero se negó el reconocimiento de “categoría política a las haciendas”. En sus “cascos” o instalaciones principales vivían los “acasillados”, los trabajadores más cercanos y especializados, lo que les impedía solicitar dotación de tierras que pudieran afectar al núcleo de la propiedad (Warman, 2001: 65).

La primera codificación de la reforma agraria requería que los pueblos o congregaciones demostraran su condición política a través de concesiones reales, mapas o documentos oficiales. Después, debían demandar a los propietarios de las tierras en tribunales conformados por los gobernadores estatales y las Comisiones Agrarias, ambos fuertemente ligados a los intereses locales y regionales. Por último, el Presidente proclamaba la sentencia, quedando la Suprema Corte a cargo de las apelaciones (Manzanilla Schaffer, 2004: 594). Además de la carga burocrática y los altos costos que este esquema imponía a las comunidades, el hecho fue que un número reducido de ellas podían demostrar la propiedad anterior de la tierra.⁷

En palabras de Mendieta y Núñez, las primeras décadas de la reforma agraria estuvieron marcadas, en consecuencia, por una pacífica contrarrevolución

⁷ También debido al gran poder de los terratenientes locales, que involucraba a otros actores, como los sacerdotes y caciques, las comunidades y pueblos que pudieran haber pedido la tierra no lo hicieron. Véase, por ejemplo, Mendieta y Núñez, 1960, capítulo 3.

agraria (Mendieta y Núñez, 1963: 24-25). En términos legales, la prevalencia de la ley de Carranza por sobre el proyecto zapatista dio cuenta de que mientras los viejos terratenientes sobrevivían gracias a su capacidad de establecer vínculos orgánicos con la nueva estructura de poder, los campesinos no eran capaces de liderar el proceso del cual eran los actores principales y no lograban influir en las decisiones que les afectaban directamente (Bartra, 1976). El resultado más evidente de esta primera contrarrevolución, propiciada por las manipulaciones legales y políticas en las que incluso los socialistas urbanos de izquierda intervinieron,⁸ fue la limitada y excluyente distribución de tierra.

EJIDALIZACIÓN: DISTRIBUCIÓN RADICAL Y CORPORACIÓN EN EL MÉXICO RURAL (1934-1970)

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas llegó al poder en 1934, la reforma agraria cobró una dimensión nacional en términos geográficos y de proyecto de desarrollo. Con excepción de la región zapatista en el centro del país, hasta Cárdenas, la distribución se había orientado a mantener el *status quo*. La reforma se entendía como un subsidio, una especie de compensación a algunos campesinos, que consistía en una pequeña parcela de tierra donde pudiesen generar un complemento a los bajos salarios ofrecidos por los ranchos y las haciendas refuncionalizadas. No es posible explorar aquí la compleja coyuntura histórica que permitió a Lázaro Cárdenas ser el eje de políticas económicas y sociales (reforma agraria, nacionalización del petróleo y electricidad, construcción del partido de Estado) que marcaron el desarrollo de México durante varias décadas del siglo veinte y que transformaron su figura en un icono nacional. Sin embargo, es posible apuntar que si bien después de la inscripción del Artículo 27 constitucional, la normatividad que sustentó el reparto agrario sufrió diferentes modificaciones, fue durante el período del presidente Cárdenas que las políticas más duraderas (tanto material como ideológicamente) se llevaron a cabo. Con algunos cambios, Cárdenas hizo de la Reforma Agraria una fuerza social transformadora. Al respecto, destacan seis puntos:

1. La distribución de la tierra se hizo masiva. Ni antes ni después de Cárdenas, tanta tierra propiamente agrícola fue distribuida.

⁸ Ver Hart, 1987; Ruiz, 1976, y Cockcroft, 1968, para una historia de la relación entre los anarquistas y socialistas organizados alrededor de la *Casa del Obrero Mundial* y el *zapatismo*.

2. La reforma agraria se transformó en una política frontal del gobierno federal. La construcción de una estructura centralizada y corporativista que incluía a los campesinos fue iniciada por Calles (1924-1928), quien –como se mencionó– utilizó a los agraristas en su batalla contra los cristeros o cualquier otra organización o grupo que tratara de desafiar su poder en las diferentes regiones del país (Purnell, 1999). Sin embargo, fue Cárdenas quien dotó a la Reforma con un marco institucional medianamente apropiado y estableció las bases de un apoyo gubernamental al campesinado de largo aliento.
3. En este período se creó un equilibrio político duradero. Los viejos propietarios obtuvieron seguridad jurídica con la creación de certificados de no afectabilidad para los ranchos ganaderos (que más tarde se extendieron también a algunas plantaciones comerciales) que protegieron de la expropiación a importantes unidades de producción. La relación entre élites protegidas y distribución fue muy variable en el tiempo y en el espacio, pero Cárdenas aseguró un lugar de privilegio a los empresarios privados en zonas rurales.
4. El marco legal mejoró. Una ley estatutaria completa fue creada (el *Código Agrario*) para proceder con la distribución, y el ejido adquirió sus características más duraderas.
5. El ejido empezó a ser visto como una parte importante de la estructura productiva, se constituyeron apoyos financieros y técnicos para el sector rural social. Al mismo tiempo, el Estado reforzó su intervención en las decisiones de los ejidatarios a través de sus organizaciones corporativas. En este corto periodo, la presión por individualizar la tenencia de la tierra dentro de los ejidos se revirtió en cierta medida; y en algunos casos clave (como La Laguna), la colectivización fue impulsada política y financieramente. Además, aunque la mayor parte de las tierras distribuidas por Cárdenas fue de calidad regular y de temporal, algunas zonas de riego pasaron a manos de los campesinos.
6. A pesar de que las políticas económicas de los siguientes cinco presidentes no coincidieron con las de Cárdenas y socavaron las oportunidades de desarrollo de muchos de los beneficiarios de la reforma agraria, la distribución de la tierra se convirtió con Cárdenas en una fuerza política, una estrategia económica y un compromiso *necesario* de los Presidentes de México.

El gran impacto productivo que generó la distribución de tierra realizada por Cárdenas, ha sido ampliamente reconocido (Yates, 1981; Heath, 1990), y ofrece un fuerte (aunque fácilmente olvidado) argumento a favor de reformas agrarias radicales. El reparto creó las condiciones materiales y territoriales para las políticas desarrollistas de finales de mediados del siglo pasado. Junto con la expansión de la producción agrícola, se consolidó además un aparato corporativista rural encabezado por la Confederación Nacional Campesina. La extensa distribución de la tierra tuvo su correlato en la formación de una estructura corporativa y ambos elementos impactaron en las comunidades.

No tiene aquí sentido transitar por el laberinto de la legislación agraria durante este período (véase Mendieta y Núñez, 1969, para un análisis detallado de la legislación). Lo que está claro es que el *Código Agrario* de 1934 y su versión revisada de 1940, permitieron la distribución de grandes extensiones de tierra, abriendo las puertas de la reforma a numerosos agentes del mundo rural. Entre los cambios fundamentales impulsados por el nuevo marco legal estuvo una mayor centralización de las decisiones y la transformación de las Comisiones Agrarias en comisiones mixtas, un movimiento que en algunos casos disminuyó el poder de las facciones locales e incluso regionales. Otro aspecto central fue la eliminación del requisito de estatuto político-territorial para el reconocimiento del derecho a la tierra. Este cambio en particular dio pie a la formación de *nuevos centros de población* que transformaron profundamente la territorialidad de las comunidades campesinas e incluso la del Estado en general y produjo una gran expansión de la agricultura. Los nuevos centros de población implicaron una política territorial transformadora de la distribución del poder entre el centro y las regiones y dentro de estas últimas. En cuanto a la gestión administrativa de la distribución, la relación entre los gobernadores estatales y el Presidente fue también un tema interesante. Pese a que la distribución se centralizó, todas las peticiones tenían todavía que ser aprobadas por los gobernadores y, por tanto, la asignación de tierras dependía en gran medida de las circunstancias políticas locales. No obstante, mientras la maquinaria corporativista fue plenamente operativa, el Presidente controlaba los dos extremos del proceso de reparto: el de abajo, que operaba a través del control corporativo de las peticiones; y el superior, en cuanto a que la resolución final era suya (Walsh, 1984).⁹

⁹ El tiempo que transcurre entre las peticiones y las decisiones federales, y el hecho de que las elecciones locales y federales no coinciden con excepción de muy pocos casos, dio a la Reforma Agraria una flexibilidad temporal importante. Walsh (1984) calculó el tiempo transcurrido entre la petición de la tierra y posesión provisional otorgada por el gobernador en tres años y

Al tiempo que permitió la distribución masiva de tierra, la creación de nuevos centros de población implicó, además, una mayor marginación del programa autónomo zapatista, debido a la imposición del ejido y la corporación como los principales mecanismos para acceder a la tierra y organizar su uso (Manzanilla Schaffer, 2004: 615-616). Este proceso puede ser llamado ejidalización de las comunidades. Debido a que los ejidos se superponían a estructuras territoriales y sociales pre-existentes soportadas por comunidades de muy diverso tipo, la coexistencia de los órdenes ejidales y comunales podía dar lugar a diferentes formas de tensión. La formación de ejidos homogéneamente organizados y directamente relacionados con el partido gobernante supuso una política de intervención efectiva en el campo; sin embargo, en algunos casos fue utilizada estratégicamente por las comunidades.

El ejido impuso a los arreglos organizacionales previos una estructura limitada en cuyo ápice se encuentra la asamblea ejidal. Esta reúne únicamente a los ejidatarios y excluye a todos los demás miembros que pudieran tener acceso a la tierra a través de redes de parentesco o algún tipo de acuerdo colectivo fincado en reglas tácitas de reciprocidad. Cada dos años, las asambleas eligen a las autoridades internas: un comisario ejidal, un secretario, un tesorero, un comité de vigilancia y en algunos casos uno o más vocales. De particular importancia es el comisario, quien representa al ejido ante las diversas autoridades. Esta estructura, que se reprodujo en todos los ejidos del país, en algunos casos adoptaba la forma de un régimen caciquil de dominio interno, en donde un individuo o una familia controlaba, a veces violentamente, la tierra y a los habitantes de uno o varios ejidos. En regiones con importante población indígena, los cacicazgos fueron más comunes (Chiapas, Veracruz, Yucatán, Guerrero), lo que puede sugerir una relación estrecha entre la organización comunitaria y la prevalencia del control y explotación de esta parte de la población antes y después de la reforma (Warman, 2001: 102-103; Bartra, 1976).

Para el presente análisis, es relevante que la gran ola distributiva del cardenismo supuso un proceso de apropiación de la institucionalidad agraria por parte de

entre la concesión provisional y la confirmación presidencial en cinco años, y concluye que una sola petición se tardaba más de un período presidencial. Cualquiera que fueran las confrontaciones o relaciones entre presidente y gobernadores, únicamente durante el período de rápida industrialización (1940-1955) hubo discrepancias notorias entre las resoluciones de los gobernadores y las presidenciales (Walsh, 1984: 59). Sobre este asunto Warman, con base en un estudio del Centro de Investigaciones Agrarias, presenta datos distintos pero confirma la imagen general (Warman, 2001: 59-60).

las comunidades. Esto significó cambios de hecho en la normatividad impuesta por el *Código Agrario* y otras leyes (algo que se volvió evidente con la aplicación de la reforma de 1992, cuando los ejidos mostraron una gran heterogeneidad de arreglos internos que no se ajustaban al reglamento ejidal original). De hecho, la apropiación de la institucionalidad ejidal por parte de la comunidad no siempre condujo a la formación de cacicazgos. En algunos casos se utilizó la organización ejidal estratégicamente para contrarrestar o dividir a los poderes locales, mientras que en otros proporcionó la base para la formación de nuevas élites locales y, por tanto, estableció nuevos mecanismos de diferenciación social. En algunos casos, también la batalla institucional por la tierra fue una importante fuerza cohesiva para las comunidades (Oliver, 2003: 113-115).

Vale destacar las consecuencias territoriales del proceso de ejidalización. Estas se refieren a los mecanismos de fisión o división de las comunidades y el trastocamiento de las relaciones de subordinación territorial entre centros y localidades que podían haber constituido una misma unidad social. En cualquier caso, estos mecanismos dependieron del tipo específico de organización comunal (relaciones de parentesco, jerarquías, nivel de secularización de las relaciones entre los hogares, ritualidad, mestizaje, tipo de recursos y formas de producción, interacción entre las comunidades y otros actores locales y regionales), estructura que muestra una gran diversidad en México. Como se discutirá más adelante, es posible pensar que en algunos casos el proceso de formación de nuevas localidades, aunque formalmente organizado por el aparato de la reforma agraria, estuvo mediado por las comunidades que sin tener reconocimiento oficial decidían el lugar para nuevos asentamientos y facilitaban la permanencia de población excedente en los núcleos ya formados para garantizar la plena explotación de la tierra. En esta línea de argumentación se puede sostener también que la permanencia de familias sin derechos oficiales dentro de los ejidos permitía conservar una base de apoyo ante posibles confrontaciones con otros actores.

De manera esquemática se pueden vislumbrar tres grandes aspectos en el proceso de ejidalización de las comunidades rurales:

- a) Cambios en la organización social (jerarquías, relaciones horizontales de reciprocidad) por el establecimiento de la estructura ejidal.
- b) Cambios en los términos de adscripción, pertenencia e identidad, así como en los procesos de fisión (división) de las comunidades y la formación de nuevas localidades.

c) Transformaciones en la relación entre las comunidades y otros agentes rurales.

La ejidalización de las comunidades fue un proceso también acompañado de cambios en la producción de conocimiento sobre el México rural, transformaciones que coincidieron con la institucionalización de disciplinas académicas como la sociología rural y la antropología. En este sentido, el período de Cárdenas inauguró una omnipresente división entre un enfoque etnográfico de la comunidad preocupado especialmente por sus prácticas culturales (el problema del “indio”), y el enfoque sociólogo centrado en las “comunidades ejidales” (Hewitt de Alcántara, 1988: 176-7 [véase la nota 51]). Mientras que en el primer caso el Estado promovió un indigenismo orientado principalmente a integrar a la población indígena a la sociedad nacional a través de una eventual disolución de las diferencias étnicas (Warman, 1978: 15); en el otro, la corriente sociológica tendía a identificar acríticamente el orden ejidal con la comunidad.¹⁰ Para los sociólogos rurales, con marcadas actitudes desarrollistas, la reforma agraria parecía ser una fuerza que organizaba a una población rural aparentemente dispersa o desestructurada.¹¹ Esta división en la producción de conocimiento sobre la sociedad rural comenzó a cambiar desde la década de 1960, cuando la crisis productiva y el aumento de los conflictos sociales impulsaron una nueva conceptualización de los problemas agrarios, de los sujetos y de las ideas de desarrollo.

¹⁰ El desarrollo del indigenismo y sus contrapartes se presenta aquí necesariamente de forma esquemática. Arturo Warman, quien estuvo al frente del INI, ofrece una visión mucho más refinada en su trabajo publicado en la revista *Nexos* en 1978, titulado “Indios y naciones del indigenismo”.

¹¹ Un buen ejemplo de ello fue el estudio sobre las consecuencias sociales de la reforma agraria en tres “comunidades ejidales”, publicado al final del período “de oro” de la reforma por Mendieta y Núñez, asiduo comentarista de la reforma agraria y uno de los sociólogos rurales más influyentes. Curiosamente, después de revisar la distribución de la tierra, los ingresos, la educación e incluso las características físicas y psicológicas de la población que vivía en los ejidos, el trabajo no hace referencia alguna a cualquier aspecto relacionado con la estructura social o la organización comunal, a pesar de que en los tres casos, la comunidades estudiadas existían desde antes de la distribución de la tierra (Mendieta y Núñez, 1960).

La crisis de la Reforma Agraria (1970-1992)

A finales de la década de 1960, la Reforma Agraria mostraba signos de desgaste. La estructura jurídica y administrativa que la soportaba era incapaz de resolver, o manejar incluso, los problemas producidos por la falta de claridad en la definición de los derechos y en los procedimientos para la distribución de la tierra. Nuevas leyes estatutarias y reglamentos no eran acompañados por los recursos necesarios y fracasaban. Eran evidentes las contradicciones y los antagonismos entre las diferentes leyes e instituciones que afectaban la distribución de la tierra y el acceso a otros insumos, como el riego o el crédito. Entre los eruditos y los políticos, la percepción era que había una negación del “espíritu” de la Constitución que ayudaba a mantener una distribución desigual de la tierra. Así, en 1969, Lucio Mendieta sintetizaba los problemas del *Código Agrario* de la siguiente manera:

Sería demasiado largo enumerar sus deficiencias, pero las de mayor importancia son: tiene disposiciones anticonstitucionales, como las que se refieren a los certificados de inafectabilidad ganadera. Por otra parte, en sus estatutos no introduce las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución en materia de pequeña propiedad y certificados de inafectabilidad. Los procedimientos de restitución, dotación y creación de nuevos centros de población rural son excesivamente lentos. (...) El *Código Agrario* no va aparejado a un sistema de justicia eficaz que favorezca a los campesinos solicitantes o a los ejidatarios. No existen disposiciones para el eficaz dismantelamiento de los grandes latifundios, algo que contradice el Artículo 27. La mayor parte de los ejidos no están divididos ni existen títulos de las parcelas, situación que origina frecuentes abusos por parte de Comisariados Ejidales. Los artículos que rigen los fondos comunes de los ejidos para formar un Fondo nacional son anticonstitucionales porque privan a los ejidatarios de algo que les pertenece sólo a ellos. La burocracia a cargo de la aplicación de las leyes agrarias goza de absoluta impunidad, debido a la falta de un sistema eficaz de sanciones y responsabilidades (Mendieta y Núñez, 1969: 18-19).

Desde la década de 1960, el número de estudios económicos sobre la producción rural aumentó considerablemente (ver Martínez 1981, para una amplia bibliografía comentada). Los estudios de caso, así como aquellos sobre el uso de tecnología, sobre la distribución del crédito, sobre la productividad relativa de diferentes unidades de producción, sobre las razones del fracaso o el éxito de las iniciativas gubernamentales, fueron desarrollados intensamente al tiempo

que la preocupación por el futuro de la base productiva del país aumentaba. Además, los críticos dejaban claro que la distribución de la tierra había servido para impulsar el desarrollo urbano-industrial, pero también coadyudaba a mantener el *status quo* en el campo en lugar de transformarlo (Markiewicz, 1993). La política gubernamental era, sin embargo, errática. En 1970, treinta y cinco años después de la formación de algunos ejidos colectivos, pero bajo diferentes circunstancias económicas y políticas, el gobierno del presidente Echeverría (1970-1976) trató de reimpulsar la colectivización. Este cambio puso de relieve las fisuras dentro del gobierno y las acciones incoherentes y contradictorias de sus distintos órganos: mientras que la Secretaría de la Reforma Agraria observaba una política colectivista, los órganos financieros y técnicos a cargo de promover la productividad, tales como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tendían a apoyar y trabajar sólo con los productores particulares. De acuerdo con Warman, este esfuerzo colectivizador se topó además con la resistencia de los campesinos que lo veían como un avance de la estatización y la burocratización; en suma, como una expropiación (Warman, 2001: 57). Sea como fuere, esta colectivización tardía, aunque firmemente asentada en la reforma agraria, fue un completo fracaso: al final de la presidencia de Echeverría (1976) sólo había 633 ejidos colectivos, a pesar de que cuatro mil se habían colectivizado “en papel” (Montes de Oca, 1981: 605).

En la década de 1960 se incrementaron los conflictos relacionados con la demanda de tierra en las zonas rurales. La persistencia de fuertes divisiones sociales y la marginación de grandes sectores de la población rural de los beneficios del desarrollo nacional durante gran parte de las décadas de 1970 y 1980, también fueron aspectos clave de la ola de movilización social en el campo. Además, se comenzaron a plantear dudas sobre el programa agrario, el carácter desigual del desarrollo del país y los agentes o sujetos de tal desarrollo. En el análisis social, el problema del indio comenzó a retroceder frente a perspectivas que describían el contexto rural en términos de diferenciación social, poder y explotación.¹² Pasa-do el período de modernización política y rápido crecimiento económico, y en tanto aumentaban las contradicciones de un modelo de desarrollo que favorecía la expansión del capitalismo en las zonas rurales pero no impulsaba la plena transformación de las condiciones de vida de grandes sectores de su población, “el campesino” comenzó a ser el centro del debate académico y político.

¹² El libro de R. Pozas I. Pozas de Horcasitas (1971, *Los indios en las clases sociales de México, México, Siglo XXI*) y las obras completas editadas por Mendizábal (1968) son un buen ejemplo de esta transición y del creciente interés en la diferenciación y estratificación social.

Una mirada liberal a la crisis

Aparte de los debates sobre el carácter y el papel de los campesinos en la sociedad moderna y de la gran cantidad de estudios sobre los problemas rurales locales y regionales, a finales de la década de 1970 el gobierno de México comisionó a Lamartine Yates, de la Universidad de California, para desarrollar un amplio estudio sobre la situación agrícola del país. El resultado de esta investigación fue un extenso libro, *El campo mexicano*, el cual fue más tarde publicado en lengua inglesa con algunas variantes bajo el título de *Mexico's Agricultural Dilemma*.

Como el estudio de la CEPAL, *El campo mexicano* ofreció un amplio panorama de la crisis rural. Y lo más importante, también realizó sugerencias que se convertirían en el eje de las políticas neoliberales de desarrollo rural que aún hoy se mantienen en México. Con respecto a la reforma agraria, Yates argumentó que las posibilidades para continuar el reparto se habían casi extinguido y que se imponía el ajuste como vía para salir de la crisis. Este ajuste tenía que incluir el abandono de la “obsesión psicológica” por la autosuficiencia en la producción de alimentos, la cual promovía la producción de cereales (maíz y frijol) aunque también de productos como la caña de azúcar y el henequén, que causaban un gran daño a todo el sistema productivo, porque desplazaban productos más competitivos en los mercados internacionales (frutas, verduras y carne) (Yates, 1978: 272). Si bien no lo mencionaba directamente, el apuntalamiento ideológico de la reorganización del régimen internacional de alimentos, que incluyó una re-funcionalización de la agricultura tropical y la protección de la agricultura desarrollada y subsidiada, es evidente en el análisis de Yates.

En la versión inglesa de su estudio, Yates limitó el debate sobre la crisis rural mexicana (y quizá de toda la agricultura del Tercer Mundo, ver Petras, 2003) a un problema de decisión entre dos extremos: impulsar una política liberal racional, o mantener una dudosa e irracional política social; motivar a los más capaces, avanzados y aventureros, o dar limosna a los minusválidos e incapaces de buscar el progreso; fomentar la aplicación de tecnologías avanzadas y del conocimiento técnico y permitir su difusión desde el norte hacia todo el país, o continuar apoyando las formas tradicionales y no-eficientes de trabajo del centro-sur; buscar una autosuficiencia ilusoria en la producción de alimentos, o explorar las ventajas de los mercados internacionales. Dentro de este esquema, de especial importancia fueron sus observaciones sobre el régimen de propiedad. A pesar de elogiar la reforma agraria, Yates afirmó que los ejidos, particularmente aquellos con tierras comunales, eran un obstáculo para la productividad y el espíritu empresarial; por tanto, la política debía avanzar hacia el modelo *farmer* (pequeño empresario

agrícola o granjero).¹³ Mencionó, además, lo que él consideraba eran los *problemas de diseño* del ejido (Yates 1978: 560-575):

1. La estructura ejidal deriva de un modelo estático de la sociedad como el de la España medieval (idea mítica que durante años fue moneda corriente).
2. Los reformadores sobrestimaron la capacidad humana para tomar decisiones colectivas (democracia local) y subestimaron el hecho de que el sistema tendiera al caciquismo.
3. El régimen consideraba a los ejidatarios como peones idénticos entre sí y suponía que la sociedad rural es homogénea.
4. En el caso de los pastos y otros bienes en común, la *tragedia de los comunes* de Hardin conducía a agotar los recursos disponibles.
5. El ejido representaba un concepto de ordenación del territorio, pero hasta 1975 no se asociaba con ninguna actividad de planificación de la economía doméstica o de planeación familiar.
6. La reforma agraria había creado un sistema dual, injusto tanto para los propietarios privados (que supuestamente carecían de apoyo gubernamental y de seguridad) como para los ejidatarios (que, una vez más, supuestamente, recibían apoyo gubernamental pero estaban constreñidos y no eran verdaderos propietarios de sus tierras). Esto también daba lugar a problemas para el desarrollo de una política agrícola nacional clara y equitativa.
7. El ejido impedía el desarrollo de la creatividad individual, de la iniciativa y de la inversión en tierras por falta de una tenencia segura.

Más tarde, en un apartado que ponía de manifiesto la creciente fuerza del pensamiento liberal para hacer frente a las cuestiones de propiedad y la agricultura y que con el tiempo dominaría la política mundial, Yates analizaba las dos alternativas entre las cuales, desde su punto de vista, se habían movido las políticas agrarias desde los años de Cárdenas:

- a) La deconstrucción de los ejidos mediante la concesión de dominio total a los campesinos, a fin de que el mercado llevara a cabo una redistribución virtuosa de los recursos (aunque manteniendo los límites en el número de hectáreas).

¹³ El “agricultor” tiene, según Lamartine Yates, ventajas también semánticas y científicas: se trata de una palabra neutra que se puede aplicar a todos los productores sin distinción y sin apelar a la estratificación social (Yates 1978: 500).

- b) La colectivización de los ejidos. Después de considerar las ventajas y desventajas de la gestión colectiva de los ejidos (1981: 168-170) concluyó que:

En las circunstancias concretas de un país como México, con respecto a lo que podrían ser beneficios teóricos, las desventajas [de] la colectivización superan las ganancias. Por otra parte, el conocimiento técnico es sólo una parte de lo que permite la eficiencia empresarial. Igualmente importante es la motivación de los seres humanos para mostrar iniciativa, interés por la innovación, por correr riesgos para combinar los insumos de manera que se maximicen los beneficios y recompensas personales. La organización colectiva de la producción presta poca atención a la motivación humana y prefiere la disciplina a la iniciativa (Yates 1981:179).¹⁴

Los campesinos a debate

En la década de 1970, para aquellos preocupados por la crítica situación del campo, el rol de la comunidad fue subsumido en la discusión sobre el estatus de clase de los productores rurales y de su economía y, en consecuencia, su relación con la sociedad capitalista. Se buscaron alternativas teóricas en un trasfondo en el que la expansión del capitalismo ofrecía el retrato de un colonialismo interno dominado por un “sector industrial desarrollado, concentrado en las zonas urbanas que absorben la población rural en el sector ‘participante’ del desarrollo” (González Casanova, 1968: 193-194; 1965). Entonces, se abrieron paso argumentos sobre la dependencia, las formas desiguales de intercambio y la articulación estructural.

A principios de 1980, el Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) publicó un amplio estudio sobre la situación de la agricultura en varios países de América Latina. Para el caso de México, se encontró que los productores rurales (ejidales y privados) podían agruparse en ocho clases diferentes. La mitad de esas clases fueron catalogadas como “campesinos” (infra-subsistencia,

¹⁴ Vale la pena recordar las palabras de otro liberal de la política agraria de la época, Jacques Chonchol (1970: 160): “at one time head of land reform in Chilean Christin Democrat government of Eduardo Frei: ‘... a certain proportion of the new peasant beneficiaries will probably fail as entrepreneurs.... It will be necessary to caution against too rigid an institutional link between the beneficiaries and the land so that *natural selection* may take place later which will allow those who fail to be eliminated” (Bernstein, 2002: 439, énfasis suyo).

subsistencia, estacionarios, productores de excedentes), y las otras cuatro como “productores empresariales” (de transición, pequeños, medianos y grandes). Dentro de la categoría “campesino” (definida principalmente por el uso de mano de obra familiar), 55.6% de las unidades de producción se consideraron de infra-subsistencia, lo que significa que sólo eran capaces de producir sus necesidades alimentarias mínimas; 16.2% eran de subsistencia, es decir, capaces de cubrir sus necesidades alimentarias mínimas y remplazar los insumos consumidos durante cada ciclo productivo. En total, 71.8% de los “campesinos” no podía capitalizar su trabajo y no contribuía con sus tierras a la producción agrícola nacional. También dentro de esta categoría, 6.5% se refería a productores estacionarios que llevaban a cabo una reproducción simple, y 8.2% generaba algún superávit. En cuanto a las otras unidades estudiadas, es decir, las no-campesinas, 11.6% se componía de unidades en “transición” que utilizaban mano de obra remunerada y sólo 0.3% correspondía a la categoría de “grandes empresas” (en Bartra y Otero, 1988: 26-27). En cuanto a la distribución territorial de estas categorías, el reporte de CEPAL señalaba la brecha entre Norte-Pacífico, con el menor porcentaje de productores de subsistencia e infra-subsistencia y los mayores porcentajes de empresarios, y el resto del país con variadas composiciones. El sur, en particular, poseía la mayor cantidad de campesinos en la subsistencia e infra subsistencia.

El informe de la CEPAL abonó a una discusión de la reforma agraria y el sector ejidal, mostrando un campo político y económico diferenciado, donde se expresaban con más detalle las formas de dominación y explotación, y donde los campesinos se convertían en una clase social reconocible. Por ejemplo, se sugirió que la distribución de la tierra implicó la formación de

una nueva clase regional superior cuya preminencia no procedía de la propiedad de la tierra (aunque a menudo sus miembros eran dueños de propiedades privadas), sino del control monopólico del comercio, la distribución de bienes y servicios, y el poder político regional (Hewitt de Alcántara, 1984: 128 citando a Stavenhagen, 1970: 261).

El reconocimiento de la limitada repercusión de la reforma agraria en la producción de equidad social, así como los procesos de formación de clase en las zonas rurales, dieron un impulso importante al análisis de los mecanismos de reproducción del campesinado y de su papel transformador de las relaciones de clase; o en otros términos, en la evolución social. Aunque su existencia como

clase social se estableció con firmeza, la caracterización del campesinado fue objeto de un largo y ríspido debate que giró en torno a dos visiones: una que preveía la extinción inevitable de los campesinos como clase social, y otra que sostenía la idea de que los campesinos, aunque dominados, eran capaces de adaptarse a las transformaciones inducidas por la expansión capitalista sin perder su carácter de clase. Estas posiciones contrastantes, que incluían divisiones políticas e ideológicas, llegaron a conocerse como campesinistas y descampesinistas (Hewitt de Alcántara, 1988: 156-157).¹⁵

De manera muy sintética, desde el punto de vista descampesinista, el campesino se reproduce a través de relaciones de producción precapitalistas. Conforman una clase ajena a las relaciones capitalistas, pero “articulada” al sistema mediante la provisión de mano de obra en el imparable proceso de proletarización. En el corazón de las relaciones de producción que involucran al campesino, se encontraban la unidad familiar y el uso libre de la fuerza de trabajo de sus miembros. Las unidades de producción campesina deben competir en condiciones cada vez más desfavorables con los capitalistas y esta situación lleva a su extinción inevitable (Bartra, 1974; Bartra y Otero, 1988: 35).

Por el contrario, la perspectiva campesinista sugería que los mecanismos de cooperación que caracterizan a las comunidades campesinas y que trascienden la unidad doméstica, no fueron completamente destruidos por el avance del capitalismo en la agricultura. Desde esta perspectiva, las estrategias campesinas productivas ofrecen una alternativa real al modelo de desarrollo desigual y de explotación que la expansión del capitalismo representa (Esteva, 1980; Warman, 1988).¹⁶

En su estudio sobre el campesinado, Otero (2004: 27-58) ofrece una retrospectiva crítica del debate entre campesinistas y descampesinistas. Define el problema en términos de dos tipos de reduccionismo: proletarismo y campesinismo. El primero entendía la formación de clases en el campo como el resultado de las luchas por el salario, y el segundo por las demandas de acceso a la tierra. El aspecto reduccionista de ambas posturas consistía en sostener que es posible derivar el comportamiento político de la posición de clase, suponer “[...] que cada

¹⁵ Este debate presentado aquí de forma algo maniquea, involucró a muchos intelectuales de posturas intermedias. Continúa hoy aún en las discusiones de la “Vía Campesina” o los análisis sobre la continuidad del campesinado de J. Boltvinik.

¹⁶ La tesis de que los campesinos representan una alternativa eficaz a las relaciones capitalistas sociales y la crisis medioambiental en la agricultura, sigue nutriendo movimientos políticos críticos como la “Vía Campesina”.

modo de explotación tiene su correspondiente conjunto de intereses materiales y que, al menos como tendencia, tales intereses determinarían el programa de las luchas políticas” (Otero, 2004: 33).

A pesar de la relevancia del enfoque estructural para entender las deficiencias de la reforma agraria y la situación crítica de gran parte de la población rural, se otorgaba poca consideración a las formas locales de organización social. Como se señala en Kearny (1996), la semántica de la clase o de la productividad muy fácilmente diluye los complejos lazos comunales verticales y horizontales que estructuran las relaciones de producción de amplios sectores de la población rural (Kearny, 1996: 96-97).¹⁷ El punto crítico es que el enfoque de diferenciación de clase, aun cuando se considere estructuralmente adecuado y útil para retratar las condiciones generales de la producción agrícola en México, genera una visión en la que las clases claramente diferenciadas enfrentan las condiciones de explotación que impone el capital de forma aislada. Así, y a pesar de su crítica al reduccionismo clasista, Otero luego de re-afirmar el diagnóstico estructuralista de la década de 1980 sobre el proceso de proletarianización, o si se prefiere semiproletarianización de los campesinos, afirma:

Así, la situación con mayor crecimiento dinámico de la estructura social agraria es el de las familias semiproletarias. Las nuevas luchas agrarias y el carácter de las organizaciones de clase que surgirán, han de depender de qué dirección política siga este semiproletariado. Y esto dependerá, a su vez, de las culturas y formas específicas de intervención estatal en cada región, así como del tipo de liderazgo de sus representantes (Otero, 2004: 112).

Es posible hacer tres observaciones en el contexto de la perspectiva política de clase. La primera se refiere a la relación entre la diferenciación teórica entre clases y su expresión en el marco más amplio y complejo de relaciones que sostienen la reproducción social en el campo. La distinción tiene por base fundamental la cantidad de tierra por trabajador, ya que el salario y la relativa orientación hacia el mercado o la subsistencia, elementos que complementan el modelo, son en general inferidos. Aun así, con esas tres variables se puede construir una visión general pero singularmente abstracta y totalizante como se reconoce en general. La articulación efectiva de esos componentes se despliega

¹⁷ Para una crítica de las aproximaciones centradas en el problema de la clase, ver la referencia de Kearney (1996) al trabajo de Cook and Binford (1990), *Obliging Need: Rural Petty Industry in Mexican Capitalism*, Austin, University of Texas Press.

de una manera sumamente heterogénea, y para su tratamiento Otero apela a lo que llama cultura regional, que en una breve digresión se define como marco de significado *relativamente independiente* de la estructura social o, aún de la interacción, aunque, a la manera clásica, es en realidad un resultado de las condiciones materiales de producción y reproducción en que se desarrolla (*ibid.*: 49-51). Más adelante habrá ocasión de revisar con más detenimiento esta perspectiva; lo relevante en este momento es que para Otero la cultura se sintetiza en las diversas trayectorias políticas de formación de clase que emergen de las luchas ya sea por la tierra o por el salario, según los actores de clase y regiones se trate, pero en las que el estado constituye el horizonte frente al cual se organizan. Esto supone que la interacción entre las clases queda en un plano distinto.

Un segundo punto es que la periodización desarrollada brevemente antes, acredita que la institución y la administración de la propiedad de la tierra es una forma destacada y violenta de intervención estatal. Sin embargo, es preciso notar que el derecho hace una oferta que no es siempre rechazada *en principio o en todas sus consecuencias*. Gracias a que algunos pueblos y comunidades conservaban registros de la Colonia y aún anteriores a la Conquista, se distribuyó alrededor del veinte por ciento de la tierra, lo cual, sin ser representativo, es un porcentaje importante. Más adelante, la formación de ejidos permitió al Estado procesar el conflicto en el campo durante varias décadas. Algunos autores coinciden en que los ejidos llegaron a ser y tal vez continúan siendo un escudo para trabajadores agrícolas y campesinos (Toledo y Alcorn, 1998; Otero, 2004: 173-175). Independientemente del nivel de éxito y la forma que adoptó, la bandera agrarista fue un mecanismo de formación de liderazgo en todo el país, aunque aquí vale destacar el caso de Adalberto Tejeda en la Huasteca, durante cuyo período como gobernador de Veracruz se gestionó la formación de 15 ejidos que fueron reconocidos en 1934, año en que se abrió, a nivel legal y con cierta radicalidad, la ejidalización en el municipio de Ixhuatlán de Madero, donde se localizan los núcleos objeto del estudio de caso que se desarrolla más adelante. Entre 1935 y 2008 se formaron 44 ejidos en este municipio, aunque es preciso notar que de 1970 en adelante, los ejidos constituidos fueron cada vez más pequeños y fraccionados (Rubio y Valle, 2010: 504-509). En suma, un segundo planteamiento tiene que ver con que, aún desde la perspectiva de formación de clase, el tema del régimen de propiedad es crucial.

La tercera observación deriva de las dos anteriores y se refiere al hecho de que en la práctica las clases se entrelazan entre sí y con otras diferenciaciones

y articulaciones. Como se discutirá en el estudio de caso, en los ejidos y en estructuras cuya delimitación es más difusa como las comunidades-campesinos, semiproletarios y pequeños empresarios agrícolas, coexisten y se fusionan, de forma tal que es preciso añadir otras variables como la vocación de la tierra y la forma de explotación como criterios que permitan observar los procesos de integración y diferenciación.

Así, desde mediados de 1980, los antropólogos abordaron el estudio de las comunidades (en particular indígenas) a partir de una perspectiva que se alejaba del folclorismo que había dominado las décadas anteriores y comenzaron a señalar la relevancia del estudio de las estructuras comunales.¹⁸ Esta corriente dejaba en claro que los campesinos no vivían en un atávico mundo pre-capitalista, y no estaban desapareciendo de la escena nacional, cada vez más problemática política y económicamente.

Fue dentro de la posición campesinista que surgió el esfuerzo por vincular el debate de clase con el problema de la organización comunal de los campesinos. Este fue el caso en particular de Arturo Warman, quien sostuvo que las comunidades agrarias eran la forma específica de organización del campesinado como clase, y que la permanencia de las unidades campesinas de producción depende a su vez de la permanencia de las comunidades agrarias (1985: 12). La comunidad, en su enfoque, no sólo gira en torno al problema de la tierra, sino que organiza y promueve el acceso a los recursos, la autonomía y el intercambio horizontal, que son esenciales para la reproducción de los campesinos. Las comunidades proveen también de mecanismos de resistencia que permiten evitar o limitar la explotación. Según Warman, la reforma agraria a través del ejido atentaba contra la autonomía comunal mediante la imposición desde arriba de una estructura organizativa vertical y limitada. Por otra parte, la imposición de la colectivización, o su contrario, la fragmentación de las tierras ejidales en parcelas individuales como las únicas alternativas para la organización de la producción en los ejidos, socavaba la flexibilidad y la diversidad de estrategias de manejo de los recursos colectivos (1985: 14-17).

El problema de la autonomía comunal se convertiría en una cuestión importante después de la enmienda de 1992. No obstante, en este período de debate sobre el campesinado, resultó fundamental la postura de Warman, quien recalca el proceso de adaptación de las instituciones comunales. Así como el avance del capitalismo y las relaciones modernas de propiedad impuestas desde afuera

¹⁸ “Casi todo lo que sabemos sobre el intercambio horizontal en el campesinado se deriva del estudio de grupos tradiciones o indígenas” (Warman, 1988: 16).

y desde arriba, marginaba o incluso diluía algunas instituciones tradicionales, otras se reforzaron debido a la presión externa. Esas instituciones perdurables podían superar las formas modernas de organización territorial como el municipio y el ejido. En una afirmación crítica frente al predominio de los enfoques estructurales, Warman también alegó que:

Pese a la variedad de respuestas respecto a las organizaciones tradicionales, la transformación de éstas fue, por regla general, interpretada como un debilitamiento de las relaciones horizontales de redistribución, como una evidencia de la agonía del campesinado como grupo social precapitalista (1985: 17).

La ola de descontento social en el campo y la continua demanda de distribución de la tierra por parte de los campesinos, a pesar de la expansión de las ciudades e industrias, sugiere que la agonía de esta clase fue más el resultado de las teorías que enmarcan los debates sobre la crisis social y económica rural. Incluso en los casos en que las relaciones modernas, como el trabajo asalariado, habían hecho un hueco en las instituciones comunales, aparentemente tradicionales, se daban procesos de adaptación que debían de alguna forma explicarse o entenderse. Una vez más fue Warman quien apuntó a la complejidad de este asunto, debido a que una cuestión central era que las comunidades pueden, y en muchos casos así era efectivamente, convertirse en el *espacio para la reproducción de las relaciones capitalistas y las formas de explotación debido a que el control comunal tiende a ser fragmentario y limitado*:

También sucede que las acciones colectivas aisladas y desconectadas de un proyecto coordinado revierten su dirección y se convierten en canales que favorecen la transferencia de recursos y de valor hacia otros sectores, sin incidir efectivamente en la redistribución entre los campesinos. Muchas de las convocatorias para aportar trabajo gratuito en obras públicas, con efectos regresivos sobre la distribución del ingreso, tienen ese efecto. También las acciones de organizaciones tradicionales pueden quedar sujetas a este cambio de orientación y servir como legitimadores de la explotación (Warman, 1985: 18).

Las décadas de 1970 y 1980 fueron de intensa movilización política, que en muchos casos dio lugar a violentos disturbios y a la intervención de las fuerzas armadas en diferentes partes del país. Este período vio la formación de numerosas organizaciones nacionales y regionales que lucharon por la tierra. Estas

organizaciones se constituyeron de forma horizontal y autónoma alejadas del modelo corporativo y centralizado impuesto por la reforma agraria (Hernández, 1992: 99-100). Para el caso de la región Huasteca, el trabajo de Schryer (1987) mostró la articulación, a veces conflictiva, entre las comunidades y las organizaciones políticas y la reproducción de relaciones de explotación dentro de las comunidades ejidalizadas. Debido a que los ejidos proporcionaban un espacio para la organización de la lucha campesina, fueron sujetos a procesos de división interna y sufrían el enfrentamiento entre facciones y entre viejas y nuevas formas de liderazgo. Así pues, la capacidad del ejido de organizar, unir y representar a los campesinos, incluso formalmente, mermaba. Procesos similares fueron el resultado de políticas gubernamentales dirigidas a los productores individuales, en vez de a la colectividad de los ejidatarios que marginaron y debilitaron a la institución ejidal.

La comunidad campesina en el proceso de modernización rural en México

Desde el comienzo de la Revolución, el Plan de Ayala (1911) enarbolado por el ejército comandado por Emiliano Zapata vislumbró y defendió un proyecto agrario cuya base era la comunidad. El Plan no sólo incluía el “principio” de la restitución de tierras, sino que hizo el primer llamado a la expropiación y la redistribución de la tierra entre los campesinos desposeídos. Se contemplaba, además, la formación de tribunales especiales para tratar el problema agrario que emergía con la Revolución. Zapata encabezó un movimiento que a través de su propia práctica organizativa construyó un proyecto coherente, que transformó el problema de la tierra en algo más que en una reforma a la propiedad. En este proyecto se formuló un discurso en torno a la comunidad, en tanto las leyes zapatistas fueron el resultado de un esfuerzo colectivo. El programa era más que una fantasía romántica o literaria, pues emergía de la exitosa distribución de las tierras que el Ejército del Sur llevaba a cabo en las localidades y pueblos bajo su control. El Plan de Ayala era la expresión efectiva de la persistencia de un modelo campesino y social que durante gran parte del siglo diecinueve había sido sistemáticamente atacado por los poderes regionales y nacionales.

La relación de identidad entre campesinos y ejército y su capacidad para ordenar, al menos localmente, la redistribución de la tierra y las actividades productivas, fueron elementos que permitieron la creación de un proyecto político agrarista comandado por comunidades democráticamente organizadas

que no sólo eran titulares de la tierra, eran también unidades políticas de base (Warman, 1988: 327). La defensa de la autonomía local fue esencial para la concepción de la propiedad y para toda la práctica social de los zapatistas. Esto continua siendo fundamental en la política mexicana y en los debates sobre las alternativas a la crisis rural en gran parte del mundo en desarrollo (Kay, 2006; Petras, 2003).¹⁹

El zapatismo dio presencia discursiva y material a la comunidad campesina. Ni la mítica corporación indígena, ni el mísero peón de hacienda. El zapatismo demostró que la comunidad campesina existe a través de su peculiar organización, de su capacidad de ordenar el uso de la tierra, de sus estructuras verticales y horizontales, de su identidad centrada en la producción agrícola campesina frente a otros agentes rurales. A esta presencia, la reforma agraria la vistió de ejido y la colmó de corporativismo, en algunos casos trató de emularla mediante colectivizaciones forzadas o exorcizarla a través de folklorismos aislacionistas. La comunidad campesina ha sido perseguida y recreada, vilipendiada y exaltada, buscada y encontrada muchas veces.

El debate campesinista, centrado en el carácter de clase de los productores rurales, reconocía, aunque al mismo tiempo evadía, el hecho de que varias de las categorías de clase que encontraba en el campo, campesinos, semi-proletarios, pequeños y hasta medianos agricultores, en muchos casos se integraban en comunidades. El término “comunidad” se utiliza de manera amplia en la política y la literatura académica, por lo que siempre requiere cierta delimitación. En el presente trabajo, las comunidades se refieren a organizaciones locales compuestas por unidades domésticas vinculadas por relaciones de parentesco, producción, conocimiento y costumbres. Esta perspectiva se nutre del debate antropológico sobre la estructura comunitaria entre los pueblos indígenas, debate que gira en torno a la idea de que las comunidades se estructuran sobre los ejes de la tierra, el ritual y las redes de parentesco; y que a lo largo de estos ejes, las relaciones verticales y horizontales permiten la reproducción y el cambio (Valle, 2003). La comunidad se abre en el espacio de la cotidianeidad

¹⁹ Ideológicamente, el enfoque del empoderamiento local también coincidía con la crítica comunista a la centralización política y la imposición de la propiedad privada. Dicha crítica se desarrolló durante el siglo diecinueve y fue expuesta de manera sucinta por Marx y Engels en el *Manifiesto Comunista* (1845). Sin embargo, como lo señala Warman a diferencia del proyecto socialista para los zapatistas, “(...) El gobierno fue concebido como instrumento de opresión, porque su centralismo, su control por una casta profesional separada del pueblo, y su naturaleza represiva y expropiatoria, era una camisa de fuerza para la revolución. El problema de la revolución no fue la captura de gobierno, sino su disolución” (Warman, 1988: 333).

y el hábito, procura seguridad ontológica para sus miembros y, por tanto, constituye una parte importante de su identidad como personas. Se trata aquí de comunidades campesinas, lo que significa que sus miembros obtienen parte o la totalidad de sus ingresos de la agricultura y, por ello muchos de sus problemas están relacionados con el acceso a la tierra.

Actualmente, con el fin de garantizar su reproducción, las unidades domésticas que forman parte de la comunidad participan en otras actividades, tales como la migración estacional y el trabajo asalariado. Por tal motivo, su carácter campesino no se considera absoluto en el sentido de que de él sea posible derivar todas las demás características sociales del grupo, tales como la organización política o la territorialidad, ni aún una conciencia de clase en particular. Esta postura, entonces, no se inscribe en el ámbito de una teoría general del capitalismo o de la formación política de clases, ni trata de vislumbrar mediante ecuaciones más o menos refinadas el futuro de algún sujeto históricamente trascendente, lo que no implica que los problemas de la reproducción material no se consideren relevantes en todo análisis sobre la comunidad. En todo caso, se toma como precedente en este sentido, el planteamiento de que

La comunidad agraria aparece, independientemente de su formalización, como una instancia *representativa* de la clase en momentos de crisis, cuando las dispersas y fragmentadas organizaciones formales han sido rebasadas y la existencia del grupo se encuentra amenazada (Warman, 1985: 18).

La comunidad se puede problematizar en términos de la distinción sociológica clásica entre “comunidad” y “sociedad”. Esta distinción sugiere que la “comunidad” se refiere a una forma de socialización en la que los sujetos, debido a su origen común, proximidad local o convicciones axiológicas compartidas, llegan a tal grado de consenso que pueden equiparar sus criterios de evaluación.²⁰ “Sociedad” se refiere a esferas de socialización en las que los sujetos llegan a acuerdos sobre la base de consideraciones racionales *ajustadas a fines*, con el objeto de aumentar los beneficios individuales recíprocos (Honneth, 1999: 10).

²⁰ De ahí que existe una percepción general de que las comunidades cuentan con importantes niveles de “capital social”. “Social capital consists of the networks, norms, relationships, values and informal sanctions that shape the quantity and co-operative quality of a society’s social interactions” (Performance and Innovation Unit, 2002: 5). Las comunidades, sin embargo, presentan características que pueden no estar relacionadas con la confianza, que es fundamental para la constitución del capital social. En particular, el problema de las jerarquías parece ser ajeno a esa idea.

La distinción entre comunidad y sociedad se ha referido también al contraste entre mecanismos tradicionales (basados en la identidad) y modernos (basados en el contrato) de integración social, uno de cuyos corolarios es que el capitalismo debilita de forma sistemática los vínculos comunitarios, lo que a su vez puede relacionarse con la postura descampesinista que se reseñó brevemente en la primera sección de este trabajo. En lo que puede parecer una cadena axiomática cada vez más abstracta, la contraposición entre formas de integración tradicionales y contractuales puede llevar a su vez a reformular el asunto en términos de formas pre-rationales y racionales de asociación (Honneth, 1999: 7), de donde hace falta sólo un suspiro para concluir que existe un nexo de identidad entre propiedad privada y sociedad, y otro entre propiedad común y comunidad. A pesar de lo que pudiera aparentar, la postura sociológica no es excluyente, es decir, las personas pueden participar, y de hecho lo hacen, tanto de la comunidad como de la sociedad y aquí radica, desde el punto de vista que se busca desarrollar, su mayor valor: no se trata de que los campesinos vivan siempre y sólo en comunidad y en su paso a la sociedad dejen de ser campesinos, sino que existe la posibilidad de que se desenvuelvan en ambos planos.

Producción, ritual y parentesco proporcionan una aproximación a la naturaleza territorial de las comunidades que permite construir una distinción clara entre los límites territoriales, asociados al régimen de propiedad (el ejido), y el límite de las propias comunidades. Una compleja noción del espacio comunitario se produce por la confluencia de las prácticas rituales que demarcan la geografía simbólica que integra a miembros que pueden estar efectivamente separados por límites administrativos-territoriales o de propiedad. Las redes de parentesco son también mecanismos que juntan y separan. El acceso y uso de la tierra y las relaciones de producción sustentan el tercer componente que define la extensión de la comunidad. Una combinación de regímenes de propiedad y mecanismos basados en convicciones axiológicas compartidas definen el espacio productivo de la comunidad en contextos de diversidad geográfica y de conflictos con agentes externos. Así pues, las dimensiones que componen el territorio de una comunidad constituyen un “espacio social” compuesto por espacios de producción, reproducción y representación (Lefebvre, 2005). Esta noción contiene (tal vez en formas contradictorias o conflictivas) los órdenes territoriales impuestos por el Estado y otros agentes, pero no se limita a ellos.²¹

²¹ “Social space contains –and assigns (more or less) appropriate places to– (1) the *social relations of reproduction*, i.e. the bio-physiological relations between the sexes and between age groups, along with the specific organization of the family; and (2) the *relations of production* i.e.

En términos abstractos, los reglamentos de propiedad son impuestos por el Estado, pero se materializan en relaciones de producción limitadas por las particularidades de la base de recursos y por estilos institucionales específicos que definen el acceso a la tierra.²² Así, la relación entre la comunidad y las leyes de propiedad es una fuente permanente de conflicto. Los pensadores liberales y los estructuralistas sugieren que el control colectivo de la propiedad es naturalmente sustituido por la explotación privada (Field, 1989). Si esto no es el caso, con pocas excepciones, la resistencia de formas colectivas de propiedad parece ser sostenida artificialmente por facciones o por el Estado; por lo tanto, se ve como obstáculo relevante para el aumento de la riqueza colectiva (utilidad) o el progreso.²³ En estos casos, la intervención en las normas de la propiedad con el fin de imponer la privatización y la individualización, es una política aceptada, y la reforma del ejido fue un ejemplo de ello (Mendes, 2005; Banco Mundial, 2003; OCDE, 2007). Las posturas críticas, por el contrario, tienden a esperar que la imposición de formas privadas de propiedad debilite los lazos comunales. Desde esta perspectiva, las comunidades sólo pueden sobrevivir a través de procesos de exclusión o de revuelta focalizados en el control colectivo de los recursos.

La naturaleza de los campesinos y la comunidad ha dado lugar a un largo debate donde se advierten enfoques esencialistas, o atávicos incluso, que reducen a los campesinos a una especie de sujeto pre-capitalista con una conexión primordial, pre-racional, con la tierra. En la literatura también se ha señalado al concepto mismo de campesino como una construcción moderna dirigida a convertir a grupos y pueblos en objeto de manipulación política (Kearney, 1996). La Reforma Agraria con sus “hijos predilectos” hace eco de esto y obliga a afirmar que la persistencia de las comunidades campesinas no es el resultado

the division of labour and its organization in the form of hierarchical social functions. These two sets of relations, production and reproduction, are inextricably bound up with one another (...) Yet social space must discriminate between the two –not always successfully, be it said– in order to ‘localize’ them” (Lefebvre, 2005: 32).

²² En el ámbito de la teoría cultural de la antropología, Thompson (1998: 198-228) define cuatro estilos institucionales de los que derivan diferentes patrones de relaciones sociales, mitos de la naturaleza, ámbitos de conocimiento, estilos de aprendizaje e ideas sobre la equidad: mercados, jerarquías, igualitarismo y fatalismo. Una combinación diferente de estos estilos puede servir para definir determinadas comunidades.

²³ Enfoques radicales de la elección racional al problema de diversas formas de propiedad, como “La tragedia de los comunes”, han sido objeto de críticas profundas y por lo tanto hoy en día se acepta que la propiedad común puede ser una solución eficaz para un uso sostenible de los recursos (Agrawal, 2001).

del reparto que activamente socavó su autonomía, impuso la fragmentación de las tierras ejidales e intervino en su organización.

Las políticas agrarias orientadas por la investigación sobre *nuevas ruralidades* y *capital social* pueden llegar a representar formas inéditas de populismo agrario, que aunque defienden reformas que toman en cuenta a la comunidad, no logran mostrar cómo el desarrollo puede lograrse a partir de las condiciones económicas y políticas actuales, y finalmente son cooptadas o incluso permiten instrumentar la agenda neo-liberal (Kay, 2006). Por otro lado, existen enfoques esencialistas, en particular en lo que respecta a las comunidades indígenas, que tienden a pasar por alto la diferenciación interna socio-económica y territorial y el conflicto, o que los abordan siempre como problemas inducidos desde afuera, y que aceptan acríticamente la idea de que las “comunidades” están esencialmente orientadas al uso sostenible de recursos (Bernstein, 2002: 440-441). Frente a estas posturas comunistas, aquí se sostiene que las comunidades campesinas no son entidades fijas ya sea territorial u organizativamente hablando, sino que son históricas en toda la amplitud del término, por lo que debe hacerse un esfuerzo para entender tanto los mecanismos y los elementos a través de los cuales las comunidades se organizan, como los desafíos que enfrentan en virtud de determinadas condiciones económicas y políticas.

El problema de la territorialidad no es baladí en cuanto atañe a discernir el espacio de la comunidad en toda su complejidad, espacio sin el cual ella no puede existir efectivamente (Hernández, 2011). Las relaciones de parentesco, el ritual y la producción, dificultan una identificación directa entre comunidad y ejido; más aún, llaman a una exploración de la relación entre ambos. Aquí se plantea la hipótesis de que existen comunidades dentro de los ejidos cuya influencia territorial va más allá de ellos y se extiende a otros ejidos o incluso a propiedades privadas. De la misma forma se puede pensar que existen ejidos sin comunidad. Se considera aquí que las comunidades están constituidas por las redes familiares, las estrategias de producción, las relaciones de poder y la tradición; todos estos elementos son reconfigurados en el contexto de cambiantes condiciones sociales y medioambientales, incluidas las leyes de propiedad; y la idea de que la privatización conduce a la disolución comunal, se toma como una hipótesis refutable. En cualquier caso, el objetivo es explorar el amplio abanico de acción comunitaria que media entre la disolución y la continuidad de las relaciones comunales.

Para proceder en un análisis que considere la dimensión espacial y territorial de la comunidad y, en general, de las relaciones e instituciones sociales, no se

requiere partir de la idea de que las comunidades son leviatanes esencialmente anti-privados o anticompetitivos, tampoco necesariamente colectivistas, de lo que se trata es de documentar cómo las comunidades median en el acceso a la tierra, de entender su variable naturaleza y alcance. Por esto, si bien la organización del acceso a los recursos (incluida la tierra) se considera una característica constante de las comunidades, no se asume de inmediato una relación directa entre un régimen de propiedad particular y la persistencia comunitaria. Con el fin de entender cómo evolucionan las comunidades y los conflictos que enfrentan en situaciones de cambio de régimen de propiedad, en el estudio de caso presentado más adelante se desarrollará una perspectiva cercana a la ecología política, la cual indaga en la integración de formas particulares de reproducción material, limitaciones de recursos y orden político.²⁴ En este marco se abre la posibilidad de que las comunidades no siempre limiten las formas de explotación social y ambiental, sino que, como lo sostuvo Warman, se lleguen a convertir en espacios de dominio.

²⁴ El término ecología política se utiliza para referir a un amplio campo en el que se problematiza la batalla por los recursos más allá del enfoque estructural, que resume de este problema a un enfrentamiento entre clases. La ecología política habla entonces de actores, que se definen no sólo por su relación con los medios de producción (incluyendo por tanto las ONG y otros organismos, los diferentes grupos gubernamentales y políticos), el uso estratégico de los recursos y discursos, e incluso un papel activo del medio ambiente como espacio construido y arena de conflicto (ver Bryant, 2002). Un aspecto atractivo de la enmienda de 1992 es que se relaciona con el amplio debate sobre la relación entre la organización social y el medio ambiente. En un contexto de degradación del medio ambiente y un mayor control de los mercados de alimentos y la inversión en la agricultura por las grandes corporaciones y los negocios agrícolas, las comunidades rurales son una alternativa para el desarrollo social que no deben ser dadas de alta como formaciones tradicionales hacia atrás. Los continuos problemas que afectan a las zonas rurales de México, el hecho de que la enmienda de 1992 se propuso como una de las soluciones de centro de la crítica situación, tanto como el gran debate sobre la concepción liberal que la sustenta, son elementos que están en la base de la presente investigación.

EL NUEVO EJIDO

Fin de la distribución y modificación del régimen ejidal (1992)

A pesar de los interminables discursos oficiales sobre la importancia del desarrollo agrario para el país (Manzanilla-Schaffer, 2004: 736-842), durante la década de 1980 diversos planes y leyes para promover la agricultura continuaron afectando negativamente al sector ejidal y favoreciendo a los operadores privados. De importancia, aunque no directamente relacionada con la cuestión agraria, fue la política de descentralización que impulsó la autonomía municipal, proveyó a los municipios de recursos federales y modificó los mecanismos para la elección de las autoridades locales. Este cambio en particular impactó a las estructuras administrativas e incluso normativas dentro de los ejidos, en tanto sus localidades urbanas comenzaron a tener relevancia al margen del carácter productivo del régimen, debido a que cobraron importancia estructuras civiles paralelas a las ejidales. Estas nuevas estructuras, aunque de variable nomenclatura, están conformadas por una autoridad vinculada con el municipio (por ejemplo, representante municipal, síndico o agente), una serie de comisiones (servicios públicos, escuelas, iglesia) y la policía comunitaria.

La extensión y la complejidad de las autoridades no-ejidales dependen de la importancia relativa de las localidades urbanas y, en algunos casos, adquirieron más importancia que las autoridades ejidales. También las políticas del gobierno continuaron orientándose a las localidades e individuos en vez de a los ejidos, y canalizan recursos a través de estos nuevos representantes, quienes son ahora capaces de controlar y administrar los programas asistenciales de los que gran parte de la población pobre depende parcialmente para su subsistencia.

En vísperas de la enmienda de 1992, la situación de la reforma agraria era tan heterogénea a nivel nacional, que el ejido había perdido mucho de su significado productivo y territorial. El marco legal había sido sobrepasado por los arreglos *de facto*: el arrendamiento de tierras era una práctica extendida; algunos ejidos habían sido absorbidos por zonas urbanas en expansión y por tanto sus tierras habían sido irregularmente tranzadas en el mercado inmobiliario; ciertos ejidos habían agotado por completo sus recursos, otros habían sido capaces de refuncionalizarse y operaban en conexión con agroempresas nacionales e internacionales; en algunos, las diferencias internas eran extremas y la distribución de la tierra era muy desigual, en otros se presentaba una importante cohesión y un reparto interno equitativo. En suma, el ejido aparecía como un régimen desarticulado, que con la edad había perdido su carácter unitario, su orientación productiva e incluso su asociación predilecta con el Estado.

A pesar del extenso reparto, en 1991 la estructura agraria en México era muy desigual. En ese año, un censo rural mostró que 65% de todas las unidades de producción estaban operando dentro de los ejidos. De ellos, casi 59% tenía acceso a menos de cinco hectáreas de tierra, pero otro 36% se beneficiaba del acceso a un área de entre cinco y veinte hectáreas. También mostró que en el sector privado las diferencias entre las unidades pequeñas y grandes eran muy marcadas, con 45% de las unidades privadas de menos de dos hectáreas y un número reducido de unidades de gran tamaño. En realidad, casi todas las unidades que operaban en superficies superiores a cincuenta hectáreas eran privadas.

Debido a las limitaciones legales para las transacciones de tierra ejidal, los datos ofrecidos por el censo sobre alquiler, préstamo y otras formas de intercambio fueron poco confiables. Sin embargo, es interesante señalar que las cifras sobre unidades que rentaban tierras, no mostraron variaciones sustanciales entre los sectores ejidal y privado: mientras que el 95% de las unidades privadas tenían acceso directo a la tierra (propiedad), el 97% de las unidades en el sector ejidal informó que explotaba terrenos propios.

La forma en que se agregaron los datos del censo de 1991 y su metodología, ayudan muy poco a comprender la dinámica de acceso y uso de la tierra en México en vísperas de la reforma de 1992. La categoría básica sobre la que se diseñó el censo (Unidad de Producción Rural) era ambigua entre los sectores, dificultaba conocer su diversidad y sus interacciones. Además, resulta imposible obtener conclusiones a nivel local o regional. Con la información de aquel censo, en la mano, los responsables políticos sintetizaron la problemática rural

en tres temas generales: 1. Pobreza, 2. Fragmentación extensiva de la tierra (minifundismo) y 3. Falta de inversiones, tecnología e infraestructura. A esta imagen, los demógrafos y los economistas añadieron que a pesar de la intensa migración, hacia 1991 cerca de 25% de la población del país continuaba viviendo en zonas rurales, pero contribuía con sólo 10% del Producto Interno Bruto (SRA, 1998: 76). Por último, la percepción de injusticia y las irregularidades dentro de los ejidos, ligadas a las constricciones legales y la intervención gubernamental, completó la evaluación que justificó un cambio profundo de la reforma agraria.

En 1991, el presidente Salinas de Gortari se dirigió al Congreso Agrario Permanente, que agrupaba a doce de las mayores organizaciones agrarias, con un discurso que defendía su propuesta de modificación del Artículo 27 de la Constitución. Allí resumió en diez puntos los objetivos centrales de la reforma:

1. Promover la justicia y conceder a los campesinos la libertad para decidir el destino de sus tierras parceladas, proporcionando certeza en la tenencia de la tierra y revirtiendo su creciente fragmentación (minifundismo), que fue el resultado de la obligación de distribución y la falta de formas estables de asociación. También el objetivo era fortalecer la vida comunitaria en las localidades, delimitando con precisión los derechos de los ejidatarios, cuyas decisiones sobre el uso de sus recursos naturales debían ser respetadas por los demás individuos que habitan en los ejidos (Salinas de Gortari, 1993: 144-145).
2. Proteger el ejido mediante la transferencia de dominio a los ejidatarios y definiendo una relación de “propiedad” entre ellos y la tierra. Esta protección involucra la distinción entre las tierras parceladas y comunes, y la clara delimitación de las zonas urbanas, acordando para cada uno de estos tipos de propiedad, mecanismos específicos de transferencia.
3. Transformar a los campesinos en “sujetos” y no “objetos” del cambio, mediante la creación de las condiciones necesarias para que los campesinos “decidan”.
4. Revertir el minifundio y al mismo tiempo evitar el latifundio. En el primer caso, permitiendo la asociación, la inversión, la innovación tecnológica y mejorando los mecanismos de comercialización, industrialización y exportación. En el segundo, manteniendo los límites a la extensión de la pequeña propiedad privada y de las asociaciones productivas.
5. Promover la capitalización mediante el aumento del gasto público y facilitando la inversión privada a través de la promoción de empresas mixtas compuestas de ejidatarios e inversionistas privados.

6. Mejorar la administración de justicia mediante la codificación de una nueva legislación agraria, y a través de la creación de Tribunales Agrarios y de la Procuraduría Agraria.
7. Aumentar el gasto público.
8. Apoyar el aseguramiento financiero de los productores.
9. Crear un fondo nacional de apoyo a las empresas dentro del programa de asistencia social *Solidaridad* (Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad).
10. Resolver los problemas de endeudamiento mediante la reestructuración del Banco Rural (Banrural) y transfiriendo las deudas de los productores de infra subsistencia y subsistencia que ya participaban en el programa *Solidaridad* al programa en sí. Ya en el marco del programa, se definiría el mecanismo de pago (mediante el trabajo o “colaboración”), para después llegar al apoyo financiero. Para los demás productores, sus deudas iban a ser transferidas a un fideicomiso, estableciendo las normas de pago a largo o mediano plazos, de modo que fuesen capaces de adquirir nuevos créditos (*Ibid.*: 154).

Al año siguiente, después de un nutrido debate político, el Congreso modificó el Artículo 27, y el marco jurídico básico de los ejidos se transformó. La aplicación efectiva de la reforma implicó la creación de Tribunales Agrarios, de la Procuraduría Agraria y la puesta en marcha del programa nacional de certificación y titulación PROCEDE. Sin embargo, tomó más de una década elaborar la nueva legislación agraria, y aún en 2008 era objeto de revisión. El gasto público proclamado fue orientado principalmente hacia la asistencia social, es decir, se aumentaron los recursos de programas con un impacto nulo en las condiciones sociales y productivas de largo plazo; la re-estructuración financiera condujo a la desaparición del Banco Rural y sus seguros; los programas productivos favorecieron o apalancaron principalmente a los productores (cadenas productivas o sistemas de productos) orientados a la exportación, incrementando la dependencia alimentaria del país sobre las importaciones de granos básicos. En síntesis, una parte importante de los objetivos del programa de reforma de Salinas no se cumplieron.

En sus diez puntos, el presidente marcó una diferencia sustantiva entre el tipo de productores y los mecanismos para apoyarlos: asistencia social para los pobres y financiamiento para los productores medianos y los empresarios bien posicionados. Los programas de asistencia social (*Solidaridad*, *Alianza*, *Aserca*, *Progres*a, *Procampo*) han sufrido variaciones muy pequeñas a pesar

de las múltiples críticas planteadas desde distintos ámbitos, incluidos los organismos financieros internacionales y las organizaciones como la OECD (2006: 111-112; 144-158). Con todo, en lo que se refiere a los campesinos pobres, dichos programas permitieron limitar la libertad recientemente adquirida mediante la reconstitución de mecanismos de intervención gubernamental, recreando al “autócrata rural” que la reforma trató de exorcizar (Bartra, 1996: 174).²⁵ Para los sectores rurales medios y mejor posicionados, las soluciones proclamadas por Salinas tardaron tanto en convertirse en realidad, que la crisis económica de 1994 los impulsó a la formación de una asociación nacional de deudores, que engrosó la gran movilización rural que aún hoy cuestiona las políticas para el campo en México.

El nuevo orden

En enero de 1992, el Congreso mexicano modificó el Artículo 27 de la Constitución Federal, aquel que regula la propiedad de la tierra y sus recursos. Este artículo fue piedra angular de la reforma agraria que entre 1915 y aquel año distribuyó la mitad del territorio entre campesinos sin tierra. La enmienda de 1992 formó parte de los grandes procesos de reestructuración institucional neoliberal que desde los años setenta promovieron en México y América Latina organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, reestructuración que en lo que se refiere a la tierra tuvo como primordial objetivo limitar la intervención del Estado en la distribución del recurso y en la transformación de las estructuras agrarias. La perspectiva neoliberal supone que los problemas agrarios son antes que nada asuntos de eficiencia en la distribución y explotación de la tierra, por lo que para atenderlos hace falta:

- a) Incrementar la seguridad de tenencia.
- b) Crear mercados de tierra que resuelvan el problema de su distribución al margen de acuerdos políticos o sociales.

²⁵ “The more it [the state] reveals its identity as a mercantilist ogre, the more philanthropic a stance the rural leviathan adopts and so, while the neoliberal father throws his children out of their state-run home, abandoning them to the rigors of the market, their mother, in solidarity, offers them consolation, a worn-out blanket, and a box lunch to eat along the way” (Bartra, 1996: 174).

- c) Mejorar la confianza mediante la privatización de derechos, la producción de títulos y registros de propiedad.
- d) Mejorar la eficiencia reduciendo costos de transacción y riesgos morales.²⁶

La reforma fue anunciada como una estrategia modernizadora para mejorar el acceso a la tierra, la producción y la justicia; resolver viejos conflictos de límites, malas ejecuciones y, sobre todo, liberar a los campesinos de las restricciones que imponía el régimen ejidal de propiedad. De mayor importancia fue entonces la opción concedida a los ejidatarios de rechazar la propiedad colectiva a favor de la posesión individual.

La enmienda a la reforma agraria tomó una década para convertirse en una realidad. Más allá del cambio constitucional, el proceso renovador incluyó diversas transformaciones como la privatización y desincorporación de agroindustrias estatales, muchas de las cuales trabajaban directamente con los ejidos; la eliminación de subsidios y crédito, la creación de incentivos fiscales para productores y productos “competitivos”, el establecimiento de programas para la reducción de la pobreza y, por último, la desregulación del mercado y la liberalización de las exportaciones (Rodríguez, 1996). Asimismo, fueron relevantes los cambios políticos que acompañaron las reformas económicas. La democratización de los gobiernos locales y el dismantelamiento del aparato corporativo, junto con la operación de los programas de subsistencia controlados directamente por el gobierno federal, ayudaron en la gestión de los disturbios producidos por el ajuste. Todos estos cambios se especificaron en el Programa de Modernización Rural que en 1990 propuso abiertamente la reforma del Artículo 27 de la Constitución, base normativa de la reforma agraria.

Así pues, la enmienda constitucional liberalizó al ejido y detuvo la distribución directa de la tierra. El cambio fue apoyado abiertamente por el Banco Mundial y formó parte de la política de desregulación exigida por Estados

²⁶ *Riesgo moral*: El riesgo de que una parte en una transacción no actúe de buena fe, proporcione información engañosa o insuficiente, o tenga incentivos para asumir riesgos extraordinarios destinados a corregir una situación desesperada (cf. insolvencia). Ver Peter Moles and Nicholas Terry (1997), *The Handbook of International Financial Terms*, Oxford Reference Online.

También: El peligro de que si un contrato promete pagos a las personas bajo determinadas condiciones, éstas cambiarán su conducta a fin de que tales condiciones ocurran. Por ejemplo, el riesgo moral sugiere que cuando las posesiones están totalmente aseguradas, sus dueños tenderán a cuidar menos de ellas que si no tuvieran seguro, o incluso podrían conspirar en su robo o destrucción (A *Dictionary of Economics*, John Black, Oxford University Press, 2002. Oxford Reference Online.)

Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio (TLC) con México (Calva, 1993; Vázquez, 2004). La modificación implicó una privatización *de facto* de todos los ejidos que perdieron la protección especial del Estado y cuyas tierras pasaron entonces a ser propiedad privada de los ejidatarios. Incluyó la aplicación de un programa de certificación y la distribución de derechos mercadeables entre titulares individuales junto con la creación de una nueva estructura burocrática y legal que incluyó Tribunales Agrarios. Esto supuso, además, la elaboración de un nuevo registro de propiedades sociales y la regularización de aquellos que vivían y/o trabajaban en las tierras de los ejidos, pero que no podían reclamar derechos debido a las limitaciones impuestas por la ley anterior. Lo más importante es que la organización y las normas internas de los ejidos se transformaron; las asambleas perdieron parte de su poder frente a los titulares de derechos individuales, y la oportunidad de adoptar el dominio pleno (es decir, la disolución de los ejidos y el fraccionamiento en propiedades individuales) se convirtió en una realidad. Por otro lado, uno de los mayores cambios promovidos por la reforma tiene que ver con la enorme producción de datos derivada del Programa de Certificación Parcelaria y Titulación de Solares (PROCEDE) que abrió un horizonte muy grande para la investigación, como lo quiere atestiguar este mismo trabajo.

El Artículo 27 de la Constitución representó los valores fundamentales de la Revolución de 1910-1917 y se consideraba piedra angular para la construcción y equilibrio político en México. El Artículo 27 une al Estado con su territorio y crea un sistema de propiedad. Asegura que la propiedad original de la tierra y los recursos que contiene estén en manos de “la Nación”, de la cual todas las formas de propiedad emergen, además de que regula la propiedad privada en términos de su extensión y uso. Hasta 1992, impuso al gobierno la obligación de destruir todos los latifundios y distribuir sus tierras entre un gran número de campesinos pobres, a quienes la Constitución también concede el derecho al trabajo. La medida en que este artículo afectó el desarrollo de México durante el siglo veinte, fue más allá de la cuestión agraria en tanto, sobre su base, el gobierno nacionalizó la industria petrolera (1940), controló la explotación minera, nacionalizó la electricidad (1960), limitó la inversión extranjera en una amplia gama de actividades (incluido el desarrollo de las zonas costeras), ordenó el crecimiento urbano y estableció reservas naturales.

Desde 1934, el Artículo 27 incluyó formalmente la figura del ejido como un tipo de propiedad que, en oposición a la propiedad privada, fue calificada de “propiedad social”. Los ejidos establecían la tenencia colectiva de la tierra

y asignaban derechos individuales de usufructo a un grupo de campesinos sin tierra.²⁷ Considerados pilar de la nación, los ejidos eran protegidos por el Estado, sus tierras excluidas del mercado y su uso supervisado por el gobierno. La política interna de los ejidos estaba sujeta a control gubernamental y sus actividades económicas se ceñían a los planes y programas gubernamentales.

Durante los setenta y cinco años que transcurrieron desde 1917 hasta 1991, el Artículo 27 fue modificado en numerosas ocasiones, pero ninguna de estas enmiendas trocó la demanda de distribución y protección. A pesar de que los mecanismos de reparto y las políticas económicas de los diferentes gobiernos obstaculizaron la reforma agraria en muchos sentidos, su espíritu de transformación social fue siempre preservado en la Constitución y la promesa de la tierra se mantuvo como principal instrumento para eludir o controlar los conflictos en las zonas rurales. En el momento de la enmienda, alrededor de la mitad de la superficie neta del país se había distribuido (aunque menos de la mitad de la tierra propiamente agrícola fue transferida a los campesinos) y otro tanto estaba en proceso de serlo.

El final de la unidad

La reforma agraria procedió principalmente a través de la formación de ejidos mediante concesiones de tierras a grupos de campesinos con derechos de usufructo. A pesar de este aspecto colectivo, los ejidos no constituyeron un tipo de propiedad común, porque los derechos se distribuyeron de forma individual. No era el ejido como entidad colectiva el que adquiría derechos, sino los campesinos de manera individual. Los ejidos eran, entonces, una forma de organización territorial en la que los campesinos tenían un derecho exclusivo que incluía tanto

²⁷ Por supuesto, la otra figura en la reforma agraria es la de Comunidades Agrarias. A diferencia de los ejidos, los comuneros tenían derechos anteriores sobre la tierra reconocida y su organización interna no estaba sujeta a control gubernamental. Principalmente en las zonas indígenas se conformaron comunidades agrarias. Durante todo el período de la reforma agraria, un número muy pequeño de comuneros se formaron debido a la dificultad de demostrar la propiedad antes de la tierra; también, y más importante, porque el gobierno abiertamente se negó a dotar tierras bajo este mismo sistema autónomo. En algunos casos, esta falta de reconocimiento de los derechos de las antiguas comunidades llevó a la confrontación violenta (Purnell, 1999), pero en general la distribución de la tierra y la formación de ejidos fue bien aceptada. El largo proceso burocrático necesario para obtener la tierra también fue un incentivo para aceptar el ejido como el primer resultado de la demanda de tierra.

el acceso a la tierra (parcelada y de uso común, incluyendo las zonas urbanas y reservas territoriales) como la representación en la asamblea ejidal, que era la máxima autoridad de cada ejido. El derecho a la propiedad ejidal fue, por tanto, inherente a la condición de ejidatario; era imprescriptible y podía heredarse a un solo descendiente (ni la tierra era divisible, ni el estatus de ejidatario multiplicable). Siendo no negociable y de duración indefinida, el derecho se orientaba a proteger el patrimonio familiar y a preservar la unidad del núcleo agrario en términos de su extensión y del número de sus miembros.

La reforma de 1992 transformó la situación anterior, fragmentando la unidad del ejido (Hernández, 2011: 180-181). Los derechos sobre parcelas y tierras comunes se diferenciaron e hicieron demostrables con documentos diferentes, mientras que la categoría de ejidatario se separó de la propiedad real de la tierra dentro del ejido. Hoy en día es posible que haya ejidatarios sin tierra.

La propiedad parcelaria

La reforma otorgó a la propiedad sobre las parcelas atribuciones legales muy flexibles. Con la enmienda, la propiedad parcelaria se convirtió en una forma de propiedad privada condicionada o de dominio moderado. La *Ley Agraria* aún señala que los ejidatarios tienen el derecho de uso y usufructo de las parcelas sin mencionar directamente el dominio (artículos 14 y 76); sin embargo, las facultades que confiere a los titulares de derechos de parcelas varía sólo en grado respecto de las que disfrutaban los pequeños propietarios con pleno dominio.²⁸ Es más, los mecanismos para la venta de parcelas dentro de los ejidos son más flexibles que los exigidos para la transmisión de la propiedad privada sobre la cual la transferibilidad ilimitada es posible (Pérez, 2002: 117). Esta situación pone de relieve que el objetivo de la reforma era inducir a la reasignación de la tierra y facilitar las transferencias desde los miembros no productivos hacia aquellos con más recursos dentro de los ejidos, pero también apunta a uno de sus impactos potenciales: el de la intensificación de los procesos de diferenciación interna.

²⁸ Por tanto, el artículo 80 indica que las parcelas se pueden vender a otros ejidatarios o avecindados (ver más adelante para una definición de avecindado) del mismo núcleo. Sin embargo, para que la enajenación de una parcela sea legal, los requisitos son sólo: el consentimiento por escrito de las dos partes, la presencia de dos testigos, una notificación a los herederos de la transferencia de la parcela y de su derecho a obtener parte del producto del intercambio y, por último, la solicitud al Registro Agrario Nacional de un nuevo certificado.

Las tierras de uso común

Al momento de la reforma no todos los ejidos estaban fragmentados total o parcialmente. Sobre todo en el norte y el sudeste del país seguían existiendo importantes áreas bajo uso común. Aunque no de forma exclusiva, se trata de ejidos cuyas tierras son aptas para la ganadería o la explotación forestal.²⁹ También hay ejidos en los cuales la calidad de la tierra es tan limitada, que la división permanente no había sido una opción viable para los ejidatarios. Como en el caso de las parcelas, las áreas de uso común se han visto afectadas en términos de su transferencia, pero su posible conversión en completo dominio es más complicada. Un cambio sensible respecto a los recursos comunes es que si bien se previene su transferencia al dominio total, la nueva legislación permite integrarlos en sociedades mercantiles o civiles con participación de inversores privados. Aunque las tierras de uso común siguen siendo inalienables y la propiedad sobre ellas no expira, pueden ser objeto de embargo temporal en el eventual caso de que los negocios no prosperen. Así pues, mientras que con respecto a las parcelas la reforma promovió la redistribución o agregación, en el caso del uso común evita la fragmentación, pero induce su reorientación productiva a través de un mecanismo que beneficia y protege la inversión privada.

Los sujetos agrarios

Conforme a la legislación derogada por la enmienda (*Ley Federal de la Reforma Agraria*), el estatus de ejidatario tenía una clara orientación de clase y sólo ciertos tipos de personas podían ser beneficiarios. Debían ser: mexicanos adultos cuya ocupación fuese la agricultura, que carecieran de capital y tierra, o cuyos activos fuesen más pequeños que el área mínima que estipula la subvención del Estado. También debían ser residentes de la localidad solicitante y no tener antecedentes penales. En pocas palabras, tenían que ser campesinos. Este sistema implicaba una clara distinción entre propietarios rurales y productores rurales. La cuestión del trabajo fue esencial en la construcción jurídica de la Reforma Agraria y, por ende, afectó directamente a la producción y el desarrollo de las zonas rurales. Todo esto desapareció en la nueva Ley, debido a que en la actualidad cualquier persona, independientemente de su condición económica

²⁹ En el caso particular de los ejidos creados en las zonas boscosas, la prohibición se mantiene al fraccionamiento de los terrenos.

o productiva (puede no ser productor), y sin importar su capital, está habilitado para convertirse en ejidatario.

Bajo las nuevas condiciones, la diferencia entre los sectores social y privado es confusa o al menos se ha reducido a la diferencia entre “comunidades rurales” (en su mayoría indígenas) y los tipos de titularidad privada entre las que debe contarse el ejido. Como se mencionó anteriormente, la condición de ejidatario y la titularidad de una parcela se han separado, por lo que mientras la aceptación de los ejidatarios en el núcleo constituye hoy un acto de la creación de derechos y obligaciones por parte de la asamblea, su separación no implica un acto de privación de derechos a la propiedad porque la asamblea no puede recuperar para el ejido la tierra ya certificada (Pérez, 2002: 172).

Entre las obligaciones mencionadas, impuestas por el estatus de ejidatario estaban: asistir a las asambleas, participar en los trabajos comunales, explotar sus parcelas de acuerdo al programa de cultivo del ejido, vender la producción a través del ejido, explotar de forma permanente la tierra, no vender la parcela o las tierras comunales en parte o totalmente, evitar el uso de mano de obra asalariada, no alquilar o ceder la parcela, evitar la acumulación de tierra y evitar el cultivo de cualquier producto prohibido. Todas estas obligaciones también desaparecieron en la nueva ordenación, aunque puedan incluirse en el reglamento interno de cada ejido. Si este último llega a ser el caso y un individuo no atiende a sus obligaciones, no es posible ahora suspender o retirar sus derechos, porque los reglamentos internos no pueden anteponerse a la *Ley Agraria*, la cual no contempla sanciones en este particular. Actualmente, la única autoridad investida con el poder para retirar o reconocer los derechos a la propiedad ejidal es el Tribunal Agrario, pero esto puede llevarse a cabo únicamente en los casos en que los individuos se disputen intereses personales, no en el caso de que una persona no cumpla con las obligaciones impuestas por la asamblea, porque el bienestar colectivo ya no es un interés jurídicamente protegido (Pérez, 2002: 182). Las personas ahora pueden ir a la Corte porque su condición no ha sido reconocida por la asamblea, pero ésta, al no ser sujeto de Derecho, no puede demandar a los individuos.

Un problema central que dio impulso a la reforma fue la presencia de gran número de personas que no eran ejidatarios pero ocupaban parcelas y/o solares residenciales, y participaban también en las actividades productivas. La proliferación de miembros sin derechos reconocidos u oficiales fue resultado de la obligación de transferir el título de ejidatario a un solo familiar y de la naturaleza inherente del derecho de propiedad ejidal.³⁰ En las regiones de

³⁰ Transferencias irregulares que involucran dinero estuvieron presentes, pero afectaron principalmente a las zonas urbanas y a ejidos que habían sido absorbidos por las áreas metropolitanas.

acceso muy restringido debido a la distribución limitada, pero donde la tierra exhibía una alta productividad, se incrementaron las probabilidades de que no-ejidatarios dispusieran de tierra para su sustento. Esto ocurrió sobre todo allí donde los modelos tradicionales de la herencia permitían la división de los bienes familiares entre más de un descendiente. El acceso a la tierra para los no-ejidatarios se relacionó también con el tipo de explotación, con lo que la permanencia de grandes áreas de uso común impidió la proliferación de miembros que pudiesen reclamar derechos sobre parcelas específicas.

Dependiendo de la región, al momento de la enmienda entre 15 y 35% de los individuos productivos no son ejidatarios, pero tienen parcelas en los ejidos. Con el fin de regularizar la situación de los que, gracias a una larga permanencia en los ejidos o por su prolongado trabajo, habían adquirido *de facto* derechos, la reforma creó las figuras de *avecindados* y *poseсионarios*.

La categoría de *avecindado* no es completamente nueva. Aparecía en la ley derogada, donde se refería a los habitantes de los ejidos con residencia de más de un año. Esas personas eran beneficiarios potenciales en caso de que el ejido se ampliara. Bajo la nueva legislación, los *avecindados* son sólo los residentes reconocidos como tales por la asamblea y que poseen títulos de propiedad de solares en los asentamientos urbanos. Una característica importante de este tipo de sujetos es que están habilitados para adquirir parcelas y derechos sobre tierras de uso común de los ejidatarios y *poseсионarios* sin que intervenga ningún cambio en el régimen o incluso sin el permiso de la asamblea. Esta figura facilita la entrada de nuevos miembros en los ejidos que, eventualmente, pueden convertirse en titulares de sus tierras.

Un subproducto de la creación de *avecindados* fue el reconocimiento nominal de los habitantes que no tienen ninguna conexión con la tierra y forman parte solamente (sin derecho a voto) del comité a cargo de la gestión de los servicios públicos. Sin el derecho a solicitar tierras para trabajar, y una vez que la orientación de clase de la ley ha sido erosionada, estos individuos son tan sólo residentes regulares sin ningún recurso en la *Ley Agraria*.

Por su lado, los *poseсионarios* eran aquellos individuos que durante el proceso de certificación resultaron beneficiados con la asignación de una o varias parcelas, pero sin derechos sobre las áreas comunes u otros activos del núcleo agrario y también sin posibilidad de intervención en la asamblea. Warman los llamó *los arrimados* del ejido, y mencionó que desde 1992 “concede a los *poseсионarios* el derecho de prescripción para convertirse en ejidatarios plenos si demuestran su permanencia como usuarios autorizados por cinco

años” (Warman, 2001: 89). Ello está lejos de ser tan prístino como lo planteaba el que fuera encargado de la nueva institucionalidad agraria. Así lo sugiere el análisis jurídico de Juan C. Pérez, quien comenta que “Los posesionarios quedan prácticamente desvinculados de la vida del núcleo agrario, pues fuera de los artículos 23, fracción VIII, 56 y 57, relativos a la asignación de tierras, la *Ley Agraria* no los vuelve a mencionar” (Pérez, 2002: 174-175). Por su parte, David Cerón, funcionario de la Procuraduría Agraria (PA), publicó un trabajo completo sobre las ambigüedades y problemas normativos involucrados en la transferencia de la propiedad de los posesionarios (Cerón, 2006). Debido a que se trata de un asunto relevante para el presente trabajo, vale la pena traer a colación la explicación que un funcionario de la misma Procuraduría realizó en una asamblea sobre este asunto en particular:

También dicen la Ley y el Reglamento que se comenta que las asambleas podrán regularizar la tenencia de posesionarios. Debo aclararles, al respecto, que tanto las instituciones del Sector Agrario como las organizaciones campesinas hemos tenido y sostenido opiniones y decisiones diversas y hasta contradictorias en relación con este concepto de posesionario. La Ley lo menciona y las instituciones lo hemos interpretado, las más de las veces, señalando que el posesionario que sea reconocido por la Asamblea queda con el carácter de posesionario; sin embargo, pienso firmemente, y creo que hacia allá debe dirigirse el criterio final; es decir, el que prevalezca en lo subsecuente, que tanto ustedes como dirigentes de las organizaciones campesinas, como nosotros como servidores públicos, ambos obligados a orientar correctamente a los núcleos y a sus miembros, debemos sostener categóricamente que el posesionario en materia agraria, al igual que en Derecho Civil, lo es en tanto los tribunales no les reconocen el carácter de ejidatario y propietario, respectivamente, por virtud de una sentencia recaída en un juicio de prescripción adquisitiva, como en el caso nuestro lo establece el artículo 48 de la *Ley Agraria*, pues que yo sepa en los ejidos que he recorrido, y ustedes me darán la razón, entre ejidatarios o entre los miembros de un núcleo agrario nunca hemos tenido campesinos de primera y campesinos de segunda. Ser posesionario ahora es el equivalente al carácter transitorio que tenían los nuevos adjudicatarios antes de que fueran reconocidos por la Asamblea como ejidatarios, cuyo procedimiento de reconocimiento culminaba con resolución presidencial, y a partir de 1984 y hasta febrero de 1992 por resolución de la Comisión Agraria Mixta. Pero debe quedar muy claro: lo que reconocía en última instancia la Asamblea y ratificaba la Mixta, no era el carácter de posesionario,

sino el de ejidatario del núcleo; por ello, he sostenido que al campesino que ejercite la acción de prescripción en términos del artículo 48 de la *Ley Agraria*, ya no puede seguirsele llamando posesionario, sino ejidatario; no hacerlo así, los tribunales, o en su caso la Asamblea, representaría en uno y otro caso una muy incorrecta aplicación de los artículos 48 y 56 de la ley de la materia, de reconocerle al posesionario de hecho el carácter de posesionario de Derecho, lo cual jurídicamente es un disparate. (...) Es, pues, un concepto, el de los poseedores, que yo he comentado con algunos de ustedes, mis amigos dirigentes campesinos, que tenemos que sentarnos a la mesa, no en una mesa de este tipo sino en la que podamos, en forma más especializada, debatir razones, fundamentos, aclarar ideas y tomar una decisión que no nos esté haciendo perder tiempo, y sobre todo creando conflictos hacia el interior de los núcleos, porque eso es lo que ha generado este criterio vacilante de no tomar la decisión de que los campesinos que acepte la Asamblea a partir de la delimitación, destino y asignación, son ejidatarios, y los que reconozca el Tribunal a partir de que dicte su sentencia en un juicio de prescripción, son también ejidatarios; eso sostengo firmemente, que no puede estar a discusión (Bailón Díaz, 2016)³¹

Los poseedores no podían comprar parcelas en el ejido, algo que los puso en una posición por encima y por debajo de los vecindados. Las limitaciones impuestas a los poseedores sugieren que ésta fue concebida como una figura transitoria, ya que en general los poseedores pertenecen al mismo rango de la edad de los ejidatarios (por lo general, se trata de hermanos), por lo que era de esperarse que sus tierras pasaran a la nueva generación de ejidatarios o vecindados (sin embargo, la transmisión por herencia sigue ofreciendo una posibilidad para que los poseedores mantengan sus parcelas dentro de sus propias familias). Esta marginación de los poseedores, con mucho los que menos tierra tenían en los ejidos, pone de relieve que la política de redistribución interna incidió en la diferenciación social promovida por la enmienda. Con todo, como se discutirá en los próximos capítulos, el impacto real de este cambio en particular es altamente dependiente de las estructuras familiares, la calidad y el valor de la tierra, por lo que las generalizaciones, tan comunes en lo que se refiere al tema agrario, deben ser tomadas con cautela.

³¹ Bailón Díaz, <http://www.pa.gob.mx/publica/pa070609.htm>. Última revisión 20 de enero de 2017

Títulos y certificados

Un cambio importante derivado de la enmienda tuvo que ver con la forma de demostrar la propiedad. Este fue un asunto muy problemático durante el período de reparto debido a las deficiencias (en particular, desde finales de los años sesenta en adelante) del trabajo técnico que acompañaba a la creación de cada ejido. Durante gran parte del período de distribución, los documentos oficiales se entregaban al colectivo de ejidatarios y se producían pocos documentos personales. Puesto que el derecho abarca tanto la tierra como la adscripción al ejido, los certificados individuales declaraban el estatus del titular, pero no mencionaban un área en particular que pudiera ser reclamada como propiedad individual. La propiedad de las parcelas y de las áreas de uso común se demuestra ahora con certificados que en el primer caso claramente localizan las parcelas, y en el segundo establecen un porcentaje definido de titularidad sobre una claramente delimitada área de uso común. En el caso de los solares, la propiedad se demuestra con títulos.

La elaboración de nuevos documentos es fundamental para el tipo de seguridad centrada en la tenencia individual que la reforma promovió, pero además fue un mecanismo para agregar valor a la tierra ya claramente delimitada y un requisito previo para la formación de mercados de tierras (para ejemplos de impactos positivos en valores de la tierra para una selección de países, ver Banco Mundial, 2003: 44). Una vez más, las posibilidades de reforzar la seguridad y agregar valor depende de las circunstancias locales. La persistencia de conflictos en muchas regiones sugiere, sin embargo, que los títulos modernizaron o recrearon algunos de los viejos conflictos y reclamos. Se debe considerar, además, que la baja calidad y mala ubicación de una parte importante de la tierra ejidal limita los incrementos en su valor (Warman, 2001: 86-87).

Territorio y zonas urbanas

Durante el período distributivo, los ejidos eran esencialmente unidades de producción, aunque también entidades territoriales en las que la Asamblea jugaba un rol de representación política. La tierra y los derechos estaban unidos, por lo que la fragmentación, la delimitación de las zonas comunes, de reservas y zonas urbanas, afectaba a la organización institucional del ejido y viceversa. En el marco de la normatividad previa, la delimitación de zonas urbanas y reservas

territoriales fue problemática debido a los cambios en los procedimientos de reparto entre 1917 y 1992. Algunos ejidos abarcaban antiguas zonas urbanas conformadas durante el período colonial o en el siglo diecinueve. Entre 1917-1927 y 1940-1942, la formación de ejidos incluía la creación de fundos legales y no zonas urbanas, mientras que entre 1927-1940 y 1942-1992 las zonas de urbanización se definían en las resoluciones presidenciales; por último, después de 1992 algunas asambleas ejidales crearon zonas de urbanización y reservas territoriales (para la futura urbanización) que no estaban contempladas en las resoluciones originales. A pesar de los problemas legales causados por el uso de términos diferentes, estas áreas conservaron la condición de propiedad común bajo el control de la asamblea ejidal.

La reforma transformó la situación de las zonas urbanas, ya que una vez delimitadas, los solares que incluyen se transformaron en propiedades privadas regulares, garantizadas por títulos que otorgan pleno dominio. Los solares son mercadeables, pero como la tierra y el estatus se han disociado, alguien que compra un solar ejidal no adquiere la condición de avecindado y requiere de tal reconocimiento por parte de la asamblea con el fin de adquirir una parcela.³² De todas las mutaciones derivadas de la enmienda de 1992, la convertibilidad del ejido en dominio pleno, la posibilidad de vender las parcelas entre miembros del ejido sin tener que recurrir a un cambio de régimen y la posibilidad abierta de aportar la tierra a empresas mixtas con inversionistas privados, son las más destacadas.

³² Las reservas territoriales para el crecimiento urbano son las zonas que permanecen bajo un estricto control de la asamblea, y no prescriben y no pueden ser embargados hasta el final de la fragmentación y la distribución o hasta que el ejido se disuelve y pasa al completo dominio.

TABLA B CARACTERÍSTICAS LEGALES DE LA PROPIEDAD EJIDAL CONTEMPORÁNEA		
Parcelas	Areas de uso común	Reservas territoriales
Alienable (A. 80)*	Alienable (A. 57, 75)	Alienable (A. 64, 68, 69)
Puede prescribir (A. 48)	Puede preescribir (A. 48)	Imprescriptible (A. 64)
Embargable (A. 46)	Embargable (A. 46)	No embargable (A. 64)
Transferible (A. 46)	Transferible (A. 46)	Transferible (A. 68)
No-divisible (A. 18)	Divisible (A. 56, 57)	Divisible (A. 64, 89)
Convertible (A. 23, 81, 103)	Convertible (A. 23, 56, 57, 75, 103)	Convertible (A. 23, 89, 103)
Limitado a 100 hectáreas de tierra irrigada (A. 47)	Ilimitado (N.A.)*	Ilimitado (N.A.)
* Artículo en la Ley ** No directamente mencionado en la Ley. Fuente: Pérez, 2002: 166.		

La naturaleza social y productiva del ejido se separó por completo de su constitución territorial, y este cambio impactó la vida colectiva tanto como la política real o potencial orientada a promover la producción y el desarrollo en las zonas rurales, lo que Warman llamó “el sesgo agrícola” (2001: 63-64). En un orden más abstracto, la reforma tuvo profundas implicaciones en la organización de los ejidos y en la relación entre el régimen de propiedad y el Estado. Mientras que antes de la reforma este último protegía y orientaba la vida colectiva y productiva de los ejidos, con la modificación del artículo 27, el Estado se orienta ahora a la protección de las personas y sus propiedades dentro (y en contra) de los ejidos. La capitalización y la productividad fueron trasladadas a la esfera privada a través de la formación de las sociedades mercantiles que atraieran inversión privada.

La transformación del ejido está representada esquemáticamente en la Figura 1. La figura de la izquierda representa al Ejido Tipo del periodo distributivo como un territorio organizado y definido por la producción, mientras que la de la derecha reproduce al conjunto de sujetos y derechos incorporados al régimen sólo por relaciones contractuales o legales que emergió de la reforma.

FIGURA 1
UNIDAD Y FRAGMENTACIÓN DEL EJIDO

"Ejido tipo" tomado de Zaragoza y Macías, 1980: 209.

La nueva justicia agraria

En su defensa y promoción de la enmienda al Artículo 27, el presidente Salinas planteó la falta de un sistema judicial claro, justo y ágil, como uno de los problemas que ensombrecieron a la reforma agraria. De todo el proceso, éste fue quizás el único aspecto sobre el cual existía un consenso general.

La manera en la que evolucionó la reforma y la compleja red de instancias gubernamentales que intervenían en las decisiones relativas a la distribución y en la solución de los problemas causados por ellas, no tenía un contrapeso en el sistema jurídico.³³ Los conflictos sobre uso de recursos (por ejemplo, el

³³ El primer presidente del Tribunal Superior Agrario expresó bien esta idea en su artículo sobre los orígenes de los tribunales agrarios: "El proyectista resumió los datos que sustentarían la reforma en un breve conjunto, sobre el que se montó la exposición de motivos de la iniciativa de ese año: incremento general de la población, destinataria final de una producción agrícola que debía ser cada vez más abundante y oportuna; aumento de la población campesina: no en números relativos -donde se presenta un decremento drástico-, sino en números absolutos;

agua), o acerca de la organización interna (por ejemplo, la falta de asambleas), se resolvían en los tribunales locales o regionales como cualquier otro conflicto entre particulares, mientras que los juicios de amparo relacionados con las expropiaciones se acumulaban en los tribunales de apelación que se ocupan de las decisiones presidenciales. Estos tribunales tienen una tendencia a proteger a las personas de las decisiones del gobierno y, por lo tanto, muchos propietarios privados amenazados con la expropiación obtuvieron protección judicial, mientras que las instituciones agrarias a cargo de continuar con el proceso legal apelando las sentencias de los jueces carecían de los recursos y la capacidad de defender sus casos.

En 1992, la estructura jurídica, que había sido útil para una gestión política de la distribución de la tierra, estaba saturada de peticiones de tierras, bloqueos a las resoluciones y otros numerosos casos que se acumulaban en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) o se encontraban dispersos entre los tribunales locales de todo el país. Los conflictos eran diversos y muchos de ellos habían llevado a la violencia, sobre todo entre campesinos. A esta situación coadyudaban las distintas leyes estatutarias, que no sólo eran contradictorias y dilatorias, sino también anacrónicas, y en muchos casos promovían la discrecionalidad en vez de la legalidad en las decisiones de los diferentes actores, incluidos los jueces, produciendo una situación en la que el acceso a la justicia era sistemáticamente negado a los campesinos que carecían de dinero para pagar asistencia legal privada.

El problema de un sistema jurídico deficiente para hacer frente a las numerosas cuestiones que rodeaban la distribución y más tarde el uso adecuado de los recursos, había sido señalado ya en 1940 por intelectuales y juristas, quienes proclamaban que el aparato burocrático en conjunto con el ordenamiento jurídico eran una carga que obstaculizaba los objetivos de la Constitución y jugaba principalmente en contra de los campesinos en su búsqueda por la tierra. Estos primeros críticos tendían a fundamentar sus reclamos en la obligación del Estado para proteger los intereses de los campesinos (hijos predilectos de la Revolución) y asegurar una distribución justa y productiva de los recursos del país. A diferencia de ellos, sin embargo, la crítica neoliberal y el impulso de una reforma del

agotamiento de la tierra disponible; pulverización o atomización de las propiedades rurales o áreas de tenencia; insuficiencias en la economía del campo; incompetencia para afrontar las circunstancias y las demandas del mundo globalizado. El efecto de esos factores se concentró en una palabra: injusticia" (Sergio García Ramírez, *Origen, fundación y perspectivas de los Tribunales Agrarios*, 2002).

sistema jurídico agrario se basó en principios opuestos que vinculaban un sistema jurídicamente justo con la garantía a la propiedad individual y la limitación de la intervención gubernamental. Si bien antes la pregunta era acerca de la continuidad de la distribución y la protección de la propiedad social, en 1992 se puso el acento en la transformación de la propiedad social y el fin de la distribución.

Una vez que la reforma fue aprobada, una completa evolución institucional se llevó a cabo mediante el establecimiento de 42 tribunales agrarios (Tribunales Unitarios Agrarios), un tribunal de apelación (Tribunal Superior Agrario) y un órgano diseñado para actuar como defensor agrario (Procuraduría Agraria, al frente de la cual estuvo Arturo Warman). Entre 1992 y 2005, los nuevos tribunales trataron más de 350 mil conflictos, y hacia el final de ese período un poco más de 25 mil aún esperaban ser resueltos.³⁴ Todo ello ofrece una idea global del retraso en la impartición de justicia en el campo. De todos los conflictos, casi 12 mil (38%) se dirigió inmediatamente al Tribunal Superior Agrario, lo que significa que en esos casos había una sentencia en espera de la ejecución (algunos de ellos habían sufrido un retraso de más de 20 años). Un número importante de problemas atendidos por los Tribunales Agrarios estaban relacionados con la tenencia de la tierra y la sucesión, pero también había otros que tenían que ver con el reconocimiento del estatus, la participación en asambleas, el acceso al agua, el uso de senderos y caminos y, por supuesto, los conflictos de límites.

Tres cuestiones destacan de la creación de los tribunales y la separación de la justicia agraria:

1. Se fomentó la evolución de una jurisprudencia específica.
2. Se desviaron las tensiones generadas por la intervención directa de las distintas autoridades (locales, regionales y federal).
3. Se limitó el papel de intermediario de las grandes organizaciones, tales como la Comisión Nacional Campesina o el Frente Campesino, que usualmente habían manejado las demandas u operaban como defensores de los campesinos.³⁵ Estas últimas funciones las realiza ahora la Procuraduría Agraria.

³⁴ Síntesis de la Actividad Jurisdiccional, Tribunal Superior Agrario, en http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/Act_juris/jul21-may312005.htm, consultado el 12 de octubre de 2006.

³⁵ En lo que se refiere a las organizaciones, resulta relevante el número 5-6 de mayo de 1992 de la Revista *Cuadernos Agrarios*, que recoge muchos trabajos críticos, incluidos apuntes sobre las organizaciones campesinas, en el momento de la reforma.

Desde su creación, la Procuraduría Agraria ha sido una organización central para la materialización de la enmienda de 1992. Es el organismo mediador entre los campesinos y la Secretaría de la Reforma, el Registro y los Tribunales agrarios; se encarga de la promoción y aplicación del programa de titulación, y también realiza investigación sobre los conflictos agrarios. Esta gama de actividades ha puesto a la Procuraduría en el centro de muchas disputas entre campesinos y entre organizaciones, y por tanto no es raro encontrar alguna de sus oficinas tomada por grupos locales. No obstante, ha servido como un canal para ordenar las controversias y, es preciso reconocerlo, ha adquirido una buena reputación entre los campesinos.

Entre 1992 y 2006, la Procuraduría Agraria participó en más de 300,000 conflictos, 70%, de los cuales estaban relacionados con la posesión de parcelas o la sucesión.³⁶ La Procuraduría también interviene o ayuda a los ejidos en la formación de las empresas, pero su papel más relevante ha sido su mediación entre los ejidos y todas las instituciones que participaron en la ejecución del programa de titulación, que proporcionó la materia de base para la transformación del régimen ejidal.³⁷

Asegurando posesión mediante la certificación

La herramienta básica para la aplicación de la reforma fue el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE). Sus objetivos centrales fueron medir y certificar a los ejidos y comunidades, renovar el registro de la propiedad social (Registro Agrario Nacional - RAN) y elaborar títulos y certificados que garanticen los derechos de propiedad de los miembros reconocidos de los ejidos. Este registro incluye listas de herederos de todos

³⁶ La relación entre los conflictos de posesión de y de sucesión se correlacionan con la cantidad de parcelas en comparación con las tierras de uso común. Así, en fincas con un nivel relativamente alto de fragmentación de la tierra como en los estados de Veracruz y México, el 31% y 32% de los ejidos, respectivamente, fueron atendidos respecto a los problemas de tenencia de las parcelas; mientras que en Yucatán y Sinaloa, donde existen importantes áreas de uso común, los porcentajes de conflicto sobre posesión fueron sólo del 4% y el 15% respectivamente, mientras que 63% y 45% tuvieron que ver con la sucesión (PA, Estadísticas Agrarias, 2006).

³⁷ En 1994, 181 ejidos recibieron asistencia sobre esto en particular, pero en 2000 ese número había crecido hasta 1,184 y en 2005 alcanzó un pico de 3,914 para retroceder a 2,805 en 2006 (PA, Estadísticas Agrarias, 2006). En comparación con el número total de ejidos y comunidades del país, más de 30 mil, esta actividad sigue siendo marginal; sin embargo, importante.

los beneficiarios con derecho a la tierra, con el fin de ordenar y asegurar los derechos de herencia.

Reconociendo la heterogeneidad en la forma en que la tierra ejidal estaba distribuida y era utilizada por los ejidatarios, sus familias y otros miembros de las comunidades, el PROCEDE no contemplaba mecanismos o limitaciones para garantizar un reparto equitativo de los recursos, ni siquiera entre los ejidatarios.³⁸ Esto estaba también relacionado con el principio básico de liberación de los ejidatarios de la supervisión del Estado, el reconocimiento de su madurez y la promoción de una mejor asignación de sus recursos.

Aunque el proceso de asignación de derechos recaía en las decisiones de las asambleas de cada ejido, una vez certificados y entregados los títulos a las personas, la Asamblea (el órgano que en última instancia unificaba a los ejidos) perdió su capacidad para recuperar el control sobre la tierra o retirar derechos, por lo que su poder quedaba, de hecho, limitado.³⁹ Esta situación atrajo la crítica pública, debido a que a través del aseguramiento de la tenencia individual, el colectivo se puso en riesgo.⁴⁰ Sin embargo, las asambleas obtuvieron la facultad de reconocer nuevos ejidatarios en caso de que alguien tratase de transferir su o sus derechos. También pueden permitir la separación de parcelas del ejido, así como decidir el tránsito hacia el dominio pleno, es decir, la disolución del ejido.

La falta de información geográfica confiable fue una preocupación constante de todos los diferentes gobiernos desde el siglo diecinueve (Craib, 2004); y durante la reforma agraria, la medición y cartografía de la tierra distribuida fue una inagotable fuente de problemas. La información geográfica defectuosa se convirtió en un obstáculo perenne para la distribución, pero más tarde dio lugar a aberraciones tales como la distribución de tierras no existentes o solapamientos entre los ejidos. Para solucionar definitivamente este añejo problema, una importante obra de ingeniería organizacional se puso en marcha. El PROCEDE fue dirigido por la Secretaría de la Reforma Agraria y por la Procuraduría Agraria, que proporcionaron información sobre las resoluciones presidenciales,

³⁸ Reglamento de la *Ley Agraria* en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Expedido por Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de enero de 1993, en el *Diario Oficial de la Federación*, el 6 de enero de 1993.

³⁹ En el caso de los comuneros, la situación es ligeramente diferente, ya que las asambleas mantienen un mayor control sobre los recursos.

⁴⁰ Por el contrario, la respuesta oficial a esta observación es que las asambleas eran de hecho centrales en la producción de las desigualdades y la inseguridad entre los ejidatarios, y que la falta de certificados individuales era un obstáculo incluso para conocer el alcance de estos problemas.

promovieron el programa entre los ejidatarios y vigilaron que su aplicación se realizara siguiendo las reglas de procedimiento establecidas en la ley. La recién creada Procuraduría abrió oficinas regionales y locales, mientras que la Secretaría se concentró en poner en orden las resoluciones presidenciales y organizó el Registro Agrario Nacional con la ayuda de otras instituciones, como el Archivo General de la Nación y el Centro de Investigaciones Antropológicas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estuvo a cargo del conjunto de actividades técnicas relacionadas con la medición y cartografía. Por último, todas las instituciones gubernamentales fueron llamadas a facilitar el proceso. Así, el Instituto Nacional Indigenista (ahora transformado en Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión para la Regularización de Tierras Urbanas y la Secretaría de Agricultura, ayudaron en la promoción y, en última instancia, comenzaron a utilizar los certificados del PROCEDE como requisitos para ingresar en algunos de sus programas de asistencia.

Junto a sus características organizacionales y sus recursos, un aspecto relevante del PROCEDE fue su orientación hacia la solución de conflictos. Los procedimientos se realizaron de forma individual, cada uno de los ejidos fueron asistidos por separado. En los casos en que existían conflictos internos, los funcionarios trataban de ofrecer diversas alternativas, incluyendo la no asignación de los derechos de algunas secciones del ejido. Como se mencionó, esto significaba que no existían normas o guías obligatorias para garantizar una distribución justa de la tierra o para definir usos específicos en determinadas zonas de los ejidos, ya que el objetivo central del programa es resolver los conflictos con la menor intervención posible (Appendini, 2001). Este enfoque demostró ser muy eficaz, y hacia 2004 casi todos los ejidos y las comunidades habían sido certificadas o estaban en proceso de serlo.⁴¹

* * *

La transformación del régimen ejidal, incluyendo el marco institucional

⁴¹ Cabe señalar que el programa no ha afectado a las propiedades privadas y que no hay un registro nacional de explotación privada que contribuya a prevenir de manera eficaz la acumulación de tierras y la formación de las grandes explotaciones. A pesar de ello, y aunque se estableció hace casi una década antes, el programa puede servir como un buen ejemplo de los principios para la administración adecuada de los terrenos aportados por la Declaración Bathurst, que se presentó ante las Naciones Unidas en 1999 (UN-FIG 1999; ver también Williamson 2000).

creado para hacer frente a las cuestiones agrarias, puede ser interpretada como una medida para hacer coincidir los marcos jurídico y de organización agraria con las políticas agrícolas implementadas por los gobiernos mexicanos desde principios de los años ochenta. En este sentido, fueron parte de una estrategia de modernización que trató de romper las barreras que dejaban a una porción de las tierras productivas del país fuera del alcance de la inversión privada y, al mismo tiempo, permitía que una fracción de la población rural resistiera su transformación en trabajadores asalariados (proletarios) o, de otra manera, se convirtieran en empresarios agrícolas.

Como se analizó en el capítulo anterior, para los estudiosos liberales como Lamartine Yates, los reglamentos ejidales tenían gran parte de la culpa de la crítica situación de la agricultura de la nación, el carácter de subsistencia de las unidades de producción y la permanencia de las formas atrasadas de organización que limitan las elecciones y oportunidades individuales. Para los comentaristas críticos, sin embargo, este carácter de subsistencia era un aspecto central de las relaciones productivas que permitía a los campesinos reproducirse como clase social. Al menos para los campesinistas, esto también implicaba la persistencia de relaciones horizontales entre los productores, que son una característica importante de las formas comunitarias de organización.

Por razones distintas de las que enarbolaban los liberales, el debate campesinista cuestionó a la reforma agraria por la forma en que había renunciado al principio de la transformación social de las zonas rurales. Por un lado, la postura descampesinista llegó a la conclusión de que el ejido actuó principalmente como un mecanismo de dominio y retardó el proceso de proletarización que, eventualmente, podía dar lugar a una transformación revolucionaria del país. Por otra parte, si bien se aceptaba la idea de que el ejido se impuso a los campesinos, la postura campesinista reconocía en él un espacio de libertad y autonomía. En su perspectiva, el ejido tenía que ser protegido y, sin embargo, también transformado. En cualquier caso, los que estaban tratando de poner en duda, al menos en el terreno de las ideas, el avance de las políticas neo-liberales, llamaban a una transformación integral de la relación entre las ciudades y el campo, y entre el Estado y los distintos agentes presentes en las zonas rurales.

SEGUNDA PARTE

LA FLOR Y LA PROMESA.

TRES EJIDOS DE LA HUASTECA ANTE LA REFORMA DEL EJIDO

LA FLOR

En 1992 existían tres posiciones frente a los resultados potenciales de la reforma. Por un lado, sus promotores, tecnócratas encabezados por el presidente Salinas, preveían una nueva era de justicia, productividad y desarrollo: los campesinos, ahora “sujetos” y no “objetos” del cambio, iban a poder elegir en qué, cuándo y con quién utilizar sus tierras. Aunque la protección de los ejidos se conservó nominalmente y se mantuvieron también los límites a la extensión de las propiedades, amplias zonas del país iban a abrirse a la inversión privada. Con menos riesgo moral y regulación, los ejidatarios que tenían tierra y mano de obra pero carecían de capital podrían establecer empresas mixtas. Los conflictos de larga data sobre límites y tenencia quedarían definitivamente resueltos con la aplicación de avanzada tecnología para el mapeo. El acceso a la tierra para los que carecían de ella iba a ser facilitado por la consolidación de los mercados de arrendamiento previamente ilegales y no reglamentados, y por la formación de un mercado de compra-venta apoyado por el gobierno mediante una política de bancos de tierras y créditos para adquirirlas (Salinas, 1993).

Por otro lado, había una posición crítica que aunque reconocía la necesidad de justicia y cambios en el campo, se oponía a la reforma por las posibles amenazas a la seguridad en la tenencia a largo plazo, la transferencia masiva de tierras desde el sector social al privado, la reconstitución de los latifundios a través de la formación de sociedades anónimas, el abandono de las políticas nacionales de producción y la consolidación de un programa de “administración de la

miseria” en las zonas rurales.⁴² A casi dos décadas del cambio constitucional, ninguna de las dos posturas contrastantes ha sido plenamente corroborada.

Una tercer postura fue la encabezada por A. Warman, quien desde el terreno de la izquierda académica se involucró activamente en un proceso de cambio que consideraba inevitable y contradictorio, aunque sustentado en demandas de racionalidad y justicia adecuadas a una democracia moderna (Warman, 2001: 53-11).⁴³ Esta postura, que puede ser calificada de pragmática, fue relevante en la medida en que sirvió de puente entre distintos agentes y presionó por la incorporación a la discusión de voces que hubiesen quedado mudas si el debate se hubiese polarizado por completo; además, impulsó una actitud conservadora de lo que consideraba era un aspecto clave para los campesinos: su organización colectiva. Si el ejido subsiste hasta ahora, es en una parte importante gracias a esta posición mediadora.

Pasados casi diez años de la enmienda, el Banco Mundial publicó algunos estudios sobre la situación del campo y de los ejidos (1999, 2001). Estos análisis, basados en información agregada a escala nacional, compartían una actitud positiva hacia la reforma, pero sus resultados no fueron concluyentes en casi nada, excepto en las mejoras en los mercados de arrendamiento. Así, en el año 2001, el banco no encontraba ningún cambio importante en la inversión, ni transferencias notables a la propiedad privada y sí pocas empresas mixtas, mientras que los programas del gobierno mexicano no habían dado lugar a grandes inversiones o a la reducción de la pobreza rural (Banco Mundial, 2001: 52-53). Similares conclusiones se presentaron a finales de 2006 por la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo (OECD); sin embargo, mientras el Banco Mundial apostaba a los impuestos y las mejoras institucionales para facilitar la transformación de la estructura agraria, la OECD culpaba a la continuidad normativa del régimen ejidal por la falta de cambio en el sector rural, en particular en lo que se refiere a la reticencia de los ejidatarios para adoptar el dominio individual de sus tierras, debido a que la nueva regulación requiere aún que las asambleas acepten la separación de los individuos del ejido. Así

⁴² Para una amplia colección de puntos de vista críticos en el momento de la Enmienda Constitucional, ver *Cuadernos Agrarios*. 1991, 3 y 1992, 5-6.

⁴³ Al momento de la reforma, A. Warman era director del Instituto Nacional Indigenista y en sus propias palabras indicaba que: “lo que la propuesta atiende es un problema de la democracia. Ni protección contra su voluntad ni decisión individual por encima de la decisión del grupo; respeto a nuestros conciudadanos y confianza en su sabiduría. El fin del paternalismo, en pocas líneas” (SRA, 1998: 84).

pues, la OECD pedía *respetar los derechos de propiedad privados y públicos y eliminar la propiedad comunal de la tierra, suprimir las limitaciones a la propiedad privada y ayudar a privatizar los ejidos* (OECD, 2006: 12-13). Justamente en sentido contrario apuntan las conclusiones de Jesús Morett Sánchez, para quien lo más rescatable del ejido es la experiencia de organización que ofrece a sus miembros (2003: 204-205).

La publicación del informe de la OECD y las visiones contrastantes presentadas por la literatura académica sobre las limitaciones e implicaciones de la modificación del Artículo 27 de la Constitución Nacional, apuntan a la continuidad del debate sobre los derechos de propiedad y el desarrollo rural en México (Randall, 1996; Cornelius, 1998; Snyder, 1998; Moguel, 1998; Gordillo, de Janvry y Sadoulet, 1999; Morett, 2003; Otero, 2004; Robles, 2005).

La forma en que se implanta el régimen de propiedad es altamente dependiente de los contextos locales o regionales, y en México la diversidad constituye un obstáculo para la presentación de pruebas concluyentes sobre tendencias y consecuencias generales de la liberalización de los ejidos. Este problema se puede ejemplificar con dos artículos sobre los resultados de la reforma en distintas regiones. En uno de ellos, Harenn (2006) observó la resistencia, a través de prácticas locales de lucha, a la adquisición de derechos individuales privados en ejidos del sur de Campeche. Por el contrario, Lewis (2002) encontró una tendencia hacia la privatización en el valle del Yaqui en Sonora, una zona altamente productiva y comercial. Las diferencias ambientales, culturales y de desarrollo entre Campeche y Sonora, son fundamentales para comprender las variables tendencias y la velocidad de los procesos de privatización.

Entre regiones, un aspecto central de la heterogeneidad ejidal es la diferenciación social ligada a la producción (Warman, 2001: 91). Como se planteó ya con respecto al debate campesinista, este asunto sugiere problemas heurísticos importantes debido a que entre las economías campesinas de subsistencia y las agro empresas capitalistas existe una amplia gama de matices, además de que atendiendo a la patente diversidad, los agregados estadísticos ayudan poco a comprender los mecanismos y/o procesos a través de los cuales los ejidos y los ejidatarios se están efectivamente transformando.

Calidad y tipo de recursos disponibles en los terrenos ejidales, tecnología, etnicidad, economía, cultura y política locales, son elementos contextuales que dificultan la generalización de conclusiones sobre los resultados de la enmienda de 1992. De una u otra forma, todos refieren al carácter situado de las relaciones de propiedad de la tierra, a la dimensión espacial y territorial de los procesos

involucrados en la reproducción de todo régimen de propiedad entendido como un arreglo perdurable de las condiciones que median el acceso y uso de la tierra y sus recursos. Este carácter situado tiene un conjunto relevante de implicaciones. La primera: es posible *localizar* los procesos implicados en la reproducción de cierto régimen, por lo que se puede mapear procesos y condiciones y así ponerlos dentro de marcos de referencia estandarizadas (por ejemplo, las divisiones administrativas y sus escalas asociadas). Una segunda implicación, tal vez menos atendida: es posible comprender la dinámica espacial misma como asunto relevante en el desarrollo del problema y no sólo como contexto. Así las cosas, es posible, y deseable, observar las relaciones espacialmente significativas entre los procesos estudiados, como puede serlo, por ejemplo, la tendencia al uso fraccionado de la tierra promovida por la agricultura de milpa, que se enfrenta a la incorporación de terrenos para la cría extensiva de ganado.

Este estudio pretende aproximarse a la forma en que la institucionalidad comunitaria, la organización productiva y el contexto geográfico en los ejidos, afectaron e interactuaron con el cambio institucional impuesto en 1992, no con la finalidad de vislumbrar el futuro de la propiedad social en México, sino para aportar a la producción de modelos descriptivos y de análisis más adecuados de las interacciones entre calidad de la tierra, organización social y sistema de propiedad. Tales interacciones son tema de trabajo de una corriente dentro de la economía institucional conocida como la escuela de los comunes, que encabeza Elinor Ostrom.

Si bien la ejidal no es un tipo de propiedad común debido a que admite y hasta promueve la fragmentación y explotación individual de la tierra, alrededor de la mitad de los terrenos ejidales son de uso común y se trata, además, de un arreglo que mantiene una institucionalidad de tipo colectivo. Así las cosas, resultan interesantes los planteamientos desde la perspectiva del análisis institucional sobre los mecanismos de regulación más eficientes para cuidar los bienes de uso común, porque introducen de forma cabal el carácter situado de todo arreglo de propiedad. Para esta perspectiva, las características relevantes de los recursos son su divisibilidad y la tasa de reproducción y tipo de unidades apropiables (ver, por ejemplo, Devlin y Grafton, 1999).

El supuesto subyacente en la economía institucional es que acuerdos de uso común surgen sobre recursos homogéneos, difíciles de sostener o de dividir. En su obra clásica sobre los regímenes de propiedad común, Ostrom integró la calidad del recurso dentro de lo que denominó los *principios de diseño* y *rendimiento institucional* de los regímenes de propiedad común (Ostrom, 1990:

180). Forma parte de las variables que influyen la *elección institucional*, llamadas *variables situacionales que afectan la información acerca de los beneficios netos*: número de apropiadores, el tamaño del Recurso de Propiedad Común (RPC), la variabilidad temporal y espacial de las unidades de recursos, el estado actual del RPC, las condiciones del mercado para cada unidad del RPC, entre otros (Ostrom, 1990: 197). Cabe preguntarse si no se colocan demasiadas cosas bajo el mismo paraguas, cómo estas variables interactúan entre sí y si existen patrones o relaciones regulares. El carácter situado de los arreglos de propiedad, la condición de las unidades de recursos y su variabilidad espacial podrían agruparse y conformar un componente aparte de los principios de diseño y desempeño institucional del régimen. Por último, la calidad del recurso, en este caso la tierra, considerada en un contexto productivo específico, debe formar parte nodal de cualquier consideración sobre algún modelo de diseño institucional de un sistema de propiedad.

FIGURA 2
MODELO SIMPLE DE LOS NEXOS ENTRE TIERRA, ORGANIZACIÓN
Y DERECHOS DE PROPIEDAD

Se puede proponer un modelo simple que derive el modelo de propiedad sólo de la calidad del recurso, como el presentado en la Figura 2. Sin embargo, existen al menos tres problemas que limitan la utilidad de un modelo tal: 1. La organización social y productiva son co-extensivas con la selección institucional; 2. Las oportunidades productivas se definen en parte frente a la economía regional y la organización global de los mercados y –que también afecta a la calidad relativa de la tierra–, y 3. Las estrategias productivas juegan un papel importante en la definición de la calidad, por lo que no es *necesariamente* correcto que la calidad de la tierra defina de manera inversa a las estrategias.

Aunque las estrategias para la distribución de la tierra no se pueden derivar de la calidad de la tierra, resulta claro que están de alguna forma adaptadas a ella. Se precisa entonces de un esquema más complejo como el que presenta la Figura 3. Ahí la calidad de la tierra interactúa directamente con las reglas de acceso y exclusión que están relacionadas por el marco legal pero no se limitan a él, sino que son afectadas además por la disposición de tecnología y por las demandas del mercado.

FIGURA 3
MODELO EXPANDIDO DE LOS NEXOS ENTRE TIERRA, ORGANIZACIÓN
Y DERECHOS DE PROPIEDAD AD

Las reglas para el acceso/exclusión, aquellas que definen estrategias locales de interacción entre el espacio territorial y social de las personas y grupos, como los permisos temporales para la ocupación de una parcela a cambio de trabajo en terrenos comunales o el empastado de terrenos para su explotación como potreros, son evidentemente mediadores entre las estrategias de producción, las comunidades y el régimen de propiedad en sí. Como lo quiere sugerir el diagrama, estas reglas no son definidas por el régimen de propiedad, aunque se ven limitadas o pueden ser *facilitadas* por el mismo. Las reglas son sancionadas socialmente, pero para que permanezcan en vigor se acomodan a las condiciones productivas (tipo de fuerzas y calidad de recursos) y políticas (fin del corporativismo agrario, democratización/partidización, cambio de régimen).

Ninguno de estos elementos es estable y, por supuesto, afectan a su vez a la organización social de la que emanan las reglas mismas.

El dispositivo analítico que ofrece este modelo de aproximación al problema del régimen de propiedad, guiará la comparación de los procesos de titulación y los resultados de la misma en tres ejidos vecinos del municipio de Ixhuatlán de Madero, al norte del estado de Veracruz, en la Huasteca. Respondiendo al principio metodológico elemental de que una comparación fructífera es aquella que contrasta sistemáticamente objetos semejantes, los tres casos muestran características similares en cuanto a edad, razón hombre-tierra en la dotación original, carácter étnico y tecnología de explotación; además, al ser contiguos, comparten una buena parte de condiciones ambientales (todas las relacionadas con el clima, por ejemplo), mientras que las diferencias son especificables y controlables en el análisis. En un entorno donde no sólo existe la interacción entre propietarios particulares y ejidos, sino entre ejidos mismos, el estudio de tres casos contiguos permite atender de manera más cabal este asunto.

En una región de marcadas diferencias geográficas y étnicas y donde la distribución de la tierra fue un proceso espasmódico más que continuo, el estudio de tres ejidos contiguos permite el control de las diferencias históricas, culturales, productivas y ambientales, además de que abre la oportunidad de abordar la relación entre ejidos dentro del proceso estudiado. Los aspectos comparados se refieren a: 1. La evolución de los ejidos en el marco de la legislación derogada (productividad, migración, conflictos por la tierra); 2. La relación entre la organización ejidal y comunal (territorialidad, complejidad, estructuras de autoridad, redes y grupos); 3. El proceso de aplicación del programa de titulación (tipo de normas y mecanismos de consenso para aplicar la distribución de tierras y derechos); 4. Los patrones de distribución de la tierra y los derechos resultantes del PROCEDE.

Los tres ejidos aquí estudiados no se encuentran en las afueras de alguna ciudad, ni forman parte de los nuevos paisajes industriales o contienen valiosos bosques; no han sido blanco de programas gubernamentales de colectivización y tampoco han recibido apoyo tecnológico. Presentan, sin embargo, algunos problemas comunes del campo mexicano como migración, falta de inversión, tecnología rudimentaria, degradación de la tierra y limitadas oportunidades de realizar su producción en el mercado. Los tres casos tienen características que los colocan dentro de un subconjunto de ejidos: alta fragmentación de la tierra, marginación política y presencia indígena. Estos ejidos se formaron y han subsistido en un particular contexto regional de conflicto agrario, en el que coexisten caciques, hacendados y comunidades. También forman parte de un

gran número de ejidos en los que la producción se lleva a cabo principalmente con fines de subsistencia, por lo que las opciones de desarrollo disponibles para quienes viven en ellos expresan los conflictos que afectan a la mayoría de los campesinos de México.

Breve panorama histórico-regional de la Huasteca⁴⁴

Mucha tinta ha corrido en torno a qué criterios permiten definir a un espacio o un territorio como región. No es preciso entrar aquí en una polémica episódica, sino que basta señalar que se toma distancia de aquellas posturas de tipo objetivista y esencialista que adjudican a las regiones algo así como “vida propia”, basándose en criterios predominantemente geográficos o ambientales. La Huasteca es un instrumento heurístico que permite situar a un territorio moldeado históricamente, cuyas fronteras, límites y rasgos distintivos se encuentran en permanente redefinición. Como otras regiones indígenas del país, refiere a un espacio étnica y geográficamente complejo, marcado a lo largo de los siglos por la presencia de pueblos cuyas dinámica socio-demográfica y estrategia de apropiación del espacio han logrado superar los repetidos intentos de los estados Colonial y Republicano por desplazarlos o aniquilarlos.

La Huasteca⁴⁵ prehispánica, que al momento de la Conquista se extendía desde las planicies costeras al norte de Tuxpam en el Golfo de México, hasta las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, hoy se presenta fracturada en dos grandes porciones. Por un lado, la Huasteca norte, caracterizada por el predominio de las actividades ganaderas y la virtual ausencia de población indígena situada en sus territorios ancestrales. La parte restante, correspondiente a la zona geográfica más compleja y situada hacia el sur oeste de la gran planicie costera de Veracruz y Tamaulipas, alberga a un grueso volumen de población india, comprendiendo a grupos etnolingüísticos relacionados entre sí desde el periodo precolombino: *teenek* o huastecos, nahuas, otomíes, tepehuas y totonacos. En la porción más meridional, conviven los últimos cuatro grupos

⁴⁴ Este apartado presenta una versión modificada de algunos planteamientos vertidos en la ponencia *Revolución y reforma en la huasteca veracruzana*, escrito junto con Julieta Valle Esquivel y que fue publicado como capítulo en Rubio y Valle, 2010.

⁴⁵ Es convención entre los especialistas emplear la denominación de “Huasteca” para el periodo prehispánico, reservando “Huasteca” para nombrar a la misma región después de la conquista española.

y encuentran su nodo más abigarrado de coexistencia en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz (ver Figura 4).

FIGURA 4
IXHUATLÁN DE MADERO EN LA REGIÓN HUASTECA

La Huasteca se caracterizó, hasta entrado el siglo veinte, por la dispersión de sus poblaciones, la baja densidad demográfica y el aislamiento geográfico. Estos rasgos apenas comenzaron a revertirse hacia finales de la década de 1950, cuando se concluyó la construcción de la carretera México-Tampico. Sin embargo, esta situación no fue siempre la dominante, pues en otros momentos de la historia, la región jugó un papel importante como paso del centro-norte del país hacia la costa, como proveedora de alimentos y materias primas para el mercado interno y otros situados al otro lado del Golfo de México o del Atlántico. Más bien, el ensimismamiento de la Huasteca se consolidó en algún momento entre el siglo XIX y las postrimerías de la Revolución.

Existen pocos informes del período colonial temprano en la Huasteca, incluidas las crónicas de tres personajes que la visitaron a mediados del siglo

XVII. Entre éstas se ha destacado el testimonio de fray Nicolás DeWitte, quien en 1554 comparó la estructura política de la Huasteca con la de las Ciudades-Estado italianas de su época. Debido a que la ocupación española de la región supuso un fuerte conflicto entre Cortés y Francisco de Garay, quien reclamaba derechos sobre esta parte del nuevo territorio, y a que los informes tempranos dan cuenta de una drástica merma de la población, semejante observación debe ser tomada con sumo cuidado (Pérez, 2001: 21-22). Sea como fuere, este patrón no perduró mucho tiempo, ya que la política colonial de formación de pueblos de indios, sometidos administrativamente a villas españolas que gozaban de la condición de cabeceras de Alcaldía Mayor, dio pie a la reconstitución de la territorialidad indígena mediante patrones más centralizados que antaño (debido a la política de congregaciones) e implicó la formación de importantes centros urbanos como Ciudad Valles (antes Villa de los Valles de Oxitipa), Huejutla, Chicontepec o Tantoyuca (Valle, 1998).

Al proceso de recomposición de la territorialidad india se le sumó el paulatino establecimiento de unidades poblacionales no indias y de empresas productivas españolas (ranchos ganaderos y plantaciones de caña, principalmente), que arrinconó a la población indígena mayoritaria en la zona serrana, donde hasta bien entrado el siglo XIX los pueblos mantuvieron cierto control sobre la tierra y la mano de obra. Esto supuso una suerte de aislamiento y el desarrollo de una marcada segregación racial; la tajante distinción entre blancos e indios, los primeros ocupando las planicies costeras y los segundos apostados en las zonas altas, la bocasierra y las abruptas cañadas de la Sierra Madre Oriental. Aún hoy ese patrón se advierte en la región: el paisaje huasteco se extiende sobre la línea que separa los llanos cubiertos de pastura, de los montes y cañadas donde se ubican los indios y sus milpas.

Dentro de este universo, el municipio de Ixhuatlán de Madero destaca por su multienicidad, a pesar de no estar situado en la zona más compleja –en términos orográficos– de la Huasteca meridional. Sus orígenes como pueblo de indios se remontan a la condición de sujeto de Santa Catarina Chicontepec, impuesto por las autoridades coloniales desde finales del siglo XVI. Sin embargo, la enorme extensión geográfica de este pueblo, junto a las dificultades de tránsito originadas por la inexpugnable maraña de ríos, lomeríos y cañadas que lo atraviesan, más las pugnas entre diversos grupos de poder anidados en el seno de la sociedad india, permitió que se concediera la separación al pueblo de San Cristóbal Ixhuatlán a finales del siglo XVII. Así, se constituyó una nueva cabecera que, a su vez, contenía un número de pueblos sujetos, habitados por

gente de diferente filiación lingüística. La proximidad de importantes haciendas españolas, como la de Cacahuatengo, hizo aún más compleja la composición etnodemográfica de lo que sería más adelante otra vez un sujeto de Chicontepec durante el periodo republicano. Conforme a los vaivenes administrativos propios de la centuria decimonónica, el municipio se constituyó finalmente en 1935, albergando una población diversa (mayoritariamente indígena) y porciones de lo que había sido el territorio del pueblo de San Cristóbal, sus sujetos y partes de las haciendas vecinas que después fueron desmembradas.

A pesar de que la Huasteca llegó al fin del periodo colonial aquejada por la tensión social derivada de la resistencia a las últimas reformas borbónicas que habían modificado impuestos y establecido monopolios que afectaron al conjunto de la población, su participación en la gesta de Independencia fue más bien marginal (Escobar, 1991). En cambio, los abusos de poder y la intervención en la elección de autoridades formaron parte del expediente sobre el que se desataron las revueltas ocurridas desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX. En general, estos disturbios no tuvieron al problema de la tierra como núcleo y más bien las disputas agrarias se dirimieron mediante mecanismos judiciales. Por ejemplo, los largos litigios que sostuvieron los indios de Chicontepec contra los dueños de las haciendas de Cacahuatengo y de la Pastoría y Camaytlán, se llevaron a término enmarcados por la última gran oleada de composiciones de tierras, acaecida a partir de 1715 (Valle, 2003). Otros conflictos, de carácter más local, como la reubicación de terrazgueros pertenecientes a los pueblos en poblados de hacienda, no redundaron en turbas, motines o enfrentamientos violentos de mayor envergadura.

A pesar de la fuerte presión sobre los recursos que había provocado la recuperación demográfica indígena combinada con la existencia de haciendas de tamaño considerable y la abundancia de ganado mayor en el norte de la región, la violencia rural en la Huasteca sobrevino hasta finales de la década de 1840, cuando se sublevaron los nahuas de Chicontepec, comandados por figuras destacadas de la oligarquía regional. A partir de entonces, y hasta finales del siglo XIX, se sucedieron varias rebeliones que fueron tildadas de “Guerras de castas” por el ejército y la prensa (Valle, 1995).

De mayor trascendencia resulta un fenómeno bien estudiado por los especialistas en la historia regional de la Huasteca: frente a las políticas liberales, emblemizadas por la *Ley Lerdo* de 1856, los pueblos y congregaciones (corporaciones civiles) implementaron estrategias para mantener la propiedad o asegurar el acceso a la tierra, destacando la constitución de condueñazgos y la

formación de poblados de hacienda. En una dimensión distinta, pero también importante, se continuó con la práctica colonial bien conocida por los indios de la Huasteca de escapar al dominio del Estado y sus agentes mediante la fuga a los cerros. Durante el porfiriato, los pueblos desarrollaron una estrategia más, que se puede considerar como *clientelismo corporativo*, y que consiste en la vinculación estratégica con el poder de rancheros y hacendados. En la parte sur, grandes familias terratenientes –específicamente los Cuervo y los Rocha en Ixhuatlán y el sur de Chicontepec– reconfiguraron algunas de las grandes haciendas coloniales como Cacahuatengo y Tlacolula y establecieron otras nuevas de gran tamaño e importancia en términos de la estructura sociodemográfica regional, como Llano de Enmedio, Colatlán y Amatlán. La mayor parte de ellas albergaron a los poblados de hacienda que encabezarían las listas de quienes demandarían dotación agraria a partir de 1920 (Escobar y Gutiérrez, 1999: 203-259).

En el período revolucionario y hasta 1930 en la Huasteca veracruzana, la presencia de la industria petrolera se sumó al crecimiento de la producción cañera, a la consolidación de la economía ranchera y al dominio político-territorial de los municipios por parte de la elite blanca y mestiza. Algunas de las compañías no sólo habían irrumpido en el espacio social de la región, sino además se habían sumado a la ya de suyo dilatada cadena de actores sociales interesados en apoderarse de la tierra. Como ejemplo, en 1912 la United Oil Production compró la gigantesca hacienda de Tlacolula (26,000 hectáreas) que antes había sido condueñazgo (Escobar y Gutiérrez, 1999: 220). El escenario revolucionario regional estuvo dominado además por los ejércitos carrancistas y villistas, lo cual probablemente tuvo que ver con el hecho de que la estructura de propiedad agraria sufriese pocos cambios durante la guerra y en el período inmediato posterior, a pesar de la vocación explícita del caudillo y gobernador Cándido Aguilar (yerno de Venustiano Carranza) por enfrentar el poder de las grandes compañías petroleras mediante acciones que involucraron los primeros pasos de una reforma agraria. Sin embargo, como se sucedió en otros tantos lugares, el reparto auspiciado por la *Ley Agraria* del 6 de enero se vio limitado debido a que pocas comunidades podían demostrar haber tenido alguna vez la propiedad corporativa de la tierra. Un número importante de los campesinos vivían dispersos dentro de las haciendas bajo un régimen mixto de salario e intercambio de tierra por trabajo, por lo que no podía reclamar tierra.

El ascenso de Obregón trajo una consecuencia crucial para la historia de la Huasteca veracruzana: el hombre fuerte de Carranza, Cándido Aguilar, fue

desplazado y su mandato fue sucedido por un breve pero intenso episodio de disputas faccionales que culminó con la llegada a la gubernatura de Adalberto Tejeda (1920-1924 y después 1928-1932). De acuerdo con sus biógrafos (especialmente Romana Falcón, 1986), Tejeda es el ejemplo patente del radicalismo agrario que definió algunos frentes de lucha en la post revolución. Se considera que la influencia de las ideas socialistas y anarquistas, que tan enraizadas se encontraban en territorio veracruzano, aunado al origen rural del caudillo y a la circunstancia de que las compañías petroleras crecientemente se convertían en el blanco de un nacionalismo radical de izquierda, produjeron la primer gran oleada de la reforma agraria, precisamente en esta entidad encabezada por Tejeda. Aunque la mayor parte de las solicitudes hechas a partir de 1922 tardaron años y hasta décadas en resolverse, es atribuible a Tejeda la maniobra jurídica para que una multitud de rancherías fuera elevada a la categoría de congregaciones, lo que les posibilitaba legalmente solicitar tierras, como antaño había sucedido con los pueblos sujetos convertidos en cabeceras “separadas”. En esta región, la diferencia entre pueblos (congregaciones) y poblados de hacienda no jugó un papel muy destacado en la distribución de la tierra, aunque influyó en la relación entre comunidades, y entre éstas y los agentes que gestionaban la reforma agraria (Valle, 2003: 249-251; Schryer, 1990: 136, 233-234).

Desde la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia hasta la década de 1980, 66 ejidos fueron creados en Ixhuatlán, afectando los terrenos de las tres haciendas, sobre todo los de Cacahuatengo.⁴⁶ Aunque al final de la reforma agraria más de 32 mil hectáreas (alrededor del 40%) del territorio municipal habían sido convertidas en propiedad social (véase el Figura 5 y Tabla C), la presión por la tierra continuaba siendo un problema: en 1994, dos años después del fin de la distribución, 25 familias de la comunidad de Cantoyano en la parte sur del territorio invadieron 420 hectáreas de matorrales y formaron un pequeño pueblo llamado Heberto Castillo.

Estructura agraria en Ixhuatlán de Madero

Como es el caso general de México, en la región Huasteca un aspecto primordial de la estructura agraria es la distinción entre la propiedad privada y social. El límite o frontera entre estos dos “sectores” es, no obstante, permeable en el

⁴⁶ Ver Ariel (2003) para una discusión del papel de los certificados de inafectabilidad ganadera en la Huasteca.

sentido de que en ambos casos se presentan prácticas productivas similares. Aunque existen diferencias sociales notables entre propietarios dentro de cada categoría, también hay complementareidades significativas. Esto último es evidente en Ixhuatlán, donde el sector social sostiene a la base trabajadora que permite la reproducción del sector privado-ranchero. Los miembros de los ejidos suelen recurrir a los propietarios privados debido a la limitación o el agotamiento de sus tierras, algunos también poseen tierras fuera de los ejidos, mientras que las nuevas reglas permiten que propietarios privados “entren” en los núcleos agrarios. Así pues, la división entre pequeña propiedad y propiedad ejidal no constituye una clara distinción en términos del acceso a la tierra. Los intercambios entre ambos sectores incluyen la mano de obra, ganado y productos de valor comercial como la caña.

La estructura de propiedad de Ixhuatlán de Madero pone en evidencia el profundo alcance que tuvo la reforma agraria tanto como sus marcadas limitaciones. Muestra al mismo tiempo la extensión del reparto y las contradicciones que subyacieron a la formación de ejidos en todo el país: baja calidad de la tierra, conflictos legales, resoluciones presidenciales inadecuadas y burocracia. También, sin embargo, la distribución de la propiedad en Ixhuatlán expresa el carácter particular que tuvo el proceso agrario en la Huasteca desde antes de la Revolución de la que emergió la Reforma Agraria. Esta última cuestión se refiere al tipo de conflictos vividos durante el siglo diecinueve, a la formación de haciendas de mediano tamaño, al proceso de rancherización, a la peculiar geografía de la región, tanto como a su composición social, marcada por el carácter multiétnico y la presencia de comunidades indígenas mestizadas o mixtas que fueron los principales beneficiarios de la distribución de la tierra (Rubio y Valle, 2010: 507-509).

FIGURA 5
NÚCLEOS AGRARIOS EN IXHUATLÁN DE MADERO

Elaboración propia con Mapa Digital de México, INEGI.

Antes de la Reforma Agraria, las haciendas y los ranchos formaban un régimen dual en el municipio. Por un lado, grandes explotaciones orientadas a la exportación, dependientes de la mano de obra asalariada de los campesinos; por el otro, ranchos propiedad de las elites blancas y mestizas que controlaban el comercio y la política locales, y también establecían acuerdos con los campesinos para sostener sus explotaciones de ganado a cambio de permitir cortos períodos de producción milpera en sus tierras. En la base estaban los campesinos indígenas de cuya explotación dependían las haciendas y los ranchos. Este régimen sufrió modificaciones, aunque no fue destruido por la reforma agraria.

TABLA C BENEFICIARIOS POR TIPO DE ACCESO	
Derecho a	Número
Sólo tierra común	87
Sólo parcela	2578
Sólo solar	1142
Común y parcela	803
Común y solar	11
Parcela y solar	1933
Común, parcela y solar	585
Total	7139

Propiedad y divisiones productivas

En los ejidos hay una minoría que explota importantes extensiones de tierra; en tanto, la mayoría de los nuevos sujetos de derecho que han visto su propiedad garantizada, siguen siendo campesinos semidesposeídos (semi-proletarios rurales) debido al tamaño de sus parcelas. Con base en los resultados del PROCEDA a nivel municipal y los datos censales, es posible señalar que hacia el año 2000, en el Ixhuatlán de Madero, 20% de las familias no tenían acceso seguro a la tierra ni dentro ni fuera de los ejidos, mientras que otro 30% debía incluirse en la categoría de semidesposeídos con acceso seguro a menos de dos hectáreas de tierra (Tabla C). También es posible afirmar que a pesar de la falta de datos precisos, la desigualdad en la distribución de la tierra era más marcada en el sector privado que en el ejidal, debido a que en este último la cantidad de tierra que puede llegar a poseer un individuo no supera las 30 hectáreas. Por supuesto, las desigualdades en extensión son acompañadas también por las diferencias en calidad: la concentración de la tierra afecta sobre todo a las zonas llanas adecuadas para el pastoreo. Excluida de la tierra de mejor calidad, es difícil que la agricultura pueda ser más que de subsistencia. Por último, vale distinguir, aunque sea de forma abstracta, cuatro grandes clases: *a)* grandes terratenientes; *b)* pequeños y medianos rancheros (ejidatarios y propietarios privados); *c)* campesinos sin tierra y semidesposeídos obligados a vender su

fuerza de trabajo, rentar tierra o emigrar; y *d*) un pequeño sector dedicado a los servicios y el comercio ubicado en las ciudades centrales generalmente asociado con *b*) y *c*). Durante los períodos de extensa distribución de la tierra, la formación de ejidos permitió la consolidación de un sector de pequeños propietarios, con lo que el impacto del régimen de propiedad en la estructura social del municipio no puede ser disminuida.

Desde la década de 1970, la fuerza transformadora se fue agotando, y tanto propiedades privadas como ejidos sufrieron invasiones que pusieron en evidencia que el reparto no alcanzaba para transformar social y productivamente al municipio. Esto se expresó en la continua tensión entre campesinos y rancheros, cuyo eje no puede limitarse a la diferencia entre los regímenes de propiedad.

TABLA D USO DE LA TIERRA EN IXHUATLÁN DE MADERO (2003)								
Agricultura (has)		Ganado (has)		Forestal (has)		Otro (has)		Total (has)
16,425	27.4%	32,095	53.6%	10,450	17.5%	911	1.5%	59,881
Fuente: SAGARPA, Información sobre the DDR 1, Huayacocotla, Veracruz, 2003. Nota: Esta información corresponde a todo el distrito que contiene tres municipios; de cualquier forma, Ixhuatlán ocupa dos terceras partes del distrito.								

La Tabla D proporciona una visión general de la medida en que el ganado vacuno dominaba el paisaje productivo en Ixhuatlán a principios del siglo XXI. Si bien se puede presumir que existe una correlación entre ejidos y agricultura, y pastos y propiedad privada, una parte importante de los potreros se encuentra en terrenos ejidales. La relación entre ganado y agricultura es relevante para entender procesos como el fraccionamiento de la tierra; sin embargo, se puede presumir que la expansión de potreros en los ejidos indica un proceso con cierta especificidad. De entrada, la presencia de pastizales en los ejidos no es tan reducida como lo es la de la agricultura entre el sector privado. Además, algunos polígonos ejidales están compuestos de cañadas donde ni agricultura ni ganadería prosperan verdaderamente. Con todo, es normal que las pendientes se utilicen para sembrar maíz bajo el sistema conocido como *tlacolol*, que utiliza una variedad de maíz de rápido crecimiento y raíces profundas (Aguilar, Illsley *et al.*, 2003). A pesar de la alta sofisticación que presenta esta técnica, su potencial productivo es limitado.

La estructura de propiedad en Ixhuatlán de Madero no es el resultado de las políticas de tierras solamente. La reforma agraria no tuvo éxito en producir una distribución equitativa de los recursos, en parte debido a una dinámica productiva basada en la exclusión permanente de la tierra asociada a la producción ganadera durante el siglo XX en su conjunto. Un aspecto central de la producción ganadera en el municipio es su carácter extensivo. Así, del lado del sector terrateniente privado hay una necesidad constante de pequeñas inversiones en la tierra para mantener los rebaños (desmonte, cuidado de los animales y los pastos), que se cubre al permitir a los campesinos hacer milpa por períodos cortos. Por el lado del sector ejidal, los pastos permiten a los campesinos mantener una actividad productiva en tierras cansadas sin excluir de forma permanente la agricultura, como sería el caso si se adoptaran plantaciones comerciales como la naranja o incluso la caña de azúcar.

La Figura 6 muestra la relación entre la producción de maíz y de ganado. En el caso de este último, la información disponible se refiere al distrito de desarrollo rural (DDR) de Huayacocotla, que comprende Ixhuatlán y otros cuatro pequeños municipios vecinos. Como Ixhuatlán cubre un tercio de la superficie total del DDR, y se destaca como el municipio más productivo en todas las actividades, salvo la silvicultura, se puede suponer que la información refleja al menos la tendencia municipal.

La Figura 6 podría sugerir una correlación entre la producción de maíz y de ganado, pero no es posible evaluar la situación real de las existencias bovinas (su calidad, variedad y movilidad, sobre lo cual no existe información), pero además por la dinámica cíclica distinta de cada actividad.

FIGURA 6
PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y GANADO EN IXHUATLÁN (2001-2006)

Elaboración propia con datos de: DDR-Huayacocotla/SIAP-INEGI.

La existencia de importantes sectores de las tierras ejidales para la producción de pastos y la presencia de pequeños ganaderos en los ejidos, confirman que el régimen de propiedad no ha sido impedimento para la reproducción de una dinámica productiva que subordina al maíz y refuerza su carácter de subsistencia.

La economía regional no se limita a la ganadería y el maíz. Caña de azúcar, naranja, e incluso la industria petrolera, han disfrutado de períodos de expansión en diferentes zonas. Estas industrias, que a veces contaban con el apoyo gubernamental, han tenido gran incidencia en el desarrollo de la Huasteca. Cerca de la zona de estudio, la ciudad de Alamo ha crecido en asociación con la agricultura comercial, mientras que ciudades como Llano Enmedio, en Ixhuatlán, han logrado cambiar, al menos parcialmente, la dinámica económica y política local debido a su ubicación estratégica con respecto a las plantaciones de naranja sostenidas en tierras privadas y ejidales. Café, vainilla, chile y plátanos, son también los productos que se pueden encontrar en toda la región. Los pastizales y las mil-

pas, sin embargo, dominan la vida productiva de Ixhualán. En 2006, estas dos actividades ocuparon 81% del territorio. Hay elementos estructurales por encima del régimen de propiedad que ayudan a comprender la continuidad de una dinámica productiva que gira en torno a estas dos actividades: limitaciones y malas inversiones gubernamentales, precios y costos de producción, son elementos que deben tenerse en cuenta para la evaluación de las oportunidades que tienen los nuevos propietarios ejidales. La respuesta a la pregunta de por qué los miembros mejor posicionados dentro de los ejidos y los propietarios privados recurren a la ganadería y la pastura como su principal actividad productiva, tiene que ver con las dificultades que enfrentan otros productos agrícolas en el desregulado mercado agrícola del país.

La Tablas E1, E2 y E3 muestran datos sobre la superficie sembrada, el rendimiento y el valor de la producción agrícola en Ixhualán de Madero, en tres momentos de la primera década del presente siglo. A diferencia de los otros productos, el maíz mostró mínimas variaciones. Cinco de los productos presentados son elaborados directamente para ser vendidos a intermediarios: cacahuete, naranja, café, caña de azúcar, litchi y sandía. De ellos, todos mantienen precios variables, algunos con incrementos notables como el café y el cacahuete. El precio mercado de la naranja muestra amplios vaivenes, lo que para el caso de un cultivo perenne implica una valoración especial del riesgo. El precio de la caña de azúcar es estable y este producto podría expandirse y volver a reclamar su destacada posición en la región si la política para la producción de biocombustibles prospera, aunque hay que señalar que las industrias de transformación de azúcar, con excepción de la producción local de aguardiente, han casi desaparecido en la región.⁴⁷

⁴⁷ Un esfuerzo interesante para avanzar sobre las limitaciones de la información es la propuesta de Ovando y Córdoba (2004) de una “política agrícola territorializada”, que utiliza el caso del Distrito de Desarrollo Rural de Huayacocotla (una de las diversas divisiones territoriales) de la que forma Ixhualán parte. Los autores ofrecen un estudio factorial que sugiere que la ganadería y la silvicultura deben ser apoyadas, y si bien no prestan atención a las condiciones de producción, ofrecen un enfoque complejo sobre los productores y sus oportunidades a nivel local.

TABLA E
SUPERFICIE SEMBRADA, RENDIMIENTO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EN IXHUATLÁN DE MADERO
(2010, 2006, 2002)

2010						
Cultivo	Sup. Sembrada	Sup. Cosechada	Producción	Rendimiento	PMR	Valor Producción
	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton/Ha)	(S/Ton)	(Miles depersonas)
Cacahuete	200	200	320	1.6	9,000.00	2,880.00
Café Cereza	1,000.00	1,000.00	1,700.00	1.7	2,000.00	3,400.00
Caña de azúcar otro uso	300	300	9,600.00	32	320	3,072.00
Chile verde	50	50	190	3.8	9,800.00	1,862.00
Frijol	1,290.00	1,290.00	739.7	0.57	13,473.37	9,966.25
Litchi	13	13	104	8	9,000.00	936
Maíz Grano	12,950.00	12,300.00	15,725.90	1.28	3,574.93	56,218.94
Naranja	2,369.25	2,369.25	21,560.18	9.1	1,250.00	26,950.22
Sandía	20	20	180	9	2,500.00	450
	18,192.25	17,542.25				105,735.42

2006						
Cultivo	Sup. Sembrada	Sup. Cosechada	Producción	Rendimiento	PMR	Valor Producción
	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton/Ha)	(S/Ton)	(Miles depersonas)
Cacahuete	150	150	210	1.4	8,000.00	1,680.00
Café Cereza	1,055.00	1,055.00	1,582.50	1.5	3,000.00	4,747.50
Caña de azúcar otro uso	300	300	9,485.00	31.62	378	3,585.33
Chile verde	50	50	150	3	8,000.00	1,200.00
Frijol	800	800	480	0.6	10,000.00	4,800.00
Maíz Grano	12,950.00	9,859.00	14,647.00	1.49	2,156.83	31,591.10
Naranja	1,649.00	1,649.00	16,490.00	10	900	14,841.00
Sandía						
	16,954.00	13,863.00				105,735.42

2002						
Cultivo	Sup. Sembrada	Sup. Cosechada	Producción	Rendimiento	PMR	Valor Producción
	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton/Ha)	(S/Ton)	(Miles depersonas)
Café Cereza	1,055.00	1,055.00	2,954.00	2.8	1,000.00	2,954.00
Caña de azúcar otro uso	250	250	8,000.00	32	480	3,680.00
Chile verde	70	70	210	3	12,000.00	2,520.00
Frijol	1,270.00	1,270.00	842	0.66	9,000.00	7,578.00
Maíz Grano	12,830.00	11,230.00	14,248.00	1.27	2,151.41	30,653.30
Naranja	1,649.00	1,649.00	14,841.00	9	250	3,710.25
Sandía		780	780	13	1,000.00	780

No obstante, las decisiones sobre el tipo de uso de la tierra no dependen sólo del precio de las mercancías, sino también del costo y el esfuerzo general que implica su producción. Para tener una mejor idea de las restricciones y oportunidades de decisión con que cuentan quienes viven en los ejidos, es importante atender a los costos de producción. La Secretaría de Agricultura calculó el costo medio de producción de una serie de productos en diferentes estados de la República entre 2005 y 2006. Aunque no se refiera en particular a Ixhuatlán, la información para el estado de Veracruz ofrece una imagen de los contrastes en los costos de producción de los productos analizados (Tabla F)

TABLA F COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ, CAÑA DE AZÚCAR Y NARANJA EN VERACRUZ 2005-2006			
	Capital/ has pesos	Trabajo/ has horas	% del costo absorbido por trabajo humano
Caña	19,409	112	32.8
Naranja	11,254	124	43.4
Maíz (temporada seca)	5,512	200	65.1*
Maíz (temporada húmeda)	4,930	150	58.2*
Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA, 2006. *El cálculo de SAGARPA incluye el uso de tractores, pero debido a que en Ixhuatlán el maíz se cultiva predominantemente bajo el sistema de milpa, las cifras presentadas fueron ajustadas para el caso del número total de horas, no así los costos totales.			

Al comparar valor de mercado y costos de producción se nota que la ventaja de mercado del maíz se reduce, si no es que se elimina por completo, por sus altos costos de producción. Sin embargo, más de la mitad del costo de producción de maíz se refiere al trabajo humano, por lo que puede ser absorbido directamente por el productor, algo que, a su vez, ayuda a entender el carácter de subsistencia de su producción. En contraste con el maíz, la caña de azúcar y la naranja necesitan más del doble de las aportaciones de capital. Por lo tanto, sin apoyo financiero se vuelve casi imposible para un pequeño productor participar individualmente en su producción. Al mismo tiempo, fluctuaciones de los precios aumentan los riesgos y obstaculizan la inversión privada en estos productos comerciales. En este panorama es claro que para los nuevos ejidatarios, opciones productivas media-

namente seguras distintas a la pastura casi no existen. Se podría argumentar, sin embargo, que si en lugar de producirse en las tierras menos productivas, el maíz se cultivase en las llanuras de alta productividad, la situación cambiaría. Pero tal cambio se ve bloqueado por la persistencia de la economía ranchera en la región.

La economía ranchera

La relación entre la ganadería y la agricultura ha sido un tema importante en la literatura sobre problemas agrarios y rurales en México, por lo menos desde finales de 1970. La larga y conflictiva coexistencia de estas dos actividades se inscribe en la contradictoria política cardenista. Como se sabe, Cárdenas –conocido como un agrarista radical–, también protegió a los ganaderos con certificados que bloqueaban la expropiación de propiedades dedicadas a la ganadería. La expansión de los pastizales sobre tierras agrícolas y forestales ha sido objeto de duras y continuas críticas (Feder, 1980; Fernández y Tarrío, 1988; Toledo, 1992; García, 1994; Léonard, 1995), sobre todo después de que el gobierno renunció a una política para la seguridad alimentaria y la productividad agrícola autosuficiente (Redclift, 1982), y se movió hacia una política de ajuste y apoyo a actividades que se consideran más adecuadas para la geografía y sociedad mexicanas. Entre estas actividades, la ganadería estuvo siempre en la primera línea (Yates, 1978).

En la Huasteca, la tensión entre agricultura y ganadería adoptó un aspecto social que a pesar de las diferencias, se asemeja a la situación en el estado de Chiapas, que presenció la emergencia del movimiento zapatista en 1994 (véase Collier y Lowery, 1994: 37-45). A diferencia del contexto de la selva de Chiapas, que sufrió una rápida expansión de los ranchos desde mediados del siglo veinte, en la Huasteca el conflicto entre ganado y milpa es un largo proceso histórico que se remonta por lo menos a principios del siglo diecinueve (Ducey, 2004: 15-16).

La falta de información histórica hace que sea difícil describir la evolución de la economía ganadera en Ixhuatlán, en particular. Para algunos estudiosos, la ganadería es casi un aspecto natural de la Huasteca, una región durante tanto tiempo limitada por la falta de infraestructuras y equipamientos de transporte (Ducey, 2004). Registros de los primeros asentamientos españoles de ganaderos se remontan hasta el siglo diecisiete (Hoffmann, 1995: 59), y es plausible que los rebaños siguieran el avance de la dominación colonial hacia la sierra, donde se

encuentra enclavado el municipio. En el siglo veinte, la introducción de pastos mejorados supuso una nueva etapa de gran expansión del sector ganadero en la región (Schryer, 1990: 152-156).

La compleja naturaleza del problema que plantea la relación entre milpa y ganado, ranchos y ejidos, campesinos y ganaderos, e incluso entre indios y mestizos en la Huasteca, fue expuesta con detalle en el trabajo de Schryer sobre las revueltas que tuvieron lugar en los años setenta y ochenta del siglo pasado en el distrito de Huejutla, que bordea el límite occidental de Ixhuatlán (Schryer, 1987; 1990). Para este autor, la formación de ejidos fue mediatizada por el sistema tradicional de tenencia de la tierra, y por una dinámica productiva que afectó tanto a propietarios privados como a comunidades indígenas. Esto dio pie a la expansión en los ejidos, de que se llamó la “economía ranchera”, la cual se había desarrollado en la región desde el siglo diecinueve. En esta economía, el modo de producción campesino de subsistencia está económica y políticamente subordinado (Schryer, 1987: 292). Desde el punto de vista de Schryer, el origen de los conflictos por tierras se remontaba a las primeras décadas de la Reforma Agraria, ya que, de manera contradictoria, la distribución de la tierra permitió la consolidación de los ganaderos, con la consiguiente expansión de las pasturas y la reducción del acceso a tierras para la agricultura de subsistencia (un proceso similar al que se revisará más adelante en el ejido San Martín).

La economía ranchera se reproduce como un sistema de clase. Sus dos elementos más relevantes son: 1. El libre uso de mano de obra de los campesinos a cambio de tierra, y 2. La prevalencia de las jerarquías corporativas entre las comunidades indígenas (Schryer, 1990: Cap. 6). Sobre esta línea de análisis, y con la información obtenida en los tres ejidos estudiados, es posible identificar en Ixhuatlán algunos de los elementos básicos de tal dinámica: la explotación del trabajo campesino por medio de contratos de préstamo o alquiler de tierra a cambio mano de obra; la monopolización de las mejores tierras y un uso intensivo de las tierras de baja calidad para la agricultura de subsistencia. La situación se refuerza en tanto la rotación de parcelas permite períodos de producción de pastura, que es el único producto rentable a nivel local.

Con el objetivo de explicar el conflicto, Schryer trató de mostrar que la reproducción de la economía ranchera dependía del ejercicio de la violencia por parte de los ganaderos, así como de la reproducción entre el campesinado de estructuras corporativas que garantizaran una base mínima de subsistencia para los desposeídos y semidesposeídos, que en conjunto formarían la clase semi-proletaria de acuerdo con las perspectivas estructurales:

Los campesinos locales no se rebelaron hasta que la expansión de la ganadería moderna y otros cambios que emanan de la economía en general hicieron extremadamente difícil para ellos ganarse la vida en la Huasteca, y sólo cuando una combinación de necesidad económica y apoyo externo disparó un conflicto en el distrito de Huejutla, las discrepancias jurídicas dieron lugar a una abierta revuelta campesina y a la pérdida de legitimidad del partido en el poder (Schryer 1987: 310-311).

La introducción de nuevos tipos de pastos permitió la expansión de la economía ranchera en los ejidos, tierras cuya baja calidad había prevenido que se expandiera el ganado. Pero esta expansión, como se discutirá más adelante, no mejora la productividad o la eficiencia, sino es más bien regresiva. Este problema pone en la mesa el papel decisivo de la privación como motor de la economía ranchera: a medida que más tierra se excluye de la agricultura, las posibilidades de extraer valor de los campesinos aumentan y los incentivos para la inversión disminuyen. Al comparar más adelante la producción en tres ejidos, se demostrará que la productividad global, y consecuentemente el crecimiento económico y el desarrollo, declina cuando los pastos sustituyen a las milpas, afectando a todo el sistema campesino y a las posibilidades que cualquier individuo tenga para salir del marco de relaciones de la economía ranchera. Finalmente, el trabajo de Schryer en Huejutla demuestra que esta dinámica puede conducir a un conflicto y la violencia, y en Ixhuatlán hay pruebas de que éste es el caso.

Gracias a la larga lucha por la ampliación en El Cuayo, se cuenta con datos invaluable sobre producción que sugieren que hacia inicios de la década de 1970 el límite de sostenibilidad de capacidad productiva de la tierra había sido superado. Al igual que el resto del país, en la década siguiente la migración se convertiría en un aspecto distintivo de la vida de las familias de los núcleos agrarios.

En el contexto de la discusión sobre la expansión del capitalismo en el campo, la migración fue vista por algunos estudiosos como parte del proceso natural de proletarianización del campesinado (Bartra y Otero, 1988). Para los neo-liberales que tomaron el control del gobierno en la década de 1980 y que ejecutaron las políticas de ajuste estructural, la migración era un indicador doloroso aunque positivo de la tendencia hacia la segura modernización del país (Salinas de Gortari, 1993). Por último, aquellos que estaban interesados en entender la capacidad de adaptación de los campesinos, antes que confirmar su desaparición, destacaron la gran capacidad para mantener la población dentro

de los límites de los ejidos, a través de *la distribución desde abajo*: en las dos últimas décadas de la reforma agraria, la distribución de la tierra la llevaron a cabo por las propias comunidades campesinas que absorbieron medio millón de nuevos productores en las tierras ya concedidas por el Estado (Robles 2005: 24; Warman, 1996: 14).

A pesar de la creciente migración, las comunidades retuvieron tanta población como fue posible.⁴⁸ Los resultados que se analizarán más adelante dan cuenta clara de este proceso. No todos los que habitan en los ejidos son propietarios de parcelas. Casi todos los que no tienen asegurado el acceso directo a la tierra, o que tienen muy poca, trabajan por períodos cortos como peones dentro y fuera del ejido. Sigue siendo común el intercambio de tierra por trabajo. Este es el caso general en los acuerdos con propietarios ya sea ejidales o privados. Las plantaciones de naranja en los municipios de la planicie (Alamo, Tuxpam) ofrecen ocasionalmente una fuente de trabajo temporal. Una alternativa para hombres jóvenes es el trabajo como vaqueros en alguno de los ranchos de la región.

Para el año 2006, la edad promedio de los ejidatarios en el estado de Veracruz era de 56 años, mientras que la de los posesionarios era de 46 (Estadísticas Agrarias, 2006). En combinación con las tasas de fecundidad rural entre 1974 y 1996 (7 hijos), y suponiendo que el ejidatario promedio había formado una familia entre 1976 y 1984, se puede concluir que cinco de los siete niños nacidos en una familia campesina media no tenían tierra. En el mejor de los casos, sólo dos hijos podían haber tenido la oportunidad de heredar o al menos acceder a una parcela familiar; por tanto, en el momento del cambio constitucional, dos generaciones de campesinos ya habían perdido la oportunidad de obtener tierra a través de la Reforma Agraria.⁴⁹

⁴⁸ Entre 1970 y 1990, el porcentaje de población que vive en zonas rurales de México se redujo de 42,2% a 28,7%, y todavía en 1995 se redujo al 26,5%. En términos absolutos, sin embargo, el número de habitantes rurales aumentó de casi 20 millones en 1970 a poco más de 24 millones en 1995, la tasa de crecimiento de la población en el período 1970-1990 fue de 2,6% (Estadísticas Históricas del INEGI, 2000). Entre 1980 y 1990 se estima que más de 2 millones de personas, la mayoría de las zonas rurales, emigraron a Estados Unidos (Corona, 2007: 51).

⁴⁹ Aun cuando el limitado acceso a tierras productivas es uno de los mayores incentivos de la migración rural, se trata de un proceso altamente diferenciado en el país. En cuanto a su duración, es posible distinguir entre migración estacional, a largo plazo o definitiva; en cuanto a su espacialidad, puede estar orientada nacional, regional o internacionalmente. La degradación de la tierra o mejores oportunidades de empleo asociadas a redes consolidadas, pueden ser también los principales motores del proceso migratorio. Por último, los cambios en la disposición de fuerza de trabajo y en los recursos que llegan a las localidades, tanto como las transformaciones socioculturales asociadas a la migración, son aspectos todos que muestran

Aunque la migración permite una disminución importante en las condiciones de pobreza, esto se debe en gran medida a que incorpora recursos a una economía insuficiente, más que debido a que los recursos que llegan a las localidades rurales transformen radicalmente las condiciones productivas (Gordillo *et al.*, 1999). El impacto positivo de los recursos de los migrantes sobre las condiciones de producción, disminuye por la presencia de élites o facciones que, mediante el control del comercio y los servicios locales, absorben una parte importante los flujos e impiden la acumulación en los hogares campesinos o las inversiones en la producción. El impacto de la migración en este sentido depende de que los recursos que provee se transformen efectivamente en algún tipo de capital (tierra, tecnología, trabajo, insumos). Una buena parte de los hogares que visité en los ejidos mantenía vínculos con migrantes que se habían desplazado a otra localidad, estado o a Estados Unidos. En gran medida, los migrantes aportan seguridad en caso de enfermedad o de requerir cubrir gastos extraordinarios. Los recursos de la migración suelen materializarse en la construcción y mejora de las viviendas y, con menor frecuencia, en el establecimiento de pequeños negocios de abarrotes.⁵⁰

Es común, además, que los migrantes envíen recursos para sembrar, pagar jornales, rentar terrenos o comprar animales y, por tanto, apoyan la reproducción de la economía ranchera en la región.

Economía ranchera es un término adecuado para describir la estructura de explotación de la tierra en San Martín, El Cuayo y Joya Chica, debido a que pone atención en la relación entre dos espacios productivos que coexisten en la región. Como se argumentará en el siguiente capítulo, los resultados de la

importantes variaciones de región en región, e incluso de una localidad a otra. En el estado de Veracruz, y en la Huasteca en particular, los flujos migratorios de mayor peso tienen una orientación nacional o regional (CONAPO, 1997). Existen redes consolidadas que permiten la migración estacional a las plantaciones comerciales en los estados de Sinaloa y Sonora, así como a las ciudades de Reynosa, Matamoros y Monterrey, donde el trabajo se puede encontrar en la construcción o la industria maquiladora (Valle *et al.*, 2008).

⁵⁰ El comercio es limitado en los tres ejidos y se reduce a las pequeñas tiendas de abarrotes, que en general hacen las veces de bar. En este rubro, El Cuayo destaca como el ejido con más establecimientos. Aquí hay diez tiendas, una de las cuales produce tortillas que se venden en otras localidades. Se trata además de la tienda comunitaria. Más recientemente, un taller de costura también colectivo se ha puesto en marcha con el apoyo de un programa del gobierno federal. Si bien los resultados en términos de mejora en las condiciones de pobreza son limitados, vale destacar que estas empresas están dirigidas por mujeres de la comunidad e involucran a quienes tienen menos acceso a la tierra.

certificación revelan la conflictiva articulación territorial entre dos lógicas espacio-productivas: la milpa y el potrero.

Tres vecinos: Joya Chica, El Cuayo y San Martín⁵¹

En agosto de 2005, en Ixhuatlán de Madero, 56 ejidos habían concluido el proceso de certificación y contaban con sus títulos de propiedad y materiales cartográficos completos. Estos ejidos –85% del total municipal– abarcan 31,674.514 hectáreas, alrededor del 40% del territorio municipal, y ocupan más de la mitad de sus tierras productivas. Aproximadamente 94.5% de la tierra social está parcelada (29,894.057 hectáreas) y sólo 2.5% (809.960 hectáreas) es de uso común, mientras que el restante 3% (970.497 hectáreas) se refiere a las áreas urbanizadas.

La tierra social total se divide en 81 polígonos, lo que significa que alrededor de 30% de los ejidos tienen su territorio dividido entre al menos dos polígonos. La mayoría de los polígonos son de tamaño pequeño: 56 abarcan 500 hectáreas o menos; 18 ocupan extensiones de entre 500 y 1,000 hectáreas; 6 entre 1,000 y 1,500 y, por último, uno se expande en una superficie de entre 1,500 y 2,000 hectáreas. De todos los polígonos, sólo dos son de uso común, y 20 están completamente fraccionados. El resto presenta usos mixtos (incluida la vivienda).

En cuanto a la superficie fraccionada, que incluye 13,070 parcelas de 2.3 hectáreas en promedio, 88.6% se utiliza para la agricultura bajo un régimen de temporal. El tamaño medio de las parcelas muestra un alto nivel de fragmentación y su acumulación es también destacable: menos de la mitad de los sujetos (44.4% –es decir– 2,621 individuos) tiene derechos sobre una parcela; un poco más de un cuarto (26%, 1,536) cuenta con certificados por dos parcelas; 859 (14.6%) tienen control sobre tres y el restante 15% (883) posee certificados por 4 o más parcelas. Conjuntando estos datos con las cifras que se presentan en la

⁵¹ Los datos que se presentan aquí fueron recogidos en dos periodos de trabajo de campo: noviembre 2005-mayo 2006, y septiembre-diciembre de 2007, como parte de mi investigación doctoral. Durante este tiempo llevé a cabo entrevistas con las autoridades y miembros de cada ejido, con los funcionarios de la Procuraduría Agraria, las autoridades municipales y otros informantes que sin ser parte de los ejidos conocen la historia agraria local. Llevé adelante un relevamiento de hogares en las tres localidades y logré obtener información sobre la producción a nivel de ejido en la oficina de la Secretaría de Agricultura, aunque sólo sobre dos ciclos. Finalmente, obtuve los mapas de los ejidos en el Registro Agrario Nacional en México y Jalapa.

Tabla G, se puede observar que la gran mayoría de las parcelas son de tamaño muy pequeño, por debajo de la media de 2.3 hectáreas, y por lo tanto deben existir algunas otras bastante grandes y compactas.

En cuanto al tipo de sujetos a los que se concedieron derechos dentro de los ejidos, para el año 2005 había un total de 6,883 personas registradas en Ixhuatlán, de los cuales 67.3% eran ejidatarios, 18.2% poseсионarios y 14.5% avecindados. En términos de acceso a tierras productivas, los ejidatarios tienen 78.2% de los certificados y los poseсионarios 21.8%, lo que implica que alrededor de la mitad de los que poseen pequeñas parcelas son poseсионarios, quienes, es preciso recordar, se encuentran imposibilitados –al menos de forma inmediata– para incrementar sus activos dentro de los ejidos por la nueva regulación.

TABLA G CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN EJIDOS IXHUATLÁN DE MADERO (2004)		
Hectáreas certificadas	Ejidatarios %*	Poseсионarios % *
Menos de 5 hs	60.2	93.6
Entre 5 y 10 hs	28.1	4.1
Entre 10 y 15 hs	6.2	0.3
Entre 15 y 20 hs	2.2	0.2
20 y más	0.7	--
* Los porcentajes no suman 100. Fuente: Estadísticas Agrarias, 2004.		

En el centro de Ixhuatlán de Madero se encuentran tres ejidos que se cuentan entre los primeros que se constituyeron en el municipio: San Martín, El Cuayo y Joya Chica. Están conectados entre sí por un camino de terracería que nace en la carretera estatal que atraviesa el municipio y, desde ese punto, se prolonga hasta llegar a la colindancia del municipio con el estado de Puebla. Para llegar a cualquiera de estos ejidos es preciso abordar una camioneta que mañana y tarde transporta pasajeros y mercancías desde la cabecera municipal o desde el poblado conocido como *Llano en medio*, que se asienta en un cruce de caminos y es un centro de acopio y distribución de mercancías en la región. Desde el centro, primero por la carretera y luego por terracería, el primer poblado es Joya Chica, el siguiente El Cuayo, inmediatamente después sigue la población

de El Nopal y finalmente se arriba a San Martín, de donde continúa el camino que llega al río Beltrán, que hace de frontera entre Veracruz y Puebla.

Los tres ejidos se encuentran a una altitud promedio de 180 metros sobre el nivel del mar, pero sus polígonos comprenden terrenos diferentes debido a la compleja topografía de la bocasierra. San Martín comprende parte de las tierras llanas que comienzan a correr desde la sierra hacia el Golfo al oeste. Los terrenos llanos de este ejido se encuentran casi completamente cubiertos de pastura, y dentro de sus límites también existen remanentes del bosque de cedros que alguna vez se expandía en las partes bajas de casi toda la Sierra Madre. En total, San Martín tiene poco más de 1,300 hectáreas de tierras de buena calidad y es por tanto el más grande de los tres, aunque es preciso notar que es el único que tiene un anexo⁵² –El Nopal. Junto al El Nopal, se encuentra Ojital, el núcleo de población del ejido El Cuayo; y aunque ambos asentamientos forman una extensión urbana continua, para sus habitantes son dos sitios claramente distinguibles. En cuanto a su superficie de tierra, El Cuayo es el ejido más pequeño. Su extensión cubre laderas que aunque no son abruptas anuncian la inminente entrada a la sierra. A excepción de los terrenos en descanso que muestran algo de vegetación, El Cuayo está completa y drásticamente fraccionado, y conserva muy poco del bosque nativo. En cuanto a esto último, no sucede lo mismo en Joya Chica, gracias a que su territorio comprende una buena parte de cañadas donde la imposibilidad de sembrar milpa o introducir ganado permite la conservación de vegetación y fauna.

De acuerdo con el conteo de población de 2005 (INEGI), había en el ejido San Martín 935 habitantes, 616 de los cuales tenían 18 años de edad o más. Desde su formación, el ejido contó con un Anexo denominado El Nopal, un pequeño asentamiento de 44 casas y 161 habitantes situado en la frontera noreste. En el asentamiento urbano de San Martín viven 774 personas distribuidas en 197 hogares. En total, el ejido tiene 302 solares o parcelas urbanas y, notoriamente, el material de construcción predominante es el hormigón, sobre todo en las casas asentadas a lo largo de la calle principal. En este ejido hay 164 miembros con derechos sobre al menos a una parcela de tierra productiva, mientras que alrededor del 41% de la población económicamente activa no posee tierras en el núcleo agrario. En cuanto a su composición étnica, en el año 2000, el INEGI

⁵² Cuando los ejidos abarcaban más de una localidad, o más tarde, cuando nuevas secciones de tierra fueron concedidas, se creaban anexos. Los anexos forman parte de los ejidos, pero cuando existían diferentes localidades llegaban a tener sus propias autoridades, con la excepción del comisario ejidal y de la Asamblea.

encontró que casi 82% de la población de San Martín, y hasta 97.8% de El Nopal, vivía en “hogares indígenas”, mientras que 38% y 60% de sus respectivos habitantes eran hablantes del náhuatl. Finalmente, en el ejido hay dos escuelas primarias, una secundaria, una guardería y una clínica rural. Se cuenta con una galera, un templo católico, y hay campos de fútbol en sus dos asentamientos. El conjunto de hogares tiene electricidad y alrededor de la mitad cuenta con conexión de agua potable; sin embargo, este servicio es bastante irregular durante la temporada de sequía, cuando la única fuente de líquido es un arroyo que bordea ambos asentamientos por el sur. Aún en 2008 se estaba introduciendo drenaje público con la ayuda del gobierno municipal y cierto recelo de la población, debido al riesgo de contaminación de la única corriente de la que los habitantes pueden obtener agua.

Por su parte, en 2005 había en el ejido El Cuayo 771 habitantes, de los cuales 503 tenían 18 o más años de edad. La población estaba distribuida en 196 hogares, aunque el asentamiento urbano consta de 267 solares o parcelas urbanas. Hay 146 miembros con derecho a por lo menos una parcela de tierra productiva, mientras que 42% de las personas económicamente activas no tienen tierra en el ejido. Si bien el concreto está sustituyendo a los materiales tradicionales, aún existe una gran cantidad de casas con techos de lámina y paredes de madera. La palma se utiliza aún en parte de las viviendas, especialmente las cocinas, que tienden a estar separadas de los dormitorios. En cuanto a su composición étnica, en 2000, 92% de la población vivía en “hogares indígenas” y había más de 700 hablantes de la lengua náhuatl en la localidad (INEGI, 2000). Ojital tiene una guardería y una escuela primaria. También hay secundaria y preparatoria dependientes del Ministerio de Educación estatal. Cuenta con una pequeña clínica rural, una cocina comunitaria y una cancha de fútbol. También hay un templo católico visitado semanalmente por el sacerdote de Ixhuatlán. El agua corriente está disponible en algunos hogares, pero el pequeño arroyo que atraviesa la parte inferior del asentamiento (y continúa hacia San Martín) sigue siendo la principal fuente de agua para la población.

Finalmente, según el INEGI, en el año 2000 Joya Chica contaba con 614 habitantes, aunque cinco años más tarde, en 2005, ese número se redujo a 544, de los cuales 316 tenían 18 o más años de edad. Hay 98 miembros con derecho a la tierra productiva y 35% de sus habitantes económicamente activos no poseen tierra en el ejido. El centro urbano está fraccionado en 101 solares y en promedio las casas son de madera y lámina. Debido a que el censo encontró 123 hogares, se puede presumir que algunos de ellos comparten un solar. Como

sus vecinos, Joya Chica es un asentamiento nahua; sin embargo, su carácter étnico es menos acentuado, ya que el 78% de su población vivía en “hogares indígenas” en el 2000. El poblado de Joya Chica es el de más reciente formación. En cuanto a servicios, cuenta con una guardería y una escuela primaria. Hay además una cocina comunal, tres tiendas (una comunitaria), galera y cancha de fútbol. Las casas disponen de electricidad, pero no hay agua corriente; debido a que tampoco hay alguna fuente natural dentro del ejido, el agua se obtiene de un pozo externo.

Así las cosas, estos ejidos son vecinos, comparten fronteras territoriales (Joya Chica con El Cuayo, y éste con San Martín), sus habitantes se encuentran cotidianamente y existen intercambios frecuentes entre ellos. Es probable que un visitante de paso no advierta ninguna diferencia significativa entre ellos. Los tres se encuentran 180 metros por encima del nivel del mar, los tres tienen una galera, mientras la vestimenta, el físico y la lengua de su gente indican que se trata en los tres casos de poblaciones mestizas de raíz nahua.

Formación de los ejidos

Entre marzo y mayo de 1934 se publicaron las tres resoluciones presidenciales que reconocieron la creación de San Martín, El Cuayo y Joya Chica. 239 campesinos recibieron 3 mil hectáreas de tierra en la parte central del municipio. Estos fueron tres de los 15 ejidos que se formaron por decreto presidencial en 1934. La posesión jurídica se otorgó de forma menos abrupta: San Martín la obtuvo en 1932; El Cuayo en 1934 –seis meses después de publicada la resolución presidencial–, y Joya Chica en 1935. Sus trayectorias son paralelas aunque, por supuesto, en el origen de cada ejido hay variaciones importantes (Tabla H).

TABLA H
Formación de tres ejidos en Ixhuatlán de Madero

Ejido	O	PR	Hs	PA	B	Hs/B
San Martín	25/04/1932	9/04/1934	1368	Hacienda Atlán	114	12
El Cuayo	15/12/1934	21/05/1934	720	N/S	52	13.84
Joya Chica	15/12/1935	4/06/1934	876	La Mesa de Cacahuatengo ranch	73	12

O: Fecha de posesión; PR: Fecha de Resolución Presidencial; PA: Propiedad Afectada para formar el ejido; B: Número de beneficiarios; Hs/B: Hectáreas por beneficiario.
Elaboración propia con datos de Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

Los registros de la congregación de San Martín se remontan al siglo XVIII cuando se la menciona como sujeta a Chicontepec. De acuerdo con el Archivo Histórico de Localidades, en 1900 San Martín contaba con 163 habitantes, 63 de los cuales eran listados como residentes de El Nopal. Diez años después, en el censo de 1910, la población agregada de las dos localidades alcanzaba el número de 365 (Estadísticas históricas de México, Archivo Histórico de Localidades, INEGI). El asentamiento actual se encuentra ubicado en los linderos de terrenos llanos al sureste del ejido y en su centro hay una antigua edificación sencilla, aunque bastante sólida, que pervive de los tiempos de la hacienda y que sugiere que éste era un punto de referencia importante en la zona. La petición de dotación, hecha en marzo de 1927, indicaba:

El poblado solicitante se encuentra enclavado en terrenos de la Hacienda Santa Cruz de Atlán o Los Planes, perteneciente a la razón social del P. J. Blackmon S. de C.⁵³ se le reconoce la categoría política de congregación y su población

⁵³ En un artículo sobre el comercio del banano a principios del siglo xx, Ridgeway proporciona información interesante acerca de un WA Blackmon, tesorero de la Corporación Bananera del Sur: “The ownership arrangements were deliberately confusing. Standard wished to avoid charges of being a monopoly and also hope that, by using Mexican-chartered companies, it could avoid constitutional provisions against foreign ownership. Under the Constitution of 1917, foreign companies could not own rural property; nevertheless Standard’s directors tried various measures to hold on to their banana lands. In addition to purchase companies that were officially Mexican-owned, Standard tried listing its holdings under Di Giorgio’s name, knowing that the Mexican government would on occasion allow individuals, rather than companies, to hold property” (Ridgeway, 2001: 152).

se encuentra distribuida en tres núcleos: Laberinto, San Martín y el Nopal... ninguno de los habitantes de esta congregación es propietario de terrenos y aunque han vivido en terrenos de la hacienda, las tierras las han cultivado bajo el régimen de arrendamiento (RAN, 23/12261).⁵⁴

El proceso duró siete años. En julio de 1930, el gobernador del estado dio respuesta positiva a la petición; en abril de 1932 los campesinos obtuvieron la posesión provisional y en abril de 1934 la resolución presidencial concedió 1,368 hectáreas de terreno (casi la mitad de la hacienda) a 114 campesinos en dos centros de población: El Nopal y San Martín (RAN-EXP 23/12261). En lo que se refiere al sitio llamado Laberinto en la petición, no fue posible encontrar algún informante que supiera localizarlo. Se puede especular si no es que se trata de Ojital. La contigüidad entre éste asentamiento y el Nopal indica que los campesinos que en 1934 formaron El Cuayo eran muy cercanos a San Martín y con una alta probabilidad se consideraran miembros de la misma congregación. Sea cual haya sido la relación anterior entre los vecinos del Nopal y los de Ojital, el reparto creó una distinción y un vínculo nuevos entre ambas localidades.

El Registro Agrario Nacional (RAN) mantiene un voluminoso expediente sobre El Cuayo (RAN, Exp: 23/12805 y 25/12805), aunque casi todos sus documentos se refieren a la solicitud de la ampliación que los ejidatarios siguieron fervorosamente durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Siete años después de publicada la resolución presidencial que dio origen al ejido, en noviembre de 1941, El Cuayo presentó una petición formal de ampliación con el argumento de que allí habitaban 59 hombres solteros mayores de 16 años, 18 mujeres solas a cargo de una familia y 5 nuevos vecinos. Estos miembros carecían de tierra, pero –argüían– la ley les otorgaba el derecho a ella. Para dar cause a la petición, se debía llevar a cabo una evaluación del tipo de explotación de la tierra, lo que tardó 17 años en pasar. En 1958, después de numerosas peticiones y una amenaza final de invasión por parte de los campesinos, esa primera evaluación reveló que el 8% del ejido se utilizaba para cultivar café, hule y árboles frutales; 18 a 20% era de uso común para el pastoreo de animales, el

⁵⁴ Las distintas instancias que intervinieron en el proceso de distribución de la tierra producían retardos que podían ser bastante largos. Una vez que la concesión era aprobada por el gobernador del estado, los propietarios afectados tenían un año para reclamar; a continuación se concedía la posesión y, finalmente, una declaración presidencial confirmaba todo el proceso. En algunos casos, la posesión tomó muchos años, incluso después de que las resoluciones presidenciales se habían publicado.

5% se usaba para residencias y el resto (65-67%) se cultivaba con maíz, frijol, plátano y caña de azúcar. Este informe fue declarado incompleto por parte de la Comisión Agraria y otra inspección se llevó a cabo en 1962, salvo que en este caso el resultado fue mucho más limitado: el técnico declaró sin mayor análisis que la mitad de la tierra estaba ociosa; y con base en este segundo informe, la petición de ampliación fue oficialmente denegada en 1965. Los ejidatarios, sin embargo, continuaron con sus reclamos.

Durante la década de 1970, cuando los conflictos violentos se propagaban en la parte hidalguense de la Huasteca, una tercera y más precisa evaluación se llevó a cabo (ver Tabla I). A pesar de que esta evaluación mostró, como lo había hecho la primera, la completa explotación del ejido, la resolución de ampliación fue postergada. Tras una década de silencio documental, en 1981 se publicó una resolución presidencial que aprobaba una ampliación de 376 hectáreas para el ejido. El terreno concedido, sin embargo, estaba protegido contra la expropiación y los propietarios bloquearon de inmediato la resolución. Los campesinos de El Cuayo siguieron luchando siempre dentro del marco institucional y en 1995, bajo la nueva legislación y debido a la intención gubernamental de resolver todos los conflictos agrarios (“política de focos rojos”), un polígono de 120 hectáreas (un tercio de la ampliación original), situado a unos veinte kilómetros del ejido, fue concedido a 19 peticionarios.

TABLA I
USO DE LA TIERRA EN EJIDO EL CUAYO (1972)

Uso	Hectáreas	Porcentaje del total
Maíz	490 h	68%
Frijol	20 h	2.8%
Caña	15 h	2%
Naranja	10 h	1.4%
Pasturas comunes	90 h	12.5%
Poblado	25 h	3.5%
Acahuales	70 h	9.7%
Fuente: RAN-EXP 23/12805.		

Los problemas continuaron. La tierra otorgada como ampliación era reclamada por habitantes del ejido Palma Capadero, quienes destruyeron las milpas de los campesinos de El Cuayo y ocuparon el terreno. Para ese entonces ya se había creado la Procuraduría Agraria y ésta intervino. La solución final fue la expropiación del terreno recientemente concedido para transferirlo a los ejidatarios de Palma Capadero e indemnizar a los miembros afectados de El Cuayo. Con el dinero de la indemnización, en marzo de 2008, el ejido compró un terreno denominado “La Falda”, cuya mitad fue distribuida entre miembros sin tierra, y el resto destinado a uso común.

Joya Chica se distingue de San Martín y El Cuayo en un sentido relevante en cuanto a su formación. La propiedad afectada para la formación del ejido fue un rancho de la familia Cuervo Librado, apellidos que persisten en el municipio. Esto pudo haber influido en el hecho de que la posesión tomara más tiempo en ser concedida. Asimismo, la relación con la congregación de San Martín resulta incierta. Muy poca información existe en los archivos sobre la formación y posterior historia agraria de este ejido (RAN-EXP 25/13129). Los ejidatarios de Joya Chica pidieron la ampliación justo el mismo año en que lo hicieron los de El Cuayo, es decir, a comienzos de la década de 1940. Solicitaban afectar la finca Tenextitla que estaba junto a su comunidad y que, declararon, cultivaban por más de treinta años en virtud de algún acuerdo no especificado. La finca contenía árboles de café y caña de azúcar, y lo más importante: un “ojo de agua” que los ejidatarios reclamaban como la única fuente del líquido en la zona. Al igual que con la petición de El Cuayo, en 1965 se negó oficialmente la petición por los mismos motivos de “explotación insuficiente”. Pero los ejidatarios de Joya Chica no persistieron con la demanda de ampliación como sus vecinos.

Población y territorio

Ninguno de los tres ejidos lleva algún registro de las asignaciones de las parcelas y la aceptación de nuevos miembros, por lo que la evolución institucional y los cambios en la dinámica de acceso y distribución de los recursos productivos deben deducirse de datos disponibles en registros públicos, de informaciones que puedan aportar los miembros o derivarse de la forma que guardan actualmente los arreglos comunitarios. En lo que se refiere a los registros públicos, son de vital importancia los de población, ya que ofrecen una idea de las dinámicas generales de presión sobre la tierra, el agotamiento en

la capacidad de incorporar nuevos miembros y los ritmos de expulsión. Como es de esperarse, las localidades vecinas comparten la misma tendencia en los cambios demográficos (Figura 7): inician el siglo con un declive hacia 1940, cuando la población crece exponencialmente hasta 1980, y en ese momento se presenta el fenómeno opuesto; sin embargo, una vez más, cada localidad presenta particularidades que es posible analizar.

FIGURA 7
POBLACIÓN EN TRES EJIDOS (1900-2010)

Elaboración propia con datos de INEGI

1900-1940

Este período abarca a la Revolución, cuando el municipio como entidad política estaba en formación.⁵⁵ A pesar de probables imprecisiones producto de la

⁵⁵ Desde 1881, cuando Ixhuatlán adquirió la categoría política de “villa”, hasta 1910, sus límites geográficos fueron objeto de controversia con Chicontepec. Al final de la Revolución, una sola entidad política abarca tanto Chicontepec como Ixhuatlán, siendo su nombre de Ixhuatlán de Chicontepec. El censo de 1930 registra un cambio en el nombre del municipio de Ixhuatlán de Madero, pero en enero de 1935 éste se transformó en Tziltzacuapan, y de nuevo en junio del año siguiente se convirtió en Tziltzacuapan de Barranco. Finalmente, el 24 de noviembre de ese mismo año, un decreto extinguió al anterior municipio y dio fe de uno nuevo con el nombre de Ixhuatlán de Madero (AHL, INEGI, 2006). La medida en que una disputa por un nombre revela la

agitación social y el establecimiento de la nueva estructura política, los datos sugieren que la formación de los ejidos se presentó en un proceso de movilización importante de personas y de traspasos entre los asentamientos. Debido a su cercanía con la cabecera municipal, Joya Chica debió haber estado más expuesta a la insurgencia; el descenso en el número de habitantes entre 1900 y 1920 podría estar vinculado con esto.

Se debe destacar la relación inversa en las cifras de población entre San Martín y El Nopal entre 1910 y 1930, aunque cuando se suma la población total permanece igual durante ese período. Al estar relativamente aislado en el corazón de la hacienda de Santa Cruz, es posible que San Martín hay sido un atractor de personas con necesidad de trabajo o refugio. El aumento de la población de San Martín podría estar también relacionado con el hecho de que se trataba de uno de los pueblos susceptible de ser dotado desde el inicio de la Reforma Agraria.

El Cuayo aparece en el censo de 1940 después de la creación del ejido. Una vez más, su relación con San Martín es interesante. Si se añaden, la población de San Martín y El Cuayo casi igualan a la de San Martín y El Nopal, que en ese año desapareció del censo. Por lo tanto, es plausible que en 1940 El Nopal se registrara en conjunto con Ojital con el fin de confirmar la existencia de un núcleo de población en el recién formado ejido.⁵⁶ Esto sugiere que, inicialmente, los campesinos de El Cuayo mantenían alguna relación de sujeción con San Martín, y que se separaron de esta comunidad cuando se formó el ejido. Esta sugerencia se ve confirmada por la cercanía entre El Nopal y Ojital que, antes de la creación de ejido, pudieron haber formado un sólo asentamiento.

presencia de los grupos en conflicto, no puede ser disminuida. Fue precisamente en el período 1930-1934 cuando los tres ejidos estudiados se formaron.

⁵⁶ Todo esto refuerza la hipótesis de que El Cuayo se separó de San Martín. Más que una mera curiosidad histórica, y a pesar de la falta de información sobre las tensiones y las decisiones que deben haber tenido lugar entre los campesinos con el fin de organizar la petición y más tarde la formación de un ejido nuevo e independiente, ello es muestra de la relevancia de la reforma agraria como una fuerza estructurante del territorio de las comunidades.

FIGURA 8
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RURAL EN MÉXICO (SIGLO XX)

Elaboración propia con datos de INEGI.

1940 – 1970

El impresionante crecimiento de la población en los tres ejidos en sus primeras cuatro décadas de existencia, siguió el patrón observado a nivel nacional (ver Figura 8). Entre 1940 y 1970, los tres duplicaron su población. Tanto el crecimiento natural como las mejores condiciones para el reparto abiertas por el Código Agrario de 1940 plantearon fuertes incentivos para la plena utilización de la tierra y, por lo tanto, para la admisión de nuevos miembros. La información sobre el proceso de El Cuayo sugiere que a finales de la década de 1960, todas sus tierras tenían una función productiva y que 12% de su territorio era de uso común, mientras que sólo 9% se encontraban en reposo. Esta pequeña extensión en descanso indica que para esta época el uso de la tierra superaba ya su potencial de explotación sostenible.

Entre 1960 y 1970 existe una evidente desaceleración del crecimiento demográfico en Joya Chica, mientras que los otros dos ejidos experimentaron un salto final en el número de habitantes. Durante esta década, Joya Chica agregó 10% a su población total, a diferencia de sus vecinos, en donde se presentaron

incrementos de alrededor de 50% (véase el Tabla J). Dos cuestiones ayudan a entender esta separación entre Joya Chica y sus vecinos: 1. La negativa de ampliación que llegó en 1965. 2. La limitada cantidad de tierras aptas para la agricultura, que más temprano impuso límites al crecimiento demográfico.

TABLA J CAMBIOS DE POBLACIÓN ENTRE 1940 AND 1970 (%)							
	1940	1950	% cambio	1960	% cambio	1970	% cambio
El Cuayo	254	418	64.6	519	24.2	793	52.8
Joya Chica	220	342	55.5	453	32.5	502	10.8
SM + N*	130	481	270.0	660	37.2	988	49.7
Elaboración propia con datos de INEGI.							

1970-1980

Los años setenta y ochenta fueron de mucha violencia en la Huasteca. En el corazón de los conflictos estaba la tierra y la presión continua para ampliar el reparto. Aunque muchas veces esa presión tomó la forma de invasiones, el caso de El Cuayo muestra que los campesinos trataron de evitar la respuesta violenta de los ganaderos y el gobierno, siguiendo, hasta el punto de agotamiento, los caminos legales de la Reforma Agraria. Esta estrategia institucional, sin embargo, implicaba la aceptación de nuevos miembros y la retención de población excedente dentro de los ejidos, a fin de demostrar el agotamiento total de la tierra y contar con una base social de resistencia. La década de 1970 fue de fragmentación continua y subdivisión. Algunos elementos destacables promovieron esta tendencia particularmente en El Cuayo:

- a) Homogénea y regular calidad de la tierra. Esto reduce los incentivos para la acumulación en pocas manos, ya que grandes cantidades de trabajo son necesarias para mantener la tierra productiva. En un contexto de falta de tierra y donde los derechos individuales sobre parcelas específicas no estaban garantizados por títulos, la eventual escasez de mano de obra dentro de las unidades familiares que impidiera el uso pleno de sus tierras suponía la transferencia a otras unidades de la tierra excedente.
- b) La perseverancia en la lucha por la ampliación, que aseguró la permanencia de los que no tenían derechos en el ejido.

- c) El refuerzo de la organización comunitaria (no sólo en asamblea, sino también mediante relaciones de parentesco y la formación de redes solidarias), que medió en el acceso a la tierra y limitó las oportunidades individuales de acaparar tierras.

San Martín también sufrió un proceso de fragmentación que, sin embargo, no afectó a todo su territorio, sino que fue acompañado por la consolidación de una élite que logró acaparar las generosas tierras llanas y de buena calidad en áreas bastante compactas. Esta situación dio lugar a una división interna del ejido. Así, El Nopal, desapareció de los censos de 1940, 1950 y 1960, subsumido en la ejidalización; reemergió en el censo de 1970. A partir de esta década se estableció una clara división entre el centro del ejido bajo el control de los pequeños ganaderos y El Nopal, mayoritariamente milpero, cuya situación se asemeja mucho a la de El Cuayo.

1980 – 2000

Las dos últimas décadas del siglo veinte vieron una reducción radical en la población de El Cuayo y San Martín, y una tendencia a la estabilización en Joya Chica. El marcado descenso entre 1980 y 1990 no puede disociarse del declive en la productividad de la tierra, que no podía absorber más campesinos ni fue capaz de sostener a todos los que habitaban los ejidos. Esta década advirtió el final de las políticas productivas que habían acompañado a la reforma agraria. También fue en este período cuando las perspectivas de obtener tierras, por medios distintos a la violencia, se desvanecieron.

En las primeras décadas de la distribución, los cambios demográficos en los ejidos apuntan a la presencia de una organización comunal previa. Este es el caso en particular de los movimientos de población entre San Martín-El Nopal-Ojital Cuayo. Como se discutió ya, la ejidalización de las comunidades tuvo implicaciones territoriales que en este caso se refieren a la división de la comunidad en dos ejidos distintos. Si bien el “centro” de la comunidad estaba presumiblemente en San Martín, a partir de la ejidalización, el núcleo campesino (e indígena) se trasladó hacia la marcuerna formada por El Nopal y Ojital Cuayo. El crecimiento demográfico y la consolidación de un pequeño grupo de ganaderos en el centro reforzó esta división inicial, mientras que la erección de un templo en Ojital Cuayo sugiere que los lazos entre los dos ejidos se fueron

diluyendo. Los límites comunitarios, sin embargo, no puede equipararse a la frontera entre los ejidos debido a la continuidad entre El Nopal y Ojital Cuayo. Notoriamente, además, el patrón de asentamiento es muy similar entre ambos.

Los datos sobre Joya Chica indican una situación diferente respecto de sus vecinos. Al igual que en los otros casos, los cambios tempranos de población se pueden vincular con la dotación de tierras, pero este ejido aparece como una fuerza estructuradora más potente que en los otros dos. Un claro indicador de ello es el patrón de los asentamientos urbanos. Como se puede observar en la Figura 9, existe una clara similitud en los patrones de asentamiento de San Martín y El Nopal-Ojital, mientras que la traza de Joya Chica es notablemente reticular, lo cual pone en evidencia la intervención de una racionalidad en el diseño que resulta ajena al crecimiento que puede esperarse en una organización que evoluciona a través de la expansión de unidades parentales y redes sociales. Una expansión de este tipo no se ajusta a las normas administrativas impuestas por las autoridades agrarias o municipales. Por tanto, es posible observar que el asentamiento urbano en Joya Chica es un producto más reciente, creado cuando la electricidad se introdujo en la década de 1970, según informantes locales. Con este dato, se puede suponer que las familias de este ejido mantuvieron el patrón disperso de asentamiento típico de la región por un largo período y que su centro (la rancharía inscrita en el censo de 1900), aunque sujeto a la cabecera municipal de Ixhuatlán, no representaba un núcleo o centro de comunidad.

FIGURA 9
ASENTAMIENTOS URBANOS EN TRES NÚCLEOS AGRARIOS DE IXHUATLÁN DE MADERO

Para concluir esta perspectiva general, la Tabla K presenta un conjunto de indicadores socioeconómicos para los tres ejidos. En lo que respecta a servicios y escolaridad, se puede observar en la Tabla K que los tres ejidos se encuentran en un rango similar. Dos variables son en las que se puede notar una diferencia relevante. La primera es el acceso a seguridad social. Joya Chica tiene el mayor número de personas registradas en el seguro social y la diferencia con sus vecinos es grande. Aquí, pues, se encontraba un importante número de asalariados o parientes cercanos de asalariados. 120 personas tenían seguridad social frente a un total de 152 personas económicamente activas. Destaca también el caso de El Cuayo, que cuenta el mayor número de personas registradas en el sistema del Estado (ISSSTE) muy por encima de sus vecinos. Por otro lado, Joya Chica tiene el menor número de hogares indígenas y de población en dichos hogares.

TABLA K
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (2000)

	S. Martin	EL Nopal	Joya Chica	EL Cuayo
Población (2000)	837	179	614	847
Hombres	396	93	301	443
Mujeres	441	86	313	404
15 y más, sabe leer	444	84	321	404
18 y más, con secundaria	396	89	298	413
Promedio de escolaridad	5,91	5.21	4.69	5,1
PEA	281	51	152	251
PEI	342	82	275	368
Asegurados IMSS	62	0	107	12
Asegurados ISSSTE	16	0	13	39
Trabaja 32 hrs/semana	117	18	29	34
Trabaja 33 a 40 hrs/semana	37	10	76	99
Trabaja 31 a 48 hrs/semana	62	15	2	24
Trabaja 49 o más hrs/semana	53	5	1	11
Hogares	189	39	120	185
Personas en hogares	833	178	614	843
Promedio de habitantes por hogar	4,43	4.68	5.12	4,58
WC	184	37	116	169
Agua	151	0	0	1
Electricidad	162	29	103	148
Población en hogares indígenas	82%	98%	68%	92%
Católicos	623	131	473	732
Otra religión	91	21	61	28
Fuente: Atributos por localidad, IRIS v3.1, INEGI, 2005.				

Organización

Organización, colectividad e institucionalidad, son factores importantes para las relaciones de propiedad. El nexo entre las instituciones de propiedad y la organización social ha sido una preocupación central en la literatura sobre *los comunes* y de gran parte de la literatura antropológica y etnográfica. Se ha encontrado evidencia de que la presencia de órganos colectivos de representación y decisión, de normas de uso y de exclusión, de arenas para la solución de problemas y para la orientación de la acción colectiva, fortalecen a los regímenes colectivos de propiedad y mejoran el manejo de entornos naturales frágiles (Ostrom, 1992; Singleton, 1992; Agrawal, 2001).

Aunque no es posible comprender cabalmente la explotación de la tierra ejidal como si fuera un recurso común, es claro que el ejido es un dispositivo institucional específico para la representación del colectivo en el destino de la tierra ejidal. Esto implica necesariamente que la naturaleza del colectivo es relevante en todo aquello que atañe a la comprensión de los procesos de cambio institucional, como lo fue el programa de titulación. La breve descripción sobre la historia agraria de San Martín, El Cuayo y Chica Joya, se puede complementar entonces con un acercamiento a algunos aspectos de la vida colectiva que permitan generar una idea sobre cómo la institucionalidad ejidal persiste en cada uno de los casos, para lo cual se pueden discutir aspectos asociados a la organización social y territorial de las comunidades, a los espacios y mecanismos de representación y participación, a la estructura de autoridad para la dirección y la toma de decisiones y a su historia demográfica.

Autoridades y cargos

La formación de ejidos durante la primera mitad del siglo veinte supuso la creación de núcleos de población que no constituyen una comunidad como la que han descrito los etnógrafos en la Huasteca, cuyos rasgos generales son un patrón de asentamiento que tiende a ser disperso y una vida colectiva organizada a lo largo de las redes de parentesco, ritual e intercambio. En dos de los casos aquí estudiados, los centros de población que se crearon al amparo del reparto (Joya Chica y Ojital Cuayo) no pueden ser considerados inmediatamente comunidades en el sentido mencionado; y por el contrario, su estatuto como organizaciones sociales debe desentrañarse. La sencilla institucionalidad

impuesta por la Reforma Agraria, conformada por de la asamblea y el comisariado, se formuló para ordenar la vida colectiva y establecer un mecanismo homogéneo de comunicación entre ejidos y el gobierno. Sin embargo, considerada como un conjunto de normas para la regulación de la vida colectiva en los ejidos, la institucionalidad agraria es simplista y centralizada, además de que facilita la formación de estructuras caciquiles.

Los caciques tuvieron ascendente en regiones de escasa relevancia productiva o donde las oligarquías ejercían un dominio completo de los mercados y oficinas gubernamentales locales. Durante décadas, ésta fue la situación general en la Huasteca, pero en el último cuarto del siglo pasado la delimitación de las zonas urbanas y el nombramiento de representantes municipales elegidos democráticamente, ha movilizado la vida interna de las localidades y su relación con los poderes políticos locales. En este sentido, fueron relevantes las reformas políticas de la década de 1980, que pusieron la administración y desarrollo de los servicios en manos de los consejos municipales y que dotaron de recursos federales directamente a los municipios. Especialmente después de 1983, las restricciones a la transmisión de las posiciones de poder y la formación de ayuntamientos municipales impulsó la democratización de los gobiernos locales.⁵⁷ Un cambio crítico fue la aparición de la figura del Agente Municipal, autoridad democráticamente elegida en todas las localidades rurales. A partir de este momento, los poblados que formaban parte de los ejidos empezaron a tener lo que se puede calificar como una estructura institucional bimodal o dual. Una parte de ésta emana del ejido como una colectividad agraria formada por los ejidatarios; la otra, que puede ser denominada “civil”, está asociada a órdenes políticos externos y se sostiene con los recursos que dichos órdenes representan, y agrupa además a todos los adultos que viven en la localidad.

Las autoridades ejidales y civiles forman dos órdenes institucionales a los que las comunidades se adaptan, pero que integran y utilizan de forma diversa (Valle, 2012: 210). Por lo demás, al ser elegidos de distinta forma –el Comisario por la asamblea ejidal y el Agente por el conjunto de los habitantes–, cada figura representa nexos diferentes entre los miembros del colectivo, uno basado en la propiedad de la tierra y el otro en la residencia. La autoridad que inviste al Agente Municipal y aquella del Comisario Ejidal, es indicativa de formas de diferenciación e integración social distinguibles entre sí, aun en el caso de que ambas posiciones permanezcan cooptadas por un mismo grupo de interés par-

⁵⁷ Ver especialmente, *Diario Oficial de la Federación*, 6 de diciembre, 1977; 3 de febrero, 1983; 17 de marzo, 1987.

ricular, lo cual no debería presumirse siempre. Más que postular de antemano un escenario caciquil o de lucha faccional en todos los casos, cuestiones que emergen al analizar la distribución de la tierra que el programa de titulación registró, es importante saber en qué medida y cómo la institucionalidad política se ha articulado con la ejidal, si la ha desplazado o subsumido de alguna forma, asuntos que son sólo visibles a nivel local o micro y sólo en este nivel son contrastables en términos rigurosos.

Entre los problemas que enfrenta todo análisis de cambio institucional, se cuenta el diverso nivel de especificación de las instituciones (desde la norma escrita hasta la regla tácita) y el hecho de que en su dimensión material (cuando las normas son efectivamente operadas o mentadas) presentan siempre variaciones contextuales. El análisis de tales variaciones, que no puede ser más que comparativo y localizado, es necesario para la formulación y prueba de modelos descriptivos y explicativos de tipo más general como los que se presentaron antes.

Así pues, es preciso acercarse a la forma en que se vinculan la institucionalidad ejidal, que durante décadas dominó la vida colectiva, y la institucionalidad política de la modernización democrática; y tal cosa no puede lograrse si no se indaga en la forma en que operan los cargos que emanan de cada una. Siguiendo esta lógica, tres elementos resultan útiles para vislumbrar cuál es la situación de cada una de esas autoridades dentro de las localidades: el primero tiene que ver con la representación del colectivo; el segundo, con la edad y trayectoria de quien ocupe el cargo de mayor autoridad; y el tercero, con la capacidad y obligación de organizar el trabajo colectivo. El primer aspecto se refiere al cargo sobre el que recae la representación del colectivo frente a agentes externos de cualquier índole; se trata de quién autoriza el acceso a la comunidad en cuanto organización. Si bien es una posición formal, es tal que se basa en el reconocimiento general. De los casos aquí estudiados, la representación en San Martín y El Cuayo recae sobre el agente, mientras que en Joya Chica en el comisario ejidal.

Una segunda evidencia sobre la posición relativa entre autoridad civil y ejidal tiene que ver con la edad de quienes ocupan el cargo. En las poblaciones de raíz nahua de la Huasteca, los ancianos tienden a ocupar las posiciones relevantes en el orden jerárquico de las organizaciones comunitarias. Si bien en ninguno de los tres ejidos existe un “consejo de ancianos” tal y como lo ha descrito la etnografía clásica de los nahuas de la región (Sandstrom, 1992), el alto rango de los ancianos se expresa efectivamente en las reuniones rituales, la formulación de acuerdos entre grupos y en la solución de conflictos (Valle, 2012: 216).

De manera habitual, posiciones de autoridad en las comunidades son escalonadas de forma tal, que un individuo debe ocupar una serie de cargos, en general onerosos en tiempo y recursos, para acceder a puestos elevados en la estructura de autoridad, lo que implica un tránsito que discurre a lo largo de la vida de las personas (hombres y mujeres).⁵⁸ Es de esperarse, por tanto, que los puestos de mayor jerarquía sean ocupados por miembros de edad avanzada, por lo que una divergencia en este sentido puede relacionarse con una diferencia en el rango del cargo mismo. Asimismo, el estatus de propietario (ejidatario, posesionario, vecindado) de quien detente el cargo político, también ofrece una ventana hacia la forma en que ambos órdenes institucionales se están articulando. En cuanto a todo esto, durante el tiempo en que se realizó el levantamiento de la información (2005-2007) en San Martín y El Cuayo los comisarios ejidales tenían 32 y 36 años respectivamente, mientras los agentes municipales contaban con más de cincuenta años. Lo contrario sucedía en Joya Chica, con una autoridad civil bastante joven (34 años) y un comisario entrado en años (53). Por otra parte, en el caso de San Martín y El Cuayo, los agentes municipales eran poseesionarios, mientras en el caso de Joya Chica se trataba de un ejidatario. Con esta información se pueden establecer las siguientes observaciones: primera, San Martín y El Cuayo parecen compartir algo que los distingue de Joya Chica; segunda, en los dos primeros casos, la posición de Agente Municipal parece ocupar una posición más destacada en la estructura de autoridad de la comunidad.

Un tercer aspecto en el cual la posición relativa de autoridades ejidales y políticas tiene que ver con un aspecto central y característico de la vida en comunidades y localidades campesina e indígenas, es el trabajo colectivo. Para la normatividad agraria misma, la colaboración con las actividades colectivas del ejido fue obligatoria hasta 1992. Si bien la legislación presente no hace mención a este respecto, el trabajo de las poblaciones rurales forma parte de las aportaciones que se espera realicen a los proyectos públicos promovidos por los distintos niveles de gobierno. Por supuesto, el trabajo comunitario es de larga tradición entre las comunidades indígenas y es esencial para establecer derechos de residencia, pertenencia y participación en la comunidad (Ochoa y Jiménez, 2012: 149). Así las cosas, la organización del trabajo comunal (qué, cuándo, dónde y quién lo lleva adelante) es una tarea de trascendencia para la vida colectiva,

⁵⁸ Un rasgo constante en las comunidades de la Huateca es que el acceso a la jerarquía empieza en la adolescencia, con cargos como el de mensajero, el de *topil* o similares. La participación en estos cargos inferiores es condición ineludible para tener acceso a los grados superiores, que conllevan mayor prestigio y autoridad (Valle, 2012: 231).

y por su propia naturaleza requiere de personas de fuerte autoridad, debido a que aunque sea común y legítimo esto no quiere decir que no sea siempre fuente de discordias y “chismes”. En los tres ejidos, todas las familias están obligadas a cooperar una vez por semana (generalmente sábado) en el mantenimiento de escuelas, caminos o edificios comunitarios, en la prestación de servicios en la tienda de la comunidad o trabajando en las milpas de las escuelas o terrenos comunales (empastando, desmontando, cuidando al ganado). Si alguno de los hogares de la localidad no puede aportar trabajo, se espera el pago de jornales a fin de evitar sanciones que pueden llegar a la expulsión. En San Martín y El Cuayo, la tarea de organizar este trabajo colectivo se encuentra en manos del Agente, mientras que en Joya Chica sigue siendo una prerrogativa del comisario ejidal, lo que una vez más sugiere que el agente municipal mantiene una mayor autoridad en San Martín y el Cuayo, mientras en Joya Chica es el comisario quien guarda un mayor ascendente sobre el colectivo.

Si bien las tres observaciones sobre la relación entre autoridad ejidal y política ofrecen por separado evidencia circunstancial y débil, observadas en conjunto se refuerzan mutuamente. Y aunque es posible asumir que la edad de cada autoridad al momento de registrar el dato puede deberse a causas puramente coyunturales y hasta fortuitas, el hecho de que con este indicador varíen de otros dos de forma sistemática en los tres casos, es un dato que no puede obviarse sin más. En conjunto, los tres aspectos permiten formular una observación general acerca de las estructuras de autoridad de los tres ejidos: en San Martín y El Cuayo, el Agente municipal y la institución que representa han adquirido un papel más relevante que el orden ejidal; en Joya Chica, la autoridad arraigada en el sistema de propiedad continúa siendo la más importante para la vida colectiva.

El supuesto de que en San Martín y el Cuayo el orden político se ha impuesto al ejidal, se refuerza cuando se considera otro elemento relacionado con la organización de las comunidades, a saber: las instancias de representación que canalizan la participación y permiten la inclusión. Los espacios de representación se refieren a la diversidad de cargos que los individuos pueden ocupar y a través de los cuales intervienen en los asuntos colectivos. Si bien a los ojos de observadores externos algunos cargos pueden resultar irrelevantes (representante en comités escolares o mensajeros de distinto tipo), suelen ser muy estimados por quienes los ocupan. Además, como se mencionó ya, los cargos son parte de una organización jerárquica escalonada; y por tanto para llegar a posiciones más elevadas, las personas deben comenzar desde el cargo de topil o mensajero, que es el de base.

TABLA L CARGOS EN TRES LOCALIDADES			
	San Martín	El Cuayo	Joya Chica
Dirección del comité escolar	3	3	2
Comité de mejoras urbanas	2	2	0
Tienda comunal	0	1	1
Otros emprendimientos o servicios colectivos	2	3	1
Comité de la iglesia	1	1	-
Líder ritual	1	2	0
Elaboración propia con datos de campo (2005-2006)			

La formación de los cargos dentro de la comunidad está relacionada con su complejidad, tamaño y capacidad de perseguir y llevar adelante proyectos colectivos.⁵⁹ La posiciones reflejan el nivel de capital social disponible en cada una de las comunidades. Es importante señalar que los cargos abren espacios de representación para aquellos cuyo vínculo con el ejido es frágil, es decir, familias que no tienen derechos sobre las parcelas o solares. Esto también se

⁵⁹ Las diferentes formas en que las localidades trataron un problema común como el mantenimiento del camino, reflejan las diferencias entre los ejidos a este respecto. El municipio ofrece una pequeña suma de dinero para el mantenimiento de la vía que conecta las tres comunidades con la carretera principal. La pequeñez de los salarios ofrecidos significa que el trabajo se realiza de alguna manera como parte de la faena tradicional, incluso cuando se trata de un servicio orquestado desde fuera de la comunidad. Así las cosas, la terracería se dividió en tres tramos, y el dinero asignado se repartió entre las tres comunidades; sin embargo, los habitantes de Joya Chica no participaron en los trabajos y fueron los de El Cuayo quienes se hicieron cargo de los arreglos en dos tramos. A pesar de que parte del argumento de Joya Chica para no llevar a cabo el trabajo fue que aquellos que realmente se beneficiaron y que le necesitaban eran El Cuayo y San Martín (el camino pasa por Joya Chica, atraviesa El Cuayo, llega a San Martín para finalmente terminar en el límite con el estado de Puebla), es digno destacar que el acuerdo fue realizado entre el municipio y las tres comunidades, no por individuos particulares en cada uno de ellos, y que el no cumplimiento del mismo debilita la posición de esta comunidad, en particular en nuevos acuerdos. A pesar de que una serie de elementos secundarios puede ayudar a comprender mejor la posición de Joya Chica, en este particular (es decir, la naturaleza de los vínculos y las tensiones entre los ejidos vecinos), lo importante a destacar es que en esta comunidad el agente municipal (el que alcanzó el acuerdo en el municipio) no estaba en condiciones de asignar el trabajo necesario para hacer frente a este compromiso.

refleja en las diferentes asambleas. Si bien el régimen de propiedad presupone que la asamblea ejidal es la máxima autoridad del ejido, al menos en San Martín y El Cuayo se realizan asambleas que involucran a más miembros en función de los temas a tratar y que no necesariamente son vistas como de menor rango que la asamblea ejidal.

Así pues, ante la organización impuesta por la reforma agraria, las comunidades en los ejidos mantienen y desarrollan diferentes instancias no oficiales de representación y decisión que revelan en algunos casos mecanismos para la acción colectiva más complejos que la básica institucionalidad del ejido. Las autoridades sin reconocimiento oficial son los jefes de las asociaciones de padres de las escuelas, o los responsables de comisiones especiales, como el archivo, la organización del carnaval, los líderes rituales y, últimamente, aquellos que están a cargo de los programas productivos o asistencialistas gubernamentales. Con respecto a esto, El Cuayo destaca como el ejido con una organización más compleja, seguido por San Martín (Tabla L). El rango de cada posición dentro de la jerarquía no es importante aquí, excepto en cuanto a la posición relativa de los comisarios frente a los agentes que ya se mencionó.

Propiedad y formación de grupos

En los tres ejidos, la transmisión de la propiedad sigue el esquema tradicional patrilineal, con el mayor de los hijos como principal heredero. Bajo el régimen ejidal esto incluye el estatus de ejidatario. Dependiendo de la disponibilidad de recursos, cuando los hijos –e incluso las hijas– menores se casan, los padres pueden darles media o una hectárea de tierra para hacer milpa y también un lugar para construir una casa cerca de la suya propia (Ochoa y Jiménez, 2012: 150). Debido a que elaborar testamento era una práctica costosa y difícil antes de la reforma, la transferencia *económica* entre más de un heredero condujo a conflictos cuando el hijo mayor se negaba a reconocer los derechos de sus hermanos y hermanas una vez fallecido el padre. En cuanto a la transmisión de propiedad a través de relaciones familiares, es notable el contraste entre Joya Chica y los otros dos ejidos, ya que el número de hogares es mayor que el número de solares, lo que implica que aquí existan parcelas urbanas en las que hay más de una familia, mientras que en El Cuayo y San Martín la situación es opuesta. Esta situación demuestra que la permanencia de no ejidatarios en Joya Chica ha sido limitada por miembros con pleno derecho y de que la regla institucional de herencia ha sido aplicada con severidad.

En general, el patrón “tradicional” de sucesión está abierto a consideración. Esto aumenta la relevancia de las redes de parentesco y de los grupos de pares, así como de la colectividad en su conjunto. Aun cuando forman parte de la organización vertical de la comunidad, las redes de parentesco y los grupos de pares son básicamente relaciones horizontales que están en la base de las estrategias de subsistencia y tienen un papel central en la transmisión de derechos de propiedad y acceso a la tierra.

La estructura de parentesco nahua es flexible y endogámica, pero la familia no es el único o más importante elemento que define la pertenencia a un grupo, ya que la membresía a la comunidad incorpora también a la tierra y la residencia (Valle, 2003: 299). Los grupos de pares son formas de intercambio y solidaridad, y su presencia y número se puede considerar indicativo de una organización comunal fuerte. Las redes y grupos de pares tienden a vincular a los miembros de diferentes familias que en general (pero no exclusivamente) se convierten en compadres de sus compañeros. En la literatura, se ha observado también que entre los nahuas de la Huasteca, las relaciones entre pares, es decir, entre individuos del mismo rango de edad o posición dentro de sus familias, pueden ser más relevantes que las relaciones parentales debido a su asociación directa con las actividades productivas (Sandstrom, 1991: 155-158; Ochoa y Jiménez, 2012: 151-153). En estos grupos de pares, la amistad es el elemento más relevante y se puede argumentar que el discurso antropológico tiende a crear un concepto específico para un hecho común o universal de la condición humana. Sin embargo, es necesario señalar que existe cierta distancia entre la amistad como un fenómeno personal, y los grupos a los que aquí se hace referencia. En el contexto campesino, el espacio de la amistad es, evidentemente, el propio mundo rural con sus actividades, sus necesidades y dinámicas, aunque cada vez más la migración y el desarrollo de las comunicaciones tienden a extender los lazos más allá de este mundo. No obstante, dentro de la comunidad, los grupos de pares se articulan en torno a actividades como la construcción de viviendas, actividades productivas, mientras que otras como la participación en el equipo de fútbol local pueden ser menos relevantes. La situación ambigua entre amistad y pertenencia lleva a considerar que numerosos grupos no necesariamente indican la presencia de un orden comunal sólido, excepto cuando estos últimos tienen algún tipo de auto-reconocimiento y se vinculan como unidades a una organización más grande (por ejemplo, la asamblea ejidal). A nivel comunitario, un escenario privilegiado para tal auto-reconocimiento es la ritualidad (Valle, 2012: 216-219).

Las fiestas rituales o “costumbres” son ocasiones para el auto-reconocimiento de los grupos de pares y la consolidación de proyectos comunes, acuerdos de alquiler de terrenos con los ganaderos y para la exposición y la solución de los conflictos que afectan al conjunto o a parte de la comunidad. Como se analizará en detalle más adelante, en el caso de El Cuayo, la aplicación del programa de titulación provocó una intensificación de las reuniones rituales que no podría haberse presentado si las estructuras sociales a través de las cuales se canaliza la actividad ritual, no hubiesen pre-existido a la reforma. Lo que se debe tener en cuenta ahora, es que la organización ritual activa y continua está directamente vinculada a la presencia de grupos con cierto auto reconocimiento que apoyan o sostienen a los líderes rituales, quienes los representan ante las potencias ultramundanas y ante otros grupos rituales.

Quienes organizan y dirigen las costumbres poseen un papel cohesionador, que incluye la representación de la comunidad en el contexto de la diversidad étnica de la región. Sus enlaces externos y reconocimiento del que gozan por parte de otras comunidades son de vital importancia, por lo que estos individuos tienden a pagar visitas y participar en intercambios rituales de forma continua. Esta actividad es de gran importancia para la comunidad en su conjunto, ya que garantiza una base de solidaridad en una región donde aún existe una marcada marginación y segregación. Para la presente discusión, sin embargo, la articulación entre ritualidad y grupos de pares es importante porque implica mecanismos inclusivos, al mismo tiempo que ofrece evidencia de flexibilidad por parte de la comunidad para dar acceso a los miembros más débiles. Tomando como premisa válida que la organización ritual delata la presencia de vínculos comunales, vale entonces notar que durante el trabajo de campo fue posible registrar en El Cuayo dos grupos rituales claramente definidos (uno de ellos el de Doña Josefina), en San Martín uno, mientras en Joya Chica no fue posible registrar ninguno.⁶⁰ Este hecho apunta una vez más a la diferencia entre San Martín y El Cuayo, por un lado, y Joya Chica, por otro.

⁶⁰ Lo cual no implica que en Joya Chica no haya médicos o especialistas rituales. Al contrario, a través de Doña Josefina tuve la ocasión de conocer y entrevistar a uno, un vigoroso posesionario de 28 años. No pude tener evidencia, sin embargo, de que alrededor de este personaje se articulara una red de pares.

Milpa

El sistema de milpa está ampliamente difundido en la parte centro-sur de México. Puede denominarse como tradicional debido a su larga historia en Mesoamérica y el bajo nivel de tecnología industrial que requiere; sin embargo, la milpa es una técnica altamente desarrollada y productiva (Esteva y Marielle, 2004). La milpa define una técnica, un espacio y un complejo agroalimentario que en su centro tiene al maíz. La milpa presenta una marcada orientación al auto consumo, aunque es un sistema capaz de producir excedentes. En la región, cuando los campesinos buscan producir para el mercado apuestan por el cultivo de chile, cacahuete, melón o flores. Estos emprendimientos, sin embargo, son poco comunes en cualquiera de los tres ejidos, y la mayor parte de la tierra dedicada a la agricultura está ocupada por sembradíos de maíz. En las mejores condiciones, la milpa incluye, simultánea o escalonadamente, otros productos como el frijol, el chile y la calabaza, mientras plátano, naranja u otros árboles valiosos tienden a rodear los terrenos junto con flores y quelites.

La milpa refiere a un patrón diverso y flexible de uso de la tierra. Tal diversidad y flexibilidad depende, sin embargo, de la calidad y la localización del terreno. En Ixhutilán se recuerda aún que las milpas solían producir numerosos productos secundarios como la calabaza, el chile y los tomates, pero hoy en día el efecto combinado del declive en la productividad del suelo y el uso extensivo de pesticidas tiene efectos devastadores en una producción diversificada, y sólo maíz y a veces frijol se obtienen en la mayor parte de las milpas.

La milpa es una estrategia rotativa de tumba, roza y quema. Se adapta muy bien a zonas boscosas y húmedas y a difíciles condiciones topográficas. La marginación de la economía campesina ha generado como resultado que, con pocas excepciones, las milpas se establezcan en terrenos abruptos, en laderas y colinas. En Ixhutilán, las tierras llanas y de alto potencial productivo son en general ocupadas por pasturas. En esta zona de la Huasteca, se procuran dos ciclos productivos al año, aunque en terrenos recientemente desmontados se consiguen hasta tres ciclos. La milpa requiere de trabajo intensivo en todas sus diferentes etapas, desde el desmonte hasta la cosecha; por ello quienes tienen acceso a más de dos hectáreas de tierra, el tamaño o el número de milpas depende de la cantidad de maíz que necesita la familia y de la cantidad de trabajo que ésta pueda aportar (directamente o utilizando peones). Si alguien

cuenta con tierra pero no es capaz de *hacer su milpa*, se espera que aporte su terreno a la red familiar, al su grupo de pares o que contrate peones.⁶¹

En cierto sentido, la milpa define a la unidad familiar; se encuentra en el centro de la economía doméstica, aunque puede no ser la principal fuente de ingresos en efectivo. Hacer milpa tiene implicaciones en la formación de los grupos rituales y redes de pares que se discutieron antes y se puede decir que la participación en la comunidad está vinculada con la posibilidad de acceder, aunque sea mediante préstamo, a un terreno para milpa.

Debido a una combinación de factores tales como el trabajo, la fragilidad del suelo, la falta de instalaciones de almacenamiento, la humedad del clima y las limitadas oportunidades de aseguramiento y comercialización, los campesinos de estos ejidos no intentan producir un superávit importante de maíz. Así, las diferencias productivas entre miembros de un ejido y entre ejidos no se presentan fundamentalmente en términos de la producción de maíz, sino en cuanto a otras actividades complementarias, lo que a su vez pone de relieve el hecho de que la milpa está en esencia orientada al consumo de los hogares y las redes locales. Cuando existen excedentes de tierra y mano de obra, los campesinos no dudan en recurrir a productos comerciales, como los pastos, los frutales o la caña de azúcar.

El sistema de milpa ha sido objeto de múltiples e importantes investigaciones que en conjunto hacen hincapié en la adaptabilidad, la flexibilidad y las ventajas medioambientales del sistema (Ruvalcaba, 2003). La literatura sobre los sistemas productivos tradicionales puede acentuar de tal forma las características de sustentabilidad ecológica de los modos campesinos de producción que llegan a producir la imagen de sistemas a-históricos, continuos y siempre virtuosamente adaptados a los ambientes frágiles (*cfr.* Toledo, 1998). Términos tales como equilibrio, co-evolución y adaptación, son descriptores frecuentes de las estrategias tradicionales como la milpa. El acento se pone en un teórico sistema productivo orientado hacia la sustentabilidad y en un entorno cuyo equilibrio resulta al final estático. El trabajo realizado en El Cuayo, Joya Chica y San Martín, llama a la prudencia en relación con esta imagen esencialista.

Es una tarea difícil englobar en un único modelo o patrón la estrategia productiva de los campesinos de los ejidos que aquí se estudian. Durante todo el siglo veinte, las condiciones bajo las cuales evolucionó la economía de los campesinos cambiaron radicalmente. En lugar de un modelo universal, la obser-

⁶¹ El problema de la falta de fuerza de trabajo incide en el incremento de pesticidas, aun cuando los campesinos saben que disminuyen la productividad del suelo.

vacación de campo sugiere una serie de principios que subyacen a las estrategias productivas de los campesinos en los ejidos estudiados:

1. La tierra se distribuye en unidades familiares, tanto en términos de los terrenos asignados para la agricultura como en cuanto a los beneficios que cualquier parcela (particular o de uso común) pueda producir.

2. El principal producto es el maíz y todos los otros cultivos se llevan a cabo una vez que la tierra para el maíz ha sido asegurada. En general, la milpa permite la producción de productos complementarios, principalmente frijoles y calabaza; sin embargo, el sistema es muy frágil a insumos como fertilizantes y plaguicidas.

- 2.1. Aunque el maíz es el producto central, los altos requerimientos de mano de obra desincentivan su producción extensiva. En el caso de que exista fuerza de trabajo disponible (a través de redes de parentesco o compadrazgo, o mediante salarios), los campesinos buscan cultivos comerciales; y si éste no es el caso, se transfiere la tierra a otros usuarios o se pone en descanso. El uso de la tierra es siempre intensivo, aunque ordenado. A fin de reducir los riesgos climáticos, los campesinos tienden a mantener milpas en diferentes etapas de la producción durante casi todo el año.

- 2.2 Las milpas poseen una extensión máxima de dos hectáreas. Una estrategia para aquellos que tienen más de dos hectáreas de terreno, es mantener dos o incluso tres milpas en diferentes etapas productivas al mismo tiempo. Esto permite contar con un suministro casi constante de maíz.

- 2.3. Una familia nuclear promedio de 5 miembros necesita por lo menos una hectárea de tierra productiva al año para asegurar sus necesidades de maíz a nivel de subsistencia, y al menos 2 y 3 hectáreas para operar un manejo diverso y adecuado de la milpa.

- 2.4. Una vez agotada, una parcela necesita un periodo de barbecho de entre 8 y 10 años para recuperarse plenamente, y un mínimo de 5 años para estar en condiciones de reinsertarse en el ciclo productivo. Cuando una parcela pierde productividad, es común hacerla pasar por un período de transición durante el que se produce pastura.

- 2.5. Si es necesario, una parcela puede ser desmontada de una sola vez con el fin de dar paso a la milpa; sin embargo, si es posible, el proceso de desmonte de una hectárea llega a tomar dos ciclos durante los cuales se va limpiando paulatinamente antes de la quema. El desmonte de un terreno de entre media y una hectárea de extensión toma al menos un ciclo productivo.

3. La decisión de invertir en los llamados cultivos comerciales está en principio ligada a la cantidad de tierra y trabajo disponibles; en segundo lugar, a los beneficios económicos que se puedan esperar.

4. La compleja relación entre trabajo y tierra implica que los grupos de pares y las redes a través de las cuales incrementa la fuerza de trabajo de la unidad familiar, intervienen en las decisiones individuales en materia de producción.

5. A pesar de las preocupaciones sobre la degradación del suelo, el equilibrio ecosistémico a largo plazo no es en sí un objetivo claro o relevante de la estrategia productiva. Lograr el equilibrio entre cantidad y calidad de la tierra, necesidad y fuerza de trabajo, es un proceso continuo en un contexto de falta de acceso a apoyo financiero y de cambiantes condiciones ambientales.

La Figura 10 muestra el uso de suelo en los tres ejidos. Al respecto, se puede advertir que la mayor parte de la superficie es zona agrícola, que en Joya Chica existen zonas de vegetación densa, mientras que en San Martín hay además pasturas y una pequeña zona boscosa (que *in situ* resulta difícil discernir). Esta visión general se complementa con la información sobre producción en los tres ejidos para el año 2005, que se presenta en el Tabla M.

La producción en San Martín se divide entre agricultura y ganadería. Estas actividades, sin embargo, no son complementarias en todos los hogares. Casi todas las familias hacen o pagan milpa, mientras que quienes crían ganado vacuno lo hacen de forma extensiva, como es en general el caso en toda la región. La siembra de pastura para la venta es una estrategia común para extender el período productivo de las parcelas. Según la información de la oficina de agricultura local, en 2005 este rubro ocupó menos de 10% de la tierra de San Martín durante cada uno de los dos ciclos productivos anuales, mientras que los pastos (naturales y mejorados) casi 35%. En ese año, 48% de la tierra estaba siendo efectivamente explotada.

FIGURA 10
USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN EN TRES EJIDOS

Fuente: mapa digital de México, 5.1, INEGI.

TABLA M AGRICULTURA 2005			
Has de:	El Cuayo	San Martín	Joya Chica
Maíz otoño/invierno*	163 h (22.6%)	131.5 (10.4%)**	132 (15.1%)
Maíz primavera/verano*	176 h (24.4%)	133.5 (10.5%)**	133 (15.2%)
Pastizal natural*	50.10 h (7%)	265.5 (20.9 %)**	18 (2%)
Pastizal cultivado*	112.75 h (15.7%)	210.5 (16.6%)**	144 (16.4%)
Frijol	//	//	1
Naranja	8.75 h	23	13
Caña de azúcar	7.5 h	//	//
Café	5	1	2.5
% Tierra en producción	72.65%	48%	50.63%
<p>* Los datos entre paréntesis muestran el porcentaje del total del territorio ejidal.</p> <p>** Los porcentajes excluyen aproximadamente cien hectáreas de bosque. Considerando la extensión total, los datos son: 9.6% –otoño-invierno; 9.8% –primavera-verano; 19.4% –pastizal natural; 15.4 % pastizal cultivado; 44.5% de tierra en producción.</p> <p>Fuente: SRA, Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, Ixhuatlán de Madero. Documento internet, Agosto 2006.</p>			

El Cuayo es un ejido bastante fraccionado e intensamente explotado. El maíz es el cultivo más importante y su producción ocupa casi el 25% del territorio por ciclo. Alrededor de las milpas de El Cuayo es común encontrar plátanos, naranjas o aguacate. Cuenta con muy pocos pastos naturales; sin embargo, alrededor de 15% de los suelos productivos se utiliza para pastura mejorada. Hacia 2005, existían 130 cabezas de ganado mayor (ver Tabla N). También algunas hectáreas producían caña de azúcar, café y naranjas. En el Cuayo se recuerda que alguna vez la caña de azúcar y el café se produjeron con éxito comercial.

Joya Chica ocupa un territorio abrupto, en parte conformado por cañadas. Tiene muy pocos llanos, por lo que las milpas se extienden en su mayor parte en laderas de mediana inclinación, mientras que alrededor de un tercio del ejido es tan abrupto que la agricultura, incluso con la técnica tradicional adaptada a esas

condiciones, es muy difícil. En cuanto a la producción de otros cultivos aparte del maíz y el frijol, plátano, sandía, chile, caña de azúcar y el café, se obtienen casi de manera aleatoria debido a las grandes limitaciones para el transporte y la comercialización. En el municipio en su conjunto, la producción de naranja y limón se ha incrementado constantemente en la última década, y algunas áreas en los tres ejidos se dedican a esta actividad. Esto es particularmente el caso en San Martín y La Joya.

TABLA N EXISTENCIAS PECUARIAS (2005)			
	El Cuayo	San Martín	Joya Chica
Vacuno	130	307	112
Cerdos	290	121	54
Ovejas	52	55	54
Pollos	1066	903	328
Guajolotes	224	142	31
Caballos	59	111	34
Burros	67	43	9
Mulas	16	3	4
Fuente: SRA, Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, Ixhuatlán de Madero. Documento interno, Agosto 2006.			

Potrero

La producción de pastura es una actividad importante para algunas familias, en particular de San Martín, donde 20% de la tierra era ocupada por pasturas naturales. La relevancia del ganado vacuno en San Martín, en contraste con sus vecinos, se puede corroborar en el Tabla N, que presenta las poblaciones de éste y otros animales en cada ejido, así como en la Figura 10 sobre uso de suelo, donde se puede verificar que un área importante del ejido se encuentra cubierta de pasturas. El ganado menor y las aves son también activos importantes, sobre todo en condiciones de pobreza y de limitado acceso a la tierra, como las que prevalecen en la zona de estudio.

Las diferencias en número y tipo de animales reflejan los niveles de riqueza y su distribución entre las familias. En 2005 había 290 cerdos en El Cuayo (más de uno por hogar), 1,290 aves (pollos y pavos) y 52 ovejas, junto a 130 cabezas de ganado vacuno. Esta última cifra es indicativa de la presencia de algunas familias con cierto nivel de capitalización y con fácil acceso a la tierra, debido a que de otra forma resulta difícil mantener a los animales en las condiciones de explotación extensiva imperantes. El gran número de cerdos destaca, sin embargo, en El Cuayo y merece atención, ya que a diferencia de las aves, los cerdos son un activo menos fluido y mucho más valioso, que no requiere terreno pero es difícil acumular porque en su alimentación, que combina maíz, restos de comida y algunas frutas y vegetales, llega a competir con sus dueños. Si bien en muchas ocasiones la cría de cerdos se realiza con vistas a alguna festividad, ofrecen una forma de ahorro especialmente atractiva para los productores de maíz o para quienes reciben remesas. Por lo tanto, aunque no se cuenta con un padrón, es posible suponer que la distribución de cerdos entre familias era en aquel momento mucho más homogénea que en el caso del ganado mayor y que en El Cuayo existe un amplio sector medio de familias. Finalmente, la información sobre el ganado sugiere que Joya Chica es el ejido más pobre o donde menos capital existe en forma de ganado, siendo el número relativamente alto de las ovejas lo único destacable en su relación con los otros dos casos y que, por lo demás, puede relacionarse con lo abrupto de su topografía.

Adelantando un poco el análisis que ocupa el siguiente capítulo (ver Tabla O sobre tendencias estadísticas centrales), es posible advertir desde ahora que la variación entre los ejidos en lo que se refiere a fragmentación parece correlacionarse positivamente con la productividad agrícola, mientras que el incremento de grandes extensiones concuerda con una disminución de la productividad general. Una confirmación de esto se obtiene al combinar la información sobre la producción ganadera y las hectáreas de pastos (tanto naturales como mejorados) en los tres ejidos. Si se toman en cuenta vacas, caballos, burros y mulas, en San Martín y Joya Chica había en aquel año un animal por 1.03 y 1.02 hectáreas sembradas con pastura, respectivamente, mientras que en el muy fraccionado El Cuayo existían 0.6 hectáreas por animal. Teniendo en cuenta sólo vacas y caballos, los dos primeros ejidos tenían una relación de 1.14 y 1.11 por cada cabeza, mientras que en El Cuayo únicamente había 0.86 hectáreas por animal. Incluso si sólo se consideran las vacas, a pesar de tener tierras más aptas para la actividad pecuaria, San Martín no logra igualar la productividad de sus vecinos. En este ejido había 1.55 hectáreas de pasto por cabeza, mientras que en Joya

Chica la relación es 1.45 y en El Cuayo 1.25 hectáreas por animal. Este sencillo ejercicio aritmético sobre la relación entre el ganado y las hectáreas de pastos permite sugerir que la ganadería tiene un impacto negativo en la productividad global de los ejidos. Si se toman en cuenta las diferencias en el funcionamiento de cada asamblea ejidal y los conflictos que se generaron durante la certificación, descritos más adelante, se puede concluir que el potrero no sólo promueve una distribución regresiva de la tierra, también da lugar a tensiones sociales.

Complejidad institucional

El análisis anterior permite delimitar con mayor precisión las diferencias en la organización comunal de los tres ejidos. Estas pueden ser descritas como “simple” para Joya Chica, “compleja” en El Cuayo y “dividida” en San Martín. En el primer caso, el soporte institucional de la colectividad es efectivamente el ejido, con su estructura centrada en la asamblea, el comisario como la máxima autoridad y el Agente y los comités como instancias dependientes y con pocos recursos para la organización y la toma de decisiones. En esta estructura organizativa, la tierra es el principal o incluso único factor de membresía; sin embargo, esta organización simple coincide con mayores restricciones en términos de la vocación tanto agrícola como ganadera del ejido. Esto a su vez vincula con el hecho, que confirmará más adelante el estudio de la certificación, de que Joya Chica ha sido el ejido que logró retener menos población.

En nuestro esquema, El Cuayo presenta una organización compleja. Aquí hay una asamblea comunal de amplia representación y en la que participan directa o indirectamente la mayor parte de los hogares de la localidad. Existe, además, la asamblea ejidal subordinada a la comunal. La asamblea comunal supervisa la formación de comisiones y organiza las fiestas comunales, como el carnaval. El Agente es la autoridad superior y tiende a ser apoyado por todos; es el principal mediador en los conflictos, administra justicia, el trabajo colectivo y la distribución de programas gubernamentales. El comisario, por su parte, sólo realiza tareas administrativas, sobre todo la representación ante las autoridades agrarias, por lo que se trata de un puesto costoso y, aunque importante, es percibido más como una obligación que una posición de poder. En cuanto a su vocación productiva, El Cuayo muestra la huella de una lucha largamente sostenida por la tierra y de un reparto desde abajo entre campesinos. Se trata, por tanto, del ejido más intensamente explotado y en el que predomina la siembra de maíz.

San Martín presenta también una organización compleja, pero dividida. La división es a la vez social y territorial. La separación entre El Nopal y el centro es de suma importancia, ya que los dos asentamientos celebran asambleas separadas, aun cuando exista una asamblea ejidal oficial. Al igual que en El Cuayo, el puesto de comisario es costoso y difícil, además interviene de manera muy limitada en otros problemas que no tengan que ver con la tierra. Las asambleas comunales se llevan a cabo en el centro y en el anexo; sin embargo, en el primer caso, la asamblea tiende a ser controlada por pocos miembros dedicados al ganado; mientras que en el segundo tienden a intervenir, directa o indirectamente, el conjunto de los hogares. La división en San Martín no ha escalado a un conflicto que impida la organización de los servicios públicos, o de eventos públicos como el carnaval. La tensión entre intereses individuales y colectivos se refiere al conflicto entre dos grupos diferentes en el marco del proceso de certificación que se analizará enseguida: los pequeños ganaderos, por un lado, y los campesinos milperos, por el otro.

LA PROMESA

El PROCEDE arrancó en Ixhuatlán de Madero en 1993⁶². San Martín, el Cuayo y Joya Chica fueron visitados por representantes de la Procuraduría Agraria para iniciar la certificación en 1996. En este capítulo se analiza con cierto detalle el proceso en cada ejido y los resultados a los que se llegó en cada caso.

Dos agentes fueron fundamentales en el proceso de certificación: la Procuraduría Agraria (PA) y la Asamblea Ejidal. La primera coordinó al conjunto de organismos gubernamentales que confluyeron en el PROCEDE, además de que facilitó y vigiló el proceso de certificación en cada ejido. Por otro lado, las asambleas de ejidatarios con derechos plenos y demostrables fueron las responsables de todas las decisiones relativas a la delimitación y asignación de tierras y el reconocimiento de derechos a los no ejidatarios. Las normas básicas de operación del PROCEDE estuvieron orientadas a ordenar las actividades de las asambleas, porque el reglamento requería que:⁶³

1. En la primera asamblea reunida para la ejecución del programa, debían estar presentes por lo menos tres cuartas partes de los ejidatarios, aunque

⁶² Entrevista con Mateo López, agosto de 2006. Como se ha mencionado, a cargo de la organización del programa estuvo la Procuraduría Agraria, que en Veracruz cuenta con doce oficinas. El municipio depende de la oficina de Alamo, una ciudad comercial a sesenta kilómetros de distancia del centro del municipio.

⁶³ Reglamento de la *Ley Agraria* en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, 5 de enero, 1993.

- en las sesiones subsiguientes esta porción podría limitarse a la mitad más uno.
2. En cuanto a las resoluciones que involucraban división, asignación de parcelas individuales y distribución de derechos, dos tercios de votos aprobatorios eran necesarios para validar las decisiones. En caso de “empate”, el comisario tenía “voto de calidad”.
 3. Las resoluciones adoptadas de conformidad con la disposición anterior serían obligatorias para los ausentes y disidentes.⁶⁴

El artículo 19 establecía que en el momento de delimitar áreas para usos específicos (parcelas, uso común, urbanización), se reconocería la distribución de hecho de la tierra. Así pues, en la regularización de tenencia de ejidatarios sin certificados, la regularización de tenencia de posesionarios o en la división de grandes áreas, la Asamblea debía tratar de respetar los derechos existentes sobre la tierra.

Finalmente, respecto a la asignación de derechos individuales, tanto la *Ley Agraria* (en su artículo 47) como el *Reglamento* (en su artículo 33) establecían el límite en la cantidad de tierra asignada por individuo en el 5% de la extensión total del ejido o el equivalente a una pequeña propiedad rural privada (50 a 100 hectáreas, dependiendo del tipo de tierra y producción).

Tres familias de El Cuayo

Antes de analizar a detalle los resultados de la certificación, y debido a que dicho análisis se situará a nivel de los ejidos, resulta oportuno ofrecer a manera de ilustración, tres relatos breves sobre las condiciones y divisiones a nivel familiar que se entreveraron en el proceso de distribución de parcelas y derechos.

⁶⁴ Cabe señalar que el punto 3 está en contradicción con el artículo 27 de la *Ley Agraria*, que establece que con respecto a la delimitación de las parcelas, asignación de los derechos y los cambios en el régimen del ejido (adopción de dominio pleno, la colectivización, la fusión de los ejidos) dos terceras partes son necesarias para autorizar las resoluciones. El artículo 26 acepta que en las subsiguientes asambleas esa proporción se reduzca a la mitad más uno de los ejidatarios, cuando es el caso de “conocer” las cuestiones relativas a la delimitación, asignación y cambio de régimen, pero el artículo 27a establece claramente que: “Cuando se trate de alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá del voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea” (*Ley Agraria*, artículo 27, párrafo segundo). Los párrafos mencionados son exactamente los que tienen que ver con la delimitación de las parcelas, asignación de los derechos y el cambio del régimen.

Una de las familias de alto rango de El Cuayo es la familia González. Sus viviendas están situadas en el centro del pueblo. El jefe de la familia, Don José, fue uno de los ejidatarios originales más activos de El Cuayo. Durante un período controló una extensión significativa de la tierra y fue un miembro destacado de la comunidad. Hacia el año 2006, su viuda, Doña Josefina (de aproximadamente 85 años) era una de las líderes rituales más importantes de El Cuayo y de Ixhuatlán en su conjunto. Varios miembros de la familia participaban en las empresas comunitarias como la tienda, la tortillería y el taller de costura, además un grupo de baile tradicional fue formado y es dirigido por el hijo menor de la familia.

La destacada situación de Don José le permitió ofrecer un solar dentro de su terreno en la zona urbana no sólo a su hijo mayor, sino también a su primer descendiente, la hermana mayor y al menor de todos sus hijos. Aun cuando a la mujer no le correspondió un solar claramente separado de la casa paterna, sino una pequeña área anexa a la cocina, cuando se casó en vez de mudarse a casa de su marido, como suele ser costumbre en la región, fue el novio el que se trasladó a la vivienda de los González. Debido al intenso trabajo requerido por el sistema de milpa y la presión constante de otros campesinos sin tierra, conservar a un yerno subalterno en el ámbito familiar resultaba una buena estrategia para mantener control sobre su tierra.

El primer varón fue el tercer hijo nacido. Como era de esperarse, cuando se casó, construyó su casa en el solar familiar, aunque a diferencia de su hermana, lo hizo claramente distanciado de la casa paterna. En sus propias palabras, recibió “tierra del ejido” aun cuando su tierra haya correspondido a una porción de las 13 hectáreas a las que, como beneficiario original, tenía derecho su padre. La forma en este primer hijo varón obtuvo tierra arroja algo de luz sobre el proceso de concentración, fragmentación y sobre la asignación de parcelas en El Cuayo, donde la preponderancia de la producción milpera impidió la formación de unidades extensas. Aquí una compleja red de parcelas se fue produciendo a través del crecimiento de familias y grupos de pares. De acuerdo a su situación dentro de la familia, algunos miembros fueron capaces de obtener “nuevas” parcelas, mientras que otros debían conformarse con secciones de tierra ya trabajadas. Los motores de este proceso de asignación de la tierra fueron la productividad y la capacidad de gestión de cada ejidatario, así como el número de sus descendientes varones.

Durante un largo paseo por el ejido con la hija mayor, desde su casa hasta una parcela que su marido preparaba con un compañero, ella señaló varios

terrenos indicando que habían sido trabajados y mejorados por su padre, quien incluso había construido un aguaje para animales. Alrededor de 1982, sin embargo, algunas de esas parcelas fueron redistribuidas entre otros campesinos de la comunidad, causando un dolor tal que, según ella, llevó a Don José a la tumba. En el momento de aquella reasignación sólo tres de sus descendientes permanecían en El Cuayo y el resto (dos mujeres y dos varones) habían emigrado a la Ciudad de México y a Nueva York. Sin una asignación definitiva de las parcelas, la capacidad productiva de la familia nuclear era un elemento importante para mantener excedentes de tierra y, por tanto, es plausible que ante el envejecimiento de Don José, el ejido estuviese en condiciones de redistribuir parte de sus tierras. Los terrenos afectados fueron precisamente los que Don José utilizaba para sostener ganado, por lo que resulta importante subrayar que la reasignación no sólo tuvo resultados distributivos, sino también repercusiones productivas. Al mismo tiempo, la situación ambivalente del yerno y su familia provocó que ellos fueran los más afectados por la reasignación.

Las tensiones entre hermanos probablemente dieron pie a que el padre muriera sin haber hecho una declaración formal de sucesión, lo que dejó en una situación ambigua las parcelas, las cuales estaban efectivamente siendo trabajadas por el yerno. Esta irregularidad se prolongó por más de una década, hasta la puesta en marcha del PROCEDE; cuando el primer hijo varón fue declarado el sucesor legal, se convirtió oficialmente en ejidatario y aseguró casi 10 hectáreas de tierras distribuidas en tres parcelas, incluyendo el terreno original de seis hectáreas ubicado en el centro del ejido y que su padre compartía con su yerno. La viuda, por su parte, obtuvo una parcela de una hectárea no demasiado lejos del asentamiento urbano.

Si bien el esposo de la hermana mayor fue confirmado como posesionario, su familia y los otros dos descendientes que viven en el ejido hoy dependen casi totalmente de la comunidad y las redes de pares. Así, pues, participaban en las empresas comunales y en actividades rituales. Finalmente, una de sus hijas se casó con un posesionario de El Nopal, que trabaja como vaquero fuera de la localidad y cuya parcela es ahora parte de los activos familiares.

En el momento en que surgió el PROCEDE en El Cuayo, las tensiones dentro de la familia González ya estaban presentes. En general, la certificación no cambió el estado de cosas, pero aseguró a uno de los hermanos frente a los demás miembros de la familia, lo que propició el aislamiento del primero. Sin embargo, como señaló Sandstrom (1991), debido a los problemas causados por las normas de la herencia, las relaciones de pares tienden a ser más importantes que

las relaciones de parentesco en las comunidades nahuas de la Huasteca. Antes de la certificación, todos los miembros de la familia, en particular la hermana mayor, tenían mejores oportunidades de acceder a parte de la tierra familiar; sin embargo, ahora dependen por completo de arreglos temporales (préstamo o renta). Por su lado, el nuevo ejidatario tiene hoy la oportunidad de gestionar sus parcelas en cierta medida al margen de presión familiar o comunal.

Un segundo caso representativo. En el límite sur-oeste de Ojital Cuayo vive Ana (43 años) con su esposo, Francisco (45 años), y cinco de sus siete hijos. Son una familia muy pobre, y a pesar de que tanto Ana como Francisco nacieron en el ejido, no obtuvieron ningún certificado parcelario o título del solar donde se encuentra su casa. Su condición marginal se confirma por la ubicación de su hogar en una zona de difícil acceso, porque está separada del poblado por el riachuelo que corre en su parte sur. Los padres de ambos nacieron en la época en que se formó el ejido y por lo tanto se encontraban, según me aclararon, entre los *petitionarios* oficiales que esperaban se les concediera tierra mediante la ampliación. En el largo proceso de lucha lograron asegurar parcelas para ellos, pero no contaron con suficiente tierra para ayudar a sus hijos.

Sin acceso seguro a la tierra, Francisco nunca fue un campesino independiente. Siempre “ayudaba” a otros dentro y fuera del ejido, a fin de poder sembrar maíz para sostener a su familia. Aunque en ocasiones trabajaba como peón y recibía pagos regulares, en general accedía a la tierra a través de un vínculo personal con su “patrón”, que era también su padrino. De acuerdo con Ana, en diferentes períodos, Francisco había podido hacer milpa en terrenos de El Cuayo; sin embargo, los acuerdos nunca fueron estables y siempre tuvo que regresar la tierra. Por lo general, los permisos a familias sin tierra eran para parcelas muy pequeñas de alrededor de media hectárea. Estos permisos eran invariablemente de corto plazo, porque después de tres o cuatro ciclos, las parcelas debían ser puestas en descanso por al menos dos años. Así pues, la ocupación constante, que podría haber proporcionado la base para que Francisco reclamara la posesión de una parcela en el proceso de certificación, fue impedida por el tamaño de los terrenos que le prestaban.

Por su parte, Ana era una mujer muy activa que cotidianamente visita las localidades vecinas vendiendo pollos, huevos y lechones. Al igual que los miembros sin tierra de la familia González, Ana se mantenía constantemente involucrada en la vida ritual de la comunidad, ofrecía servicios como *espulgadora* (una práctica medicinal de la región) y llegó a participar en la formación de una organización regional de médicos tradicionales (de la que más tarde fue

aparentemente relegada). Ana y su esposo ocuparon algunos cargos menores en la comunidad, y ella en particular era muy activa con relación a la política partidista hoy presente en todas las zonas rurales de México. Este activismo le hacía involucrarse en ciertos momentos con distintos grupos dentro de la comunidad y con frecuencia era objeto de críticas o rechazo. Su activismo, su situación marginal en las redes de El Cuayo y sus pocos recursos para el intercambio, la convertían en presa fácil cuando el conflicto aparecía y era inmediatamente señalada como “chismosa”, una acusación por lo demás común en la región

A pesar de que la familia de Ana es bien conocida en el pueblo, resultó marginada del proceso de certificación. Si bien en materia de propiedad su situación siguió siendo la misma que antes del PROCEDE, una vez distribuidos los certificados resultaba más difícil aún para Francisco tener acceso a la tierra en El Cuayo. De acuerdo con Ana, “no hay más tierra”. Antes de la reforma, la situación ambigua en relación con la posesión definitiva facilitaba el acceso temporal a la tierra través de la mediación colectiva, mientras que, en palabras de un posesionario de San Martín, después “No hay más problema. Ahora tienen sus títulos y no quieren prestar más”.

En 2006, Francisco tenía su milpa en una parcela en *Campo la Mata*, un rancho cercano al vecino ejido Joya Chica. Por varios años, éste había sido el caso. La parcela que estaba trabajando era parte de un terreno más grande que su “patrón” o padrino tenía prestado de un ranchero. A fin de mantener su milpa, Francisco ayudaba a su patrón y a veces también al ranchero. Mientras que la diferencia entre ejidatarios y posesionarios no tenía ninguna importancia para Ana, ella tenía una idea muy clara de lo que constituye una diferencia real entre los campesinos: “los que no tienen terreno trabajan más (...) Antes había algunos que tenían tierra y algunos que no, ahora es lo mismo”.

Un tercer caso es el de Mauricio (65 años), miembro destacado de la comunidad que con la certificación se convirtió en posesionario. Como fue el caso de muchos, él formaba parte de la primera generación nacida en el ejido que fue capaz de obtener tierras de su padre, un ejidatario original, a pesar de no ser el primer hijo. Obtuvo una parcela de su padre y consiguió mantener su derecho y el reconocimiento de la Asamblea. Según él, sus padres “le dieron” parte de los terrenos que ahora posee, mientras que “la autoridad” le otorgó un poco más, que con la certificación tuvo que pagar. Mauricio poseía el título de su solar y dos certificados parcelarios que sumaban 3.4 hectáreas de tierra y complementaba su trabajo en la milpa atendiendo una pequeña tienda de aba-

rroles. Su hermano mayor, que con el PROCEDE se convirtió en ejidatario, tenía nueve hectáreas repartidas en tres parcelas, mientras que los dos hermanos más jóvenes se hicieron de parcelas de 1.5 y 0.5 hectáreas respectivamente. Lo que Mauricio tuvo que pagar fue el exceso de hectáreas que los herederos de su padre en conjunto certificaron (14.4, es decir, justo la cantidad de tierra que se le certificó a él solo). Ninguno de esos terrenos eran adyacentes, lo que confirma una vez más que la distribución de tierras fue un proceso ligado a una dinámica productiva que impedía, con pocas excepciones, la formación de grandes áreas dentro del ejido.

Mauricio se casó con una muchacha de la comunidad y tuvo cinco descendientes, tres varones y dos mujeres. En 2006 sólo una de las hijas vivía en el pueblo, mientras que todos los demás se habían trasladado a la Ciudad de México. Mauricio ocupó diversos cargos en la comunidad y fue muy activo en la lucha por la ampliación que El Cuayo sostuvo durante más de cuatro décadas. Durante la certificación, la condición de ejidatario pasó a su hermano mayor y, quedando ya formalmente como posesionario, sus posibilidades de intervenir en los asuntos ejidales se redujeron. Por ello, tal vez Mauricio era particularmente sensible acerca de la diferencia de estatus jurídico:

el ejidatario tiene más poder y el posesionario menos.... los ejidatarios piensan que son mejores.... ser un ejidatario no significa tener más dinero, porque algunos no trabajan. El que trabaja más tiene más.... Los que tienen más terreno [los ejidatarios] trabajan igual, yo no veo que produzcan más ahora, lo único que quieren es tenerlo (...) las autoridades dicen que son auténticos ejidatarios, le quitaron terreno a algunas personas. A mí me quitaron una parcela y media (...) muy pocos se quedaron sin tierra, les prestan parcelas en otros ejidos como Joya Chica o trabajan como peones.

Certificación en Joya Chica, El Cuayo y San Martín

El primer ejido en concluir la certificación fue Joya Chica. Para 1998, todas sus tierras habían sido medidas y los certificados parcelarios estaban en proceso de ser distribuidos. A la asamblea en Joya Chica sólo asistieron ejidatarios y no se presentaron obstáculos para la aceptación del programa, ni para la distribución de las parcelas y solares urbanos. A pesar de que no existen registros de la asamblea, debido a las inundaciones que en el año 2000 saturaron de agua las

oficinas de la Procuraduría Agraria en Álamo, Veracruz, según el funcionario local a cargo de dicha oficina, el procedimiento en este ejido fue ejemplar en cuanto a la falta de conflictos.⁶⁵

La certificación confirmó la vigencia de la institucionalidad ejidal en la organización comunitaria en Joya Chica. La cantidad de hectáreas otorgada a cada cabeza de familia en la dotación original (once) fue utilizada como la medida para la certificación de parcelas y muy pocos obtuvieron más que eso. Un total de 96 personas se hicieron de certificados parcelarios. En el supuesto de que cada una de ellas represente a uno de los 136 hogares registrados en el censo de población de 2010, el 70 por ciento de tales hogares aseguraron la posesión de al menos a una parcela en Joya Chica. En cuanto a la conformación de la asamblea, es notable que el número total de ejidatarios disminuyó con respecto al número original: mientras que en 1934 se le concedió la tierra a 73 campesinos, después del PROCEDE el número de ejidatarios se redujo a 72.

No fue tan sencillo el caso de El Cuayo, donde el proceso de certificación enfrentó varios obstáculos. El primero tuvo que ver con la petición de ampliación iniciada en 1941 y que en 1996 aún no se había resuelto. Debido a que la certificación podría haber significado abandonar una demanda sostenida por la comunidad por más de seis décadas, la primera respuesta de la asamblea ejidal fue rechazar el ingreso al programa. Este rechazo se mantuvo por alrededor de cuatro años, hasta que la Secretaría de la Reforma Agraria logró resolver el conflicto por la ampliación mediante el pago de una indemnización para la compra de un terreno (que, como se mencionó en el capítulo anterior, se concretó en 2008). La oferta distendió la situación y la comunidad avanzó hacia el asunto de cómo distribuir la tierra. Siguiendo las reglas de operación, la propuesta inicial promovida por la Procuraduría Agraria fue certificar las parcelas según estuvieran distribuidas; sin embargo, esto no prosperó debido a que la ocupación de muchos terrenos se consideraba temporal o estaba en disputa entre grupos o dentro de ellos.

El problema de la propiedad definitiva puso en tensión a los mecanismos de redistribución horizontal que dependían, en parte, de la posibilidad de rotar parcelas. La comunidad en El Cuayo prestaba tierra a los miembros desposeídos pero honorables para sembrar un poco de maíz, pero esto no implicaba la asignación de alguna parcela específica; una vez que el terreno debía entrar en un período de barbecho, los campesinos sin tierra debían devolverla a su propietario original o reintegrarla al bien común. Este mecanismo, al tiempo que

⁶⁵ Entrevista con Mateo López, agosto de 2006.

aseguraba el acceso a una pequeña porción de terreno para un amplio número de miembros que participaban mediante relaciones de parentesco, compadrazgo o de servicio, impedía la ocupación prolongada y, por tanto, bloqueaba la posibilidad de reclamar derechos definitivos. La producción de certificados de propiedad definitiva ponía un claro límite a la capacidad de intervención comunitaria y las posibilidades de redistribuir la tierra de tiempo en tiempo y por tanto enfrentó a grupos y familias dentro del ejido que mantenían añejas disputas sobre los terrenos.

La asamblea de El Cuayo acordó aplicar una regla de distribución que limitaba la posibilidad de acaparar tierra. Se acordó certificar hasta un máximo de once hectáreas por individuo, una menos que en el reparto original. Esta decisión incluyó el acuerdo de que en caso de que alguien controlara más de once hectáreas, debía pagar 3,000 pesos por cada hectárea adicional o reintegrar al ejido el excedente.⁶⁶

En El Cuayo, la Asamblea otorgó derechos parcelarios a un gran número de personas. Aquí, como en menor medida en San Martín, proliferaron los posesionarios, al extremo de que después del PROCEDE estos *ejidatarios de segunda* casi duplicaron el número de ejidatarios con derechos plenos. Resulta interesante saber que, al contrario de Joya Chica, con la certificación el número de ejidatarios aumentó de 52 a 59, de algún modo gracias al largo proceso de ampliación. Otro aspecto de interés en el proceso de certificación en El Cuayo, es que fue acompañado por una intensa actividad ritual. En el año 2000 toda la comunidad participó en una procesión al cerro Ixtacuatlita, uno de los centros telúricos más importantes de toda la región Huasteca. Al año siguiente, es decir, a principios de 2001, apareció una figura auguriosa (La Sirena) en la vera de un camino y propició una fuerte competencia entre los líderes rituales con el fin de conservarla. El Carnaval y la fiesta de Santa Rosa tuvieron excepcional concurrencia esos años, aunque la festividad de la santa la celebraron de forma separada los dos líderes rituales de la comunidad.⁶⁷

⁶⁶ Las parcelas vacantes, prestadas o bajo disputa, fueron delimitadas, pero no certificadas, representando el doce por ciento de la superficie total del ejido. Si bien no se logró resolver “definitivamente” los problemas, el resultado permitió mantener algún nivel de control colectivo sobre el ejido.

⁶⁷ Si bien no es algo que discutamos a profundidad, esta efervescencia se puede relacionar con las tensiones producidas por el PROCEDE. La ritualidad ofrece un mecanismo para afrontar los conflictos en tanto abre un espacio para su representación simbólica. Además, la ritualidad constituye una clara afirmación de la comunidad (la costumbre) frente a las reglas impuestas por el ejido y la reforma.

Por último, el proceso de certificación en San Martín fue tan problemático como en El Cuayo, aunque los conflictos aquí fueron de diferente naturaleza, porque la cuestión central fue la tensión entre ganaderos y productores de milpa. La manifestación más patente de este conflicto fue el contraste entre el centro del ejido y su anexo, El Nopal. Como se mencionó en el capítulo anterior, esta separación se hizo evidente desde la década de 1970, cuando el ejido comenzó a expulsar población. A diferencia de los ejidos vecinos, donde el límite para absorber la población se vinculó claramente con la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura, en este caso se relacionó también con la presencia de miembros que efectivamente resistieron la fragmentación y la redistribución de sus activos. Esto condujo a la formación de dos polos dentro del ejido, El Nopal –marginal en tamaño y organizado como una comunidad campesina basada en la producción de milpa–, y San Martín, donde se concentran los pequeños rancheros. En San Martín, participaron en la asamblea todos aquellos que contaban con algo de tierra sin importar su estatus legal; sin embargo, el derecho al voto estuvo reservado a los ejidatarios. En las dos primeras reuniones surgieron acusaciones de acumulación injusta de la tierra y la mayoría de los ejidatarios se negaron a suscribir el programa, debido a que éste legalizaría el estado de cosas. Ordenar la asamblea se convirtió de entrada en un asunto relevante. Con el tiempo, la tensión entre campesinos y ganaderos promovió dos propuestas distintas de certificación:

1. La de los campesinos fue similar a la utilizada en El Cuayo: certificar no más de quince hectáreas por individuo (4 más que las originales 11 hectáreas concedidas por la resolución presidencial a cada beneficiario), y exigir a quienes controlaran más, que pagaran una indemnización o dejaran vacantes los excedentes.
2. La segunda propuesta, apoyada por los ganaderos, fue certificar las parcelas tal y como estaban distribuidas sin compensación alguna o límite en la cantidad total de tierra por persona.

Durante dos años, el PROCEDE en San Martín quedó atrapado entre estas dos propuestas. En 1998, los funcionarios agrarios “facilitaron” el proceso al permitir que la asamblea se dividiera en dos: una en el centro y otra en El Nopal. Esta separación benefició a los ganaderos, ya que se agrupaban en el centro y, por tanto, su fuerza relativa aumentó cuando el grupo de campesinos se dividió entre El Nopal y San Martín. Sin embargo, incluso en esta situación ventajosa,

la propuesta de los ganaderos fue aprobada con sólo un voto de diferencia y así fue avalada por la Procuraduría Agraria aun cuando se trataba de un acuerdo irregular, debido a que las reglas de operación del programa indicaban que tres tercios de los votos eran necesarios para las decisiones que afectaran la asignación de tierras (artículo 27 de la *Ley Agraria*).⁶⁸

En San Martín, cuatro personas garantizaron la posesión de más de veinte hectáreas cada una, y otras seis de entre 15 y 20 hectáreas de tierra; mientras la mayor parte de tenedores de certificados –53 personas– adquirieron derecho a menos de 2 hectáreas (ver Figura 11). En este ejido, un pequeño grupo fue capaz de pasar sobre las regulaciones comunal y ejidal y de hacerlo con el aval de la Procuraduría Agraria. Aunque en general la diferencia de estatus (ejidatario-posesionario) se correlaciona con la diferencia en la cantidad de tierra concedida, la pertenencia al grupo de los ejidatarios no fue necesaria para la acumulación de terrenos, ya que algunos posesionarios fueron capaces de integrarse al grupo de beneficiados con grandes cantidades de tierra.

Como en El Cuayo, el PROCEDE en San Martín produjo un gran número de posesionarios, dos por cada tres ejidatarios, pero el número total de ejidatarios no varió con relación al número original: 114 (89 en San Martín y 25 en El Nopal). Suponiendo que cada sujeto de derecho representa una familia en el ejido; en conjunto, 86.8% de los hogares logró obtener al menos un certificado parcelario, el porcentaje más alto de los tres casos aquí estudiados. Sin embargo, la gran mayoría de los hogares aseguraron parcelas muy pequeñas.

⁶⁸ Los representantes gubernamentales tenían que ser “facilitadores” o “mediadores”, pero el caso de San Martín muestra el nivel de involucramiento en la solución. Se sancionó la separación irregular de asambleas, y se presionó con la idea de que el programa concluiría en el año 2000, por lo que una decisión debía ser tomada de inmediato a fin de obtener el servicio de forma gratuita.

TABLA O RESULTADOS DEL PROCEDE EN TRES EJIDOS: PARÁMETROS DESCRIPTIVOS					
	El Cuayo	La Joya	San Martín	El Nopal	San Martín/ El Nopal
Sujetos	183	100	167	40	207
Media (Ha)	35872.3	83632.8	60261.5	64840.0	61146.2
Mediana (Ha)	27440.5	98034.5	51394.5	55537.5	51686.2
Moda (Ha)	4904.0	535.3a	10000.0	1005.8 ^a	10000.0
Desviación Std.	26957.2	42781.8	52049.1	43523.9	50447.8
Mínimo	000	535.3	1361.6	1005.8	1005.9
Máximo	135261.1	195933.8	248419.6	162476.5	248419.6
^a Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño/ Elaboración propia con datos del PROCEDE.					

En El Nopal, la asamblea fue atendida sólo por los ejidatarios y la distribución se llevó a cabo de una manera equitativa. Hay una clara diferencia entre la distribución de El Nopal y la de San Martín, aun cuando formalmente constituyan un mismo núcleo. La certificación fue la oportunidad que tuvo la comunidad de El Nopal para distanciarse del centro del ejido. Al igual que en El Cuayo, los campesinos de El Nopal aplicaron la regla de certificar la tierra tal y como estaba de hecho distribuida; y quien excediera el límite de once hectáreas, que pagara o devolviera el resto para redistribuirlo. En este caso, un patrón muy diferente al del centro emergió: una distribución casi normal con la mayor parte de los miembros asegurando entre cinco y seis hectáreas.

FIGURA 11
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA: PARCELAS CERTIFICADAS POR INDIVIDUO SEGÚN ÁREA TOTAL

La Figura 11 presenta un primer acercamiento gráfico a la distribución de la tierra en los tres ejidos. Los histogramas muestran la superficie certificada por persona. Joya Chica presenta una distribución que seguramente se acerca mucho a lo que esperaban los reformadores, con la mayor parte de la tierra distribuida de acuerdo a la organización original del ejido y un pequeño grupo de nuevos sujetos con poca tierra pero derechos garantizados. El Cuayo y El Nopal muestran distribuciones similares que se acercan a una curva normal,

aunque las áreas certificadas y el número de individuos varía. En los dos casos se aplicaron estrategias similares y cabe la hipótesis de que este tipo de distribuciones son el resultado de una *estrategia campesina* que limita la concentración de la tierra, mientras permite el acceso a gran número de individuos. Por último, San Martín presenta una distribución muy desigual que pone al descubierto su situación dividida: un enorme grupo con parcelas muy pequeñas, un sector medio que se asemeja a la situación de El Cuayo, y un pequeño grupo que posee grandes extensiones de tierra.

Las Figuras 12 y 13 muestran los datos de la fragmentación de la tierra de cada ejido y la distribución de parcelas entre los titulares de derechos. Esta información se vincula con las actividades productivas y las diferencias sociales que emergen según el tipo de concentración de la tierra. La brecha social producto de la fragmentación de la tierra puede observarse en la distribución de parcelas entre los titulares de derechos, tal como aparece en la Figura 12, que presenta los gráficos de dispersión de cada ejido; es decir, señala la relación entre el número de parcelas y la cantidad de tierra por persona. Aquí es posible observar que en el caso de Joya Chica, a un aumento en la cantidad de tierra corresponde un incremento en el número de parcelas. Algo similar ocurre en El Cuayo, pero en este caso existe una alta concentración en el rango de una parcela de menos de 2,5 hectáreas de extensión y el número de personas con certificados es muy elevado. Para el caso de San Martín, el número de beneficiarios semidesposeídos de tierra (menos de una hectárea) es relativamente mayor que en los otros dos casos, pero aquí existen sujetos con parcelas de gran tamaño.

FIGURA 12
PROPIETARIOS DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PARCELAS Y LA EXTENSIÓN TOTAL DE TIERRA CERTIFICADA

Tomando como base el rango de 2 a 3 hectáreas de tierra necesaria para cubrir de forma sostenida los requerimientos de maíz por núcleo familiar bajo el sistema de milpa, es preciso advertir que en los casos de El Cuayo y San Martín, un importante número de personas están por debajo de ese rango. En San Martín, la distribución muestra una concentración en el rango de una a dos parcelas de menos de cinco hectáreas como en El Cuayo; un grupo importante con entre una y dos parcelas de tamaño medio, y un pequeño grupo de individuos que tienen dos o tres parcelas de gran tamaño.

La gráfica de puntos en la Figura 13 muestra el número de parcelas en función de su tamaño (cada punto representa una parcela). También incluye gráficos circulares con los porcentajes que las parcelas agrupadas por tamaño representan en la extensión total de los ejidos. En los tres casos, la presencia de la producción

de subsistencia que tiende a fragmentar la tierra, es claramente visible. Teóricamente, se puede sostener que, en el marco del sistema de milpa, la acumulación de tierra corresponde en general con la acumulación de parcelas, algo que a su vez se vincula con la fragmentación. Esta fragmentación facilita la rotación y un uso intensivo pero sostenido de la tierra. En este sentido la correlación entre fragmentación y productividad en El Cuayo es relevante. Por su parte, en San Martín y en Joya Chica existen algunas grandes áreas que, sin embargo, hay que distinguir, porque en Joya Chica las parcelas grandes corresponden principalmente a las secciones improductivas de las cañadas, mientras que en San Martín pertenecen a zonas llanas cubiertas con pastura.

FIGURA 13
DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS SEGÚN TAMAÑO (POR UNIDAD Y PORCENTUAL POR RANGOS)

En los tres ejidos, entre 25 y 30% de la tierra se divide en parcelas de 3-6 hectáreas, una extensión que permite un uso sostenible y diverso de los recursos, y donde incluso pueden obtenerse excedentes en el marco del sistema de milpa. Una vez más, El Cuayo se destaca como un ejido muy fraccionado, con la mitad de su extensión dividida en parcelas de tres hectáreas o menos de tamaño; en tanto, en los otros dos ejidos, las pequeñas parcelas ocupan alrededor de 20% de sus territorios.

Los problemas de fragmentación y de exclusión de grandes áreas cobran mucha relevancia en el contexto regional caracterizado por la coexistencia de dos modelos de producción: uno orientado a la concentración (potrero), y otro a la fragmentación de la tierra (milpa). En general, esta diferencia sigue las líneas de una abrupta geografía en la que las milpas se concentran en las colinas, mientras que el ganado ocupa las llanuras. Situados en las tierras de menor valor y más escarpadas, los ejidos tienden a ser ocupados por la agricultura. Sin embargo, parte de las valiosas llanuras de San Martín se ocupan para la siembra de maíz, por lo que el uso de la tierra no puede deducirse sólo del carácter de la geografía; y por el contrario, la distribución y la fragmentación se explican también por divisiones y conflictos internos en los ejidos. Como se mencionó ya, San Martín exhibe un importante grado de diferenciación social.

Nuevos sujetos de Derecho

El segundo aspecto que resulta de la certificación, es la distinción de los miembros con respecto a su situación jurídica. Este tema en particular tendrá repercusiones en el futuro próximo de los ejidos, debido a que si bien los posecionarios tienen muy restringidos sus derechos y son excluidos de las asambleas, controlan al mismo tiempo recursos importantes en dos de los tres ejidos.

La problemática distinción entre ejidatarios y posecionarios se revisó con bastante detalle en el capítulo 2. La presencia de familias sin seguridad en la tenencia de la tierra dentro de los ejidos fue uno de los problemas centrales que la enmienda de 1992 trató de resolver mediante la creación de la figura del posecionario. Se señaló ya que un elevado número de posecionarios es de esperarse en zonas o regiones donde el acceso a la tierra es muy restringido, pero donde las organizaciones comunitarias han facilitado la distribución de la tierra más allá del núcleo familiar, a través de acuerdos económicos tradicionales o informales. De esto se deduce que el número y situación de los posecionarios refleja la naturaleza de los mecanismos de acceso a la tierra, a su

vez relacionados con la organización particular de los ejidos. Sobre este asunto en particular, es que los tres ejidos son especialmente distintos.

En Joya Chica, los posesionarios forman un grupo social y numéricamente marginal. En este ejido, la diferencia en la cantidad de tierra depende casi por completo del estatus jurídico; por tanto, las categorías representan a dos grupos claramente definidos (véase los gráficos de ramificación en la Figura 14). Al primero y más pequeño (38 personas) se entregaron entre una y seis hectáreas, mientras que el segundo y más numeroso (58 personas) obtuvo entre siete y quince hectáreas. En cuanto a la concentración y dispersión de las propiedades individuales, de las 210 parcelas que fueron certificadas, 178 (con una extensión media de 4.2 hectáreas) se destinaron a los ejidatarios, mientras que 32 fueron puestas en manos de posesionarios (con un promedio de 2.3 hectáreas por cada uno). La mayoría de los posesionarios tienen una parcela, mientras que los ejidatarios tres.

FIGURA 14
COMPOSICIÓN DE POSESIONARIOS Y EJIDATARIOS SEGÚN ÁREA CERTIFICADA

En El Cuayo la diferencia entre poseсионarios y ejidatarios en materia de acceso a la tierra no es tan profunda como en el caso de Joya Chica. En promedio, sólo hay una hectárea de diferencia entre las dos categorías, y casi la mitad de los ejidatarios se encuentran en las mismas condiciones que el conjunto de poseсионarios. Aquí, la mayoría son productores de maíz independientemente de su estatus legal. Además, como el número de miembros aumentó, también se incrementó el número de poseсионarios, que en este caso constituyen un visible grupo.

La situación de los poseсионarios de San Martín revela, una vez más, la presencia de dos fuerzas contradictorias en la asignación de tierra y derechos. Como se ha mencionado en numerosas ocasiones, existe un pequeño conjunto de grandes áreas, a la vez que se presentó también un intenso fraccionamiento en pequeñas unidades. Esto produjo un gran número de poseedores de certificados, pero las diferencias entre ejidatarios y poseсионarios son muy marcadas: 9.5 y 2.6 hectáreas promedio fueron asignadas a ejidatarios y poseсионarios respectivamente (Figura 14). En San Martín, los poseсионarios obtuvieron 20% de la tierra. Esta información sugiere que la extendida atribución de derechos se otorgó en parcelas pequeñas concentradas en las zonas de menor calidad. La certificación no sólo dio lugar a una marcada diferencia entre categorías de sujetos, sino también a una marcada división territorial del ejido coincidente, en parte, con las diferencias en la calidad de la tierra. Áreas relativamente grandes y compactas se disociaron de secciones altamente fraccionadas atravesadas por múltiples senderos y caminos, y la separación entre el centro y el anexo se reforzó también (ver planos en páginas 207, 208 y 209). En San Martín, la

aptitud de la tierra para la ganadería extensiva permitió la formación de algunas grandes unidades. Además, la acumulación de ganado revela la presencia de un sector en el que la distinción entre ejidatarios y poseionarios no parece ser determinante.

Exclusión normativa, participación y negociación

Para cerrar este análisis, todos los elementos hasta aquí expuestos sobre la evolución de las comunidades y sobre los resultados del programa de titulación, se pueden sintetizar en una definición del mecanismo mediante el cual operó la distribución de tierra y derechos en cada ejido: exclusión normativa en Joya Chica, participación en El Cuayo y negociación en San Martín. En el primer caso, la atribución de derechos se definió casi por completo mediante la plena participación de los miembros en el marco institucional original del ejido. Los ejidatarios llevaron a cabo la certificación, y todos aquellos que no tenían derechos reconocidos bajo la legislación derogada fueron excluidos *en principio* del proceso. Con pocas excepciones, la distribución partió de la base de una distribución equitativa de la tierra entre todos los ejidatarios, mientras que la re-distribución entre poseesionarios se limitó, como máximo, a un miembro por cada hogar. En este caso, el propio régimen de propiedad definió tanto los mecanismos como los resultados del programa.

Las condiciones que favorecieron la **exclusión normativa** fueron: poca disponibilidad de tierras productivas (capacidad limitada para la fragmentación y la acumulación de grandes superficies), precedencia del ejido sobre la organización comunitaria y baja productividad general.

En el caso de El Cuayo, la pertenencia a la comunidad, en particular mediante la participación en redes de parentesco y grupos de pares, definía el acceso a la tierra y medió la certificación. La asamblea ejidal llevó a cabo el proceso, aunque operó dentro de un marco institucional más amplio del cual los ejidatarios fueron representantes. La competencia entre las redes de intercambio favoreció la permanencia de un elevado número de personas que en el momento de la reforma ya tenían acceso a la tierra. Debido a la distribución desigual de la tierra, no sólo entre los ejidatarios y no ejidatarios sino también entre los propios ejidatarios, en este ejido la reglamentación oficial no servía para excluir (como en Joya Chica), pero sí para limitar la acumulación. Durante un largo período, la estructura ejidal en El Cuayo operó al servicio de las necesidades comunitarias, como lo demostró la larga lucha por la ampliación. En el contexto de la certificación, la institucionalidad ejidal permitió limitar el acaparamiento y sirvió para mantener bajo control colectivo una parte de la tierra (las parcelas no asignadas). En este caso, la estructura ejidal se subsumió en la organización comunitaria, pero no por ello dejó de ser un activo institucional importante.

Las condiciones que permitieron este **mecanismo participativo** fueron: la limitación y la homogeneidad de la tierra (que permitió una alta fragmentación); precedencia de organización comunitaria sobre la institución ejidal; alta productividad y pocas diferencias en cuanto a la riqueza entre la población.

Por último, en San Martín, la certificación involucró mucha negociación e incluso la intervención decidida de la Procuraduría Agraria. Aquí intereses faccionales permitieron la formación de un gran grupo de campesinos semidesposeídos (principalmente posesionarios) y al mismo tiempo la consolidación de una elite de pequeños rancheros que se apropiaron de parte de la tierra más valiosa. En este caso, la organización ejidal fue superada por el orden colectivo, pero en un sentido distinto al de El Cuayo, debido a que en este caso esta trasposición no sirvió a los intereses comunitarios. Así, la división entre el centro de orientación ganadera y el anexo de tendencia milpera (El Nopal) se profundizó. La negociación entre estos dos polos fue fundamental para arribar a un acuerdo que, sin embargo, parece frágil. La asamblea ejidal se amplió a todos los miembros sin tener en cuenta su estatus jurídico. Esta situación aparentemente democrática operó contra la organización de la comunidad que, aunque vertical, aseguraba la representación del conjunto de redes y grupos, y permitió que el proceso de certificación quedara abierto a manipulación. De tal suerte, en San Martín, la norma agraria y la pertenencia participativa cedieron frente a la posición económica y la capacidad de negociación individual, lo que explica por qué algunos posesionarios fueron capaces de asegurarse importantes cantidades de tierra. Diferencias sociales y espaciales fueron aspectos importantes de la negociación, que fue la marca distintiva del proceso de certificación en San Martín. La negociación también dependió de algunas limitaciones en la cantidad de tierras y diferencias en su potencial productivo; una débil estructura ejidal; la coexistencia conflictiva de comunidad y facción, y diferencias en la riqueza y la productividad entre los grupos.

Exclusión normativa, participación y negociación, son la cristalización de estrategias sociales que se desarrollaron, operaron y modelaron a los tres ejidos bajo la Reforma Agraria. Demuestran que el ejido, como un conjunto particular de normas, fue más un marco que una fuerza motriz para la producción de cualquier acuerdo particular. Con los mismos elementos básicos, se generaron tres diferentes formas de articulación entre tierra y organización. La Figura 15 presenta de forma gráfica la estructura de cada uno: la comunidad ejidal cerrada de Joya Chica, la estructura de red centrada en la asamblea ejidal de El Cuayo con posesionarios organizados en numerosos grupos, y el orden

irregular en San Martín, con fuertes diferencias en las cantidades de las tierras y una estructura descentrada.

FIGURA 15
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A TRES MODELOS ORGANIZATIVOS

Modelos de acceso a la tierra

En este punto cabe advertir que en los casos estudiados aquí, existen dos contrastantes modelos de explotación de la tierra: milpa y potrero, cada uno reforzando normas de acceso diferentes (Tabla P).

TABLA P ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS: MILPA Y POTRERO		
	Milpa	Potrero
Uso de la tierra	Fragmentación	Concentración
Con base en	Trabajo familiar	Capital
Rotación/diversidad	Alta	Baja
Orientación primaria	Alimentación	Acumulación
Tendencia organizativa	Jerarquías/grupos	Estatus/clase

El comportamiento productivo de cada ejido someramente descrito antes, en combinación con la información producida por el PROCEDE, corrobora que

la producción centrada en el sistema de milpa promueve el uso diversificado de los recursos que incluye vacas, cerdos, árboles frutales, aves de corral, chiles, verduras, etcétera. Este uso diversificado es, por el contrario, minado por la tendencia a concentrar en un solo producto todos los recursos disponibles, siendo éste el eje central de la estrategia ganadera o de los monocultivos comerciales que proliferan en las planicies del golfo. Milpa y potrero conviven en diferentes niveles o en formas variables en los tres casos estudiados. Su presencia y persistencia se resuelve en una escala más amplia que la de los ejidos. Por más milperos que sean los campesinos de El Cuayo, en la elucidación de sus estrategias productivas incluyen al ganado, en cuanto éste forma parte de la diversidad productiva. Por ejemplo, algunos campesinos pueden producir pasto para vender, incluso si no son rancheros. También los propietarios de ganado pueden pagar jornales a los campesinos sin tierra o semidesposeídos para hacer milpa para ellos, o pueden comprar cualquier excedente de maíz de sus vecinos.

Así pues, la organización productiva se vincula también con el tipo de arreglos de acceso o transferencia que es posible edificar. Los arreglos basados en la distribución de las cosechas a cambio de tierra no son comunes, debido a la intensidad de trabajo que requiere la milpa y a la centralidad del maíz para la unidad doméstica. Para aquellos que brindan atención continua a la milpa (limpieza de las malezas, cuidado después de fuertes lluvias o vendavales, arreglo de zurcos, entre otras actividades cotidianas), por lo general el resultado es una buena producción. Una milpa mal atendida, tratada solamente con plaguicidas, produce maíz de menor calidad y en menor cantidad. Así, las dificultades para compartir las cosechas y para integrar parcelas en unidades más grandes, tienen que ver con la intensa labor que requiere el maíz bajo esta técnica, aunque también se deben asociar a su valor simbólico en tanto la milpa es una extensión de la familia nuclear. En este sentido, a pesar de que un enfoque puramente económico podría explicar la racionalidad involucrada en la organización productiva centrada en la milpa, es preciso tener en mente que se trata también de una estrategia cultural, ambiental e incluso política (Esteva y Marielle, 2003; Ixmattlahua *et al.*, 1982; Ruvalcaba, 2004).

Las estrategias productivas también se ven afectadas por las oportunidades que ofrece el mercado y los elementos asociados, tales como la concentración del financiamiento en determinados productos o tecnologías. Debido a que el mercado está acoplado a la estructura de la propiedad, los reformadores estaban muy interesados en producir un régimen que favoreciera las operaciones privadas y permitiera la retracción de la esfera pública. No obstante, el mercado

también afecta las estrategias productivas, promoviendo la orientación hacia productos comerciales tales como pastos o cítricos; o en los casos que aquí se estudian, la concentración de grandes áreas para la producción ganadera (siendo éste el único producto que tiene un mercado local seguro y relativamente estable, como se discutirá brevemente en el siguiente capítulo). Así, todos los elementos del modelo son variables y el equilibrio no puede ser una de sus características, como lo demuestra la conflictiva historia de las relaciones de propiedad en la Huasteca.

De un modelo fluido a uno fijo

Los patrones de fragmentación y distribución de los derechos expuestos por el PROCEDE dan cuenta de la presencia de mecanismos de distribución de la tierra articulados con la organización productiva, la calidad de los recursos y la institucionalidad de las comunidades, aspectos todos variables en el tiempo. Una consecuencia inmediata de la reforma fue la fijación de la distribución de recursos y derechos. En el momento en que los títulos y certificados fueron entregados a los nuevos propietarios, una serie de expectativas dependientes de la variabilidad de los mecanismos de distribución desaparecieron:

1. La expectativa de más tierra a través de la intervención estatal se terminó.
2. La permanencia, producción y cumplimiento de las normas comunitarias dejaron de ofrecer la oportunidad de acceder a una parcela dentro del ejido.
3. La redistribución periódica de la tierra por parte de la comunidad se hizo imposible.
4. La rotación de parcelas, siendo un aspecto central del sistema de milpa, se complicó aún más de lo que ya era.

Los títulos y certificados crearon un vínculo directo entre los individuos y sus tierras, el cual ya no está sujeto a la regulación comunitaria. Esta situación impacta la concepción espacial del régimen: ejidos como los aquí estudiados que tienen todas o casi todas sus tierras fraccionadas, ya no son las unidades político-territoriales que solían ser. Lo que queda, y seguramente persistirá, es la compleja red de parcelas mecánicamente articuladas a un esquema jurídico bastante abstracto.

Dos expresiones de este cambio en la dimensión espacial, son la percepción generalizada de que el beneficio central de los títulos y certificados es sólo la seguridad individual, y la redefinición de la división social entre los que tienen tierra y los que no. Esta brecha existía antes de la reforma, pero estaba relacionada con la posición familiar y se concretaba en el trabajo y las relaciones comunitarias, mediante las cuales ésta o aquella parcela quedaba o dejaba de quedar bajo el control de algún ejidatario y su círculo de allegados. Hoy el certificado parcelario asegura el dominio definitivo de un pedazo de tierra claramente delimitada, sin que el trabajo o los vínculos comunitarios tengan injerencia alguna. Con los certificados ahora la gente puede demostrar su propiedad y defenderla: *cada uno sabe cuál es su terreno*.

En un contexto de continua escasez de tierra, la fragmentación y redistribución de las parcelas fueron procesos constantes durante el período distributivo de la Reforma Agraria. Incluso después de que los ejidos habían llegado al límite de su capacidad para absorber la población, cambios en la posesión de las parcelas podían darse en función de los equilibrios entre grupos o capacidades de trabajo. Los conflictos para la implementación del PROCEDE en El Cuayo y San Martín sugieren que bajo el régimen anterior, la posibilidad de que alguien viera parte de su tierra ocupada por otra persona era bastante alta. Sin embargo, aun cuando tal cosa pudiera parecer o fuese efectivamente injusta, la pérdida no era definitiva como ahora lo es. Antes, si algún ejidatario enfermaba y no podía explotar efectivamente su tierra, no tenía más remedio que permitir que otros la utilizaran, pero su derecho (y el de su familia) estaba asegurado; hoy, compelido a vender, la pierde definitivamente.

Debido a que la mayor parte de los campesinos aseguran que obtuvieron tierra del ejido y no de una persona en particular, no es de extrañar que la utilidad de los títulos y certificados se asocie con la seguridad frente al colectivo, no frente a algún forajido sin escrúpulos: prueba, defensa, recuperación, protección, son ideas constantes en el discurso que rodeó la enmienda de 1992. Sin embargo, ya que todavía imperan la informalidad, los altos costos de transacción y las deficiencias de información en el mercado, esta nueva seguridad individual no vale tanto. Con todo, no sirve de mucho tener un título que asegure la propiedad si no es posible trabajar la tierra, y la capacidad de un individuo de ser productivo sigue dependiendo en gran medida de sus pares (o de la disposición de capital para contratar trabajadores en caso necesario).

La fluidez en el uso de la tierra ejidal estaba directamente relacionada con las estrategias productivas disponibles. Como se ha mencionado antes,

las condiciones ambientales y los requisitos de la milpa dificultan mantener grandes áreas en producción al mismo tiempo, sin recurrir a fuentes de trabajo externas a la familia nuclear (lo que abriría el acceso). Debido a que el ganado y los monocultivos comerciales presentan importantes restricciones en cuanto a la calidad de la tierra y la inversión de capital, un ejidatario con derechos reconocidos en once o más hectáreas de terreno, pero carente de capital, se veía obligado a permitir que miembros de su red de parentesco o de su grupo de pares utilizaran su tierra, lo que le permitía mantenerlas bajo control, ya que no siendo éste el caso, debía entregar parte de su patrimonio a la comunidad. Hoy se sigue presentando básicamente la misma situación.

Acceso a la tierra

En el centro de los debates sobre la enmienda de 1992 estuvo la potencial concentración de la tierra y la consiguiente exclusión de grandes sectores de la población del medio básico de subsistencia. Un cambio completo de la estructura de propiedad involucra procesos de tránsito generacional y transformaciones estructurales que pueden tardar mucho tiempo en ser verificables. Independientemente del sistema de propiedad en la región de estudio, la escasez de tierras es una situación que prevaleció durante todo el período distributivo de la reforma agraria, cuando mecanismos informales de acceso que involucraban a las propiedades sociales existían a contrapelo del régimen ejidal y todos sus supuestos desarrollistas y moralistas. Es muy probable que suceda lo mismo con el nuevo modelo de ejido liberal.

Frente a la consideración de que la estructura de propiedad y los cambios de régimen pueden tomar décadas en ser verificables, el acceso a la tierra aparece como un proceso mucho más dinámico vinculado a los ciclos productivos anuales y a los continuos cambios en las economías de los hogares. Un propietario puede tomar varios años antes de decidirse a vender su parcela, pero en el inter puede lograr algunos arreglos diferentes que afectan las oportunidades de otros productores en el corto y mediano plazos.

Con base en los resultados analizados antes, se adelantó un modelo descriptivo en el que el acceso a la tierra no sólo depende de la normatividad, sino también y de forma relevante, de la calidad de las tierras, la organización colectiva, la orientación de los productores y el mercado. Este modelo permite ordenar procesos como los experimentados por los ejidos, que desde antes

de la reforma fueron absorbidos por zonas urbanas, fraccionados y vendidos irregularmente. También con él se podría abordar la evolución de mercados de alquiler o renta comunes en las zonas de producción comercial, como la extensa zona agrícola del noroeste, las grandes zonas de producción de fruta en Colima, o en las llanuras costeras de la Huasteca (Hoffmann, 1995). Caben también los arreglos irregulares que abarcaban tierras de mediana o baja calidad y donde la agricultura de subsistencia es la actividad básica de la gran base campesina, así como los acuerdos de préstamo solidario mediado por redes de parentesco, ritual o grupos de pares, que han sido ampliamente registrados (Núñez, 2000) y que constituyen el material del presente trabajo.

Puesto que el acceso a la tierra estaba mediado por la comunidad y guardaba relación además con el potencial productivo de cada miembro, el equilibrio de la tenencia tendía a ser frágil y se originaban procesos de reapropiación o redistribución internos. Estos procesos se relacionan con cambios en los recursos de cada hogar o en su capacidad productiva. Bajo la regulación anterior a la reforma de 1992, cualquier acuerdo que involucraba que agentes externos al ejido trabajaran su tierra, era ilegal. La legislación anterior incluso restringía el uso de mano de obra asalariada, por lo que casi todos los acuerdos de acceso que involucraran a no-ejidatarios debían ser informales. En El Cuayo, estos arreglos estaban regulados por la costumbre colectiva, que establecía tácitamente las reglas de acceso. Para los campesinos era “el ejido”, bajo el control comunitario, la entidad que concedía, prestaba y retiraba la tierra, no un miembro en particular.

Bajo la regulación anterior, la orientación productiva del régimen ejidal no era sólo una figura demagógica. Durante las décadas de intenso desarrollo (1936-1950), elevar la productividad de los ejidos era un objetivo relevante de la política económica gubernamental. Después de ese período, el apoyo estatal disminuyó y los esfuerzos se trasladaron al sector rural privado. Mejorar la capacidad productiva se convirtió en un aspecto residual de la reforma agraria, pero incluso entonces el criterio de agotamiento o plena explotación de la tierra continuó siendo utilizado para rechazar peticiones de reparto, como lo demuestra el caso del ejido El Cuayo. Apoyado o no por el Estado, el carácter productivista del ejido convertía a los ejidatarios y las asambleas en entidades encargadas de velar porque la tierra fuera explotada plenamente, en muchos casos sin importar sus capacidades naturales y, para algunos, con pocos resultados social y económicamente benéficos (Warman, 2001: 63-64). No es claro si la reforma transformó en verdad el productivismo ejidal, lo que sí logró cla-

ramente fue desvincularlo de cualquier idea de desarrollo nacional, o colectivo siquiera. Los ejidatarios tienen ahora el derecho a decidir qué hacer con sus parcelas sin tener en cuenta el programa de producción del ejido.

Las Figuras 16 y 17 describen el acceso a la tierra en El Cuayo antes y después de la modificación constitucional, recurriendo al modelo no lineal presentado más arriba (Figura 15). Antes de 1992, vale destacar como definitorios: la condición jurídica de la familia; la pertenencia comunitaria a través de la red de parentesco, ritual o de grupos de pares, y el potencial y capacidad productiva de cada hogar.

FIGURA 16

Dos elementos asociados con el acceso, estrategias productivas y calidad de la tierra, no se vieron afectados inmediatamente por la reforma, lo que sí

sucedio con la capacidad de intervención colectiva. La separación entre ejido y comunidad modificó además los términos de pertenencia a esta última. Antes de 1992, formar parte de la comunidad implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de acceder a una cuota mínima de tierra del ejido para hacer milpa, mientras que hoy la pertenencia además de la residencia y la participación en el trabajo común, se ha ido transformando e incluye la participación en contratos colectivos de arrendamiento o compra de tierras fuera de los ejidos, o la participación en la conformación y soporte de rutas migratorias estables.

FIGURA 17

MODELO DE ACCESO A LA TIERRA EN EJIDO EL CUAYO DESPUÉS DE LA REFORMA

La reforma puede ser vista como un momento de inflexión en el cual los individuos ordenan sus discursos y evalúan su situación. Por supuesto, muchos problemas que afectan el acceso a la tierra estaban presentes desde mucho

antes de la enmienda al Artículo 27. La degradación de tierras, la migración, la falta de inversiones y oportunidades de mercado, los conflictos de posesión e incluso la separación entre los órdenes comunal y ejidal, son asuntos que los campesinos han enfrentado durante años. El hecho de que perduraran durante todo el período de reparto acuerdos de préstamo y renta ilegales, tiene que ver con que la reforma no resolvió por completo el problema agrario. Sin embargo, vale preguntarse qué ha pasado con estas dos formas tan persistentes de acceso.

Préstamo y alquiler

Un aspecto particular de la Huasteca es la muy temprana presencia de los acuerdos de acceso distintos al intercambio de tierra por trabajo. Antes de la Revolución de 1910, las haciendas no eran unidades autárquicas operadas por trabajadores acasillados. Las comunidades campesinas habían logrado mantener el control sobre algunas zonas bajo el régimen de copropiedad o rentaban terrenos. Una clase media de pequeños o medianos rancheros mestizos e incluso indígenas emergió en toda la región controlando los poderes locales. Los campesinos podían desplazarse entre distintas unidades productivas (haciendas, tierras comunales o ranchos) mediante contratos de arrendamiento, cuya duración era variable, aunque se podían establecer para muchos años (por ejemplo, el caso de los campesinos de Joya Chica, que en su petición de ampliación decían llevar décadas rentando un terreno a un ranchero local). El préstamo a cambio de servicios indirectos (desmonte, empastado, servicios domésticos, cuidado de animales) seguramente era también una práctica común, aunque en estos casos los acuerdos eran de tipo personal.

El alquiler y préstamo de terrenos pequeños son prácticas comunes y extendidas y hasta se las puede identificar como tradicionales en la Huasteca. Durante el siglo veinte, a pesar del importante nivel de distribución de tierras en la región, el crecimiento demográfico y la baja calidad de gran parte de la tierra distribuida, garantizaron la continuidad de estas dos formas de acceso para las familias sin tierra o los campesinos cuyos terrenos entraban en largos períodos de descanso.

TABLA Q											
FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA EN EL EJIDO EL CUAYO (RELEVO HOGARES 2006)											
Hogares	Con certificados			Sin tierra		Propiedad		Renta		Préstamo	
	E	P	76.3%	R	23.1%						
38	10	19				9		25	65.8%	8	21%
E: Ejidatarios; P: Posesionarios. Residente											
* Todos sin tierra propia. Fuente: Relevó de Hogares, marzo, 2006.											

La Tabla Q presenta las formas de acceso a la tierra entre una muestra de hogares del ejido El Cuayo. La mayoría de los encuestados estaban empleando su propia tierra en el ciclo productivo durante el cual se realizó el relevé.⁶⁹ Esta situación es variable entre períodos cortos, debido a que la producción obtenida en un ciclo es la base sobre la que una familia decide qué hacer en los ciclos inmediatos siguientes (hasta tres ciclos por año se pueden obtener en El Cuayo). Es notable que 15% de los titulares de certificados parcelarios estaban alquilando tierra. Todos los que poseían parcelas prestadas, eran jornaleros sin tierra, mientras que la mayoría de los que alquilaban, eran posesionarios. De aquí se desprende que en El Cuayo, el préstamo es la principal estrategia para aquellos que no tienen tierra alguna, mientras que el alquiler es una opción disponible sólo para los semidesposeídos.

El alquiler y el préstamo de tierra son, entonces, dos tipos claramente diferentes de acuerdo, aun cuando en ambos casos suelen ser informales. En cuanto a los préstamos, una definición global y coherente de los diferentes acuerdos es difícil, ya que cada caso es particular y depende de las circunstancias personales. En algunas ocasiones, un individuo trabaja durante un largo período en la misma parcela y se refiere a ella como prestada por el ejido o por algún compañero o familiar con el que sostiene un vínculo de dependencia y solidaridad. Por otra parte, un campesino que durante un ciclo hace milpa en una pequeña sección de la parcela de algún amigo, suele usar el término préstamo en el sentido más común del término, ya que no se involucra ningún intercambio inmediato. También se suele decir que algunos ejidos “prestan” parcelas aun cuando se requiera cierto pago. Lo que es común en todos los acuerdos

⁶⁹ La encuesta consistió en seis preguntas cortas: ¿Está haciendo milpa esta temporada? ¿Dónde se encuentra su milpa? ¿Es dueño de la parcela? ¿Está rentando alguna parcela? ¿Está trabajando en una parcela prestada? ¿Cuál es su estado en el ejido (poseionario, ejidatario)?

de préstamo entre campesinos, es que se trata de intercambios horizontales que no implican pagos en efectivo o en cosecha. En general, lo que espera de alguien que recibe en préstamo una parcela es algún apoyo (en la construcción de vivienda o en algún asunto doméstico).

Cuando los acuerdos se establecen entre campesinos y propietarios privados o rancheros, la expectativa de estos últimos es en general la compensación mediante el cuidado de animales o, más comúnmente, el desmonte y empastamiento del terreno cedido por tres, dos o hasta sólo un ciclo agrícola. Los acuerdos entre campesinos y rancheros, a diferencia de aquellos entre campesinos, son más formales e implican contratos de comodato que especifican las condiciones del “préstamo”. Los campesinos suelen establecer esos acuerdos en grupo, debido a que cuando se trata de desmontar terrenos, se requiere mucho trabajo.

En ninguno de los tres casos aquí estudiados fue posible encontrar evidencia de que parcelas ejidales estuvieran siendo propiamente alquiladas, aunque la presunción de que así lo hacen algunos de los nuevos propietarios, es común entre aquellos que menos tierra tienen o que no poseen en absoluto. Esto tiene que ver con la persistencia de una economía moral dentro de los ejidos, la cual sanciona negativamente la renta de la tierra aun considerada colectiva. Existe, sin embargo, una forma indirecta de alquiler de la tierra en la forma de potrero. Algunos campesinos apartan una sección de sus terrenos como potrero y permiten, a cambio de una renta mensual, que otros mantengan ahí a sus animales.

Comunidades y ejidos

En las condiciones restrictivas impuestas por la dinámica productiva y la baja calidad de sus tierras, Joya Chica es un ejido que, al menos a sus vecinos, les ofrece la posibilidad de acceso a través de acuerdos de renta y préstamo... y no sólo eso. Durante el trabajo en campo fue posible conocer de tres personas de El Cuayo que habían “comprado” parcelas en Joya Chica. Las condiciones precisas de tales transferencias no fueron nunca develadas y su carácter semi-secreto muestra al menos dos cosas: primero, que existe efectivamente cierta ansiedad al respecto de la compra de tierra; segundo, que la informalidad y las relaciones personales siguen siendo importantes para cualquier arreglo que involucra a la tierra. No será hasta que las transacciones sean documentadas en el Registro Agrario Nacional, que un recuento preciso de ellas será posible. Estas transacciones entre ejidos traen a colación la afirmación de Warman:

Para un inversionista moderno, la compra de parcelas ejidales es una locura. Eso no previene que suceda, pero es bastante excepcional frente a la compra por otros ejidatarios. Es muy probable que la circulación onerosa de parcelas entre ejidatarios contribuya a la consolidación y permanencia del ejido actual, distante y diferente del momento de su concepción y dotación (Warman, 2001: 86).

Cabe advertir que dos cuestiones escapan a ese punto de vista: la primera es que, al menos en la región de estudio, hay muy pocos inversionistas modernos y muchos pequeños rancheros atrasados e improductivos dentro y fuera de los ejidos dispuestos a acaparar tierra, como es el caso en San Martín. La segunda, que se puede articular con facilidad a la concepción temprana del propio Warman sobre la centralidad de la comunidad frente al ejido (1985), es que la circulación que, adoptando una postura de racionalidad capitalista, califica de “onerosa”, no sólo se da y tal vez ni siquiera preferentemente entre ejidatarios del mismo núcleo, sino entre ejidos.

Lo que sucede entre El Cuayo y Joya Chica admite, aunque sea a modo de hipótesis, una interpretación distinta que indica que la reforma también permitió la expansión de la comunidad legalmente desterrada, aunque ligada a sus miembros campesinos, al margen del estatus legal de ejidatario o posesionario. Debido a que el asunto de las ventas se presentó sólo en Joya Chica, es relevante recordar algunas de las diferencias entre este ejido y los otros dos: Joya Chica es el más pobre y menos poblado, donde secciones importantes no son aptas para la agricultura (pero sí valiosas). Joya Chica tiene la tasa más baja de asistencia escolar, y el alcoholismo es un problema común; aquí la economía de los hogares está más deprimida. Por último, pero en el marco del presente argumento, lo más importante: en Joya Chica, la organización colectiva se reduce a la estructura ejidal. Este fue el ejido donde la exclusión normativa fue el mecanismo central a través del cual se resolvió la distribución de tierras y derechos, y donde la intervención colectiva fue muy limitada.

CONCLUSIONES: CONFLICTO Y PERSISTENCIA

La estructura agraria en Ixhuatlán muestra las grandes desigualdades en la distribución de la tierra dentro y entre los dos regímenes, privado y ejidal. En cuanto a los ejidos, la enmienda de 1992 fijó el desequilibrio y limitó la interferencia comunitaria en el acceso a la tierra. Los posibles cambios pueden venir de la aparición de un mercado de tierras, o de las invasiones (es decir, la violencia). Otras formas de acceso están sujetas ahora a la operación de los mercados de arrendamiento parcelario y a la continuidad de los acuerdos tradicionales entre los propietarios privados y los campesinos sin tierra, aunque –como se sugirió más arriba– también por medio de la operación de las redes de pares dentro de los ejidos.

Desde una perspectiva genérica, la línea divisoria entre lo privado y ejidal ha sido desdibujada. Esto se refiere no sólo a la condición jurídica de los dos regímenes, sino también al orden social que la formación de ejidos llegó a representar. En Ixhuatlán, la dicotomía privado/ejidal se traslapó por igual con las de campesino/ganadero e indio/mestizo. Alrededor de estas dicotomías se organizó durante décadas todo un universo de relaciones sociales. La política, el comercio, la educación y la infraestructura, expresan aún la brecha entre el mundo de los indígenas-campesinos y la de los mestizos-rancheros. No obstante, tales dicotomías e identificaciones son altamente ideológicas y pueden ocultar las divisiones internas y conflictos que prevalecen entre las clases mencionadas o grupos que conforman la estructura agraria del municipio, como se demostró en los capítulos anteriores.

Hasta aquí, los resultados de PROCEDE se han relacionado con las condiciones de la tierra, la importancia relativa de las actividades productivas dentro de los ejidos y la organización expuesta en el proceso de implementación del

programa. Entonces, los aspectos más importantes de la distribución pueden resumirse en:

1. La persistencia de una estructura organizativa limitada en Joya Chica y de un orden comunitario fuerte y cohesionado en El Cuayo, y el refuerzo del proceso de diferenciación interna en San Martín.
2. Los cambios en la disponibilidad y las formas de exclusión de la tierra.
3. La renovación de las tensiones entre pequeños rancheros y milperos.

Estos tres aspectos permiten describir la certificación y su resultado. Con base en esta misma descripción es posible tratar analíticamente las normas a través de las cuales cada configuración particular de la tierra y derechos se construyó. A su vez, esto puede ayudar a entender la relación entre el régimen de propiedad y el orden comunitario.

Resulta claro que el problema más importante en todo el proceso fue la asignación de parcelas. Este asunto no era nuevo en ninguno de los ejidos, cuya evolución y organización sugieren que mecanismos de acceso a y exclusión de la tierra productiva estaban operando mucho antes de que el PROCEDA se pusiera en marcha. En cada ejido, las normas para la asignación de terrenos formaban parte tácita de la organización anual de la producción, y más generalmente de la relaciones entre los miembros. Estas normas eran gestionadas dentro del marco institucional previsto por la reforma agraria (la asamblea) tanto como a través de las redes de parentesco, los grupos de pares y el conjunto de cargos que en su caso constituyen la organización comunitaria. La informalidad y los conflictos se cuentan entre las características de esta última. La certificación obligó a que algunos mecanismos implícitos y fluidos sea volvieran explícitos y se fijaran en acuerdos concretos. Para llegar a esos acuerdos cada uno de los ejidos siguió un modelo especial: *exclusión normativa, participación y negociación*.

La ausencia de pruebas formales de alquiler de parcelas dentro de los ejidos, sugiere, además, que la posibilidad de realizar esos contratos de forma legal no ha impedido que la informalidad prevalezca aún en los acuerdos que involucran la tierra ejidal. Los contratos formales representan costos que no son afrontables en las condiciones de vida de subsistencia de la mayor parte de los campesinos (incluyendo muchos ejidatarios con tierras). Por su parte, la Procuraduría Agraria, que nominalmente se encargaría de asesorar y facilitar el tránsito hacia la formalización de los acuerdos sobre la tierra, no tiene los recursos para asistir a la pléyade de pequeños intercambios que tienen lugar en cada ciclo productivo.

En las economías de subsistencia como las estudiadas aquí, la cantidad de dinero que se puede obtener como renta es muy reducida (300-500 pesos por ciclo, por una parcela de media hectárea en el año 2006), y debido al desgaste del suelo, la renta para agricultura de milpa es atractiva para el rentista sólo en los últimos ciclos antes del descanso, siendo lo opuesto para el inquilino. La renta de terreno se vuelve atractiva para los propietarios cuando se requiere mucho trabajo para hacer producir la tierra por su orografía o la baja productividad del suelo. Consideraciones de este tipo afectan también a aquellos que teniendo una parcela, no son capaces de trabajarla y prefieren prestar más que rentar parte de ella a cambio de la asistencia regular en la propia milpa. Este es el caso de los ancianos y de los migrantes de corto plazo que tienen certificados de parcelas en los ejidos, pero no residen permanentemente en ellos. En suma, las limitaciones en la disponibilidad de tierra y la permanencia de la agricultura de subsistencia, socava las condiciones para la expansión de un abierto mercado de alquiler de parcelas ejidales para la agricultura.

Por otro lado, los contratos entre campesinos y propietarios privados son fundamentales para la dinámica agraria en Ixhuatlán de Madero. Se trata de un mecanismo a través del cual se transfiere valor de los campesinos a los propietarios medianos y grandes o rancheros. La reforma de 1992 reforzó este tipo de arreglos “tradicionales” entre campesinos y rancheros debido a que uno de sus efectos ha sido el aumento en la demanda de fuentes no-ejidales de tierra por parte de los campesinos semi o por completo desposeídos que residen en los ejidos donde las viejas mediaciones colectivas van perdiendo eficacia. Dentro de los ejidos la renta se centra en los potreros. Convertir parcelas en potreros y cobrar un alquiler por mantener animales en ellos es una buena opción, especialmente para aquellos que tienen grandes extensiones de tierra adecuada, como sucede en San Martín.

La distribución de derechos hacia el final de la primera década del siglo XXI en Ixhuatlán de Madero, sugería que en los siguientes años continuarían los cambios en el sector ejidal. Es relevante que 38.6% de los titulares de certificados parcelarios (Tabla C) no contaban con un título que amparara algún solar urbano dentro de los ejidos. Si bien se debe considerar que una parte de ellos eran ejidatarios con derechos plenos, la mayoría eran posesionarios cuyos activos, en conjunto, representan entre 3 y 4 mil hectáreas de tierras altamente fraccionadas. La situación de estas personas dentro de sus comunidades y ejidos, por lo menos en términos legales, era altamente vulnerable; por tanto, se podía esperar que sus tierras fueran transferidas a los ejidatarios o avecindados. El

complejo escenario descrito en el capítulo anterior indica, sin embargo, que existe capacidad de organización y comando de la distribución de la tierra. Además, es preciso tener en cuenta que el modelo milpero para el cultivo de maíz ha demostrado una y otra vez su persistencia, y puede suponer un obstáculo para las transferencias. Una de las cosas que demuestra el análisis minucioso de la implementación del PROCEDE es que los procesos de diferenciación interna no necesariamente se agudizaron con la certificación, aun cuando se pueda presumir una mayor dependencia de quienes no tienen acceso directo frente a los propietarios privados, con una consecuente degradación de las condiciones de trabajo para la gran mayoría.

Conflicto social

Los obstáculos sociales y económicos para una transformación positiva de la dinámica productiva en Ixhuatlán ayudan a entender por qué la reforma del ejido puede tener poca incidencia en la mejora de las condiciones de desarrollo. También indican que puede haber un espacio para la creación de condiciones similares a las descritas por Schryer, que condujeron a las rebeliones campesinas en el cercano estado de Hidalgo en los años 1970 y 1980. En ese momento, la violencia obligó a importantes expropiaciones de tierras y a la formación de nuevos ejidos (Schryer, 1987: 283). Las divisiones internas en las comunidades indígenas, así como la intervención de los gobiernos local y federal, y de grupos radicales de izquierda, acompañaban a la amenaza que representa la expansión de los pastizales para subsistencia de los campesinos. El análisis de la estructura agraria y de la certificación en Joya Chica, El Cuayo y San Martín, sugiere que la economía ranchera descrita por Schryer está presente en Ixhuatlán, un municipio que además sirvió de refugio para algunos de los ganaderos expulsados del estado de Hidalgo (Schryer 1987: 300).⁷⁰

⁷⁰ Algunos elementos, como las diferencias en cuanto a la geografía y la adscripción política y territorial, tanto como la cercanía a la llanura costera dominada por haciendas y rancheros, ayudan a explicar por qué las revueltas de la década de 1970 no se ampliaron a esta área vecina. A pesar de la identidad regional, el municipio pertenece al estado de Veracruz no a Hidalgo, y algunas diferencias han existido en el funcionamiento de la Reforma Agraria entre las dos entidades. Además, la distribución de la tierra fue utilizada como una estrategia de contención para evitar la expansión de la revuelta, como la aprobación de la ampliación de El Cuayo en la década de 1980 (después de cuatro décadas de negación) podría sugerir.

El conflicto social y la violencia estaban presentes en el cambio de siglo en Ixhuatlán. Entre 1994 y 2007 se produjeron dos invasiones de tierras. Además, el ejército federal, la policía del estado de Veracruz y la policía local, intervinieron varias veces en diferentes comunidades y pueblos. Varios campesinos fueron asesinados, torturados y secuestrados por guardias blancas y por fuerzas gubernamentales. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz y la Comisión de Derechos Humanos de la Huasteca y la Sierra Oriental denunciaron la represión sufrida por las comunidades indígenas. Además, la presencia de dos conocidas organizaciones políticas campesinas, el Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata (FEDOMEZ) y la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH), está documentada (Rojas, 1996).

Los ganaderos tampoco estaban completamente a salvo de la violencia. Si bien la intervención del ejército y de la policía del estado de Veracruz confirmaron siempre que el estado estaba dispuesto a utilizar la fuerza contra los campesinos, algunos conflictos dieron ejemplo de que los terratenientes locales no siempre pueden asegurar su seguridad apelando sólo al Estado. En el marco de la enmienda, entre 1991 y 1994, la situación en Ixhuatlán fue particularmente turbulenta. En ese momento, los medios de comunicación exponían dos posiciones claramente distinguibles sobre cuál era el problema. En 1993, un periódico de circulación nacional denunció que un rancho amenazó con masacar a los habitantes de un pueblo entero (Zolontla) porque, de acuerdo a un diario, *se negaban a trabajar gratis en su propiedad como lo habían estado haciendo durante décadas* (El Día, 1993). En el lado opuesto, la prensa local publicó un informe anónimo y extravagante sobre los vínculos entre el Comisionado de Derechos Humanos y una organización “terrorista” del País Vasco. Ahí se afirmaba que la movilización de las comunidades respondía a intereses externos, cuyo objetivo no era apoyar a los indígenas, sino sacar provecho de sus necesidades y de la ignorancia que impulsaba a invadir los ranchos y crear una situación de falta de gobernabilidad en la región (Opinión, 1994).

En 2004, una de las comunidades de invasores, Heberto Castillo, organizó una fiesta para conmemorar su décimo aniversario y la creciente probabilidad de obtener la propiedad definitiva por la prolongada ocupación pacífica. Por otra parte, en junio de 2007, un periódico nacional proporcionó información sobre los hechos violentos que tuvieron lugar en Ixhuatlán debido a las invasiones, por parte de campesinos pertenecientes a una organización nombrada “Dorados de Villa”, que afectaron las tierras pertenecientes a la familia Faisal Nader. Los campesinos fundaron una comunidad (“Diez de Junio”) y sostenían

que desde 1938 esa tierra había sido legítimamente reclamada por ella. Una operación militar, que incluyó guardias blancas pagados por la familia, destruyeron el pueblo, las milpas, y detuvieron a diez miembros de la organización, incluyendo un defensor de los derechos humanos. El líder de los invasores fue declarado desaparecido, mientras que los prisioneros fueron trasladados a una finca en Puebla, donde un juez impuso una multa de dos mil pesos a cada persona detenida para quedar libre. A través de la mediación de la organización La Otra Campaña, asociada al movimiento zapatista, el caso atrajo tal atención nacional e internacional que obligó al gobierno a reconsiderar la situación y proponer un programa productivo con el fin de pacificar a los campesinos (Bellinghausen, 2007).

Aunque no directamente relacionado con la propiedad de la tierra, un conflicto importante había ocurrido poco antes, en 2001, cuando un autobús arrolló a una joven doctora cuando esperaba al borde de la carretera, después de una visita familiar (López, 2000). Este no fue el primer accidente que involucraba a la empresa propiedad de un rancho local, que mantenía un monopolio de transporte en el municipio. Cientos de campesinos de muchas comunidades armados con machetes *bajaron de los cerros* hasta la cabecera, tomaron los autobuses y conductores como rehenes, y exigieron que el dueño de la empresa compareciera ante la justicia y que se formara una nueva empresa de propiedad colectiva. El alcance de la movilización superó la capacidad de control de las fuerzas locales y el ejército se presentó en el municipio. Después de dos días de tensas negociaciones, el conductor fue encarcelado, liberados los autobuses y el presidente municipal aceptó hacerse cargo de la administración de la empresa.

Tanto las invasiones como el conflicto de transporte indicaban la capacidad y disposición a la movilización de las comunidades en conflictos que no sólo giran en torno al problema del acceso a la tierra o el salario, sino ahora también alrededor del control de otros recursos colectivos como los servicios públicos.

La medida en que el cambio en la ley reducirá las posibilidades de acceso a la tierra para los campesinos sin tierra más allá de los límites de una economía moral (Thompson, 1979), y por lo tanto generará respuestas violentas, es difícil de evaluar. La distribución de los títulos abrió un nuevo camino para la transmisión de la tierra en los ejidos, y recurrir a terrenos privados, aun cuando a través de acuerdos injustos sigue siendo una opción bajo la economía ranchera.

Después de la Reforma 1992, Ixhuatlán experimentó varios conflictos entre campesinos y rancheros. En particular, entre 1994 y 1996, el temor a la violencia y las invasiones corrió por todo el municipio en lo que podría haberse trans-

formado en una batalla de clase similar a la que había tenido lugar en Hidalgo quince años antes. A pesar de la violencia, y sin descartar la necesidad de más discusión al respecto, es claro que las condiciones que llevaron a las revueltas en los años 1970 y 1980 no estaban presentes en Ixhuatlán.

En 2001, el mismo año del conflicto del transporte, el Partido de la Revolución Democrática ganó las elecciones locales, y lo hizo nuevamente en 2003. Esta segunda vez el ganador fue un ejidatario de una comunidad otomí, y eso fue decisivo en la elección. Este presidente indígena resultó ser presa fácil de la facción ranchera y pronto enfrentó una fuerte oposición de aquellos que lo habían apoyado como candidato. En 2006, el Partido Revolucionario Institucional recuperó el municipio con el apoyo de algunas comunidades.

La reforma política que se inició en la década de 1980 abrió nuevos canales de negociación entre los agentes del mundo rural (Witvrun, 2000). Posicionó a las comunidades en la arena política, y movilizó su carácter cohesivo para el logro de otros objetivos aparte de la distribución de la tierra. En los capítulos anteriores se indicó también que la introducción de nuevas autoridades en los ejidos y la transformación del gasto público, implicó la reestructuración de las jerarquías y las organizaciones internas en torno a los recursos para la reducción de la pobreza. Además, ha habido un aumento en la inversión en educación (hace poco una sucursal de la Universidad de Veracruz se instaló en el municipio), y las comunicaciones que facilitan la movilidad han mejorado en un corto lapso.

Persistencia

Desde el punto de vista jurídico, la certificación de los ejidos puede ser juzgada como un aspecto secundario de la reforma de 1992, en comparación con otros cambios disparados por la enmienda constitucional. Desde la perspectiva de los habitantes de los ejidos, por el contrario, la certificación fue la realización material de la reforma. La situación socio-productiva de los ejidos es el resultado de la articulación dinámica con condiciones ambientales, y no está exenta de contradicciones y conflictos. A nivel de los ejidos, pequeñas variaciones en la calidad de la tierra, la organización social y los modelos productivos en cada núcleo (variaciones que podrían parecer poco relevantes desde los puntos de vista estructural de clase o regional), promovieron la formación de variables, estrategias y patrones de apropiación. La forma en que la tierra se distribuiría

(el número, la extensión de las parcelas, los sujetos con derechos; en suma, la reorganización interna), estableció un horizonte estratégico para la acción de las comunidades. El futuro de algunas de ellas será en parte un resultado de la certificación.

La relación entre los ejidos y la crisis actual del campo mexicano es multidimensional. Se refiere a las políticas productivas, a la inversión y a la articulación de los ejidos con otros sectores productivos y sociales. La modificación del artículo 27 abrió un nuevo capítulo en la historia agraria de México. La *reforma de la Reforma* tenía como objetivo crear las condiciones para una nueva ola de desarrollo rural, centrada en los propietarios privados y el mercado de tierras. Sin embargo, al menos en los ejidos aquí estudiados, la condición de los campesinos aún parece lejana a la del agricultor ideal de la teoría liberal del desarrollo rural. Por el contrario, los campesinos semi o completamente desposeídos siguen dependiendo de relaciones *tradicionales* para acceder a la tierra, mientras que aquellos que se beneficiaron no dan evidencia de haber modificado sustancialmente su producción.

La reforma no tuvo por objeto avanzar hacia una distribución equitativa de la tierra, sino que se orientó en crear las condiciones para la diversificación productiva, así como la creación de nuevos emprendimientos o empresas que permitieran capitalizar al campo y redujeran la dependencia directa de la tierra por parte de la gran mayoría de la población rural. En este sentido, sin embargo, en lugar de nuevas empresas, en la región de estudio la evidencia parece sugerir que el cambio de régimen reforzó el proceso de avance de las pasturas y el ganado y de prácticas excluyentes dentro de los ejidos.

La intervención estatal ha sido sustituida por la promoción y la facilitación, la inversión por los incentivos y la justicia por la seguridad, mientras que el cambio en el régimen de propiedad hace presente el potencial para una mayor exclusión aun cuando la proporción de los excluidos de la tierra es importante. Grandes propiedades existen y las oportunidades al alcance de los propietarios ejidales para mejorar sus condiciones productivas son muy limitadas. Al mismo tiempo, dos nuevos agentes se han sumado desde principios de siglo a un escenario regional complejo: crimen organizado y compañías petroleras, ambos con importantes intereses territoriales y frente a los cuales tanto campesinos como rancheros deben reconsiderar sus relaciones. Por si fuese poco, el gobierno estatal atraviesa una crisis sin precedentes que abona a la inestabilidad. Todo esto impone un marco muy denso al cambio en el régimen de propiedad que se queda corto como política de desarrollo para el campo. Ahora el problema

puede ser si la democratización y más gasto público no productivo efectivamente pueden llenar el hueco dejado por la política agraria. En un marco de violencia incrementada y mayores presiones hacia el acaparamiento o la reconversión productiva de las tierras, no es improbable que las comunidades desancladas de los ejidos se reestructuren y emerjan con mayor visibilidad y activismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramson, A. (2000). *Mythical Land, Legal Boundaries: Wondering About Landscape and other Tracts. Land, law, and environment: mythical land, legal boundaries*. A. Abramson and D. Theodossopoulou. London, Pluto: 1-30.
- Cuadernos Agrarios. (1991). Debate sobre el ejido. México, Cuadernos Agrarios. New Era, Year 1 Num. 3.
- Cuadernos Agrarios (1992). 27 *Constitucional*, México, Cuadernos Agrarios, New Era, Num 5-6.
- Agrawal, A. (2001). "Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources." *World Development* 29(10): 1649-1672.
- Aguilar, J., C. Illsley *et al.* (2003). Los sistemas agrícolas de maíz y sus procesos técnicos. Sin maíz no hay país. G. Esteva and C. Marielle. México, CONACULTA - Museo de Culturas Populares: 83-122.
- Appendini, K. (2001), *Land Regularization and Conflict Resolution: The Case of Mexico*, FAO.
- Ariel de Vidas, A (2003) *El trueno ya no vive aquí. Marginalidad y construcción de la identidad Teenek (Huasteca México)*, México, CIESAS.
- Astorga, E. (1985). "Más campesinos, más proletarios." *Revista Mexicana de Sociología* XLVII (3): 99-114.
- Bardhan, P. and Udry, C. (1999), *Development Microeconomics*, Oxford University Press.
- Barracough, S. (2001), *The Role of the State and Other Actors in Land Reform. Land Refrm and Peasant Livelihoods*, K. Ghimire. London, ITDG-UNRISD: 26-64.
- Bartra, R. (1974), *Estructura agraria y clases sociales en México*, México, Ediciones Era.

- Bartra, R. (1976), *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Siglo XXI.
- Bartra, R. and G. Otero (1988), "Crisis agraria y diferenciación social en México." *Revista Mexicana de Sociología*, Año L(1): 13-50.
- Bartra, A (1979), *Notas sobre la cuestión campesina*, México, Editorial Macehual.
- Bartra, A (1996) *A Persistent Rural Leviathan. Reforming Mexico's Agrarian Reform*, Randall, L. New York: Sharpe (pp. 173-184)
- Bellingeri, M. and I. Gil (1980), *Las estructuras agrarias. México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social*, C. Cardoso. México, Nueva Imagen: 97-118.
- Bellinghausen, H. (2007), *Liberan en Veracruz a 10 indígenas, sigue desaparecido uno de sus líderes. La Jornada en Internet*, México.
- Bentham, L., (ed.) (1984), *The Cambridge History of Latin America*. Vol. 2 *Colonial Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Berkes, F., (ed.) (1989), *Common property resources. Ecology and community-based sustainable development*, London, Belhaven Press.
- Berkes, F. and T. Farvar (1989), *Introduction and overview. Common property resources. Ecology and community-based sustainable development*, F. Berkes. London, Belhaven Press: 1-17.
- Bernstein, H. (2002), "Land Reform: Taking a Long(er) View", *Journal of Agrarian Change* 2(4): 433-463.
- Bernstein, H. (2004). "Changing Before Our Eyes: Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today." *Journal of Agrarian Change* 4(1-2): 190-225.
- Berra, R. V. (2002), *La reforma agraria en México desde 1853: sus tres ciclos legales*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
- Binswanger, H., K. Deininger et al. (1995), "Power, Distortions, Revolt and Reform in Agricultural Land Relations", *Handbook of Development Economics*, J. Behrman and T. N. Srinivasan, Elsevier Science. III: 2659-2772.
- Blomley, N. (2005), "Remember property?" *Progress in Human Geography* 29(2): 125-127.
- Borras, S. M. (2003), "Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa." *Journal of Agrarian Change* 3(3): 367-394.
- Calva, J. L. (1993), *Las "sugerencias" del Banco Mundial y las presiones Estadounidenses. La disputa por la tierra*. México, Fontamara.

- Carranza, V. (1915), "Ley del 6 de enero". Que declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856. Veracruz.
- Castañeda, J. C. P. (2002), *El nuevo sistema de propiedad agraria en México*, México, Palabra en vuelo.
- Castell, J. and F. Rello (1981), "Las desventuras de un proyecto agrario. 1970-1976". Desarrollo y crisis de la economía mexicana. R. Cordera. Mexico, FCE. 39: 613-637.
- Cerón, D (2006) *La sucesión de derechos de los poseionarios. ¿posible o imposible?* en Estudios Agrarios, Año 12, Núm. 33 pp. 117-130.
- Chevalier J and Buckles D. (1995), *A Land without Gods. Process theory, maldevelopment and the Mexican Nahuas*, London, Zed Books.
- Ciriacy-Wantrup, S. V. and R. Bishop (1975), "'Common Property" as a Concept in Natural Resources Policy." *Natural Resources Journal* 15: 713-727.
- Cleaver, F. (2000), "Moral Ecological Rationality, Institutions and the Management of Common Property Resources." *Development and Change* núm. 31: 361-383.
- Collier, G. and E. Lowery (1994), *Basta! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*, Oakland, The Institute for Food and Development.
- Conapo (1997), *La situación demográfica de México*, México, CONAPO.
- Cornelius, W. and D. Myhre, Eds. (1998), *The Transformation of Rural Mexico: Reforming the Ejido Sector*, San Diego, La Jolla, University of California, Center of US-Mexico Studies.
- Corona, R. (2007), *Estimación del número de migrantes permanentes de México a Estados Unidos 1850-1990*, C. N. d. Población, El Colegio de la Frontera Norte.
- Craib, R. (2004), *Cartographic*, Mexico, Durham/London, Duke University Press.
- Dávila, S. (1996), *¿Nos irá mejor?... El caso de la asociación mercantil del Proyecto Huities, Canal Fuerte-Mayo de Sonora. La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*. Vol. III. De Grammont H and Tejera H. Eds. México, INAH-UAM-UNAM-Plaza y Valdes.
- de Janvry, A. (1981), *The Ararian Question and Land Reformism in Latin America*, Baltimore, John Hopkins University Press.
- de Janvry, A. and E. Sadoulet (2004), *Hacia un enfoque territorial del desarrollo rural*, Cuarto Foro Temático Regional de América Latina y el Caribe, "Cosechando Oportunidades: Desarrollo Rural en el Siglo 21". Costa Rica.
- Deininger, K. (2004), *Land policies and land reform*, Whashington DC, WorldBank.

- Dekker, H. (2003), *Property regimes in transition, land reform, food security and economic development: a case study in the Kyrgyz Republic*. Hants, UK, Ashgate.
- Devlin, R. A. and R. Q. Grafton (1999), *Economic rights and environmental wrongs*, London, Edward Ellgar.
- Díaz, P. (1876), *Plan de Tuxtepec*, Campo de Palo Blanco.
- Díaz-Polanco, H. (1996), *Autonomía, territorialidad y comunidad indígena. Perspectivas del Estado multiétnico en México. Democracia y Estado multiétnico en América Latina*, P. Gozález and M. Roitman. México, La Jornada-CIICH (UNAM): 139-175.
- Ducey, M. (2004), *A Nation of Villages. Riot and Rebellion in the Mexican Huasteca, 1750-1850*, Tucson, The University of Arizona Press.
- Duchrow, U. and F. Hinkelammert, Eds. (2004), *Property for people, not for profit : alternatives to the global tyranny of capital*, New York, Zed Books.
- Eckstein, S. (1966), *El Ejido colectivo en México*, México, FCE.
- Elster, J. (1993), "Some unresolved problems in the theory of rational behavior." *Acta Sociologica* 36(3), 179-190.
- Escárcega, E. and C. Botey, Eds. (1989), *Historia de la cuestión agraria mexicana*, México, Siglo XXI-CEHAM.
- Escobar O y Gutiérrez A (1999), "Dos momentos del proceso agrario veracruzano: el caso de Chicontepec, 1870-1930", en *Estudios Campesinos en el Archivo General Agrario*, vol. 2, México, CIESAS-Registro Agrario Nacional.
- Escobar Ohmstede Antonio. (1991), *La insurgencia huasteca: origen y desarrollo*, Ponencia presentada en "Pugachov, Tupac Amaru, Hidalgo: tres levantamientos populares", CEMCA, 5-6 de septiembre de 1991.
- Esteva, G. (1980), *La Batalla en el México rural*, México, Siglo XXI.
- Esteva, G. and C. Marielle, (eds.) (2003), *Sin maíz no hay país*, México, CONACULTA-Museo de Culturas Populares.
- Feder, E. (1980), "La irracional competencia entre el hombre y el animal por los recursos agrícolas en los países subdesarrollados" *Trimestre Económico*, México, FCE 47(1).
- Fernández, I. R. and J. S. Cortés (1972), *La reforma agraria en cuatro regiones: el Bajío, Michoacán, La Laguna y Tlaxcala*, México, SEP.
- Fernández, L. and M. Tarrío (1988), "Ganadería y crisis agroalimentaria." *Revista Mexicana de Sociología* L(1): 51-95.
- Fernández, S. (2004), *Farewell to the Peasantry?* Lund, Lund University.
- Field, B. C. (1989), "The evolution of property rights." *Kiklos* 42(3): 319-345.

- García M. Bernardo (1994), "Los primeros pasos del ganado en México" *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, Num.59: 11-44
- García M. Bernardo (1995), "Los caminos del ganado y las cercas de las haciendas. Un caso para el estudio de la propiedad rural en México" *Historia y Grafía* Vol. 5: 13-29
- García, C. R. (2001), *Los Pueblos Indios. Gran Historia de México Ilustrada*, Fascículo 8, México, Planeta De Agostino.
- Garavito, R and Torres, R. (2004), Migración e impacto de las remesas en la economía nacional, *Análisis Económico*, Num. 41, Vol. XIX. (243-275)
- Gerhard, P. (1972), *A guide to the Historical Geography of the New Spain*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ghimire, K. (2001), *Land Reform at the End of the Twentieth Century: An Overview of Issues, Actors and Processes*, Land Reform and Peasant Livelihoods. K. Ghimire. London, ITDG-UNRISD: 1-25.
- Gibbs, C. J. N. and D. W. Bromley (1989), *Institutional arrangements for management of rural resources: Common-property regimes. Common property resources. Ecology and community-based sustainable development*, F. Berkes. London, Belhaven Press: 22-32.
- Goldman, M. (1998), *Inventing the commons: theories and practices of the commons' professional. Privatizing Nature. Political struggles for the global commons*, M. Goldman. London, Pluto Press: 20-53.
- Goldman, M., Ed. (1998), *Privatizing Nature. Political struggles for the global commons*, London, Pluto Press.
- González Casanova, P. (1968), *Clases, colonialismo y aculturación*" in *Ensayos sobre las clases sociales en México*. Mendizábal M. (ed.) México, Editorial Nuestro Tiempo pp. 89-151.
- González Casanova, P (1965), *La democracia en México*, México, ERA.
- González, H. F. (1993), *El pequeño intervencionista: auge y crisis del modelo municipal. La participación del estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910*, México, INAH, pp. 375-412.
- González, N. M. (1977), *Anatomía del Poder en México (1848-1853)*, México, El Colegio de Mexico.
- Gonzalez, R. (2005), *Benefició apertura a la agricultura comercial, pero no redujo la pobreza*, *La Jornada en Internet*, México, La Jornada.
- González, S. (2007), *El crédito bancario al agro cayó 42% en cinco años, advierten*, *La Jornada en Internet*, México.

- Gordillo G, de Janvry A and Sadoulet E (1999), *La segunda reforma agraria de México: respuestas de familias y comunidades, 1990-1994*, México, FCE.
- Grammont, H. C. d. (1985), "Venta de fuerza de trabajo de los campesinos pobres y acumulación de capital." *Revista Mexicana de Sociología* XLVII (3): 85-98.
- Grima, L. A. P. and F. Berkes (1989), *Natural resources: access, rights-to-use and management. Common property resources. Ecology and community-based sustainable development*, F. Berkes. London, Behaven Press, pp. 33-54.
- Haenn, N. (2006), "The changing and enduring ejido: a estate and regional examination of Mexico's land tenure counter-reforms." *Land Use Policy* (23), pp. 136-146.
- Harvey, D. (1996), *Justice, Nature and the Geography of Difference*, Oxford, Blackwell.
- Heath, J. R. (1990), *Enhancing the Contribution of Land Reform to Mexican Agricultural Development*, Working Papers, Agricultural Policy, World Bank.
- Hernández, A. y Heiras, C. (2012), "Ritual y mitología del maíz en la Huasteca" en *Huasteca y el semi desierto queretano. Atlas etnográfico*. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pp. 191-208.
- Hernández, E. (2011), "Territorialidad campesina y contrarreforma agraria neoliberal en México", Calderón Aragón, Georgina y Efraín León Hernández (coordinadores), *Descubriendo la espacialidad social desde América Latina. Reflexiones desde la geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente*. México, Editorial Itaca.
- Hernández, L. (1992), "Cambio y resistencia en el movimiento campesino." *Cuadernos Agrarios* año 2 nueva epoca(5-6): 98-118.
- Hewitt de Alcántara, C. (1988), *Imágenes del campo: la interpretación antropológica del México rural*, México, El Colegio de México.
- Hobbes, T. (1991), *Leviathan*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hobsband Erik (1974), *Las revoluciones burguesas*. Ed. Guadarrama, 2 vols., 3ª ed., Madrid 1974
- Hoffmann, O. (1995), *Los territorios detrás de los sectores. Economía y política en una región agrícola (Martínez de la Torre Veracruz). Poder local en el Golfo de México*, México, El Colegio de México.
- Hoffmann, O. (1996), *La tierra es mercancía... y mucho más. El mercado de tierras ejidales en Veracruz. La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*, Vol. III. De Grammont H and Tejera H. Eds. México: INAH-UAM-UNAM-Plaza y Valdes.

- Honneth, Axel (1999), "Comunidad. Esbozo de una historia conceptual." *Isegoria*, Num 20.
- Huizer, G. (2001), *Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations*, Land Reform and Peasant Livelihoods. Ghimire, K. Ed. London: ITDG.
- Hunt, R. C. (1998), *Properties of Property: Conceptual Issues. Property in Economic Context*, R. H. a. A. Gilman. Lanham C.D., University Press of America: 9-27.
- Ixmatlalhua, I., M. Maria, et al. (1982), *El cultivo del maíz y tres rituales asociados a su producción: Cacahuatengo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz*, Nuestro maíz: treinta monografías populares. M. E. Hope and L. Pereyra. México, SEP Museo Nacional de Culturas Populares. II: 67-101.
- INEGI (2000), *México Siglo XX*, (CD) México, INEGI.
- Jansen, K. y E. Roquas (1998), "Modernizing Insecurity: The Land Titling Project in Honduras." *Development and Change* 29, pp. 81-106.
- Johnson, C. (2004), "Uncommon ground: The 'Poverty of History' in common property discourse." *Development and Change* 35(3): 407-433.
- Kay, C. (2006), "Rural Poverty and Development Strategies in Latin America." *Journal of Agrarian Change* 6(4), pp. 455-508.
- Kerney, Michael (1996), *Reconceptualizing the peasantry: anthropology in global perspective*, Colorado: Westview Press.
- Lefebvre, H. (1991), *The Production of Space* Oxford, Blackwell.
- Lefebvre, H. (2003), *Space and the State. State/Space*, N. Brenner, B. Jessop, M. Jones and G. Macleod, London, Blackwell: 84-100.
- Lefebvre, H. (2003a), *Key Writings*, New York/London, Continuum.
- Léonard, Eric (1995), *Una historia de vacas y golondrinas. Ganaderos y campesinos temporeros del Trópico Seco Mexicano*, México, FCE, El Colegio de Michacán A. C.
- Lerdo de Tejada, M. and I. Comonfort (1856), *Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas*.
- Levinson, I. (2003), *Desafiando instituciones: expansion estadounidense y rebeliones populares durante la guerra de 1846-1848*, XI Reunion de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses y Canadienses. Monterrey, Nuevo Leon.
- Lewis, J. (2002). "Agrarian Change and Privatization of Ejido Land in Northern Mexico." *Journal of Agrarian Change* 2(3): 401-419.
- Locke, J.-. (1960), *Two Treatises of Civil Government*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Locke, J.-. (1997), *Political Essays*, Cambridge, Cambridge University Press.

- López, G. (2000), Agentes armados se enfrentaron a 200. Campesinos veracruzanos tienen retenidos entre 80 y 120 policías. Un muerto y seis heridos saldo de zacapela en Zocohuite, *La Jornada*, México, 20 de octubre.
- MacPherson, C. B. (1962), *The political theory of possessive individualism : Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press.
- MacPherson, C. B., (ed.) (1978), *Property. Mainstream and critical positions*, Toronto, University of Toronto Press.
- MacPherson, C. B. (1978b), Liberal-Democracy and Property. Property. Means-stream and Critical Positions. C. B. MacPherson. Toronto, University of Toronto Press: 199-207.
- Madero, F. I. (1910), *Plan de San Luis*, (05/10/1910). San Luis Postosí, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- Madueño Ruth (2000), “La Huasteca hidalguense: pobreza y marginación social acumulada”, *Sociológica*, año 15, número 44, pp. 97-131
- Malloy, R. P. (1995), *Adam Smith and the modern discourse of law and economic. Adam Smith and the philosophy of law and economics*, R. P. Malloy and J. Evensky. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: 113-150.
- Manzanilla-Schaffer, V. (2004), *El drama de la tierra en México. Del siglo XVI al siglo XXI*, México: SRA-UNAM-Miguel Angel Porrúa.
- Markiewicz, D. (1993), *The Mexican Revolution and the limits of agrarian reform, 1915-1946*, London, Lynne Rienner Inc.
- Martínez, R. J. (1981), *Tenencia y explotación de la tierra en México. Bibliografía comentada*, México, Secretaria de la Reforma Agraria.
- Marx, K. and F. Engels (1888), *Manifiesto of Communist Party*, London, Fredrick Engels. On line version Marx/Engels internet archive (marxist.org) 2000.
- McCay, B. J. and S. Jentoft (1998), “Market or Community Failure? Critical Perspectives on Common Property Research.” *Human Organization* 57(1): 21-29.
- McKean, M. (1997), *Common Property Regimes: Moving from Inside to Outside. Workshop on Future Directions for Common Property Theory and Research*, New Brunswick, NJ, Rutgers University.
- M'Culloch, J. R. (1853), *Introductory Discourse. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edimburgh, Adam & Charles Black: XV-LVI.
- Mendes, J. M. (2005), *A política agrária contemporânea do Banco Mundial: miríades políticas, base intelectual, linhas de ação e atualizações estratégicas*, Rio de Janeiro, CPDA-UFRRJ.
- Mendieta y Núñez, L. (1960), *Efectos sociales de la reforma agraria en tres comunidades ejidales de la República Mexicana*, México, UNAM.

- Mendieta y Núñez, L. (1969), *Cuatro etapas en la Reforma Agraria de México*, México, Academia de Derecho Agrario de la Asociación Nacional de Abogados.
- Miranda, A. E. (2000), *Los campesinos del sur de México durante y después de la Independencia. De súbditos del Rey a ciudadanos de la Nación: Actas del I Congreso Internacional Nueva España y las Antillas*, CIAL. Castelló, Publicaciones de la Universitat Jaume.: 285-303.
- Moguel, J., Ed. (1998), *Reformas agrarias, movimiento social y el Procede. Propiedad y organización rural en el México moderno*, México, UNAM-Juan Pablos.
- Moguel, J. and J. Romero, Eds. (1998), *Reforma agraria y el Procede en: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Sonora. Propiedad y organización rural en el México moderno*, México, UNAM-Juan Pablos.
- Molina Enríquez, A. (1936), *Esbozo de la historia de los primeros diez años de la revolución agraria de México : (de 1910 a 1920) hecho a grandes rasgos*, México, Talleres gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
- Montes de Oca, R. E. (1981), *La cuestión agraria y el movimiento campesino: 1970-1976. Desarrollo y crisis de la economía mexicana*, R. Cordera. México, FCE, 39: 589-612.
- Neale, W. C. (1998), *Property: Law, Cotton-pickin' Hands, and Implicit Cultural Imperialism*, Property in Economic Context. R. C. H. a. A. Gilman. Lanham, MD, University of America Press. 14: 47-64.
- Nguyen, D. and M. Martinez-Saldivar (1979), "The effects of land reform on agricultural production, employment, and income distribution: a statistical study of Mexican states, 1959-1969." *Economic Journal* (89): 624-635.
- Núñez, M. M. C. (2000), "Reforma ejidal y procesos locales de apropiación de la tierra en el centro de Veracruz." *Estudios Agrarios* (6 - 15).
- O'Riordan, T. (1988), *The politics of Sustainability. Sustainable environmental management*, K. e. a. Turner. Colorado, Westview Press.
- OECD (2006), *Agricultural and Fisheries Policies in Mexico*. Recent Achievements Continuing the Reform Agenda, OECD.
- Ochoa Ma Gpe y Jiménez Miriam (2012), "Nahuas de la Husteca o macehualmej" en *Huasteca y el semi desierto queretano. Atlas etnográfico*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pp. 143-158
- Oliver, B., B. Moreno, et al. (2003), *Cambios y tradiciones. Estructura comunitaria y transformaciones sociales en el valle del Mezquital. La comunidad sin límites*, S. Millán and J. Valle. México, INAH. II: 103-142.

- Opinión (1994), Estrategia de terror en la ZN. Miguel Cruz Zavala artífice de atentados contra ganaderos, *La Opinión*, 25 de octubre de 1994. Poza Rica de Hidalgo.
- Ortega, R. (2003), *La diversidad del maíz en México. Sin maíz no hay país*, G. Esteva and C. Marielle, México, CONACULTA-Museo de Culturas Populares, pp. 123-154.
- Ostrom, E. (1990), *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2000), "Private and Common Property Rights" pp. 332-379.
- Otero, G. (2004), *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel Porrúa.
- Ovando E. and Cordova L (2004), Política agropecuaria territorialmente diferenciada: propuesta metodológica. *Estudios Agrarios*, Num. 29: 183-231
- Peter Moles and Nicholas Terry. *The Handbook of International Financial Terms*. Oxford University Press 1997.
- Palacio, V., J. Montesillo, et al. (2007), "El mercado de tierras en México. Teoría y método de análisis." *Observatorio de la Economía Latinoamericana* (77).
- Pérez, C. (2002), El nuevo sistema de propiedad agraria en México. México: Textos y Contextos.
- Pérez, M. (2007), Indígenas: vigente, demanda de nuevo reparto agrario, *La Jornada en Internet*, 31 de julio, México.
- Pérez, M. (2007), *Indispensable retener a los campesinos pobres: Escobar. La Jornada en Internet*. México.
- Pérez Z (2001), *La visita de Gómez Nieto a la Huasteca, 1532-1533*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: El Colegio de San Luis: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos: Archivo General de la Nación.
- Performance and Innovation Unit (2002), *Social Capital. A Discussion Paper*. S. Aldridge, D. Halpern and S. Fitzpatrick. London, Cabinet Office Strategy (UK).
- Perrotta, L. (2000), Politics, confusion and practice: landownership and de-collectivisation in Ukraine. Land, law, and environment : mythical land, legal boundaries. A. Abramson and D. Theodossopoulou. London, Pluto: 156175.
- Petras, J. and H. Veltmeyer (2003), *Un sistema en crisis: la dinámica del capitalismo de libre mercado*, Buenos Aires, Lumen.

- Portes, Alejandro (2000), "The two meanings of Social Capital". *Sociological Forum*, vol. 15, núm. 1, marzo, pp. 1-12.
- Procuraduría Agraria (2004), *Estadísticas Agrarias. Tendencias del campo mexicano*, México, Procuraduría Agraria.
- Purnell, J. (1999), *Popular movements and state formation in revolutionary Mexico. The agraristas and cristeros of Michoacán*, Durham and London, Duke University Press.
- Putnam, R. D. (1993), "The Prosperous Community. Social Capital and Public Life." *The American Prospect* 4 (13).
- Randall, L., (ed.) (1996), *Reforming Mexico's Agrarian Reform*, New York, M.E. Sharpe.
- Redclift, M. (1982), *Development Policymaking in Mexico: the SAM*. Working Papers, UL-ILAS, London, University of London, Institute of Latin American Studies: 18.
- Redclift, M. and D. Goodman (1991), *The machinery of hunger: the crisis of Latin American food systems*. Environment and development in Latin America. M. Redclift and D. Goodman. Manchester, Manchester University Press.
- Regier, H. A., R. V. Manson, et al. (1989), *Reforming the use of natural resources. Common property resources*, Ecology and community based sustainable development. F. Berkes. London, Belhaven Press, pp. 110-126.
- Reyna, A. L. (1993), *Modernización y rebelión rural en el siglo XIX. La participación del Estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910*, México, INAH, pp. 315-372.
- Ridgeway Stan, (2001), *Monoculture, Monopoly, and the Mexican Revolution: Tomas Garrido Canabal and the Standard Fruit Company in Tabasco (1920-1935)* Mexican Studies / Estudios Mexicanos, Vol. 17, No. 1 (Winter, 2001), pp. 143-169
- Riad El-Ghonemy, M. (2001), *The Political Economy of Market-Based Land Reform. Land Reform and Peasant Livelihoods*. K. Ghimire. London, ITDG.
- Ribot, J. (1998), "Theorizing Access: Forest Profits along Senegal's Charcoal Commodity Chain." *Development and Change* 29: 307-341.
- Ríos, J. M. (1981), *Tenencia y explotación de la tierra en México*, México, SRA.
- Robles, B. H. (2001), "Similitudes y diferencias entre propiedad privada y ejidal." *Estudios Agrarios*, tomo 6, núm. 14, pp. 81-93.
- Robles, H. (2005), *Los tratos agrarios vía campesina de acceso a la tierra*, México, Cámara de Diputados LIX Legislatura, SRA, CEDRSSA.
- Rodríguez, G. y G. Torres (1996), *El Barzón y la COMAGRO: la resistencia de los agroproductores a la política neoliberal. Los nuevos actores sociales y procesos*

- políticos en el campo*, H. Grammont and H. Tejera, México, Plaza y Valdéz, UAM, UNAM, INAH. IV: 153-180.
- Rojas, C. (1996), "Asesinan en una emboscada al ganadero René Monroy", *Diario de Xalapa*, 10 de mayo, Xalapa.
- Rousseau, J.-J.-. (1997a), *Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among Men*. Rousseau. The Discourses and other early political writings. V. Gourevitch. Cambridge, Cambridge University Press: 131-222.
- Rubio, B. (1991), "La vía campesina de producción y la privatización del ejido." *Cuadernos Agrarios Nueva Epoca*(3): 7-23.
- Rubio Ignacio y Valle Julieta (2010) *Revolución y reforma en la Huasteca veracruzana*, en Miguel León-Portilla y Alicia Mayer (eds) *Los indígenas en la Independencia y la Revolución mexicana*. México, UNAM, INAH. 497-522
- Ruiz, C. (1999), "Población y migraciones rurales en México. Hipótesis para otro siglo", *Economía, Sociedad y Territorio* II(5): 239-257.
- Ruvalcaba, J. (2004), *La agricultura de roza en la Huasteca, ¿suicidio o tesoro colectivo? La Huasteca, un recorrido por su diversidad*. J. Ruvalcaba, J. M. Pérez and O. Herrera. Mexico, CIESAS-Colsan-El Colegio de Tamaulipas: 153-189.
- Salinas de Gortari, C. (1993), *Diez Puntos para dar Libertad y Justicia al Campo Mexicano*. México es más fuerte. Discursos. México, Secretaría de Gobernación: 144-154.
- Sandstrom, A. (1991), *Corn is our Blood. Culture and Ethnic Identity in a Contemporary Aztec Indian Village*, Oklahoma University Press.
- Sandstrom, A. (1992), "Ethnic identity and the traditional religion in a contemporary Nahua Village." *Journal of American Lore* 18(1992): 37-57.
- Sax, J. L. (1983), "Some thoughts on the decline of private property." *Washington Law Review Jurisprudential Lecture Series* 58: 481-496.
- Schryer, F. (1987), "Class Conflict and the Corporate Peasant Community: Disputes over Land in Nahuatl Villages." *Journal of Anthropological Research* 43(2): 99-120.
- Schryer, F. (1987b), "Peasants and the Law: a History of Land Tenure and Conflict in the Huasteca." *Journal of Latin American Studies* 18(2): 283-311.
- Schryer, F. (1990), *Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico*. New Jersey, Princeton University Press.
- Sen, A. (2000), *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*. Manila, Asian Development Bank. Social Development Papers, No. 1.
- Sherman, J. (1999), *Rural Poverty, Community and Land Use: An Annotated*

- Bibliography. Berkeley, Institute of International Studies, University of California, Berkeley.
- Silva-Herzog, J. (1959), *El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria*, México: FCE.
- Singleton, S. and M. Taylor (1992), "Common Property, Collective Action and Community." *Journal of Theoretical Politics*. 4(3): 309-324.
- Smith, A. (1863), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edinburgh, Adam & Charles Black.
- Snyder, R. and G. Torres, Eds. (1998), *The Future Role of the Ejido in Rural Mexico*, San Diego, University of California, San Diego. Center of US-Mexican Studies.
- Sobhan, R. (1993), *Agrarian Reform and Social Transformation*, London, Zed Books.
- SRA (1998), *La transformación agraria: origen, evolución, retos, testimonios*, Mexico, Secretaría de la Reforma Agraria.
- Thiesenhusen, W. C. (1996), Mexican Land Reform, 1934-91: Success or Failure? Reforming Mexico's Agrarian Reform. L. Randall. London, M.E. Sharpe: 35-48.
- Thompson, E. P. (1979), *Tradición, revuelta y conciencia de clases. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, Barcelona, Crítica.
- Thompson, M. (1998), Style and Scale: Two Sources of Institutional Inappropriateness. Privatizing Nature. Political Struggles for the Global Commons. M. Goldman. London, Pluto Press.
- Toledo, V. and J. Alcorn (1998), Resilient Resource Management in Mexico's Forest Ecosystems: Contribution of Property Rights. Linking Social and Ecological Systems. F. Berkes and C. Folke. Cambridge, Cambridge University Press: 216-249.
- Toledo, V. M. (1992), Los procesos de ganaderización y la destrucción biológica y ecológica de México. Medio Ambiente y Desarrollo en México E. Leff. Mexico, CIIH-UNAM/PORRUA I: 191-228.
- Toledo, V. M. (1996), "Las consecuencias ecológicas de la Ley Agraria de 1992." *Estudios Agrarios*(4).
- Torregrosa M. And Villena S.. (1996) Productores y tierra en diez distritos de riego. La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. Vol. III. De Grammont H and Tejera H. Eds. México: INAH-UAM-UNAM-Plaza y Valdes.
- UN-FIG (1999), The Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development. . <http://www.sli.unimelb.edu.au/UNCont99/>.
- Valle J (1998), "Nican tinemij. Territorialidad identidad territorial indígena en la Sierra de Huayacocotla, siglos XVII y XVIII", tesis de maestría en Antropología Social, CIESAS.

- Valle J (1995), “*El territorio más codiciado. Oligarquías regionales, pugnas interelitistas y movimientos indígenas en el norte de Veracruz (1821- 1856)*”, tesis de licenciatura en Etnohistoria, ENAH, 1995.
- Valle, J. (2003), “Reciprocidad, jerarquía y comunidad en la tierra del trueno (La Huasteca)” in *La comunidad sin límites vol. II*. S. Millan and J. Valle cords. México, INAH. II: 211-324.
- Valle, J. (2003a), “Hijos de la lluvia, exorcistas del huracán: el territorio en las representaciones y las prácticas de los indios de la Huasteca” en *Diálogos con el territorio*, vol II. Barabas A. Cord., México, INAH.
- Valle, J. (2004), ¿Mantener, reclamar o perder la tierra? Propiedad y territorialidad en la Sierra de Huayacotla durante la época colonial. *Viva la Huasteca. Jóvenes miradas sobre la región*.
- Valle, Julieta (2012), “Cargos y mayordomías: un falso problema de la Huasteca” en *Huasteca y el semi desierto queretano. Atlas etnográfico*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. pp. 209-220
- Vazquez, M. T. (2004), *Land Privatization in Mexico. Urbanization, Formation of Regions and Globalization in Ejidos*, Routledge.
- Velasco, T. (1985), “Conflictos agrarios y movimiento campesino en Veracruz.” *Cuadernos del IIESES* núm. 9, pp. 15-38.
- Villa, F. (1915), *Ley Agraria del General Fco. Villa (24/05/1915)*. Ciudad Leon, Chihuahua, Instituto Nacional de Estudios Politicos, A. C. www.inep.org.
- Walsh, S. S. (1984), *Land Reform in Mexico: 1910-1980*. Nwe York, Academic Press Inc.
- Warman, A (1985), “Notas para una redefinición de la comunidad agraria”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLVII, núm. 3, México, UNAM/IIS.
- Warman, A (1988), “Los campesinos en el umbral del nuevo milenio.” *Revista Mexicana de Sociología*, L/Num. 1
- Warman, A. (2001), *El campo mexicano en el siglo XX*, México, FCE.
- Warman, A. (1978), *Indios y naciones del indigenismo*. En *Revista Nexos*, num 2, febrero de 1978 pp. 3-6.
- Williamson, I. P. (2000), *Best Practices for Land Administration Systems in Developing Countries*. International Conference on Land Policy Reform. Jakarta.
- Witvrun, A. (2000), “Insuficiente la vía electoral: FDOMEX. No resuelve pobreza ni marginación”, *El Financiero*, 22 de mayo, México.

- World Bank (1999), Mexico ejido reform. Avenues of adjustment – Five years later. Decision Draft. Report No. 18897, The World Bank.
- World Bank (2001), Mexico Land Policy. A decade later. Report No. 22187-ME, The World Bank
- WorldBank (2003), Land Policies for Growth and Poverty Reduction, World Bank.
- Yates, P. L. (1978), El campo mexicano. México, Ediciones El Caballito.
- Yates, P. L. (1981), Mexico's Agricultural Dilemma. Tucson, University of Arizona Press.
- Zapata, E. (1911), Plan de Ayala (28/11/1911). Ayala, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- Zapata, E. (1916), *Ley general sobre libertades municipales*, 5 de septiembre. Tlaltizapan, Morelos.
- Zapata, E. (1917), Manifiesto al pueblo. (20/04/1917). Tlaltizapán, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- Zapata, E. (1917a), A los revolucionarios de la República. (27/12/1917). Tlaltizapán, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- Zapata, E. (1918), A los obreros de la República ¡Salúd! (15/03/1918). Tlaltizapán, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- Zaragoza, L. L. y R. Macías (1980), *El desarrollo agrario de México y su marco jurídico*, México, Centro Nacional de Investigaciones Agrarias.
- (1906), *Programa del Partido Liberal* (1 de mayo de 1906). Mexico, Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C. www.inep.org.
- (1915), *Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria* (26 de octubre de 1915). Cuernavaca, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org.
- (1915), Pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial (17 de febrero de 1915), Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C. www.inep.org.
- (1916), Programa de Reformas político-sociales, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria. (18 de abril de 1916). Jojutla, Morelos, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C. www.inep.org

* * *

Bailón Díaz <<http://www.pa.gob.mx/publica/pa070609.htm>>

- El Día* (1993), Denuncian amenazas del cacique de Ixhuatlán de Madero Veracruz, contra una comunidad indígena, *El Día*, 4 de mayo de 1993. México.
- La Jornada* 1 de febrero de 2008
- UnoMásUno* (1979), Asesinatos y despojos en Hidalgo, denunciados por el PST ante JLP. *UnoMasUno*, 14 de octubre, Mexico.
- UnoMásUno* (1979), Reclaman la liberación de 13 campesinos en Hidalgo. *UnoMasUno*, 9 de diciembre de 1979. México.
- UnoMásUno* (1980), Denuncian UCI y CNPA la muerte de 10 campesinos en Puebla y Veracruz a manos de gente de los caciques. *UnoMásUno*, 25 de enero de 1980. México.
- UnoMásUno* (1980), Plan Chicontepec, desarrollo conjunto de industria y agro. *UnoMásUno*, 24 de julio de 1980. México.
- UnoMásUno* (1980), Representantes de la OIPUH acusan al gobernador de Hidalgo de auspiciar caciques y guardias blancas. *UnoMásUno*, 30/01/1980. México.
- UnoMásUno* (1980), *Una semilla no malograda*, *UnoMásUno*, México, 30 de marzo.

La primera edición electrónica de *La flor y la promesa*, fue realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se finalizó el 16 de febrero de 2017. La producción de esta obra en PDF interactivo estuvo a cargo de ALDINE. En su composición se usó el tipo ITC Berkeley Oldstyle de 11/13,2 puntos. Revisión de originales y cuidado de edición: Enrique Vera Morales. Portadilla y maquetación: Marco Antonio Pérez Landaverde.